.UBAsociales
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES

Repositorio Digital Institucional

Tipo de documento: Tesis de Doctorado

Título del documento: La producción de "políticas de memoria" durante los gobiernos kirchneristas : modalidades, actores y narrativas (2003-2015)

Autores (en el caso de tesistas y directores):

Déborah Cinthia Balé

Luciano Alonso, dir.

Marina Franco, co-dir.

Datos de edición (fecha, editorial, lugar,

fecha de defensa para el caso de tesis: 2019

Documento disponible para su consulta y descarga en el Repositorio Digital Institucional de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires.
Para más información consulte: http://repositorio.sociales.uba.ar/

Esta obra está bajo una licencia Creative Commons Argentina.
Atribución-No comercial-Sin obras derivadas 4.0 (CC BY 4.0 AR)
La imagen se puede sacar de aca: https://creativecommons.org/choose/?lang=es_AR

Repositorio Digital Institucional

.UBAsociales
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES

Déborah Cinthia Balé

La producción de “políticas de memoria” durante los gobiernos kirchneristas: modalidades, actores y narrativas (2003-2015)

Tesis para optar por el título de Doctora en Ciencias Sociales

Facultad de Ciencias Sociales
Universidad de Buenos Aires

Director: Dr. Luciano Alonso
Codirectora: Dra. Marina Franco

Buenos Aires
2019

Resumen

En los últimos años, la creciente intervención del Estado nacional argentino en la producción y reproducción de memorias en torno al pasado reciente fue objeto de diversas polémicas tanto fuera como dentro del ámbito académico. Sin embargo, las modalidades concretas que adoptó esta intervención –en sus distintas variantes y niveles– aun han sido escasamente estudiadas. En ese marco, esta tesis se propone describir y analizar el papel jugado por un conjunto de agencias estatales en los procesos de encuadramiento de las memorias sobre el terrorismo de Estado, tal como se desarrollaron durante los gobiernos de Néstor Kirchner (2003-2007) y Cristina Fernández (2007-2015). Específicamente, la investigación busca dar cuenta de cuáles fueron las modalidades institucionales, los actores sociales y los marcos de interpretación del pasado que influyeron, condicionaron o determinaron la concepción e implementación de un conjunto representativo de "políticas de memoria" a lo largo del período.

En efecto, aun cuando desde la transición a la democracia las diferentes agencias estatales desarrollaron políticas muy variadas —e incluso contradictorias— respecto de la conformación de memorias sobre la represión (Alonso, 2011), numerosos autores coinciden en que la asunción presidencial de Néstor Kirchner marcó un punto de clivaje (Carnovale, 2006; Lvovich y Bisquert, 2008; Da Silva Catela, 2011, y otros). Teniendo en cuenta esto, la investigación se propone dar cuenta del modo en que diferentes agencias estatales incorporaron la demanda por "memoria", que venía siendo articulada por el movimiento de derechos humanos, pero al mismo tiempo la procesaron y transformaron según lógicas y modalidades específicas que resulta necesario desentrañar.

Desde ese punto de vista, la tesis pretende contribuir a la comprensión de la creación y el funcionamiento de las agencias estatales que tomaron a la "memoria" como objeto de su accionar, así como a los modos en que desde cada una de ellas se puso en marcha una "oferta de sentido temporal" (Rabotnikof, 2007) para recordar y narrar el pasado reciente: ¿cuáles fueron las condiciones político–institucionales bajo las cuales se desarrollaron las "políticas de memoria" en el período? ¿Qué actores (sociales y estatales)

intervinieron? ¿Cuáles fueron las claves narrativas que pusieron en juego? ¿Qué papel jugaron las identidades políticas en ese proceso?

Para abordar estas preguntas la investigación analiza desde una perspectiva sociohistórica (Offerlé, 2011) las diferentes líneas de intervención de un conjunto de agencias estatales en los planos de políticas de archivo, reparación, conmemoración y lugarización. Estas son: la Dirección Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario del Ministerio de Defensa, que tuvo a su cargo la "apertura", el relevamiento y la gestión de los Archivos de las Fuerzas Armadas, la Dirección Nacional de Sitios de Memoria de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, que implementó la "señalización" como "sitios de memoria" de los lugares que fueron utilizados como centros clandestinos de detención o lugares de reclusión ilegal del terrorismo de Estado y la Comisión de Trabajo por la Reconstrucción de Nuestra Identidad, que estuvo encargada de la "reparación" de los legajos laborales de los empleados de la administración pública que fueron desaparecidos o asesinados.

A partir del uso de una serie de metodologías cualitativas, el análisis pormenorizado de cada una de estas agencias nos permitirá dar cuenta de la complejidad que atravesó la producción de "políticas de memoria" en el período y el modo en que se entrecruzaron en ellas diferentes lógicas, narrativas y actores. A su vez, la investigación nos permitirá identificar las continuidades y rupturas que la intervención de las agencias estudiadas supuso respecto de los regímenes de memoria previos, indicando el modo en que los marcos de interpretación del pasado se orientan y se tensionan en función de lógicas de poder y de identificación política. Así, veremos cómo se anudan, a lo largo del período, un modo de habitar las agencias estatales –signado por el "compromiso militante", una causa –la demanda por "memoria, verdad y justicia" tal como fue forjada por el movimiento de derechos humanos– y una comunidad de recuerdo: es decir, un "nosotros" con legitimidad para recordar anclado en el kirchnerismo.

Abstract

In the past few decade, the increasing intervention of the Argentine national state in the production of memories about the last military dictatorship was subject to different controversies both outside and within the academic sphere. However, the specific forms adopted by this intervention have still been scarcely studied. In this regard, this thesis aims to describe and analyze the role played by a set of state agencies in the production of “memory public policies” as they were developed during Néstor Kirchner (2003-2007) and Cristina Fernández (2007-2015) administrations. Specifically, the research seeks to account for the institutional modalities, the social actors and the frameworks of interpretation of the past that influenced, conditioned or determined the conception and implementation of a representative set of "memory public policies" throughout the period.

Even though from the transition to democracy different state agencies have developed very varied –and even contradictory– policies regarding the formation of memories about repression (Alonso, 2011), many authors agree that the presidential inauguration of Néstor Kirchner marked a point of cleavage (Carnovale, 2006, Lvovich and Bisquert, 2008, Da Silva Catela, 2011, and others). Taking this into account, our research aims to show the way in which state agencies incorporated the demand for "memory", as it was articulated by the human rights movement, but at the same time processed and transformed it according to a specific set of logics that it is necessary to unravel. From this point of view, our thesis aims to contribute both to the understanding of the creation and functioning of the state agencies that took "memory" as the cause for public action, as well as the ways in which each one of them displayed an “offer of temporary meaning" (Rabotnikof, 2007) to remember and narrate the recent past. What were the institutional and political conditions under which these "memory policies" were developed? Which actors intervened? What were the narrative frameworks put into play? What role did political identities play in the process?

To address these questions, the research analyzes from a sociohistorical perspective (Offerlé, 2011) the different practices carried out by a set of state agencies. These are: the *Dirección Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario* at the Ministry of Defense, in charge of the "opening",

surveying and managing of the archives of the Armed Forces, the *Dirección Nacional de Sitios de Memoria*, at the Secretary of Human Rights, which implemented the "signaling" as "memory sites" of the places that were used as clandestine detention centers during State Terrorism and, finally, the *Comisión de Trabajo por la Reconstrucción de Nuestra Identidad,* in charge of the "reparation" of the personnel files that belonged to public servants who were disappeared or killed during the military dictatorship.

A comprehensive analysis of each of these agencies will allow us to account for the complexity entailed by the production of "memory policies" and the way in which different logics, narratives and actors were intertwined in the process. Also, it will allow us to identify the continuities and ruptures introduced by these agencies, in comparison to previous memory regimes, and indicate the way in which the interpretations of the past are oriented and tensed at the pace of logics of power and political identification. Finally, we will reflect on how the production of “public memory policies” entailed a specific liaison between a way of inhabiting state agencies (close to activism), a cause (the demand for "memory, truth and justice" as it was forged by the movement of human rights), and a community of remembrance, tied to Kirchnerism as a political identity.

Índice

Agradecimientos 9

Introducción..... 12

1. Presentación del problema de investigación 12
2. Elementos teóricos y conceptuales..... 15
3. Abordaje metodológico y estructura de la tesis 25

Capítulo 1: La construcción social de las memorias en torno al terrorismo de Estado 31

1.1. Introducción..... 31

1.2. Memorias dominantes en torno al terrorismo de Estado 31

1.3. La memoria como objeto de políticas públicas (2003-2015) .. 42

1.4. Los debates en torno a la construcción de "políticas de memoria": un estado de la cuestión 49

Capítulo 2: La política de "reparación" de legajos laborales: la tarea de la Comisión de Trabajo por la Reconstrucción de Nuestra Identidad. 63

2.1. Introducción..... 63

2.2. El proceso de institucionalización de la Comisión 64

2.3. "Emprendedores" y "militantes" de la memoria 72

2.4. Conformación de una "comunidad de recuerdo" 81

2.5. El andamiaje legal de la Comisión: "1955-1983" como eje narrativo……87

Capítulo 3: La puesta en escena de una narrativa de la memoria: la conformación de una "comunidad de recuerdo" 106

3.1. Introducción 106

3.2. El papel de los funcionarios en los actos conmemorativos 107

3.3. La puesta en escena de una narrativa de la memoria 118

3.4. En torno a los límites de una comunidad de recuerdo 130

3.5. Conclusiones 144

Capítulo 4: La política de "apertura" de los archivos militares: la conformación de los Equipos de Relevamiento y Análisis Documental..146

4.1. Introducción 146

4.2. ¿Los archivos militares como "archivos de la represión"? 148

4.3. La disputa por el control civil de los archivos militares..... 154

4.4. La producción de un saber experto y el traspaso de la documentación a la esfera judicial 165

Capítulo 5: Los usos del archivo entre la política y la memoria. El Programa de Modernización de Archivos y las "Actas Secretas de la Dictadura" 175

5.1. Introducción 175

5.2. El intento de definir una política archivística: el Programa de Modernización del Sistema de Archivos del Área de la Defensa 176

5.3. La "apertura" de los archivos como una "política de memoria": las "Actas Secretas de la Dictadura" 184

5.4. Conclusiones..... 196

Capítulo 6: La política de "señalización" como un proceso de "desparticularización" de las memorias 199

6.1. Introducción..... 199

6.2. La progresiva conformación del área de sitios: de las "memorias emblemáticas" a la Red Federal..... 201

6.3. La construcción de la política pública como un proceso de "desparticularización" 211

6.4. Una adenda entre el "Estado" y el "gobierno" 221

Capítulo 7: ¿Quién tiene derecho a recordar? La oposición partidaria frente a las "políticas de memoria" del kirchnerismo 228

7.1. Introducción..... 228

7.2. La discusión sobre el "traspaso" de los sitios a la órbita del gobierno nacional: el problema de la "apropiación" de la memoria……...230

7.3. "Bailar sobre los muertos": el problema de la "banalización" de la memoria.. 243

7.4. El "traspaso" efectivamente existente y la inauguración del Museo Sitio de Memoria ESMA 259

7.5. Conclusiones 265

Conclusiones: Hacia algunas interpretaciones generales. Actores, modalidades y narrativas de las "políticas de memoria" durante los gobiernos kirchneristas 269

8.1. Introducción 269

8.2. Condiciones político institucionales de la producción de "políticas de memoria" (2003-2015) 270

8.3. El "efecto Estado" en la construcción de "políticas de memoria" 281

8.4. Marcos de la memoria durante el kirchnerismo: límites, continuidades y transformaciones 285

Bibliografía 293

Fuentes citadas 308

Prensa gráfica 310

Entrevistas 312

Agradecimientos

La realización de esta tesis fue posible en el marco de una beca doctoral que me fue otorgada por el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas en el año 2015. Por eso quiero reconocer, en primer lugar, al sistema científico nacional —que se encuentra hoy en crisis— y al sistema público universitario en el cual me formé y con el cual estoy en deuda permanente.

En segundo lugar, quiero agradecer a mi director de tesis, Luciano Alonso, y a mi co-directora, Marina Franco, por sus lecturas y re-lecturas que fueron claves en distintas instancias de esta investigación. Especialmente le agradezco a Marina por su acompañamiento, su calidez humana y su compromiso a lo largo de este camino.

Agradezco también a los y las integrantes del Núcleo "Política, Sociedad y Cultura en la Historia Reciente del Cono Sur" del Instituto de Altos Estudios Sociales, por haber leído y comentado varios de los capítulos que siguen a continuación. El núcleo constituyó para mí un espacio de referencia e interlocución permanente. Allí aprendí el oficio de escribir y pensar nuestras investigaciones de manera colectiva.

Asimismo, agradezco al grupo "Lugares, Marcas y Territorios de la Memoria" del Instituto de Desarrollo Económico y Social, por sus textos y reflexiones que me acompañaron en el último tramo de esta investigación. En particular, le doy las gracias a Luciana Messina, quien me orientó cuando recién empezaba a indagar en las políticas de lugarización de la memoria. También le agradezco a María Eugenia Mendizábal por haberme introducido al "mundo de los sitios" y a Leandro Pankonin, por haberme facilitado la entrada al "mundo de los archivos".

Quiero agradecer también a todas las personas entrevistadas cuyos relatos, saberes y perspectivas pueblan estas páginas. Los y las familiares, funcionarios/as, trabajadores/as y militantes que conversaron conmigo me permitieron conocer parte de la de la trama —dolorosa y compleja— en la que se teje nuestra memoria colectiva. La escritura de esta tesis se sostuvo con la esperanza de aportar en esa construcción común.

A nivel institucional agradezco al doctorado de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires y a la maestría en Ciencia Política

de la Universidad Nacional San Martín. En las aulas de ambas instituciones aprendí a imaginar y dar forma a los capítulos que siguen.

En el plano personal, quiero agradecer a algunas de las personas que me acompañaron en este amoroso y alegre trayecto de mi vida. A mis amigues del núcleo duro de filo, Malena Nijensohn, Tomás Wierzba, Santiago Johnson, Juan Brodersen y Andrés Fortunato —*fuerzas del provisorio morar*—, les agradezco por la amistad que construimos y que nos reencuentra, cada vez, a lo largo de los años.

A mis compañeros y compañeras del IDAES, especialmente a la "rama femenina" —Anaclara Raffaele, Gabriela Tavella, Coqui Cañada, Paula Luciani y Lucía Quaretti— y a Esteban Pontoriero, Rodrigo González Tizón y Hernán Confino, les agradezco por haber llenado este camino de risas, juntadas, aprendizajes y, en última instancia, de sentido.

A mis amigas de siempre, gracias por sostener el hilo precioso que nos une a través del tiempo. En especial, a Laura Poverene y Gabriela Dranovsky, por la celebración de la sincronía.

A mi hermano Diego y a mis sobrinos, Sol y Nico, por la ternura de cada encuentro. A mi hermano Leandro, por sus preguntas en torno a esta tesis y por enfrentarme a la tarea de responder. A mi mamá por su fuerza, su compañía y su amor incondicional.

A Gustavo, por su amor, que es el fundamento —sin fundamento— que sostiene cada día.

A mi abuela Pola, que ya no está.

A nuestra hija, que está por venir.

La producción de “políticas de memoria” durante los gobiernos kirchneristas: modalidades, actores y narrativas (2003-2015)

Introducción

1. Presentación del problema de investigación

La presencia del pasado como objeto de intervención de los Estados nacionales no constituye un fenómeno novedoso. La propia idea de “nación” tal como se construyó durante los siglos XIX y XX se encuentra fuertemente imbricada con la producción y reproducción de un pasado compartido. Sin embargo, el sentido de la intervención estatal en la rememoración del pasado ha ido mutando con el tiempo: diferentes autores coinciden en señalar de qué modo hasta la Primera Guerra Mundial, la cultura de la memoria en Occidente estuvo destinada a movilizar sentimientos de identificación cívica y patriotismo (Gensburger y Lefranc, 2017; Rigney, 2018) y cómo –luego del Holocausto–, el énfasis se trasladó hacia los crímenes (antes que a las batallas victoriosas), los testigos (antes que a los combatientes) y las víctimas (antes que los héroes) (Vezzetti, 2002; Levy y Sznajder, 2002).

En este contexto, formas novedosas de intervención sobre las memorias sociales fueron objeto de una creciente institucionalización que, con sus modulaciones específicas, se trasladaron desde Europa a distintas partes del globo. En el Cono Sur, este “boom de la memoria” (Huyssen, 2002) –con su proliferación de testimonios, monumentos y archivos– se solapó y se imbricó con el fin de las dictaduras militares que se habían impuesto en la región y la apertura de una serie de disputas entre las cuales la memoria de los acontecimientos recientes ocupó un lugar destacado.

Desde mediados de la década del noventa (sino antes, durante los procesos de “transición a la democracia”) las políticas de rememoración y/o olvido que se fueron desarrollando en los diferentes países se constituyeron así en campos de batalla por la interpretación del pasado. Tanto para quienes

hicieron de la memoria un objeto de investigación académica como para quienes hicieron de ella la causa de su activismo –como señala Feld (2016) según una lógica a menudo confluyente–, las luchas por el sentido del pasado se constituyeron como disputas entre memorias rivales, cada cual con su propia narrativa y sus lecciones acerca del pasado y también con sus propias omisiones y olvidos (Jelin, 2002).

Así, muy lejos de la noción de un "régimen de memoria nacional" el paradigma de las "memorias en conflicto" emergió como un marco de referencia ineludible en nuestras latitudes para historizar los cambios en los sentidos del pasado y para comprender las dinámicas que asumen los procesos de rememoración en el presente. Siguiendo a Jelin lo que encontramos es "una lucha política activa acerca del sentido de lo ocurrido, pero también acerca del sentido de la memoria misma" (2000: 7) es decir, acerca de qué significa recordar, quiénes son los actores legítimos para hacerlo y cuál es el propósito de la recordación. Dicho de otro modo, si la memoria no conforma un relato homogéneo de los hechos del pasado "tal como sucedieron", sino que es un modo de estructurar la identidad de individuos y grupos, el conflicto y la lucha entre memorias constituye una dimensión constitutiva del problema.[1]

Esta tesis se sitúa de lleno en este paradigma con el objeto de dilucidar las características que asumió la intervención del Estado nacional argentino en la producción de memorias sobre la represión durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner (2003-2015). Y se sitúa "de lleno" porque el objeto mismo de indagación ha estado atravesado por diferentes polémicas que han versado sobre los "usos" y "abusos" de la memoria y el papel que les cabe (o no) a los Estados y gobiernos en la elaboración del pasado.

En efecto, aun cuando desde la transición al régimen democrático las diferentes agencias estatales desarrollaron políticas muy variadas —e incluso contradictorias— respecto de la conformación de memorias en torno al pasado reciente (Alonso, 2011), numerosos especialistas coinciden en que la asunción

[1] Retomamos este señalamiento en el capítulo seis a partir del reconocimiento del carácter inerradicable del antagonismo tal como es entendido por Mouffe (1999; 2007) y reformulado para el campo de las memorias por Bull y Hansen (2016).

presidencial de Néstor Kirchner marcó un punto de clivaje en diversos aspectos (Carnovale, 2006; Lvovich y Bisquert, 2008; Da Silva Catela, 2011 y otros).

Así, como veremos en el capítulo uno, tanto fuera como dentro del ámbito académico distintos autores y autoras han identificado la intervención desarrollada por estos gobiernos como una suerte de "manipulación" de las memorias sociales, mientras que, en la vereda opuesta, otros observadores y observadoras la concibieron como una "consagración" estatal de las demandas de "memoria, verdad y justicia" sostenidas largamente por el movimiento de derechos humanos.

En ese contexto, la presente investigación se propone aportar elementos específicos a nuestro conocimiento de las formas que adoptó esta intervención, pensando el problema más allá de esta dicotomía. Específicamente, nos proponemos indicar cuáles fueron las modalidades institucionales, los actores sociales y los marcos de interpretación del pasado que influyeron, condicionaron o determinaron la implementación de un conjunto representativo de "políticas públicas de memoria" a lo largo del período. Con ese objetivo, la investigación aborda las líneas de acción de un conjunto de agencias estatales que se gestaron durante el primer gobierno de Néstor Kirchner (2003-2007) y tuvieron continuidad hasta el final del segundo mandato de Cristina Fernández (2011-2015). Estas agencias son: la Dirección Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario del Ministerio de Defensa, que tuvo a su cargo la "apertura", el relevamiento y la gestión de los archivos de las Fuerzas Armadas, la Dirección Nacional de Sitios de Memoria de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, que implementó la "señalización" como "sitios de memoria" de los lugares que fueron utilizados como Centros Clandestinos de Detención o lugares de reclusión ilegal del Terrorismo de Estado y la Comisión de Trabajo por la Reconstrucción de Nuestra Identidad, que se formó en el ámbito de la Secretaría de Obras Públicas de la Nación y estuvo encargada de la "reparación" de los legajos laborales de los empleados de la administración pública que fueron desaparecidos o asesinados.

Desde esta perspectiva, la tesis pretende contribuir a la comprensión de la creación y el funcionamiento de las agencias estatales que tomaron a la memoria como objeto de su accionar, indicando las condiciones de su génesis, desarrollo e institucionalización a lo largo del período. A su vez, nos interesa

reconstruir los modos en que desde cada una de estas agencias se puso en marcha una “oferta de sentido temporal” (Rabotnikof, 2007) para recordar y narrar el pasado reciente, con sus respectivos desplazamientos, selecciones y olvidos: ¿cuáles fueron las condiciones político – institucionales bajo las cuales se desarrollaron las “políticas de memoria”? ¿Qué actores (sociales y estatales) intervinieron? ¿Cuáles fueron las claves narrativas que pusieron en juego? ¿Qué papel jugaron las identidades políticas en ese proceso?

El desarrollo de este análisis nos permitirá dar cuenta del modo en que las agencias estatales incorporaron la demanda por “memoria”, que venía siendo articulada por el movimiento de derechos humanos, pero al mismo tiempo la procesaron y transformaron según lógicas y modalidades que resulta necesario desentrañar. Específicamente veremos cómo se anudan un modo de habitar las agencias estatales –signado por el “compromiso militante”–, una causa, –la demanda por “memoria, verdad y justicia” tal como fue forjada históricamente por el movimiento de derechos humanos– y una comunidad de recuerdo anclada en loque comenzó a ser reconocido como “el kirchnerismo”.

Asimismo la investigación nos permitirá evaluar las continuidades y rupturas que estas intervenciones configuraron respecto de los sentidos memoriales vigentes y calibrar cuáles fueron las formas institucionales que resultaron dominantes en los procesos de producción de memorias al interior del Estado nacional. Por último, el análisis propuesto nos permitirá ofrecer algunos elementos para pensar la especificidad que supone el involucramiento de las agencias estatales en la elaboración del pasado respecto de (y en relación con) otros actores sociales.

2. Elementos teóricos y conceptuales

Así entendida, la investigación se sitúa en la intersección entre una sociología de lo político (Offerlé, 2011) interesada en comprender “la producción de modos de hacer y de percibir los objetos que pueblan la actividad política” (Gené y Vommaro, 2011: 11) y los estudios sobre memoria tal como se han desarrollado en la región desde mediados de la década del noventa. En relación con ello, cabe destacar que este cruce o zona de intersección ha sido escasamente explorada. Como señala Gensburger (2016)

aun cuando el término “políticas de la memoria” aparece a menudo entre sociólogos/as e historiadores/as (además de funcionar como una categoría nativa), pocos estudios se han dedicado a comprender empíricamente cómo se dan los vínculos entre política y memoria y el modo en que los marcos de interpretación del pasado se orientan y se tensionan en función de lógicas de poder y de identificación política. En el caso argentino, además, esta escasa atención se fundamenta en el protagonismo del movimiento de derechos humanos en la temática, característica que lo ha constituido en objeto privilegiado de la indagación académica; al tiempo que, por contrapartida, el accionar del Estado (que es en realidad inseparable de los vaivenes, marchas y contramarchas del primero) ha quedado menos explorado.

En ese sentido, esta tesis es también el producto de un tiempo histórico donde la intervención del Estado en la producción de “políticas de memoria” se convirtió —en cualidad y magnitud— en un dato insoslayable. Como sucedió en otros campos de las ciencias sociales, el denominado “retorno del Estado” se convirtió para los estudios sobre memorias vernáculos en un renovado objeto de indagación, cuyas condiciones de posibilidad fueron el propio financiamiento estatal otorgado a este tipo de investigaciones, así como la urgencia, que compartimos, por comprender procesos y mecanismos que se encontraban en curso.

Ahora bien, en el marco de esta investigación volver a pensar el Estado desde este cuadrante implicó afrontar diversos desafíos. Una primera cuestión refiere a una aclaración terminológica. Como hemos dicho, la noción de “políticas de memoria” se encuentra extendida en el ámbito académico y a la vez, funciona eficazmente como una categoría nativa. Tal vez por eso a la hora de precisarla es posible encontrar una variedad de definiciones, entre las cuales nos interesa detenernos en dos formulaciones. Por una parte, Nora Rabotnikof (2007) señala:

> Por políticas de la memoria, en cambio, aludimos a las formas de gestionar o de lidiar con ese pasado, a través de medidas de justicia retroactiva, juicios histórico-políticos, instauración de conmemoraciones, fechas y lugares, apropiaciones simbólicas de distinto tipo. Pero por políticas de memoria también se hace referencia aquí a las ‘grandes ofertas de sentido temporal’, o a las narrativas más generales, que proponen marcos institucionales (y están implícitas en ellos), construyen temporalidades diferentes y de

> ese modo contribuyen a marcar continuidades y rupturas. Esas políticas de la memoria no son sólo las políticas oficiales, aunque estas tengan mayor capacidad de brindar marcos colectivos para la sociedad en su conjunto, sino también aquellas que los diferentes actores despliegan en el espacio público" (2007: 260-1)

Es decir que el término refiere a formas concretas de gestionar el pasado pero también, según una relación que sería interesante precisar, refiere a las narrativas generales o a las "ofertas de sentido" que se instituyen en una sociedad para recordar el pasado y que se encuentran marcadas por su propia historicidad. En ese punto, la noción de "oferta de sentido" se emparenta (aunque con distintos énfasis) con la de "régimen de memoria" entendida como una formación discursiva más o menos estable que establece determinadas fronteras de decidibilidad respecto del pasado, es decir, su propia selección de aquello que debe ser recordado. Como señala Crenzel, debe tenerse en cuenta que "(…) la sucesión de regímenes de memoria [como de las distintas "ofertas de sentido"] no es mecánica ni lineal. Siempre es posible detectar la continuidad de vestigios de regímenes previos en sus sucesores" (2008: 24). Por otra parte, Rabotnikof vincula las "políticas de memoria" con lo que denomina "memorias de la política", entendidas como:

> …las formas y las narraciones a través de las cuales los que fueron contemporáneos de un período construyen el recuerdo de ese pasado político, narran sus experiencias y articulan, de manera polémica, pasado, presente y futuro. Y también a las imágenes de la política que aquellos que no fueron contemporáneos construyen de ese pasado a partir de testimonios, recuerdos y documentos. O sea, a las memorias de otras memorias" (Rabotnikof, 2007: 261).

Ambas dimensiones se encuentran imbricadas, y según la propia autora son "sólo analíticamente distinguibles". Este señalamiento es útil para nuestra investigación en la medida en que vincula las formas concretas o institucionales de gestionar el pasado con lo que nosotros llamaremos identidades políticas, cuya expresión en términos memoriales es la conformación de "comunidades de recuerdo" (Jelin, 2002). Las identidades políticas serán entendidas, siguiendo a Aboy Carlés, como un "conjunto de prácticas sedimentadas, configuradoras de sentido, que establecen, a través de un mismo proceso de

diferenciación externa y homogeneización interna, solidaridades estables, capaces de definir, a través de unidades de nominación, orientaciones gregarias de la acción en relación a la definición de asuntos públicos" (2005: 5). Dicho de otra manera, en este juego entre "memorias de la política" y "política de la memoria" Rabotnikof asume la existencia del vínculo —que reencontraremos a lo largo de la tesis— entre los modos en que se piensan e implementan determinadas líneas de acción y la construcción de un "nosotros" que se concibe a sí mismo con legitimidad pública para recordar. Lo hace, además, sin presuponer (como sucede a menudo) un orden de subordinación, o instrumentalidad de una a la otra. En una línea coincidente, Juan Besse (2012; 2013) anota tres sentidos de "políticas de memoria", inspirado en la distinción inglesa entre *policies* y *politics*:

> Un primer uso de políticas (asimilable a la noción inglesa de *Politics*) que entiende el término política de memoria como relaciones de fuerza y sentido en torno de la simbolización del pasado, el ordenamiento del presente y la orientación a futuro y por lo tanto hace referencia a la política como procesos sociales atravesados por antagonismos y juicios de valor, expresiones propias de la disputa político partidaria e ideológica en el marco de un determinado Estado Nación. Esta dimensión de las políticas pone en juego actores, intereses, requerimientos, negociaciones, demandas; en síntesis, relaciones de poder y, sobre todo, una dimensión simbólica ordenadora de las heterogeneidades en compulsa mediante la constitución de lazos sociales entre los actores en pugna. (Besse, 2012: 5)

En línea con el primer sentido de Rabotnikof, el segundo uso que anota Besse hace referencia a "la política como proceso o curso de acción institucional o recorrido concreto, esto es como planes, programas, proyectos que en su reconstrucción desagregan un conjunto de actores". Así, este segundo uso se encuentra ligado, entre otras cosas, a "emprendimientos de 'musealización' y recuperación de centros clandestinos de detención y tortura o distintos modos de discusión más específica sobre los soportes de la memoria en el espacio público". Besse distingue, además, un tercer sentido, que refiere a la "función crítica que supone la reconstrucción de las escrituras de la memoria, los modos de rememoración y utilización del pasado, incluso en el saber académico, también atravesado por silencios u olvidos" (2012: 6). Lo

interesante de esta distinción (especialmente entre el primer y el segundo uso) es que nos permite preguntarnos por los modos en que la política como "dimensión simbólica ordenadora de las heterogeneidades" (que involucra actores, demandas, antagonismos) se yuxtapone, imbrica, se tensiona o se traduce en determinadas *policies* o líneas de acción y a la inversa, cómo las modalidades institucionales y los actores que implementan determinados "planes y programas" expresan, contradicen o condicionan la forma y el sentido de una determinada *politics* en relación con el pasado. En efecto, si bien a lo largo de la tesis optaremos por referir al término en su uso nativo (con la correspondiente indicación de las comillas), nos interesa mostrar esta doble vía de circulación entre ambos niveles. Eso nos permitirá aportar elementos no sólo a los modos en que se configuraron las agencias estatales bajo análisis sino también indicar la lógica y el sentido generales que las "políticas de memoria" (en el sentido de *politics*) inauguradas en el período propusieron para recordar el pasado reciente.

Una segunda cuestión que aparece a la hora de retomar el análisis de la intervención de las agencias estatales sobre el pasado, es la necesidad de abandonar los análisis esencialistas y a menudo prescriptivos que argumentan a favor o en contra de determinados tipos de intervención estatal con arreglo a ciertos criterios prefijados (por ejemplo, la noción de "memoria ejemplar", propuesta por Todorov). Dicho de otro modo, una de las decisiones que signaron la investigación fue la necesidad de apartarse de una reflexión de índole exclusivamente teórica para analizar qué es lo que las agencias seleccionadas efectivamente hicieron, bajo qué modalidades y según qué supuestos memoriales. Al mismo tiempo, volver a situar la mirada sobre estas agencias implicó dar cuenta de una manera eficaz del rol diferencial que ejerce el "Estado" como agente de memoria, en relación con otros actores sociales. En ese sentido, si por un lado la investigación adopta una perspectiva plural o desagregada de "Estado" —ya que se basa en el estudio pormenorizado de tres agencias estatales específicas—, al mismo tiempo intenta no desentenderse de las particularidades que la intervención estatal (con sus efectos de verdad, distancia y permanencia) suponen sobre una memoria social, que, como sucede en Argentina, se encuentra surcada de disputas.

En relación con lo primero, un abordaje de inspiración sociohistórica se presentó especialmente fructífero en la medida en que nos permitió desnaturalizar las prácticas o instituciones políticas bajo análisis. Desde una perspectiva sociohistórica se busca construir sociológicamente los objetos políticos, remontándose a la génesis y los usos plurales que convivieron en cada una de las instituciones o agencias. En el caso de las dependencias estatales que tomaron a su cargo la producción de "políticas de memoria", este abordaje nos habilitó a reconstruir cómo se fueron instituyendo rutinas, clasificaciones y modos de intervenir sobre la narración del pasado, incluso de manera previa a aquellos momentos que los propios actores definen como momento de fundación. En efecto, como señalan Vázquez y Liguori (2018) en sus investigaciones sobre la Dirección Nacional de Juventud para el mismo período, es justamente en los orígenes de los programas, planes y unidades estatales que resulta posible ver de qué modo se constituyen representantes o portavoces capaces de hablar en nombre de esa institución o práctica política situada; lo cual resulta clave para revelar de qué modo se fueron construyendo progresivamente los límites y sentidos de la intervención estatal en la materia.

En ese mismo marco, retomamos las propuestas realizadas por Bohoslavsky y Soprano (2010) para el estudio del Estado, según una lógica que —antes que concebirlo como un actor unívoco o uniforme— busca dar cuenta de la heterogeneidad de prácticas, actores y lógicas que habitaron los diferentes espacios bajo análisis. En ese sentido, antes que partir de una concepción normativa acerca de qué es una política pública y sus respectivas fases de implementación, el análisis que proponemos indaga por medio de qué procesos y en función de qué categorías surgió una determinada línea de acción y eventualmente se institucionalizó en el contexto de una dependencia específica. Así, retomamos la idea de "no personalizar al Estado", es decir, no concebirlo como un actor unívoco y autoconciente, sino a la inversa, como un "espacio polifónico" en el marco del se expresan grupos. Al mismo tiempo, nos proponemos "personalizar al Estado", es decir, atender a las personas que lo producen y actualizan en sus prácticas cotidianas. Dicho de otro modo, reconstruir para cada caso "quiénes son" el Estado en un determinado tiempo y lugar, lo cual implica indagar acerca de cómo esas personas se "convirtieron en" el Estado y cómo legitimaron sus posiciones. Por esa razón, a lo largo de la

tesis se presta especial atención a los “trabajadores y trabajadoras de la memoria”, es decir los empleados estatales que con diferentes regímenes de contratación estuvieron a cargo de la implementación de cada una de las políticas estudiadas y que fueron, además, nuestras principales fuentes de información a la hora de reconstruirlas.

Este abordaje nos permite indagar desde la perspectiva de los propios trabajadores/as, en qué momento y a partir de qué operaciones, comenzaron (o no) a concebir sus actividades como propiamente “estatales” o, como mínimo, como algo diferente de otras prácticas sociales como las encaradas por los organismos de derechos humanos. Esto es especialmente relevante tanto en el caso de aquellos que, como veremos, se incorporaron como militantes con trayectorias previas en organismos de derechos humanos como también para aquellos que, al decir de Vázquez (2018) desarrollaron un sentido de la militancia como producto de su trabajo en el Estado: ¿cómo entendieron estos agentes su quehacer específico en relación con la construcción de la memoria? ¿Qué saberes, valores y narraciones promovieron? ¿Con qué otras lógicas sociales dialogaron, intercambiaron y/o entraron en tensión? Las respuestas a estas preguntas nos permiten acercarnos a nuestro objetivo general, esto es, no especular acerca de cuál debería ser el rol del Estado en la gestión del pasado sino indagar acerca de los modos concretos en que quienes tuvieron a su cargo esa tarea construyeron progresivamente esa intervención, con sus límites y condicionamientos particulares.

En tercer lugar, retomamos la idea de “comprender al Estado como resultado de múltiples presiones”, o lo que es lo mismo, cuestionamos la pertinencia de la distinción Estado/sociedad para este problema de investigación. Como señalan Bohoslavsky y Soprano:

> (…) si bien aceptamos la vieja idea de que el Estado es una configuración social en la que se objetiva una cierta condensación de la disputa entre las clases sociales, nos parece pertinente ampliar el campo de observación identificando tensiones que se expresan en el Estado y que no se derivan sólo de las determinaciones emergentes de una estructura social clasista. (2010: 16)

Se trata así de rastrear al interior de las agencias estatales estudiadas la presencia de otras lógicas sociales, entre las que encontramos lógicas político-partidarias pero también profesionales, de género, generacionales y

también las lógicas estratégicas asociadas a movimientos sociales, especialmente el movimiento de derechos humanos. Específicamente, en relación con ello partimos aquí de un abordaje que, como dice Cefaï se propone "cartografiar modos de interacción concretos entre Estado, sociedad política y sociedad civil, que explore sus zonas de interfase, sus espacios de interpenetración, sus lugares de mediación y sus puntos de fricción" (2011: 146). Dicho de otro modo, sin asumir una partición binaria entre Estado y sociedad, nos proponemos mostrar a lo largo de la tesis de qué modo un conjunto significativo de organizaciones de derechos humanos participó del proceso de producción de "políticas de memoria", interpretando diferentes roles y aportando una variedad de recursos organizativos, simbólicos y humanos a las nuevas agencias dedicadas a ello. Utilizando la terminología de Cefaï, nos referiremos a un proceso de "incorporación" de las organizaciones movilizadas al Estado, entendiendo por ésta una traducción compleja de las reivindicaciones o demandas a las agendas de políticas públicas, las leyes y los programas gubernamentales (2011: 145). También hablaremos de la existencia de una "porosidad" (Cueto Rúa, 2016) que si bien no estuvo ausente en gobiernos anteriores, se volvió cada vez más intensa entre estas organizaciones y las diferentes agencias estatales durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández. Esta "porosidad" resulta clave, como veremos, para comprender la emergencia de una "comunidad de recuerdo" que incluyó a las víctimas de desaparición forzada (sus "compañeros" y familiares) en una línea de continuidad novedosa con los empleados estatales y funcionarios que se desempeñaban entonces en la administración pública nacional en el período 2003-2015.

Por otra parte, este tipo de análisis sociohistórico resultó adecuado para nuestro contexto en la medida en que, como se puede apreciar, no parte de una noción prefijada e idealizada de Estado sino que, a la inversa, nos permite preguntarnos histórica y sociológicamente por las condiciones de producción de aquello que llamamos "Estado" en Argentina.

En ese sentido, a lo largo de la tesis retomamos una segunda perspectiva basada en Mitchell (1991,1992, 2015) para quien el Estado debe ser entendido como una red de arreglos institucionales y prácticas políticas difusas que adquieren la apariencia de una forma abstracta coherente por

medio de la cual se mantiene el orden social y político (Mitchell, 1991: 90, trad. propia). Dicho de otro modo, para este autor aquello que llamamos "Estado" no es un "objeto" separado de la sociedad, sino "el poderoso efecto por medio del cual un conjunto de estrategias político discursivas generan que ciertas funciones y personal aparezcan como separadas". Así lo que encontramos no son dos entidades, esferas o agentes autónomamente pre constituidos sino un conjunto de prácticas que producen ese "efecto de distancia" o "separación" (*separatedeness*), como una línea diferencial que resulta trazada y retrazada en función de los diferentes contextos. Se configura así una especie de paradoja por medio de la cual a pesar de que el Estado está hecho de prácticas sociales, el "efecto Estado" hace aparecer a dichas prácticas como algo separado. Esto configura, según el autor, una "ilusión cohesionadora" que explica gran parte de su efectividad. En el caso de las disputas por la memoria, pensar en estos términos resulta particularmente relevante ya que dicho "efecto de distancia" permite dotar a las narraciones del pasado enunciadas desde las agencias estatales de un carácter diferencial que no tienen otros actores sociales. En ese sentido, preguntarse de qué modo se instituyen determinadas "políticas de memoria" equivale, por un lado, a comprender de qué manera un conjunto específico de prácticas sociales relativas a la rememoración del pasado aparecen —en el marco de una red de arreglos institucionales— como algo separado de la sociedad, y gozan de esa apariencia de forma abstracta y coherente; y por otro lado, de modo no menos importante, destacar que la función estatal o, en términos de Mitchell, el "efecto Estado" no constituye el punto de partida de la implementación de las políticas bajo estudio, sino un proceso de construcción en el marco del cual, como veremos, el sentido de la intervención estatal resulta continuamente renegociado.

Para abonar esta perspectiva, retomamos algunos conceptos de inspiración bourdiana que nos permiten pensar —especialmente en los capítulos tres y seis— este rol diferencial del "Estado" como agente de memoria. Aunque desde una tradición teórica diferente de la de Mitchell, Bourdieu (1997; 2014) señala que el "Estado" debe concebirse como la sede por antonomasia del capital simbólico, constituyendo de este modo una instancia central de nombramiento. Por esa razón, una de sus funciones más generales es la producción y canonización de clasificaciones sociales y en ese

marco, la producción de identidad social legítima (Bourdieu, 2014: 22). Esta comprensión del "Estado" como invención organizativa que produce efectos simbólicos es particularmente relevante ya que nos permite explicar por qué incluso en un contexto de debilitamiento del poder de los Estados nacionales para imponer relatos frente a otras fuerzas globales y/o trasnacionales (Nora, 1990, Levy y Sznaider, 2002), las "políticas de memoria" que llevan el sello de lo "oficial" continúan siendo demandadas socialmente y a menudo, cuando se concretan, son vividas como formas de "reparación simbólica". Más específicamente, esta posibilidad se anuda a un proceso o efecto de "desparticularización", que siguiendo a Bourdieu, entendemos como la capacidad que tiene este conjunto de instituciones que llamamos "Estado" de fortalecer un determinado punto de vista por sobre otros. De acuerdo con el pensador francés, al dotarse de una "teatralización de lo oficial", el "Estado" se pone a sí mismo como "la perspectiva de todas las perspectivas", convirtiéndose en el enunciador de un "punto de vista no relativizable":

> Para obtener ese efecto de des-particularización, este conjunto de instituciones que llamamos "Estado" debe teatralizar lo oficial y lo universal, debe crear el espectáculo del respeto público por las verdades públicas, el respeto público por las verdades oficiales en las que se presume que toda la sociedad se reconoce. Debe crear el espectáculo de lo universal, eso sobre lo que todo el mundo, en última instancia, está de acuerdo, eso sobre lo que no puede haber desacuerdo porque se inscribió en el orden social en algún momento del tiempo. (Bourdieu, 2014: 47)

Esta capacidad de inscribir determinadas "verdades públicas" en el orden social o para decirlo en otros términos, dotarlas de algún régimen de generalidad (des-particularizarlas), resulta especialmente relevante en el ámbito de las "políticas de memoria", porque justamente éstas se encuentran sujetas a un campo de disputas y enfrentamientos. En ese sentido, como veremos a lo largo de la tesis, aun cuando la intervención de las agencias estatales sea en ocasiones contradictoria y esté sujeta a lógicas y saberes heterogéneos (en términos de Mitchell, aun cuando su aparente homogeneidad no sea sino "ilusoria"), las agencias estatales ejercen un diferencial en la medida en que se constituyen como fuentes de legitimidad simbólica de relevancia a la hora de encuadrar las memorias sociales.

3. Abordaje metodológico y estructura de la tesis

De manera congruente con este marco teórico, la investigación está basada en el uso de una serie de metodologías cualitativas que se caracterizan por introducir el enfoque de la perspectiva del actor como pilar para la construcción del conocimiento social (Guber, 2005). En cada uno de los casos, me ha interesado recuperar las prácticas, las acciones y las experiencias tal como son sentidas, vividas y significadas por los propios actores. Para ello, he trabajado con entrevistas individuales y grupales semiestructuradas a funcionarios y trabajadores de cada una de las áreas estudiadas, y en algunos casos he recurrido a la reconstrucción de sus trayectorias. Los contactos iniciales se realizaron gracias a redes desplegadas por mí como investigadora, lo cual constituye un dato relevante en la medida en que refiere a una relación de proximidad social, cultural, e incluso política entre quienes nos proponemos estudiar las "políticas de memoria" desde una perspectiva académica y sus gestores. Esta proximidad trajo aparejada la necesidad de mantener, a lo largo de la tesis, una vigilancia epistemológica que me permitiera desnaturalizar y cuestionar aquellos universos de significación que comparto con los actores a estudiar. Dicho de otro modo, se trató de poner en suspenso mi propia "empatía moral" con los entrevistados/as y la tarea que llevaban adelante para dejar emerger del análisis aquellas áreas grises donde los actores se vieron obligados a negociar sus propios posicionamientos, convicciones y recursos.

Una vez logrados los contactos iniciales, la metodología seguida para contactar a los entrevistados fue la conocida como "bola de nieve". Es decir que los contactos se hicieron de "a uno en uno", especialmente en aquellos casos en que los/as trabajadores/as no se encontraban ya en actividad. En relación con las modalidades de identificación de los/as entrevistados/as es necesario considerar que, entre la realización del trabajo de campo iniciado en el año 2015 y la escritura de la presente tesis en el año 2019, el cambio de gobierno supuso diversas modificaciones tanto sobre las condiciones de trabajo en el Estado nacional así como sobre las correlaciones de fuerza en el marco de las disputas por la memoria. Por esa razón aun cuando en la mayoría de los casos no me fue solicitado reservar las identidades de los/as entrevistados/as decidí reemplazar los nombres y apellidos por seudónimos. La excepción la

constituyen los funcionarios de gobierno (directores, subdirectores y secretarios) teniendo en cuenta el carácter público de sus responsabilidades y sus tareas.

Por otro lado, la investigación recurrió a la observación participante entendida como “una verdadera usina de contextos, es decir, de marcos de interpretación del fluir cotidiano y de las intervenciones discursivas” (Guber, 2011: 78). La misma resultó una metodología central del trabajo de campo ya que me permitió acceder a un conjunto de dimensiones entrecruzadas, especialmente en el caso de la práctica de memoria propuesta por la Comisión de Trabajo por la Reconstrucción de Nuestra Identidad (cuyo análisis fue realizado en 2015, de manera previa al cambio de gobierno), la realización de actos conmemorativos de reparación de “legajos laborales” y las visitas realizadas a los Archivos de las Fuerzas Armadas, realizadas a lo largo del 2017. Específicamente la observación participante en los actos conmemorativos me permitió ingresar a un universo de significación que resultó clave en el análisis desplegado en el capítulo tres y que se encuentra constituido por las diferentes “puestas en escena” de los actos que contaron con la participación de funcionarios de alto rango. Adentrarme en ellos me permitió apreciar nuevos sentidos en torno a la práctica de memoria propuesta por la Comisión no sólo en los rituales seguidos sino en los diferentes grados de emotividad o “mística” que se recreaban en cada una de las conmemoraciones. Ello me hubiera sido inaccesible por la vía de fuentes escritas o incluso referencias orales de segunda mano. La observación participante me permitió, a su vez, dar cuenta de la relación de los diferentes auditorios con las agencias en las que se llevaban a cabo los actos y con los funcionarios que participaban de las reparaciones. En relación con los archivos de las Fuerzas Armadas, la observación participante (más específicamente, la realización de “visitas etnográficas” según la perspectiva de Da Silva Catela, 2002, 2007) nos permitió observar no sólo la infraestructura y la magnitud de los archivos sino también las diferentes relaciones de “afinidad, tensión o alianza” que se establecen en el “mundo de los archivos”, conmigo como usuaria/observadora y también entre directores, archiveros, y otros usuarios, entendidos todos como individuos jerárquicamente relacionados (Da Silva Catela, 2002).

A su vez, he utilizado otras técnicas especialmente útiles para la producción de información en relación con el análisis organizacional de las agencias estudiadas y la reconstrucción de las líneas de acción que llevaban adelante. Así, he recurrido al análisis documental como primera estrategia en una etapa de exploración preliminar y también, a la hora de contrastar algunos datos recibidos oralmente. Ello supuso el abordaje de los registros escritos que dan cuenta del funcionamiento de cada una de las agencias (Plan institucional, Memorias de gestión, página web, estructura, entre otros) y me permitió en cada caso reconstruir el discurso "oficial" de cada una de ellas (Pagani y Arce, 2017). Asimismo, en algunos casos he recurrido al relevamiento de prensa gráfica nacional y local con el objeto de reconstruir algunos eventos puntuales que me fueron referidos por los/as entrevistados/as.

Por otra parte, aun cuando nuestra comprensión del Estado excede su dimensión burocrática-administrativa la tesis también realiza un análisis de la normativa que reguló la tarea de las agencias bajo análisis y en ocasiones, da cuenta de los debates legislativos por medio de las cuales dicha normativa fue discutida y eventualmente sancionada. La razón de ello es que consideramos que los dispositivos jurídicos resultan claves a la hora de instituir clasificaciones sociales y establecer modos legítimos de nombrar los hechos del pasado. Dichos dispositivos contribuyen, por ejemplo, a construir una determinada figura de "víctima" que debe considerarse no como expresión de un estatuto objetivo, sino como una construcción social específica (Vecchioli, 2013). Tomados en su conjunto, el análisis de la normativa combinado con la observación participante y las entrevistas en profundidad nos permitieron reconstruir el funcionamiento de las agencias estatales bajo análisis y dar cuenta de las limitaciones y alcances de cada una de las líneas de acción.

Respecto de la elección de los casos, la tarea se hizo considerando varios factores. Por un lado, el devenir de mi proyecto de investigación doctoral que tuvo como primera etapa la realización de una tesis de maestría centrada en la política de reparación de legajos laborales. Si bien tal política tuvo un alcance reducido, el análisis de la misma fue clave en la medida en que condensó varios núcleos de sentido que persisten a lo largo de esta investigación. Dicho de otro modo, como se verá en los capítulos segundo y tercero, el análisis de dicha política en sus diversas facetas funcionó como un

prisma que nos permitirá acercarnos simultáneamente al problema del Estado en su funcionamiento cotidiano y a la construcción de dispositivos memoriales en ese contexto.

Al mismo tiempo, la elección de los dos casos siguientes siguió un principio metodológico según el cual todas las unidades analizadas comenzaron a gestarse en los primeros años de gobierno y funcionaron durante todo el período analizado y además estuvieron situadas al mismo nivel al interior del Estado, es decir, implementaron políticas de alcance nacional y a nivel de ministerios del Poder Ejecutivo. Esta decisión respondió a la necesidad de facilitar la comparación entre las distintas unidades, y a la posibilidad de establecer de manera más directa que en otros poderes las posiciones e identificaciones que los gobiernos kirchneristas sostuvieron en la materia.

A su vez, la elección de una política de reparación, archivo y "lugarización" (Messina, 2014), respectivamente, responde al interés por dar cuenta de la diversidad de asuntos que incluyen las denominadas "políticas de memoria" y el modo en que se inscribieron en diferentes áreas de incumbencia dentro de la administración pública nacional. Más aún, como veremos, el hecho de que estas políticas hayan sido llevadas adelante por distintas agencias en distintos ministerios constituye un dato en sí mismo, que refiere al carácter transversal que signó a las "políticas de memoria" al interior del gobierno a lo largo del período.

En relación con ello, cabe notar que la tesis privilegió un abordaje intensivo de cada una de las líneas de acción estudiada antes que la realización de un mapeo de la totalidad de las políticas implementadas en el período 2003-2015. La razón es que (especialmente cuando se trata de investigaciones individuales) la realización de mapeos exige recurrir a todo tipo de clasificaciones que no emergen necesariamente del análisis concreto de las políticas (sus condiciones de posibilidad, su implementación, etc.) y que por eso mismo no permiten conocer de manera específica cuáles fueron los marcos memoriales, sentidos y narraciones en juego por parte de los diferentes actores involucrados.

Al mismo tiempo, la diversidad temática arriba citada explica el carácter heterogéneo de los diversos capítulos que siguen a continuación y el hecho de que las variables estudiadas en cada uno de ellos hayan resultado distintas. En

consonancia con los objetivos planteados, dichas variables de análisis no fueron concebidas de manera previa al desarrollo de la investigación sino que son el producto de una serie de ejes problemáticos que han emergido como relevantes en el transcurso de la misma. Así además de abordar las condiciones político institucionales en las que se desarrolló cada una de las líneas de acción, en los capítulos dos y tres analizamos la puesta en escena de una narrativa de la memoria según se desarrolló en los actos conmemorativos de entrega de legajos laborales, la emergencia de la figura del "trabajador estatal desaparecido" y la constitución del período "1955-1983" como eje narrativo. En los capítulos cuatro y cinco nos centramos en el proceso de "apertura" de los archivos militares, dando cuenta de su constitución como "territorios de memoria", la conformación y asociación con saberes expertos así como la dotación de valor judicial a los documentos. Asimismo abordamos los usos memoriales del archivo en relación con proyectos específicos de desclasificación documental, especialmente las denominadas "Actas Secretas de la Dictadura". En los capítulos seis y siete abordamos la política de "señalización" de ex CCD dando cuenta del pasaje de una memoria emblemática centrada en la ex ESMA a la conformación de una red de índole federal y la progresiva construcción de la política como un proceso de "desparticularización". También discutimos, en el capítulo siete, las críticas que la oposición partidaria formuló a la política de "lugarización" (Messina, 2014) en ocasión del traspaso de los sitios de memoria de la Ciudad de Buenos Aires a la órbita nacional.

En términos de organización de la tesis, el lector o lectora encontrará un primer capítulo consagrado a trazar una breve historia de las memorias en torno al terrorismo de Estado desde la transición a la democracia hasta el período bajo estudio, así como un estado de la cuestión en torno al problema de investigación.

Luego, habrá dos capítulos dedicados al análisis de cada una de las tres líneas de acción elegidas. Los puntos de contacto se explicitarán a lo largo de la tesis y se recogerán junto con las diferencias y entrecruzamientos en las conclusiones que aparecen al final. En ellas, además, ofreceremos algunas consideraciones de cierre que tomarán en cuenta los casos bajo análisis así

como los dilemas y perspectivas que surgen frente al involucramiento del Estado en las disputas por los sentidos del pasado.[2]

[2] Los capítulos uno a tres constituyen reelaboraciones de mi tesis de maestría, publicada en el año 2018. Véase Balé, Cinthia. (2018). *Memoria e identidad durante el kirchnerismo: La reparación de legajos laborales de empleados estatales desaparecidos*. La Plata: Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación; Posadas: Universidad Nacional de Misiones; Los Polvorines: Universidad Nacional de General Sarmiento. (Entre los libros de la buena memoria; 11). Disponible en línea. https://libros.fahce.unlp.edu.ar/index.php/libros/catalog/book/1

Capítulo 1: La construcción social de las memorias en torno al terrorismo de Estado

1.1. Introducción

Para comprender algunas de las características que asumió el proceso de producción de "políticas de memoria" durante los gobiernos kirchneristas, en este capítulo nos proponemos, en primer lugar, trazar una breve historia de la construcción social de las memorias en torno al terrorismo de Estado desde la transición a la democracia hasta la actualidad. Ello nos permitirá identificar los diferentes sentidos que han estado en disputa en torno del pasado reciente y dar cuenta de algunas de las intervenciones más importantes desarrolladas por gobiernos anteriores en la materia. Ambas cuestiones serán claves para insertar el proceso bajo estudio en una serie más larga que abarca los modos en que la sociedad argentina ha lidiado con el recuerdo del terrorismo de Estado y posteriormente identificar las continuidades y rupturas que el período bajo análisis supuso respecto de regímenes de memoria previos.

En segundo lugar, realizaremos un *racconto* de las "políticas de memoria" que se desarrollaron a nivel nacional a lo largo del período 2003-2015, con el objeto de poner en contexto los casos elegidos en esta tesis y dar cuenta de la variedad e intensidad de la intervención estatal en la materia. Por último, desarrollaremos un estado de la cuestión que nos permitirá ubicar nuestro objeto de investigación en el conjunto de las discusiones que se desarrollaron en torno a la producción de "políticas de memoria" en el período. Indicaremos nuestras coincidencias y diferencias con cada uno de los abordajes, así como el papel atribuido en cada uno de ellos al movimiento de derechos humanos y a las agencias estatales.

1.2. Memorias dominantes en torno al terrorismo de Estado

A pesar de las dificultades que supone trazar una historia de las memorias sociales, las diferentes periodizaciones que circulan en torno a las memorias sobre el terrorismo de Estado coinciden en identificar —con sus diferencias y matices— una serie de representaciones dominantes desde la

transición democrática hasta los inicios del siglo XXI (Sonderéguer, 2001; Jelin, 2002; Carnovale, 2006; Rabotnikoff, 2007; Lvovich y Bisquert, 2008; Da Silva Catela, 2011; Messina, 2013). Para ello, es importante tener en cuenta que, como señala Pollak (2006) la noción de "memorias en conflicto" implica que no todos los grupos o actores sociales tienen la misma capacidad para establecer la agenda pública acerca del pasado. Por eso, es posible distinguir entre "memorias dominantes" y "subterráneas", entendiendo por las primeras aquellas que acceden a un lugar hegemónico en el espacio público en un determinado período (y en ocasiones, son retomadas o impulsadas a través de iniciativas oficiales) y por las segundas aquellos recuerdos "prohibidos, indecibles o vergonzosos" que se mantienen silenciados o circulan en espacios de sociabilidad reducidos. Teniendo en cuenta esto, describir adecuadamente un régimen de memoria implica no concebir esas fronteras como una disposición estática, sino como un espacio de disputa donde las representaciones del pasado son mudables y sufren reacomodamientos mutuos. Estos reacomodamientos ocurren en función de diferentes variables que incluyen la construcción de las identidades políticas, pero también cuestiones generacionales y subjetivas y que, en conjunto, determinan las condiciones de audibilidad o legitimidad de unas memorias por sobre otras.

Una primera formación de memoria "dominante" remite al discurso sostenido públicamente por los militares durante el período 1976-1982. Sus principales elementos se vinculan con la autopercepción de las Fuerzas Armadas como "salvadoras de la Nación" frente a las amenazas provenientes de la "subversión". En el marco de esta narrativa la violencia perpetrada por las Fuerzas Armadas se enmarcaba en la figura de la "guerra" y constituía la respuesta que la institución había sido llamada a dar frente a las "agresiones de los enemigos de la nación" (Salvi, 2012: 32). Como señala Franco (2012, 2018) la remisión a un universo bélico no era una representación exclusivamente militar sino que constituyó una referencia compartida por amplios sectores de la sociedad argentina para describir la conflictividad política a lo largo de toda la década del setenta. De hecho, esa matriz de lectura sólo se modificó varios años después con la emergencia de un lenguaje de los derechos humanos que permitió reconfigurar lo acontecido en términos de 'crimines de lesa humanidad' y/o 'genocidio'. Entre otros lugares, esta

versión del pasado anclada en la figura de la "guerra" fue expresada por la corporación militar en el "Documento Final de la Junta Militar sobre la Guerra contra la Subversión y el Terrorismo", según una narrativa que condensaba la visión triunfalista y denegatoria que los militares sostuvieron, durante largos años, respecto de los crímenes cometidos. Este conjunto de representaciones configuró, con sus continuidades, rupturas y reacomodamientos el eje básico de la "memoria militar" al menos hasta mediados de la década del noventa (Salvi, 2012).

Como se sabe esta narrativa fue tempranamente puesta en cuestión por algunos organismos de derechos humanos que existían en el país durante la dictadura, así como por las diferentes agrupaciones que se fueron formando en torno de los afectados directos de la represión estatal.[3] En este marco se desarrolló una contra-narrativa (en un principio subterránea) que tomó como elemento central la cuestión de los derechos humanos y la denuncia de las violaciones perpetradas por el gobierno militar. Surgió entonces la figura del detenido-desaparecido como víctima de una represión estatal cuyo carácter sistemático y masivo no podía encuadrarse en la figura de la "guerra". Desde inicios de la década del ochenta y en parte gracias a la persistencia de los organismos de derechos humanos en el sostenimiento de esta versión contrapuesta a la de la Junta Militar, fue posible que la "cuestión de los desaparecidos" se constituyera progresivamente como un problema público, cuya resolución comenzó a ser demandada por los actores políticos que defeccionaban en su apoyo al régimen militar, un poco antes de la Guerra de Malvinas y con más fuerza luego de ésta (Franco, 2018). Con la publicación del Informe de la CONADEP en 1984 y la realización del Juicio a las Juntas en 1985 se afianzó un discurso en clave humanitaria, en el marco del cual los desaparecidos dejaron de ser concebidos como "delincuentes subversivos" que amenazaban el "estilo de vida nacional", para aparecer en su gran mayoría como "víctimas inocentes" de los crímenes perpetrados por el terrorismo de Estado. Esta relectura implicó, a su vez, un desplazamiento de los períodos

[3] Los estudios académicos sobre el movimiento de derechos humanos suelen referirse a una lista más o menos canónica de ocho organismos, a saber: Liga Argentina de Derechos Humanos, SERPAJ, APDH, MEDH, CELS, Familiares de detenidos y desaparecidos por razones políticas, Madres de Plaza de Mayo y Abuelas de Plaza de Mayo. Para una revisión de la misma puede consultarse Alonso, 2015.

que resultaban centrales en cada narrativa ya que mientras el discurso de la "guerra contra la subversión" antes referido se concentraba en las acciones de violencia guerrillera desplegadas previamente al 24 de marzo de 1976, en esta segunda formación de memoria la violencia de las organizaciones armadas revolucionarias e incluso la militancia no armada de los detenidos – desaparecidos fue por diversas razones no tematizada u ocluida[4] (Crenzel, 2008). De acuerdo con algunos autores es posible identificar en estos desplazamientos cierta autonomización de la memoria de los organismos de derechos humanos y su integración a una "memoria ciudadana"[5] (Leegstra, 2009; Messina, 2013) que sin estar directamente ligada a los grupos de afectados directos expresa el rechazo generalizado a los crímenes cometidos por las Fuerzas Armadas y una asunción mayoritaria del mandato de "Nunca Más" (González Bombal, 2004). Esta "memoria ciudadana" estuvo basada en la denuncia despolitizada de las violaciones a los derechos humanos y en la condena a la violencia política sea de izquierda o derecha (Crenzel, 2008), y encuentra sus hitos en un conjunto de intervenciones seminales desarrolladas por el gobierno de Raúl Alfonsín (1983-1989) a la hora de lidiar con las consecuencias del pasado dictatorial en términos de una contra-narrativa respecto de la elaborada por las Fuerzas Armadas. Especialmente, nos referimos a la creación de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) y la elaboración de su Informe "Nunca Más", ambos procesos cuidadosamente analizados por Crenzel (2008), así como al juzgamiento de las cúpulas militares en el llamado Juicio a las Juntas en 1985, abordado por diferentes autores (Galante, 2014; Malamud Goti, 2000, Nino, 1997) Estos acontecimientos lograron, con sus limitaciones, instalar una versión oficial de lo sucedido: "en el juicio a las Juntas, convertido en un teatro público de la confrontación por el sentido legítimo del pasado (…) se

[4] La necesidad de los organismos de derechos humanos de hacer audibles sus denuncias en niveles internacionales así como de dar cuenta del carácter de lesa humanidad de los crímenes cometidos por las Fuerzas Armadas, determinó, entre otros factores, la omisión de la militancia política de los detenidos-desaparecidos. Véase Crenzel, 2010.

[5] Bajo la noción de "memoria ciudadana" la autora considera otros aspectos diferentes a los considerados aquí que incluyen la llamada "teoría de los dos demonios". Cf. González Leegstra, 2009. Por otra parte con la noción de "autonomización" nos referimos a la posibilidad de que el discurso de los derechos humanos tomara centralidad en la escena pública y fuera enunciado por otros portadores, como por ejemplo el ex - presidente Raúl Alfonsín durante su campaña electoral.

implantaba un nuevo relato en el que la ley desplazaba a la guerra como núcleo de sentido de lo acontecido" (Vezzetti, 2009: 25). A su vez, en estos años es posible identificar la creación de la Secretaría de Derechos Humanos en el ámbito del Ministerio del Interior (Dto. Nº 3090/84) como órgano de continuidad de la tarea de la CONADEP, que tuvo a su cargo la sistematización de denuncias, la identificación de cadáveres y la continuidad en la búsqueda de niños desaparecidos (Alonso, 2011).

Durante la transición a la democracia es posible identificar aún otro conjunto de representaciones colectivas sobre la década del setenta en general y sobre la dictadura militar en particular que se vio cristalizado en la denominada "teoría de los dos demonios". Si bien dicha "teoría" suele asociarse, entre otras cosas, con la política de juzgamiento sostenida por el gobierno de Raúl Alfonsín (1983-1989) —según la cual se debía juzgar a las cúpulas militares en paralelo con los máximos dirigentes de las organizaciones político-militares— o también con el prólogo a la primera edición del *Nunca Más*, entre otros elementos, lo cierto es que el supuesto carácter unificado de la "teoría" y su existencia como objeto autónomo fue una atribución de sus detractores hecha *a posteriori* (Franco, 2015). Dicho de otro modo, la "teoría de los dos demonios" no existió como "un *corpus* articulado de ideas" (24) que haya sido sostenido como tal por ningún enunciador, sino que funcionó retrospectivamente como un marco de memoria en el cual se inscribieron determinadas lecturas y percepciones en torno a lo sucedido. Esta particularidad pone en evidencia lo señalado arriba respecto de la complejidad atribuible a las formaciones de memoria: el hecho de que sus detractores (especialmente los organismos de derechos humanos) hayan concebido a la "teoría de los dos demonios" como un objeto autónomo, refiere a los reacomodamientos mutuos en función de los cuales se constituyen los sentidos del pasado, ya que la impugnación unificada de los principales nudos argumentales de la "teoría" permitió a otros actores sostener una memoria alternativa.[6]

[6] De acuerdo con Marina Franco, las variables con la que se asocia la "teoría de los dos demonios" pueden resumirse en cuatro rasgos que mantienen cierta independencia entre sí y cuya jerarquía interna fue cambiando con el tiempo: "la existencia de dos violencias enfrentadas, las guerrillas de izquierda y las Fuerzas Armadas actuando en nombre del Estado; la relación de acción/reacción entre las guerrillas y la violencia estatal, es decir, la

Estas tres formaciones de memoria permanecieron —no exentas de transformaciones— durante el primer gobierno de Carlos Menem (1989-1995) pero pasaron a ocupar diferentes posiciones en el espacio público. Luego del Juicio a las Juntas, el discurso de la "guerra contra la subversión" o la "memoria salvadora" (Leegstra, 2009) perdió gran parte de su consenso social para aparecer en un lugar cada vez más relegado quedando en la actualidad como una "memoria denegada" (Catela Da Silva, 2011). Por su parte, también la memoria de los organismos de derechos humanos[7] atravesó un relativo debilitamiento de su presencia en la esfera pública enfrentándose a las posiciones que llamaban a cerrar el pasado y "dar vuelta la página". Esto se hizo especialmente evidente con la promulgación de las Leyes de Punto Final y Obediencia Debida durante el gobierno de Raúl Alfonsín y luego de una serie de indultos decretados por Carlos Menem en los inicios de la década del noventa.[8] Asimismo, ello se expresó en la intención del gobierno de Menem de demoler la Escuela de Mecánica de la Armada y crear allí un espacio verde que se constituyera como un "símbolo de la unidad nacional". Así, la política de "reconciliación" —entendida como clausura del pasado— constituyó una de las ideas dominantes que se enunciaron desde el Poder Ejecutivo en torno a cómo lidiar con los efectos del pasado en estos años.

En este contexto desfavorable se fueron gestando diferentes iniciativas que tomarían centralidad hacia 1995 y que lograrían reinstalar el recuerdo de la dictadura bajo el paraguas de los "derechos humanos" en la esfera pública.

---

responsabilidad causal de la izquierda en el inicio de la violencia; la equiparación entre esas dos violencias en relaciones que van desde la equiparación por responsabilidades históricas hasta por la simetría de fuerzas y/o de métodos y la situación de exterioridad de la sociedad en ese conflicto, en imágenes que van de la ajenidad a la inocencia y la victimización" (Franco, 2015: 26)

[7] Si bien la memoria condenatoria del terrorismo de Estado fue objeto de cierta homogeneidad en el movimiento de derechos humanos, debe aclararse que los diferentes organismos que lo componen mantuvieron diferencias internas desde sus inicios. Estas diferencias se expresaron por ejemplo en relación con las posiciones adoptadas frente a la CONADEP, más tarde frente a las reparaciones económicas instituidas por el gobierno de Carlos Menem y también frente a las iniciativas de conmemoración y musealización surgidas a mediados de la década del noventa. Para un análisis de la historia del movimiento, véase Alonso, 2013.

[8] La "Ley de Punto Final" (Nº 23.492) fijaba un plazo perentorio para denunciar los delitos de la represión y la "Ley de Obediencia Debida" (Nº 23.521), promulgada en mayo de 1987 amparó a todo el personal militar y policial con rango inferior al de comandante en jefe o jefe de zona, alegando que sus acciones se habían realizado en cumplimiento de órdenes superiores. Durante el gobierno de Menem los condenados y procesados de nivel superior fueron indultados con los decretos Nº 10.022/89, que ordenó la paralización de procedimientos pendientes, y el Nº 2.746/90, que excarceló a los represores ya condenados (Alonso, 2011).

Desde el punto de vista de la intervención de las agencias estatales y de manera contradictoria a la tendencia señalada arriba, en 1992 se creó una Comisión Técnica dependiente de la Subsecretaría de Derechos Humanos y Sociales del Ministerio del Interior que, con participación de la organización Abuelas de Plaza de Mayo, tuvo como función impulsar la búsqueda de niños y niñas desaparecidos.[9] En 1998, esta Comisión se institucionalizó bajo la forma de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad, que se encuentra aún en funciones.[10] Como antecedente de ello en mayo de 1987 el Congreso Nacional ya había aprobado la ley Nº 23.511 de creación del Banco Nacional de Datos Genéticos, cuyo funcionamiento fue reglamentado pocos días antes del fin de la presidencia de Alfonsín en julio de 1989, por decreto Nº 700[11] (Alonso, 2011). Al mismo tiempo, es en la década del noventa que el Estado argentino inició una política de reparación económica que incluyó a las víctimas de desaparición forzada, a las personas que hubieran sido puestas a disposición del Poder Ejecutivo Nacional, a los detenidos en Centros Clandestinos de Detención y a los que sufrieron libertad vigilada o arresto domiciliario, especialmente bajo las leyes 24.411 y 24.043. Esta política recibió fuertes rechazos de algunos sectores del movimiento de derechos humanos, ya que se concretaba en un marco de retroceso respecto de sus demandas así como del mencionado cierre de la vía penal para el juzgamiento de los responsables, según ha sido analizado por diferentes autores (Guembe, 2004; Varsky y Filippini, 2005; Surraco 2013; Luzzi, 2015).

A pesar de ello, en términos memoriales estos dispositivos legales constituyeron hitos importantes en la medida en que contribuyeron a construir una determinada figura de "víctima" de cierta perdurabilidad (Vecchioli, 2001, 2015). Las diferentes leyes concebidas como "reparatorias" delimitaron –tanto en su sanción efectiva como a lo largo de los debates parlamentarios– un conjunto de responsabilidades y expusieron un marco de interpretación del

[9] Véase Disposición n° 1328/1992.
[10] Véase Ministerio del Interior, Resolución n° 1392/1998.
[11] Según señala Alonso (2011) el funcionamiento del Banco y su actividad en la sede del laboratorio de inmunología del Hospital Durand en los años subsiguientes dependió a su vez de otros agentes estales, especialmente municipales de la Ciudad Buenos Aires. Específicamente la provisión de equipos para el Servicio de Inmunología del Hospital se mejoró en 1999 bajo el gobierno municipal autónomo del radical Fernando De La Rúa con un primer analizador automático de ADN y en 2001 con un nuevo secuenciador bajo la administración de Aníbal Ibarra.

pasado más o menos explícito[12]. En paralelo, el otorgamiento de jerarquía constitucional a los tratados y convenciones internacionales de derechos humanos en 1994, resituaron la importancia de éstos en el andamiaje jurídico argentino de un modo que los constituyó en una clave fundamental para la acción legal y política en los años subsiguientes.

A su vez, este período (que coincidió con el denominado "boom de la memoria" a escala global) se caracterizó por la aparición de diferentes voces que, desde posiciones heterogéneas, dejaban expuestas las deudas pendientes y la imposibilidad de "cerrar" de manera definitiva el pasado. Por un lado se produjeron confesiones públicas de victimarios que, con alto impacto en la opinión pública, se apartaban de la narrativa oficial sostenida hasta entonces por las Fuerzas Armadas. Específicamente, nos referimos a las confesiones en torno a los "vuelos de la muerte" por parte del capitán de corbeta Adolfo Scilingo, a las que se sumarían las de Víctor Ibañez y Héctor Vergez. En ese contexto, en 1995 se produce también el *Mensaje al país* del entonces Jefe del Ejército, Gral. Martín Balza, en el marco del cual se modificaba la posición denegatoria de los crímenes que había caracterizado a la memoria institucional de las Fuerzas Armadas hasta entonces (Salvi, 2012). Por otro lado, proliferaron los testimonios de ex militantes de la década del setenta y las expresiones culturales (películas, documentales, novelas), así como también se multiplicaron los homenajes locales a personas desaparecidas a lo largo del país. En esta misma época, en el plano judicial comenzaron a desarrollarse los denominados "juicios por la verdad" (Andriotti Romanin, 2013) y por apropiación de niños, a los que se sumaron las causas abiertas en otros países contra militares argentinos involucrados en crímenes de lesa humanidad.

En este contexto, en el vigésimo aniversario del golpe de Estado entró en la escena pública la agrupación H.I.J.O.S (Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio) conformada por los hijos e hijas de aquellos que habían sido víctimas de la represión ilegal. Esta agrupación configuró, en la estela de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, un relato renovado sobre el terrorismo de Estado que incluía nuevas prácticas de denuncia a los represores

[12] Lo mismo vale para la Ley 24.321 (sancionada en diciembre de 1994) que crea la figura de "ausencia por desaparición forzada". La misma era reclamada por las organizaciones de derechos humanos para subsanar el vacío jurídico que regía respecto de la situación de las personas desaparecidas.

(los denominados “escraches”) y fundamentalmente, la reivindicación de la lucha encarada por sus progenitores y la restitución de sus compromisos políticos en el marco de un sentido militante de la memoria (Cueto Rúa, 2008). En este contexto, se desarrolló una nueva clave narrativa que instalaba la continuidad entre las luchas populares previas al golpe y aquellas que se desarrollaban en la Argentina neoliberal. Como señalan Lvovich y Bisquert (2008) la emergencia de dicha clave –según la cual la dictadura se representaba como condición de posibilidad de la implementación de un sistema político y económico neoliberal que para mediados de los noventa había sumido al país en una profunda crisis social– puede situarse en la “Declaración Popular” que las organizaciones convocantes leyeron en ocasión de la conmemoración del vigésimo aniversario del golpe de Estado. Según estos autores “a las conocidas consignas de repudio a las leyes del perdón y al reclamo de verdad y justicia se sumó una resignificación del golpe de Estado, visualizado desde entonces como el detonante no sólo del terrorismo ilegal sino también de políticas devastadoras que se extendían hasta aquel momento” (Lvovich y Bisquert, 2008: 65). Esta nueva linealidad en la que la dictadura se representaba como condición de posibilidad de la implementación de un sistema económico crecientemente desigual, significó la inscripción de lo sucedido en un nuevo *continnum* temporal que hacía hincapié en las luchas políticas y sociales y que sería retomado (y retraducido) una década más tarde durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández.

En relación con este período, cabe destacar que aun cuando la memoria sostenida por los organismos de derechos humanos (traspasada entonces por el trasvasamiento generacional que supuso HIJOS y por el contexto de grave crisis social, económica y política que se vivía en el país) había logrado amplia aceptación en la esfera pública, no fue compartida de modo homogéneo al interior de la sociedad argentina. Siguiendo nuevamente a Lvovich y Bisquert, es posible señalar, a raíz de la elección de Antonio Bussi en Tucumán en 1995, la existencia de otra memoria de la dictadura que, sin expresarse públicamente con potencia, reivindicaba el accionar de la Junta Militar en toda o parte de su trayectoria. Esta memoria, moldeada en parte por el terror dictatorial, llevó a un sector de la población a identificar en la democracia la causa del “desorden, la corrupción y el crimen”, y a reclamar, en su lugar, un Estado autoritario que

imponga el orden a través de una “mano dura”. Las representaciones dispuestas por esta formación de memoria –que no coincide punto a punto con la “memoria militar” pero que, al mismo tiempo, se resiste a abandonar el paradigma de la “guerra”– pueden pensarse como memorias subterráneas que muestran una fuerte persistencia y que encuentran –con mayor vigor desde la asunción de Mauricio Macri como presidente de la Nación– diversos vehículos de expresión mediática e institucional.

Volviendo a mediados de la década del noventa, podemos decir que la coyuntura favorable al movimiento de derechos humanos habilitó algunas importantes transformaciones en el régimen de memoria vigente que se expresaron, como veremos, en la constitución de la memoria como objeto de políticas públicas. Por un lado comenzaron a desarrollarse algunas iniciativas en torno a la creación de “lugares de memoria” como la conformación de archivos, la señalización simbólica de ex Centros Clandestinos de Detención y la construcción de monumentos recordatorios. Así, mientras que en la ciudad de Rosario se constituyó una “Comisión Pro-museo” de la memoria en el año 1996, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires asistimos a la puesta en marcha del Parque de la Memoria y el Monumento a las Víctimas del Terrorismo de Estado, ambos analizados en Vecchioli (2013, 2001) y Valdez (2003). Más aún, en esta línea Guglielmucci (2013) ha mostrado que entre fines de la década del noventa y mediados de la década del 2000 la categoría “memoria sobre terrorismo de Estado” fue instituida como objeto de políticas públicas de derechos humanos dentro del nuevo organigrama del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y que, en ese marco, numerosos activistas de derechos humanos fueron incorporados como trabajadores a la estructura administrativa del gobierno. Este proceso significó un primer trabajo de articulación o de “gestión compartida” (Guglielmucci, 2013: 132) entre el Estado municipal y los organismos de derechos humanos, que puede ser considerado un antecedente del proceso de institucionalización de las memorias a nivel del Estado nacional que se profundizaría durante el período 2003-2015.

En el plano de archivos, en 1999 se creó la Comisión Provincial por la Memoria en la Provincia de Buenos Aires como un ente autárquico del gobierno provincial encargado de custodiar el recientemente hallado Archivo de la Dirección de Inteligencia de la Policía Bonaerense (DIPBA) (Cueto Rúa, 2016;

Kahan, 2007, Flier, 2006) y en el año 2001 se creó el "archivo digital" dentro de la Secretaría de Derechos Humanos, que luego se integraría al Archivo Nacional de la Memoria. Por otro lado y de manera decisiva, el año 2001 marca una bisagra en lo que se refiere al procesamiento judicial de la dictadura a partir de la declaración de inconstitucionalidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida en sede judicial, ratificada luego por la Corte Suprema de Justicia en el año 2005. La reapertura de las causas judiciales constituyó, durante la primera década de los años 2000 y hasta la actualidad, la escena pública de mayor envergadura en lo que concierne a las luchas por la memoria en Argentina y su desarrollo supuso una fuerte influencia en el establecimiento de una posición condenatoria respecto de los crímenes perpetrados por las Fuerzas Armadas. Al mismo tiempo el estallido de la crisis social, política y económica que se vivió en el país en el 2001 constituyó también una bisagra porque implicó, de modo más general, una "conmoción de los marcos de referencia disponibles para pensar el pasado, el presente y el futuro" (Da Silva Catela, 2011). En relación con este punto, Da Silva Catela ha señalado cómo los nuevos grupos afectados por la represión desencadenada entonces por el gobierno de la Alianza (1999-2001) se apropiaron de los símbolos y estrategias creados durante los años setenta, estableciendo lazos y continuidades con la represión del pasado y con los organismos de derechos humanos. Así, "otras madres usaron pañuelos, otros grupos convocaron a las Madres para defenderse, nuevas marcas que señalaban muertes de jóvenes manifestantes se sumaron a los pañuelos estampados en el piso de la Plaza de Mayo" (2011: 3). En ese contexto, la masiva movilización que acompañó el vigésimo quinto aniversario del golpe de Estado hizo patente que el pasado estaba lejos de ser clausurado: las disputas de memoria y las transformaciones en los marcos de rememoración del pasado reaparecerían con toda su contundencia durante la presidencia de Néstor Kirchner y más tarde de Cristina Fernández de Kirchner.[13]

[13] Para una historia sobre las conmemoraciones del veinticuatro de marzo, véase Lorenz, 2003.

1.3. La memoria como objeto de políticas públicas (2003-2015)

En lo que se refiere a las diferentes intervenciones de las agencias estatales en la producción y/o reproducción de memorias sobre la última dictadura militar los aportes académicos han sido más bien fragmentarios y heterogéneos. Esto es válido tanto para las "políticas de memoria" desarrolladas durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández como para las formas de implicación que han caracterizado a otros gobiernos. Como señala Alonso en sus estudios sobre los procesos de institucionalización de las memorias en la provincia de Santa Fe, ello se debe en parte a que no es posible identificar una línea de acción unitaria o que no haya estado sujeta a "vaivenes, negociaciones y compensaciones" (2011: 41). En efecto, el proceso de institucionalización de las memorias fue "contradictorio y multifacético" (36) y estuvo signado por las diferentes coyunturas del movimiento de derechos humanos en su relación con el Estado así como por la interacción de "agentes de muy variada adscripción política y social [que] fueron generando prácticas, espacios de intervención, legislaciones y discursos que a primera vista pueden parecer hasta contrapuestos" (41). Así, incluso al interior de un mismo gobierno, es posible encontrar líneas divergentes, como hemos señalado arriba en relación con los primeros años del gobierno de Carlos Menem y también de Raúl Alfonsín.

En todo caso, teniendo en cuenta este panorama resulta evidente que la intervención de las agencias estatales sobre el pasado reciente no se gestó *ex-nihilo* durante el ciclo político kirchnerista sino que, siguiendo a Alonso respondió a "una secuencia temporal mayor iniciada con gestos o acciones de gobiernos anteriores y que se superpuso, articuló o contrapuso con las actitudes de muy diferentes agencias y niveles estatales" (2011: 41). De hecho incluso en coyunturas que fueron tradicionalmente analizadas como de escasez de oportunidades políticas para el movimiento de derechos humanos, existieron diversos puntos de articulación con agencias estatales (municipales, provinciales y nacionales) que contaron con diferentes niveles de éxito en sus iniciativas. Esto es importante para eludir la tendencia a sobre dimensionar la voluntad del Poder Ejecutivo (en este caso, de Néstor o Cristina Kirchner) en la consideración de conjunto del proceso y a la vez para comprender algunas

dinámicas que asumió la incorporación de las demandas del movimiento de derechos humanos en el período que nos toca analizar.

Sin perjuicio de ello, también es cierto que la etapa abierta en 2003 implicó fuertes novedades. Como hemos indicado, numerosos autores coinciden en que la asunción presidencial de Néstor Kirchner marcó un punto de clivaje en el rol asumido por las agencias estatales en la gestión del pasado reciente (Carnovale, 2006; Lvovich y Bisquert, 2008; Da Silva Catela, 2011). Para mensurar ese proceso es interesante recurrir a los resultados de una investigación publicada en 2011 que se propuso identificar "las principales políticas públicas de búsqueda de la verdad y memoria" en siete países de América Latina: Argentina, Brasil, Chile, Bolivia, Paraguay, Perú y Uruguay (Garretón Kreft et. al, 2011). La investigación abarca un período que va desde la "transición a la democracia de cada país" hasta diciembre de 2009 y trabaja en un nivel nacional, regional y local. Como hemos dicho en la introducción, este tipo de mapeos utilizan nociones pre-concebidas respecto de aquello que se considera una "política pública de memoria" y distingue (artificialmente, como señalan los propios autores) entre políticas de "verdad y memoria" respecto de políticas de "justicia y reparación", que no son incluidas en el análisis. A pesar de ello, el relevamiento del caso argentino arroja un resultado significativo: de cincuenta políticas identificadas para el período 1983-2009 (18 nacionales; 24 provinciales; 6 locales y 2 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires), treinta de estas políticas se concentran entre los años 2004 y 2009 y doce de ellas fueron llevadas a cabo desde el Poder Ejecutivo Nacional (Garretón Kreft et. Al, 2011: 26-37). Otro relevamiento, realizado por Ezcurra (2017) para la primera presidencia de Néstor Kirchner (2003-2007), va en el mismo sentido al identificar un total de veinticinco políticas, todas ellas dependientes de la administración nacional.[14] Un dato significativo es que si bien ambas investigaciones incluyen la "apertura de los archivos de las Fuerzas

[14] Desde una perspectiva ligada al análisis clásico de políticas públicas Ezcurra clasifica estas líneas de acción en función de lo que considera el "objetivo político" de la medida: "Políticas instructivas, cuyo fin fue fortalecer el Estado de Derecho a partir del establecimiento de nuevas normativas sustentadas en valores y hábitos democráticos que generen nuevos consensos; ii. Políticas de interpelación ideológica, su objetivo fue implementar medidas que satisfagan las demandas que estructuraron históricamente el discurso de los principales Organismos de Derechos Humanos, propiciando la intervención de éstas últimas en el espacio público; y iii. Políticas de uso político, cuyo objetivo fue hacer un uso político y publicitario de las políticas de la memoria y de los réditos obtenidos a partir de su implementación (2017: 35).

Armadas" que analizaremos en los capítulos cuatro y cinco y el proceso de "señalización de ex–CCD" (capítulos seis y siete), ninguna incorpora a su conteo la reparación de legajos laborales de empleados públicos desaparecidos. Probablemente, ello se debe al alcance reducido de la política y a su escasa visibilidad por fuera de la Administración Pública Nacional, a pesar de que, como veremos, el análisis de la iniciativa nos brindará información valiosa sobre los sentidos que adoptó la intervención de las agencias estatales sobre los modos de encuadramiento del pasado. Esto evidencia que aun cuando son útiles, los relevamientos como los citados difícilmente contemplan la totalidad del universo considerable y más importante aún, no nos otorgan información acerca del sentido, la función y la lógica que los propios actores otorgan a las políticas relevadas.

En términos cualitativos, por otra parte, es posible destacar una serie de medidas. Ya desde sus inicios, el gobierno de Kirchner avanzó en un conjunto de demandas que venían siendo sostenidas largamente por el movimiento de derechos humanos, generando una nueva estructura de oportunidades políticas para este movimiento y proponiendo nuevos marcos para la interpretación del pasado. Según señalan varios analistas, los condicionamientos que limitaban al nuevo gobierno —entre los cuales se destacaba su debilidad de origen (Pérez y Natalucci, 2012) — determinaron que el nuevo presidente buscara ampliar su base de consenso, yendo más allá de las alianzas tradicionales del Partido Justicialista. En ese contexto Kirchner ensayó un acercamiento con distintas organizaciones sociales, entre las que se contaban los organismos de derechos humanos, que respondieron a la convocatoria presidencial con receptividad variable.

En mayo de 2003 el gobierno anunció la renovación de la cúpula de las Fuerzas Armadas y se pronunció a favor de la nulidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. En el mes de julio derogó el decreto que impedía las extradiciones de militares involucrados en la comisión de crímenes de lesa humanidad (es decir el 1581/01), ratificó la adhesión de Argentina a la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de Lesa Humanidad y nombró como Secretario de Derechos Humanos a Eduardo Luis Duhalde, quien tenía una trayectoria cercana a los organismos ya que había sido un defensor de presos políticos y participante de la CADHU.

Más tarde el gobierno impulsó la sanción de la denominada "ley de hijos"[15] que preveía el otorgamiento de reparaciones económicas a las personas que nacieron durante la privación de la libertad de sus madres, a los menores que fueron detenidos junto con sus padres o madres por razones políticas y a las personas que fueron víctimas de sustitución de identidad. En ocasión de ese anuncio, representantes de la agrupación HIJOS participaron con el presidente de un acto realizado en Casa de Gobierno, conformando una escena inédita que se repetiría en los años subsiguientes.

De manera aún más decisiva, en la coyuntura del 24 de marzo de 2004 se produjeron dos gestos conmemorativos de fuerte valor simbólico que marcaron el viraje oficial en la materia: por un lado Kirchner encabezó un acto en el Colegio Militar de la Nación en el cual ordenó al entonces Jefe del Ejército que retirara los retratos de los Generales Jorge Rafael Videla y Reynaldo Bignone que permanecían hasta entonces colgadas en esa institución (Salvi, 2012: 67). Esa decisión se vio reforzada horas más tarde cuando en presencia de un auditorio colmado de familiares y representantes de organismos de derechos humanos, Kirchner presidió el acto de "recuperación" del predio de la ex Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) donde había funcionado uno de los mayores centros clandestinos de detención del país. En ocasión del anuncio de la creación de un futuro "Espacio para la memoria y para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos", el entonces presidente pronunció allí un discurso donde pidió "perdón" por parte del Estado nacional "por la vergüenza de haber callado durante veinte años de democracia", en un gesto que marcaba su pretensión refundacional respecto del pasado reciente.[16]

Del mismo modo, debe señalarse que el gobierno de Kirchner colaboró en la progresiva instalación en el espacio público de una renovada reivindicación de la "militancia setentista", que si bien venía siendo articulada desde algún tiempo antes, encontró en el entonces presidente un enunciador privilegiado.[17] Como señala Montero, en una investigación de referencia sobre

[15] Ley n° 25.914, 4 de agosto de 2004 (*BO*, 30 agosto de 2004)

[16] La recepción de ese discurso generó una fuerte polémica en la medida en que soslayaba los logros del gobierno de Raúl Alfonsín en el procesamiento judicial de la dictadura durante la transición. Véase Carnovale, 2006.

[17] Como señala Montero al referirnos a una "memoria militante setentista" no aludimos a una memoria preexistente como objeto autónomo, sino que "nos referimos en cambio a la representación, reconstrucción, reapropiación y re significación que el discurso kirchnerista

los usos de la memoria en el discurso kirchnerista, ya en su asunción el entonces presidente se identificó como "parte de una generación diezmada", es decir, parte de la generación perseguida por el terrorismo de Estado, convirtiéndose así en el primer presidente democrático en recuperar el imaginario político de aquella militancia (2012: 16). Según la autora, la reelaboración, reutilización y resignificación de este imaginario configuró desde entonces una presencia constitutiva del discurso kirchnerista y resultó clave en la construcción de un *ethos* presidencial, que, lejos del carácter devaluado que tenía pos crisis del 2001, se proyectó a sí mismo como un *ethos* militante.

Este posicionamiento contribuyó a sellar una alianza perdurable entre el gobierno kirchnerista y varios de los organismos históricos de derechos humanos. Con el apoyo de casi todas las regionales de HIJOS, la Asociación Madres de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora y Abuelas de Plaza de Mayo, en los años siguientes se produjeron una variedad de programas, planes y creación de agencias dedicadas a la temática, en un proceso de articulación cada vez más intenso y frecuente con estos organismos. En el año 2006 se declaró el 24 de marzo como feriado nacional con la consecuente organización de actos conmemorativos en las escuelas primarias y secundarias.[18] También se inauguró de manera oficial la reconversión de ex- Centros Clandestinos de Detención en sitios de memoria, a partir de la mencionada creación del Espacio para la Memoria y la Promoción de los Derechos Humanos ex-ESMA, que fue seguida (como veremos) por la creación de una Red Federal de Sitios de Memoria protegida por la Ley 26.691, que también declara sitios de memoria a todos los ex-CCD del país; se creó el Archivo Nacional de la Memoria en diciembre de 2003, institución que se replicó como modelo en varias provincias junto con Secretarías de Derechos Humanos donde no existían y se fomentó la producción de objetos culturales (films, materiales pedagógicos, obras teatrales, etc.) en torno a las décadas del sesenta y setenta. Asimismo, en ocasión del trigésimo aniversario del golpe de Estado, se presentó una nueva edición del Informe *Nunca Más* que incluía la actualización del Registro Unificado de Víctimas del Terrorismo de Estado y

ofrece de esa memoria reciente con sus retomes pero también sus olvidos" (Montero, 2012: 21).

[18] En el año 2002, bajo la presidencia de Eduardo Duhalde, el 24 de marzo había sido declarado Día nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia por Ley 25.633.

además, presentaba un prólogo adicional que se proponía establecer nuevas coordenadas para la interpretación del pasado según la perspectiva que venía siendo sostenida desde la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación (Da Silva Catela, 2011).

Más tarde durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner se sancionaron nuevas leyes "reparatorias" para los ex – presos políticos y se produjeron nuevos gestos conmemorativos de alto valor simbólico. También, como veremos, se desarrolló una política activa de señalización de sitios de memoria y la apertura de espacios como el Museo de la Memoria en la ex – ESMA y el Espacio Mansión Seré, inaugurados por la presidenta de la Nación en 2015 y 2013, respectivamente. En el plano judicial, se profundizó la política de juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad con la instalación en el espacio público de algunos casos resonantes que involucraron cuestiones relativas a la responsabilidad civil o empresarial, como por ejemplo el caso Papel Prensa. Según un relevamiento publicado por el Centro de Estudios Legales y Sociales, para el año 2013 estaban o estuvieron involucradas en causas vinculadas con el terrorismo de Estado un total de 2071 personas, entre civiles y personal de las fuerzas armadas y de seguridad (CELS, 2013). Hacia el final del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, 662 personas fueron condenadas (CELS, 2016). En el año 2011, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación participó como querellante en 108 causas, y en 2015, ese número ascendió a 180. En ese mismo sentido, se crearon unidades especiales de investigación relativas a los crímenes cometidos durante la dictadura, como la Unidad Especial de Investigación de la Desaparición de Niños y las Unidades de Investigación referidas a ciudadanos uruguayos, paraguayos y españoles víctimas de la represión ilegal argentina. Asimismo desde el Ejecutivo Nacional se crearon diferentes agencias encargadas de prestar apoyo a los procesos judiciales, entre las cuales se destacan el Programa Verdad y Justicia así como el Programa Nacional de Protección de Testigos, dependientes del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Asimismo, como veremos en los capítulos cuatro y cinco, desde el Ministerio de Defensa, los Equipos de Relevamiento y Análisis Documental de la Dirección Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario trabajaron en la apertura y el acceso a los Archivos de las Fuerzas

Armadas, con el objetivo de aportar documentación que fuera relevante a los juicios por crímenes de lesa humanidad. Algo similar ocurrió desde 2010 en el Ministerio de Seguridad con la creación del Grupo Especial de Asistencia para casos de apropiación de niños y luego el área de asistencia a la Justicia en la investigación de documentos de Prefectura, Gendarmería y Policía. Paralelamente, desde el Ministerio de Educación se impulsaron diferentes programas que apuntaron a la capacitación docente y a la producción de material referido al terrorismo de Estado, incluyendo la creación de una Red Nacional de Educación y Memoria (Adamoli et. Al, 2015). Desde el Ministerio de Justicia se le dio impulso al Centro de Asistencia a Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos Dr. Fernando Ulloa, mientras que desde la Comisión Nacional de Valores (CNV) se puso en marcha una Oficina de Coordinación de Políticas de Derechos Humanos que desarrolló diferentes líneas de investigación sobre el accionar del organismo durante la última dictadura cívico-militar, atendiendo al cruce de la política, la esfera económica y el sistema financiero (Perosino, Napoli y Bosisio, 2013). Otras iniciativas referidas a la gestión de archivos se llevaron a cabo también desde el Ministerio de Relaciones Exteriores y otras "comisiones de memoria" surgieron en el Ministerio de Economía y otras instituciones, promoviendo diferentes actividades educativas y conmemorativas.

En el marco de esta proliferación de agencias, programas y planes vinculados a los "derechos humanos" o a la "memoria", numerosos militantes de organismos de derechos humanos se incorporaron como funcionarios o trabajadores a las agencias estatales. Este proceso, que no fue exclusivo del movimiento de derechos humanos sino que tuvo su contraparte en otros movimientos sociales (Pérez y Natalucci, 2012; Perelmiter, 2010), despertó un doble cuestionamiento: por un lado, acerca del nivel de autonomía que tenían los organismos de derechos humanos y su función en la sociedad argentina, y por el otro, acerca de la capacidad de quienes habían sido "afectados directos" de la represión de formular políticas de la memoria que estuvieran "abiertas" a otros sectores de la sociedad (Vezzetti, 2009). De manera más general, a este cuestionamiento se le sumó uno más extendido según el cual las "políticas de memoria" impulsadas desde los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández se caracterizaban por una selección sesgada del pasado que

ignoraba las intervenciones de gobiernos anteriores en la temática (especialmente del alfonsinismo) pero sobre todo excluían a todo aquél que no se identificara con ese signo político (Sarlo, 2011; Novaro, 2008). En esta línea, una de las principales críticas consistía en afirmar que el "kirchnerismo" se había "apropiado" de la memoria para "fines políticos" y había hecho un "uso espurio" de eventos que trascendían (o debían trascender) la identificación político partidaria (Romero, 2010; Solís Delgadillo, 2012). Por contrapartida, para quienes se ubicaban en una línea afín con el gobierno nacional, este conjunto de políticas fueron identificadas como la consagración de las políticas de "memoria, verdad y justicia" y, de hecho, continuaron siendo apoyadas por sectores importantes del movimiento de derechos humanos hasta la finalización del mandato presidencial de Fernández de Kirchner.

1.4. Los debates en torno a la construcción de "políticas de memoria": un estado de la cuestión

Como hemos adelantado, las discusiones en torno al papel de las agencias estatales en la elaboración del pasado durante el período 2003-2015 han estado signadas por diversas polémicas. Una de ellas se vincula con las diferentes interpretaciones que han circulado en torno al acercamiento de una importante porción del movimiento de derechos humanos al gobierno de Néstor Kirchner primero y luego de Cristina Fernández.

En relación con ello, podemos decir que, tal como ocurrió con otros movimientos sociales, las claves explicativas que surgieron en torno al acercamiento de los organismos de derechos humanos al gobierno giraron alrededor de la idea de "cooptación" y la "pérdida de autonomía" de las organizaciones. Concretamente, los autores que abonaron esta perspectiva sostuvieron que los organismos cedieron la legitimidad que portaban en la sociedad argentina a cambio de recibir incentivos materiales y simbólicos. Este es el caso de algunas investigaciones periodísticas centradas en la denuncia por desvío de fondos destinados a la Fundación Madres de Plaza de Mayo (Braslavsky, 2009; Gasulla 2012), pero también de algunos historiadores como Solís Delgadillo (2012) y Romero (2010) que se proponen criticar *in toto* la intervención de los gobiernos kirchneristas sobre el pasado reciente.

En una línea similar, autores como Marcos Novaro desarrollan un argumento según el cual la política de derechos humanos de los gobiernos bajo estudio es entendida como un "montaje" de un "dispositivo político cultural que aspiró a incorporar y disolver los derechos humanos en la tradición nacional-populista" (2008: 38). De acuerdo con el autor, esta operación discursiva implicó no sólo la mencionada cooptación de los organismos sino también la deslegitimación del principio de "validez general" que los derechos humanos deberían tener respecto del orden político (40). Este tipo de argumento, usualmente utilizado como elemento de impugnación o desprestigio del accionar de las organizaciones y simultáneamente de la intervención estatal, descansa sobre la pretendida neutralidad y externalidad que se le atribuye a los "derechos humanos" respecto del sistema político, en un esquema de razonamiento de raigambre liberal. Una mirada menos normativa y situada indicaría, por el contrario, que el sentido de los derechos humanos no preexiste, en realidad, a las luchas políticas por imponer el significado de los mismos. Como señala Nicolás Guilhot (2011), a menudo los derechos humanos proporcionan un lenguaje común a partir del cual se pueden formular proyectos diversos e incluso antagónicos. Ello queda en evidencia si consideramos que también las organizaciones que defienden a militares procesados o condenados por delitos de lesa humanidad hacen uso de ese lenguaje para expresar sus demandas (Salvi, 2012ª). En este sentido, lo cierto es que la construcción que desde el conjunto de los organismos "históricos" se fue haciendo de los derechos humanos como un lenguaje que expresaba una protesta defensiva, anclada en un reclamo ético humanitario y articulada a un proceso de democratización en curso (Pereyra, 2005) no es la condición *sine qua non* de la existencia de un movimiento de derechos humanos en la Argentina, sino la forma específica que éste asumió durante la transición al régimen constitucional. Por esa razón, podría decirse que detrás de aquellas posiciones que argumentan en torno a la falta de "neutralidad" de los organismos, se expresa un rechazo más o menos implícito por las nuevas condiciones y sentidos bajo los cuales éstos se articularon con el sistema político pos-2001.[19]

[19] Para una crítica análoga a este argumento (basado en el supuesto carácter a-partidario del movimiento de derechos humanos) véase Torras en CELS, 2015.

Independientemente de ello, la tesis de la cooptación ha sido criticada por varios autores considerando un doble defecto. Por un lado, un sesgo excesivamente estratégico que sobredimensiona "la facultad de cálculo por parte del líder" (Chávez Solca, 2013: 112, citado en Natalucci, 2014) y por el otro (como consecuencia de ello) una interpretación que sobredetermina la racionalidad instrumental de las organizaciones que se incorporan al Estado en desmedro de otros elementos expresivos, simbólicos y de expectativas (Pérez y Natalucci, 2012). Dicho de otro modo, este tipo de explicaciones considera casi exclusivamente un tipo de racionalidad instrumental que no contempla ningún componente identitario, una cuestión que resulta clave a la hora de analizar la formulación de "políticas de memoria".

Teniendo en cuenta ambas críticas, otros estudios se propusieron indagar, desde la perspectiva de las organizaciones, los motivos, contextos, e interpretaciones que determinaron su cambio de posición respecto del gobierno. Desde una perspectiva vinculada a los procesos enmarcadores, Andriotti Romanin (2014) propone interpretar el acercamiento de la Asociación Madres de Plaza de Mayo al gobierno en función de la redefinición de los marcos de referencia y las claves interpretativas que signaron la acción colectiva de la organización en los años previos. Específicamente, el autor identifica un cambio en la evaluación de la etapa histórica y en la consideración del rol del Estado, que era anteriormente concebido como una continuidad o un garante de la impunidad. Según su lógica, en ambos casos el cambio debe ser comprendido no sólo como producto de la variación en la estructura de oportunidades políticas, sino a partir de la movilización de emociones que la figura de Néstor Kirchner generó entre las integrantes de la Asociación. En este sentido, Andriotti Romanin entiende que la apelación del kirchnerismo a la re-creación de un proyecto político de transformación social bajo el signo de los setentas constituyó un elemento significativo para la aceptación por parte de las Madres de la política gubernamental.

Por su parte, Barros y Morales (2017) proponen otra interpretación general del proceso (es decir, no anclada en ninguna organización) en términos de una "articulación" entre el kirchnerismo y el movimiento de derechos humanos. Según las autoras, esta articulación implicó sendas reconfiguraciones identitarias: en el caso de los organismos implicó una

inscripción del “peronismo histórico” en sus luchas e identidades (el cual había estado hasta entonces mayormente ausente); mientras que por contrapartida la “lucha por los derechos humanos” se habría convertido en una “dimensión constitutiva” del kirchnerismo.

A la hora de explicar las razones de esta articulación las autoras señalan: 1. Que el presidente electo se presentó a sí mismo como el nuevo garante de la lucha contra la impunidad, lo cual se tradujo en medidas concretas e inmediatas (como hemos visto); 2. Que la nueva centralidad que adquirió la temática provocó un cambio significativo respecto a la valoración y legitimidad de la lucha de los grupos de derechos humanos, razón por la cual “en el transcurso de un tiempo relativamente corto, las organizaciones pasaron de encontrarse en los márgenes del espacio sociopolítico a ocupar un lugar protagónico entre las voces de mayor visibilidad y legitimidad del campo democrático”; y por último 3. Que el “avance que impulsó el gobierno… vino acompañado de una participación inédita de los grupos de derechos humanos en las instancias de decisión e implementación de las políticas estatales relacionadas con la temática” (Barros y Morales, 2017: 124).

A diferencia del abordaje de Novaro, esta perspectiva tiene la virtud de reconocer el carácter histórico y contingente del lenguaje de los derechos humanos a partir del análisis de los procesos articulatorios. Sin embargo, en relación con la tesis de la cooptación, la interpretación presentaría un problema inverso: al tratar al movimiento de derechos humanos como un todo homogéneo (o mejor dicho, al proyectar la experiencia de las dos organizaciones de Madres de Capital Federal a todo el conjunto): i. concede una importancia nula a los componentes instrumentales que la alianza con las agencias estatales comportaba para los organismos y ii. Ignora la manera en que los modos de hacer específicamente estatales (y no solamente político-identitarios) transformaron sus respectivos repertorios de acción.[20] Al mismo tiempo, a nuestro juicio la interpretación sobredimensiona la voluntad del líder como productor de identificaciones políticas: aun si se reconoce el componente decisionista en el trazado de las alianzas gubernamentales (especialmente en

[20] Para una crítica en el mismo sentido y una discusión más amplia sobre la categoría de “movimiento social” aplicada a las organizaciones de derechos humanos en el país, véase Alonso, 2014.

el inicio de la gestión) este parece funcionar como el *a priori* del proceso articulatorio, transformando a su vez a las organizaciones en meras "receptores pasivos de discurso" (Andriotti Romanin, 2014). En todo caso, para nuestro problema de investigación resulta particularmente relevante identificar los modos concretos en que esa articulación tuvo lugar; es decir, de qué modo las agencias estatales incorporaron, metabolizaron y transformaron el discurso de los derechos humanos para formular "políticas de memoria" y al mismo tiempo indagar cuál fue la pregnancia que la señalada imbricación con el "peronismo histórico" pudo tener o no sobre este proceso.

Una última interpretación se encuentra en los trabajos ya citados de Alonso, quien retomó de manera más específica el análisis de la dinámica de la contienda política en los términos de Tilly, Tarrow y Mc Adam (1991). Este tipo de análisis se propone superar el paradigma clásico del proceso político e incorporar al mismo tiempo el estudio de la estructura de oportunidades políticas, las formas organizativas, los procesos enmarcadores y los repertorios de acción, con el objetivo de dar cuenta de un modo más dinámico de las interacciones entre los actores. En este sentido, Alonso identifica la apertura de una estructura de oportunidades políticas favorable para el movimiento de derechos humanos entre los años 2002 y 2003, que resulta complejizada si se toma como indicador el nivel de su integración simbólica. Según el autor, ésta "tuvo su punto de máxima unidad hacia 1977-1986 –aun con importantes fisuras a su interior– y se desplegó con un polimorfismo acentuado y tendencias variables hasta 2006-2010, momento para el cual ya debería pensarse si es posible mantener la noción de su identificación como tal" (2014: 75). En efecto, para Alonso, la mutación del rol del Estado en relación con el pasado reciente y las nuevas relaciones que el gobierno estableció con los organismos de derechos humanos deben ser comprendidas como productos de un proceso socio-histórico de "normalización e institucionalización de los reclamos": "normalización" en tanto intento de inscripción de esas demandas en la normalidad política, ajustándolas a reglas propias del Estado de Derecho e "institucionalización", porque supuso la canalización e incluso reorientación de las demandas por diversas agencias gubernamentales, "asumiendo modos de relación socio-política concretos y estables, garantizados por la estructura de la dominación estatal" (Alonso, 2009: 27).

En ese sentido, y a partir del análisis de las “políticas de memoria” llevadas adelante en la Provincia de Santa Fe, Alonso concluye que:

> La aceptación parcial por parte de algunas agencias estatales de las demandas del movimiento por los derechos humanos en la República Argentina es un buen ejemplo de la forma en la cual las estructuras de dominación incorporan sesgadamente aspectos desarrollados por las agencias de resistencia, desactivando su potencial de subversión del orden y de construcción social alternativa. Esto es, de cómo el reconocimiento puede suponer un debilitamiento (Alonso, 2009: 28).

Este tipo de abordaje constituye una advertencia importante a la hora de considerar la heterogeneidad del movimiento y su inscripción en los casos locales. Al mismo tiempo, se apoya sobre una conceptualización del sistema político algo diferente a la que hemos adoptado aquí en la medida en que recupera una dimensión del Estado como agente de dominación. Desde esta perspectiva es necesario hacer hincapié en los modos en las diferentes agencias estatales “capturan” y “normalizan” las demandas de las agencias de resistencia –en este caso los organismos de derechos humanos–, al mismo tiempo que en ocasiones las incorporan –especialmente en instituciones de nivel inferior y “muchas veces a contrapelo de las líneas políticas definidas desde los altos cargos de conducción” (Alonso, 2011: 64)–.

Si bien estaremos atentos a esta dinámica, a lo largo de este análisis nos centraremos en relevar las condiciones de producción y surgimiento de las agencias estatales que tomaron a su cargo las “políticas de memoria” dando cuenta del carácter histórico, social y discursivamente producido de aquello que llamamos “estatalidad”. En ese sentido, suspendemos el juicio respecto de la concepción del Estado como instrumento de dominación, para ver en cada caso de qué modo se expresan sus efectos y cuáles son efectivamente esas estrategias político discursivas que las agencias estatales que analizaremos aquí ponen en juego a la hora de producir sentidos sobre el pasado.

Este tipo de abordaje –centrado en las agencias estatales y sus agentes, y no en las organizaciones– encuentra como antecedentes otros trabajos que también se han ocupado de los procesos de institucionalización de las

memorias al interior de las estructuras burocrático administrativas del Estado y que constituyen las principales referencias de esta investigación.

Una primera perspectiva de índole más general sobre el fenómeno es la que ofrece Da Silva Catela (2014) a partir de la noción de "memorias en conflicto". De acuerdo con la autora el proceso al que nos referimos responde a una forma de "institucionalización de las memorias subterráneas", es decir, un proceso de encuadramiento de las memorias que antes eran minoritarias en el centro del Estado nacional. Según señala, las memorias que hasta principios de la década del 2000 eran sostenidas de modo casi exclusivo por los círculos de afectados y los organismos de derechos humanos, atraviesan desde la llegada a la presidencia de Kirchner, "un singular proceso de transformación que llevó a posicionarlas como memorias dominantes" (Da Silva Catela, 2011: 31). Se trata entonces de un proceso de "estatización de las memorias" que supuso no sólo una nueva centralidad del Estado en la gestión del pasado, sino también una pretensión de generar una política centralizada de memoria y una narración "oficial" de lo sucedido:

> A partir del inicio de este siglo, comenzó a gestarse una política estatal de la memoria que representaba principalmente a las víctimas del terrorismo de Estado. Esta política emanó del Estado nacional y de los gobiernos provinciales, y estuvo acompañada por el movimiento de derechos humanos, quienes le pusieron el sello y pasaron a "institucionalizar la memoria". Si el retorno de la democracia se caracterizó por la búsqueda de los rastros del horror –de los cuerpos de los desaparecidos en las fosas comunes– y por la demanda de juicio y castigo, las conmemoraciones por los 20 años del golpe se inauguraron con la producción de las "pequeñas memorias y sus marcas locales" (Da Silva Catela, 2006) enfrentadas a diversas políticas estatales de clara intencionalidad de borradura y olvido. Se puede decir que, a los 30 años del golpe, en el año 2006, se celebró un momento de "memorias monumentales" (Da Silva Catela, 2011) con la creación de instituciones como archivos, centros culturales, memoriales, sitios cuya característica general es que centran sus relatos sobre el terrorismo de Estado tomando como eje temporal la periodización consagrada 1976-1983. Así, las memorias que durante mucho tiempo fueron subterráneas pasaron a ser "oficiales", reconocidas y tomadas como ejes de políticas públicas. (Catela Da Silva, 2014: 31)

Esta perspectiva resulta especialmente útil para considerar de modo diacrónico las transformaciones introducidas durante los gobiernos de Néstor

Kirchner y Cristina Fernández a la hora de rememorar el pasado reciente, aunque al mismo tiempo, supone una noción cristalizada del Estado que entiende su intervención como “estática” y “centralizada”, en oposición a las memorias sociales.

En segundo lugar, desde una perspectiva más específica, el trabajo ya mencionado de Guglielmucci (2013) analiza el proceso al que nos referimos en términos de lo que denomina la “consagración pública de la memoria”. Desde un abordaje etnográfico, la autora da cuenta de cómo entre fines de la década del noventa y mediados de la década del 2000 la categoría “memoria sobre terrorismo de Estado” fue instituida como objeto de políticas públicas en la estructura administrativa del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, gracias a la incorporación de numerosos activistas del movimiento de derechos humanos como trabajadores estatales. En esa línea, Guglielmucci se diferencia de autores como Vezzetti (2009) indicando que la implementación de “políticas públicas de memoria” no se redujo ni un a uso político instrumental por parte del gobierno ni a la delegación de la responsabilidad de los representantes gubernamentales en las organizaciones de derechos humanos” (2013: 171) sino que se trató de un proceso complejo de articulación entre éstos últimos y el Estado municipal en el marco de lo que denomina una “gestión compartida” o “participación mixta” (2013: 131).

Esta perspectiva también es asumida por Cueto Rúa (2018) en una investigación que indaga en el proceso de inscripción de la Comisión Provincial por la Memoria de la Provincia de Buenos Aires (CPM) en el “campo de los derechos humanos y la memoria”. Según señala el autor, a diferencia de la noción de “movimiento social”, la categoría de “campo” de inspiración bourdiana (con sus respectivos elementos: perspectiva relacional, distribución desigual de capitales, identificación de una *illusio* común, etc.) le permite dar cuenta de la “porosidad” entre los organismos de derechos humanos y el Estado en la creación y el funcionamiento de la Comisión. Esta noción de “porosidad” resulta especialmente relevante en este caso (así como en las agencias que estudiaremos a lo largo de esta tesis) ya que si bien la CPM está integrada por un grupo de "notables", es decir, personas reconocidas socialmente por su trayectoria ligada a la defensa de los derechos humanos, al mismo tiempo, quienes dirigen las tareas cotidianas de la institución conforman

un equipo técnico de trabajadores que disputa con los primeros los sentidos dominantes acerca de qué debe ser recordado y cómo. En este sentido, la investigación de Cueto Rúa nos permite ver de qué manera se entrecruzan distintas trayectorias generacionales, militantes y profesionales y comprender, desde ese punto de vista, las características que signaron la práctica de memoria propuesta por la Comisión entre los años 1999 y 2009. De manera coincidente con el trabajo de Guglielmucci, Cueto Rúa identifica un conjunto de tensiones que también recuperaremos a lo largo de esta tesis y que dan cuenta de las diferentes concepciones que los propios actores tienen de la "militancia" y el "trabajo en el Estado" en el marco de su propio tarea así como de la disputa entre los "saberes profesionales" y "experienciales"; o para decirlo con Jelin (1995) las tensiones que supone la posición de "paradójico privilegio" que ocupan los "afectados directos" a la hora de definir los sentidos de la memoria.

Estas cuestiones son recuperadas también en otro conjunto de trabajos que se desarrollaron en los últimos años y que indagan, desde distintas aristas, diferentes iniciativas de gestión estatal de los sitios de memoria. Estas investigaciones se caracterizan por problematizar los sentidos que se despliegan en cada uno de los sitios así como el papel que les cabe a los diferentes actores en el armado y dirección de los mismos, incluyendo actores muy diversos: las organizaciones barriales, los profesionales que trabajan como conservacionistas, los organismos de derechos humanos y los vecinos (Garbero, 2019; Feld, 2017; Larralde Armas, 2017; D'Ottavio, 2016; Bertotti, 2016; Messina, 2010, 2013; Fabri, 2010; entre otros). Dentro de este grupo, una interpretación divergente de la sostenida por Guglielmucci refiere a las conclusiones extraídas por Vezzetti (2006; 2009) en su análisis del Parque de la Memoria y del Espacio para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos ex ESMA bajo las gestiones municipales de Aníbal Ibarra y Jorge Telerman en la ciudad de Buenos Aires. Según este autor, el proceso de creciente implicación de las agencias estatales en la producción de memorias no constituyó un proceso de "co-gestión" sino en realidad una "delegación" en los organismos de derechos humanos de la responsabilidad que originalmente le cabría al Estado en la formulación de "políticas de la memoria". Así, el autor afirma que el involucramiento de las agencias estatales en estas iniciativas no se tradujo en una intervención independiente ni en la apertura de instancias de

deliberación públicas que trascendieran el discurso de los afectados directos, sino que, por el contrario, se orientó a resolver las demandas históricas del movimiento de derechos humanos considerándolas de modo exclusivo.

En trabajos posteriores, el autor profundiza su crítica indicando, además, que la interpretación del pasado propuesta desde las instancias oficiales se caracterizó por una recuperación "mitológica" de la memoria de la violencia revolucionaria. Esta mitología habría configurado una versión idealizada de la experiencia "setentista" que soslayó el análisis de las responsabilidades guerrilleras e impidió con ello una "elaboración responsable y plural" del pasado (Vezzetti, 2009: 167; 2009ª).

Este tipo de crítica fue ampliamente compartida por otros autores que abonan la idea de que la evocación de la "militancia setentista" se caracterizó por un tono romántico, personalista (Sarlo, 2005) y estilizado (Altamirano, 2007) que eludió un debate necesario en torno a los métodos, los resultados históricos y los legados de aquella militancia. De acuerdo con Hilb, por ejemplo, ya desde antes del advenimiento del kirchnerismo (y con más fuerza luego de éste) la reivindicación de los ideales de la "militancia setentista" se tradujo en un relato simplista y maniqueo que "tiende a cristalizar en una lectura en términos de valores" e "identifica a los «buenos» y a los «malos» de nuestra historia" (2003: 102). Este tipo de lectura impidió, según la autora, considerar las responsabilidades de la izquierda en la imposición de regímenes autoritarios como la dictadura militar argentina y, en consecuencia, calibrar adecuadamente su participación en lo que denomina el "advenimiento del Mal" (Hilb, 2013).

De manera más reciente, también Carnovale ha señalado que durante los gobiernos kirchneristas se impuso un relato que alcanzó "la estatura de una suerte de memoria oficial" y que privilegió "la iconografía emotiva y sacralizada" de la militancia antes que afrontar la "complejidad y las condiciones de posibilidad de la tragedia vivida" (2015/2016: 8). Con ello la autora se refiere a la ausencia de críticas profundas en torno a las responsabilidades del "conglomerado revolucionario" en el desencadenamiento de la violencia así como a un análisis menos complaciente de sus principios ético-políticos, concepciones y prácticas.

Ambas cuestiones (la crítica a la "memoria de la militancia setentista" tal como habría sido propuesta por el kirchnerismo y la visión según la cual la intervención de las agencias estatales reprodujo sin más la voz de los "afectados directos") fueron arduamente debatidas. En relación con lo primero, Oberti y Pittaluga (2016) han indicado que la idea de que existió una "memoria oficial" compacta y monolítica o incluso una "manipulación" de la memoria social (como lo sugiere Vezzetti) no necesariamente se corresponde con la diversidad de relatos que emergieron en el espacio público. Así, según los autores:

> Incluso en la más acotada producción de narrativas sobre el pasado desde instituciones estatales (o mixtas), tampoco es posible reducir a una versión compacta y homogénea los diferentes abordajes de las problemáticas que ofrecen, por ejemplo, el discurso presidencial de Néstor Kirchner en la ex ESMA en 2004, las sentencias en los juicios de lesa humanidad, o los materiales editados y las actividades producidas por distintos programas del Ministerio de Educación de la Nación, el Museo de la Memoria (Rosario) o por la Comisión Provincial por la Memoria —la de la provincia de Buenos Aires o la de Córdoba. (Oberti y Pittaluga, 2016: en línea)

Desde esta perspectiva, si realmente se trata de considerar el papel del Estado durante los gobiernos kirchneristas, la hipótesis de una "memoria oficial homogénea" no atiende a la existencia de distintos poderes estatales que se han pronunciado de formas variadas al respecto, no sólo en las sentencias judiciales sino también en debates legislativos y en cursos de acción concretos. Del mismo modo, esa idea soslaya las diferencias existentes entre los distintos niveles, formas de gestión y escalas administrativas. Este señalamiento es clave para nuestro problema de investigación ya que aun si nos interesa encontrar significaciones, modos de hacer y claves narrativas compartidas (asociadas, como veremos, a determinados colectivos de identificación) nuestro análisis pretende no tomar al "Estado" como una entidad autónoma y uniforme. Así, uno de los objetivos de la tesis es dar cuenta de las diferentes políticas implementadas entendiéndolas como el resultado inestable de procesos de negociación de sentidos e institucionalización de prácticas entre distintos actores ("sociales" y "estatales") cuyas configuraciones narrativas o selecciones memoriales es preciso en cada caso desentrañar.

Por otra parte, en relación con los cuestionamientos que se han formulado respecto de la memoria de la "militancia setentista", resulta nuevamente útil preguntarse cuál es la referencia que toman los críticos como objeto de análisis. Como dicen Oberti y Pittaluga (2016), sin negar la existencia de relatos heroicizantes o de instancias conmemorativas autocomplacientes, la insistencia en el carácter acrítico de las memorias de la militancia revolucionaria parte de una lectura que parece sustancializar la experiencia de las organizaciones armadas y presentarla de manera homogénea. Ello contribuye a ignorar las diferencias internas entre las organizaciones así como otras formas de militancia no armada, dando como resultado un "conglomerado revolucionario" (Carnovale, 2015, 2016) en relación con el cual se reclama una autocrítica en el presente. Si bien no entraremos en ello, es interesante destacar que, como señala Starcenbaum (2013), esta operación intelectual es en alguna medida deudora de una determinada visión generacional influenciada por el "ochentismo", o para decirlo con Rabotnikoff (2009), una "memoria de la política" signada por la esperanza democrática y las evaluaciones que se hicieron de la militancia revolucionaria al calor de la transición.

Independientemente de este debate —que hemos reproducido muy sucintamente— a lo largo de la tesis nos interesa destacar otro aspecto, vinculado al modo en que la memoria de la "militancia setentista" funcionó y se transfiguró como un recurso simbólico potente para dotar de significación al trabajo en el Estado. Como veremos a partir del capítulo que sigue, al interior de las agencias estatales se configuró una noción "multitemporal" de militancia que se caracterizó por transferir el peso simbólico que portaba el recuerdo de los desaparecidos y sus compromisos políticos a un nuevo modo de habitar las agencias estatales que estuvo signado por el activismo. Desde esta perspectiva, la recurrencia a las memorias militantes expresa no tanto un "ajuste de cuentas" con una experiencia histórica concreta, sino una forma de anudar (imaginaria y simultáneamente) la causa de la "memoria y los derechos humanos" con el "proyecto político kirchnerista". Este anudamiento resultó clave en la configuración de una "comunidad de recuerdo" que, como veremos, está en el corazón de las líneas de acción que nos toca analizar.

Por otra parte, la idea según la cual la intervención de las agencias estatales reprodujo sin más la voz de los "afectados directos" (como señalaba Vezzetti) también ha sido cuestionada desde distintas perspectivas. Por un lado, los trabajos de Messina (2010, 2016) en torno al proceso de "recuperación" del ex Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio "Olimpo", muestran que existieron al interior del propio Programa diferentes posiciones en torno a cuáles debían ser las memorias que se recuperaran en el Espacio e incluso cuál debía ser el rol del Estado en el desarrollo y la gestión cotidiana del mismo. Según la autora, en el caso de la "política de la memoria" en el ex "Olimpo", "los actores sociales intervinientes trabajaron activamente para contrarrestar el hecho de que la voz legitimada para decidir sobre el relato y las modalidades de transmisión sea exclusivamente la de los organismos de derechos humanos" (2016: 121); lo cual se tradujo en la participación de distintas agrupaciones sociales en el ámbito de toma de decisiones (la Mesa de Trabajo y Consenso), así como en una serie de prácticas de cara a la comunidad barrial impulsadas por dicho ámbito, tales como: el proyecto Memorias de Vecindad, que supuso la realización de encuestas y entrevistas a habitantes del barrio; la creación de una biblioteca popular en el predio; entre otras (Mendizábal et Al., 2012, citado en Messina, 2016).

Por otro lado, la crítica según la cual la intervención del Estado fue equivalente al discurso de los organismos de derechos humanos (o dicho de otro modo, que su incorporación configuró una especie de "debilidad institucional", en la medida en que obturó el camino a otras voces) parte de un supuesto en alguna medida esencialista. Como muestran los estudios que toman la militancia como objeto sociológico, si bien la trayectoria personal resulta clave para comprender las actividades y sentidos que asume el compromiso individual, ello no implica que los actores reproduzcan de manera automática los mismos valores o compromisos a lo largo del tiempo. En efecto, como señala Fillieule (2015) comprender la militancia como una actividad social y dinámica implica dar cuenta de la transformación de las identidades y de los mecanismos sociales puestos en prácticas en estas transformaciones y desde una perspectiva sincrónica, de la pluralidad de los emplazamientos de inscripción de los actores sociales. Dicho de otro modo, un análisis serio de la implicación de los organismos en la gestión de "políticas de memoria" implica

no asignar un sentido *a priori* y unívoco a la posición de “afectado directo”, entendiendo que las identidades son susceptibles de modificarse tanto en función de las variaciones de la estructura social como de las posiciones sucesivas de los actores en esta estructura (Fillieule, 2015: 204). Por esa razón resulta más pertinente recurrir, como sugiere Messina, (2016) a la noción de “actores híbridos”, entendida como la convergencia en un mismo individuo de posiciones sociales diferenciadas. Siguiendo esta lógica, lo que encontramos (especialmente en el caso de aquellos militantes que se incorporaron a las agencias estatales u organismos de derechos humanos que participan de instancias de co-gestión) es la existencia de lugares de enunciación yuxtapuestos, cuya superposición se resuelve en un sentido o en otro a lo largo del desarrollo mismo de la política. De un modo análogo a la “porosidad” referida por Cueto Rúa, Messina se refiere así a la existencia de “fronteras difusas” o “espacio híbridos” en las cuales “política, militancia y gestión” resultan entremezclados. Desde esta lógica, el reclamo de una intervención “independiente”, “neutral” o “desinteresada” por parte del Estado, parte de suponer erróneamente la existencia de tal entidad en forma “pura” y de manera coincidente con ello, de comprender la formulación de “políticas públicas” como un proceso abstracto donde quienes intervienen lo hacen solamente en su calidad de “agentes estatales” o representantes del “bien común”.

En un sentido que cuestiona abiertamente esa perspectiva, veremos a lo largo de la tesis de qué modo se “contaminan”, se imbrican y se transforman en cada uno de los casos diferentes lógicas de intervención, junto con modalidades institucionales y narrativas específicas. Especialmente, como adelantamos, veremos cómo se anudan, a lo largo de todo el período, un modo de habitar las agencias estatales signado por el “compromiso militante”, una causa –entendida como la demanda por “memoria, verdad y justicia”– y una identidad política anclada en el kirchnerismo, con sus respectivos marcos de interpretación del pasado.

Capítulo 2: La política de "reparación" de legajos laborales: la tarea de la Comisión de Trabajo por la Reconstrucción de Nuestra Identidad

2.1. Introducción

En el contexto de la creciente implicación del Estado argentino en la producción de memorias de la represión y de la proliferación de iniciativas vinculadas al tratamiento del pasado reciente, en el año 2007 comenzó a dar sus primeros pasos la Comisión de Trabajo por la Reconstrucción de Nuestra Identidad. Formada en el ámbito de la Secretaría de Obras Públicas (SOP) del entonces Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación, esta Comisión desarrolló desde entonces diferentes iniciativas que se propusieron como objeto "reconstruir" la memoria de los trabajadores estatales que fueron desaparecidos o asesinados durante la dictadura militar (1976-1983).[21] Más específicamente, a partir del Decreto n° 1199 del año 2012 la Comisión tuvo a su cargo el relevamiento de los empleados del Estado nacional que fueron víctimas de desaparición forzada o asesinato y la "reparación" documental de sus legajos laborales.

En este capítulo, nos proponemos describir la génesis y el desarrollo de esta Comisión dando cuenta de las características que asumió su proceso de institucionalización desde la SOP hasta su constitución como una política reparatoria válida para toda la Administración Pública Nacional. Específicamente, nos proponemos dar cuenta del papel jugado por los distintos actores en el desarrollo de la iniciativa, incluyendo los trabajadores estatales, los funcionarios, los organismos de derechos humanos y los familiares de las víctimas. Asimismo veremos de qué manera la Comisión fue dotando de sentido su práctica de memoria a partir del análisis de dos figuras novedosas: por un lado la del "trabajador estatal desaparecido" como víctima del terrorismo de Estado y, por otro, la periodización "1955-1983" que fue incluida en el Decreto n° 1199 como eje narrativo. Ambos análisis nos permitirán comprender

[21] Como veremos esta periodización fue ampliada por el Decreto n°1199 según un lapso que va desde el 16 de junio de 1955 al 9 de diciembre de 1983.

algunas de las condiciones político-institucionales que signaron la puesta en marcha de “políticas de memoria” durante los gobiernos kirchneristas, así como empezar a trazar algunos puntos nodales que caracterizaron su apuesta narrativa.

A lo largo del capítulo, trabajaremos con entrevistas en profundidad realizadas a los miembros de la Comisión así como con la documentación producida por ella a lo largo del tiempo. Teniendo en cuenta la ausencia de trabajos en torno a esta política, las entrevistas fueron indispensables para recoger información fáctica y, especialmente, para dar cuenta de los modos de auto-representación de los entrevistados en relación con la propia tarea. Incorporaremos también el análisis de la normativa oficial que reguló las tareas de la Comisión y un relevamiento de prensa gráfica en torno a la política de reparación de legajos para el período 2007-2015.

2.2. El proceso de institucionalización de la Comisión

La existencia formal de la Comisión de Trabajo por la Reconstrucción de Nuestra Identidad se remonta a la firma de un Acuerdo de Colaboración entre la SOP y el Archivo Nacional de la Memoria (ANM) que, como ya indicamos, había sido creado en 2003 como un organismo descentralizado en el ámbito de la Secretaría de Derechos Humanos. Desde el inicio, la Comisión estuvo formada por un conjunto de empleados públicos y tenía como objeto “reconstruir” la memoria de los trabajadores estatales que fueron desaparecidos o asesinados y específicamente “reparar” sus legajos laborales. Esta “reparación” hacía referencia a la necesidad de corregir la información falsa que durante la dictadura militar se había hecho constar en relación con el destino de los trabajadores y el cese de la relación laboral. Según constataron los miembros de la Comisión, el procedimiento más extendido consistía en dar de baja al trabajador o la trabajadora secuestrados por el terrorismo de Estado alegando “abandono de tareas”. Luego de enviar a los trabajadores diferentes intimaciones a presentarse, las autoridades procedían a dejar “cesante”, “limitar servicios” o despedir con “causa justa” aduciendo el incumplimiento con las condiciones de asistencia. Este procedimiento se realizaba aun cuando en numerosos casos los familiares acudían a explicar la causa de la ausencia, lo

cual a su vez quedaba registrado en el legajo laboral en la forma de cartas, copias de pedidos de *hábeas corpus*, notas internas, etc. En otros casos, el despido se producía como forma de persecución previa al secuestro y la desaparición, en un contexto general de marcado disciplinamiento de los trabajadores estatales (Iramain, 2015). Por último, en algunos casos la Comisión encontró que la baja fue dada el mismo día o al día siguiente de que se hubiera producido el secuestro, en un gesto que constituía evidencia flagrante de la complicidad o connivencia con el accionar represivo.

Esta modalidad reiterada de operar por parte de los organismos del Estado fue una de las razones por las cuales los integrantes de la Comisión se propusieron buscar una herramienta que permitiera relevar y corregir los legajos de personas desaparecidas no sólo en la órbita del Ministerio de Planificación a la que pertenecían sino de toda la Administración Pública Nacional (APN).[22] Por eso desde fines de 2009 comenzaron a trabajar en la propuesta de lo que sería el Decreto n° 1199 que, como adelantamos, se promulgaría en julio del año 2012. A lo largo de esos años, la Comisión se encargó de "empujar" el proyecto (según sus propios miembros eran ellos los encargados de movilizar el expediente que constaba de doce mil novecientas fojas) y conseguir apoyos tanto legislativos como de los organismos de derechos humanos para que el decreto atravesara todo el circuito intragubernamental hasta llegar a la Presidencia. Así en noviembre de 2011 la Cámara de Diputados de la Nación declaró su aprobación a la tarea de la Comisión a partir de un proyecto presentado por un diputado oficialista y en el mismo mes lo hizo el Senado de la Nación.[23]

La promulgación del decreto en julio de 2012 y especialmente su reglamentación en diciembre de ese mismo año permitió la consolidación del equipo de trabajo de la Comisión así como la creciente visibilización de sus tareas al interior de la APN. El decreto mencionado preveía incluir en cada uno

[22] Un antecedente de esta tarea es la campaña de rectificación de los legajos de conscriptos desaparecidos llevada adelante en el año 2009 bajo la gestión de Nilda Garré como Ministra de Defensa. Esta política preveía la inclusión en los registros de las Fuerzas Armadas de la condición de detenidos – desaparecidos de aquellos soldados que fueron secuestrados durante la conscripción obligatoria y fueron declarados "desertores" por la dictadura militar. Véase Resolución n°420, Ministerio de Defensa, 7 de mayo de 2009. Para un análisis comparativo de ambas iniciativas véase Balé, 2018.

[23] Declaración de Adhesión del Senado de la Nación, 1 de noviembre de 2011 (Exp. S n°2615/11).

de los legajos una inscripción que indicara la verdadera causa del cese laboral, es decir "la desaparición forzada o asesinato [según corresponda] como consecuencia del accionar del terrorismo de Estado",[24] con el objeto de producir así una "enmienda material de esos documentos públicos y una reparación simbólica para los familiares y compañeros de las víctimas".[25]

En marzo de 2013, a pocos días de celebrarse un nuevo aniversario del golpe de Estado, la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner se refirió públicamente a la iniciativa de reparación de legajos en la inauguración del Espacio para la Memoria en el ex Centro Clandestino de Detención Mansión Seré.[26] Más adelante, en julio de 2013 la Comisión organizó junto a la Jefatura de Gabinete de Ministros una jornada explicativa del decreto a la que fueron convocadas las áreas de Recursos Humanos de la mayor parte de los organismos de la APN, con el objetivo de dar a conocer los pasos a seguir en la implementación de la normativa y sensibilizar a cada una de estas áreas en la búsqueda de los legajos laborales en sus archivos y su posterior entrega a las familias.

En diciembre de 2013 se produjo así el primer "acto homenaje"[27] de la Comisión en la empresa estatal Aerolíneas Argentinas. Allí se entregaron los "legajos reparados" de cuatro trabajadores desaparecidos que se desempeñaban en la aerolínea. En 2014 se llevaron a cabo otros nueve actos en diferentes organismos, de los cuales tres contaron con la participación de ministros. Al año siguiente el total de actos realizados ascendió a quince, con nueve participaciones de ministros y la presencia frecuente del Secretario de Derechos Humanos de la Nación. Los ministros o directores que participaron son habitualmente reconocidos como parte del "núcleo duro" del kirchnerismo: Axel Kiciloff (Economía) y Carlos Tomada (Trabajo) que participaron en dos ocasiones, Agustín Rossi (Defensa), Alicia Kirchner (Desarrollo social), Daniel Gollan (Salud), Alberto Sileoni (Educación), Déborah Giorgi (Industria) y

[24] Tal era la leyenda que se incluía en las resoluciones conjuntas emitidas por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y la Secretaría de Coordinación Administrativa de la Jefatura de Gabinete de Ministros.
[25] Decreto n°1199, 19 de julio 2012 (*Boletín Oficial*, 20 de julio 2012)
[26] Véase "Acto de inauguración del Espacio Mansión Seré: Palabras de la Presidenta de la Nación" Disponible en: https://www.cfkargentina.com/cristina-inauguro-el-espacio-mansion-sere/ (Fecha de consulta 17 de febrero de 2018)
[27] Ponemos la expresión entre comillas ya que designa el modo en que los integrantes de la Comisión se referían a los actos conmemorativos.

Mariano Recade (Aerolíneas Argentinas). Si bien los apoyos a la tarea de relevamiento y reparación de los legajos no fueron homogéneos y en algunos casos estuvieron sujetos a grandes demoras, para fines de 2015 la Comisión llevaba realizados veinticinco actos conmemorativos, había relevado más de trescientos casos de empleados/as de la APN que resultaron víctimas de asesinato o desaparición forzada y había "reparado" ciento cincuenta y dos legajos.[28]

Ahora bien, el proceso de relevamiento, reparación y entrega de los legajos laborales no supuso un trámite administrativo "normal" dentro de la estructura estatal sino que se trató de un proceso complejo donde intervinieron una multiplicidad de actores sociales (funcionarios, organismos de derechos humanos, familiares, sindicatos, empleados actuales de la administración pública, etc.) que fueron dotando de sentido a la práctica de memoria propuesta por la Comisión. Dicha práctica se caracterizó por la construcción de una narrativa centrada en el trabajador estatal como víctima del terrorismo de Estado, según un período que abarcaba desde 1955 a 1983. Esta configuración resultaba novedosa en el régimen de memoria conformado en Argentina sobre la última dictadura militar, si tenemos en cuenta por un lado la periodización canónica 1976-1983. Por otro lado, lo cierto es que a excepción de la tarea de la Asociación de Trabajadores del Estado (cuyas secretarías de derechos humanos habían encabezado homenajes a trabajadores estatales desaparecidos de manera previa al trabajo de la Comisión)[29], desde la narrativa oficial instalada a partir del Informe Final de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP), los desaparecidos eran clasificados de un modo difuso según categorías ocupacionales (que incluían a "obreros" y "empleados"), ocupaciones concretas (como "docentes" o "periodistas" o

[28] Los organismos, reparticiones y empresas donde se realizaron actos conmemorativos de entrega de legajos laborales fueron: Ministerio de Salud, Ministerio de Desarrollo social, Ministerio de Economía, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Instituto Nacional de Tecnología Industrial, Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, Instituto de Ayuda Financiera para el Pago de Retiros y Pensiones Militares, Comisión Nacional de Energía Atómica, Administración Federal de Ingresos Públicos, Administración General de Puertos, Administración Nacional de Seguridad Social, Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento, Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria, Casa de Moneda Argentina, Dirección Nacional de Vialidad, Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, Hospital Nacional «Profesor Alejandro Posadas» y las empresas Aerolíneas Argentinas y Yacimientos Petrolíferos Fiscales.

[29] Para un análisis de las diferencias entre ambos emprendimientos de memoria véase Balé, 2018.

“abogados”) e incluso calificaciones ocupacionales, pero en ningún caso incluían como categoría independiente a los trabajadores de la Administración Pública Nacional (Crenzel, 2008). En ese sentido la construcción *ex post facto* de la categoría plantea algunos interrogantes que nos remiten a los procesos de selección y elaboración del pasado, así como a las condiciones institucionales que hicieron posible el crecimiento de la Comisión desde una iniciativa reducida a la Secretaría de Obras Públicas hasta transformarse en una política reparatoria con alcance nacional: ¿cómo explicar este crecimiento? ¿Cuáles son las razones de la receptividad que esta práctica de memoria alcanzó en los diferentes espacios institucionales a lo largo de los dos últimos gobiernos kirchneristas?

De acuerdo con nuestra hipótesis este proceso puede explicarse a partir de tres condiciones confluyentes que analizaremos a continuación: lo que llamaremos una “triple clave identitaria” según la cual la Comisión abrió su composición para incluir no sólo a empleados actuales de la APN sino también a ex empleados e hijos de desaparecidos u asesinados; el papel jugado por los “militantes” o “emprendedores” de la memoria” en el desarrollo y sostenimiento de la iniciativa y por último, la conformación de una “comunidad de recuerdo” en el marco del conjunto de transformaciones impulsadas por los gobiernos kirchneristas tanto en la rememoración del pasado reciente como en los modos de habitar y concebir el espacio estatal.

En relación con lo primero, se debe tener en cuenta que a lo largo del tiempo la Comisión recurrió a un conjunto de identificaciones no necesariamente correlativas a su lugar institucional, esto es, su pertenencia orgánica a la Secretaría de Obras Públicas de la Nación. En efecto, para el año 2012, la Comisión estaba formada por un “núcleo duro” que constaba de cinco integrantes empleados de la Secretaría, un conjunto de voluntarios o adherentes entre los cuales había hijos e hijas de empleados desaparecidos y ex empleados públicos que habían sido víctimas de la represión estatal y habían sobrevivido a sus secuestros en centros clandestinos de detención.

Los vínculos con familiares desaparecidos o asesinados que se desempeñaban en el ex–Ministerio de Obras Públicas se establecieron por vías diversas: por un lado, la Comisión comenzó a contactarse con los familiares una vez que lograba —junto a la dirección de recursos humanos o la oficina de

personal de la repartición correspondiente— hallar el legajo del trabajador o la trabajadora desaparecida, con el objetivo de entregarles una copia. Otros familiares se acercaron a la Comisión por haber visto la fotografía o los datos de sus seres queridos en una revista de difusión que se repartía en el Espacio Ex ESMA (donde se encuentra la sede del Archivo Nacional de la Memoria), en dependencias del Ministerio o en actividades de la Secretaría de Derechos Humanos. De hecho, fue de este modo que algunos de sus integrantes hicieron su primer contacto con la Comisión para luego colaborar o incorporarse a ella de manera permanente.

Este proceso de ampliación puede observarse claramente en una recorrida por los materiales producidos por la propia Comisión. En los inicios ésta se identificaba como compuesta de "compañeros trabajadores de las distintas áreas del Ministerio de Planificación Federal, Inversión pública y Servicios"[30], mientras que en un folleto breve de circulación más amplia, producido en algún momento posterior a julio de 2012, la composición varía notablemente:

> La comisión está conformada por empleados públicos nacionales, hijos de los compañeros detenidos – desaparecidos y ex empleados que fueron dejados cesantes o jubilados de la administración pública nacional movilizados por el Proyecto Nacional y Popular de Néstor y Cristina Fernández de Kirchner y que asumimos el compromiso de rescatar del olvido a todos los empleados públicos nacionales que fueron asesinados por la Dictadura Militar. (Folleto pequeño s/f)

Los integrantes de la Comisión se definen como empleados no sólo del Ministerio de Planificación sino de toda la APN, pero también como ex-empleados perseguidos por la dictadura militar, y, por último, como hijos de los "compañeros detenidos desaparecidos". Además, se introduce otro rasgo definitorio vinculado con la inscripción de la Comisión al "proyecto político kirchnerista", según el cual la convocatoria está signada por la adscripción al "Proyecto Nacional y Popular de Néstor y Cristina Fernández de Kirchner" (cuestión que retomaremos abajo).

[30] Comisión de Trabajo por la Reconstrucción de Nuestra Identidad. (s/f). *Construyendo Memoria.* Buenos Aires: Secretaría de la Gestión Pública, Jefatura de gabinete de Ministros, Archivo Nacional de la Memoria y Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Planificación Federal, Inversión pública y Servicios.

Esta ampliación en los rasgos definitorios de los integrantes de la Comisión se pone de manifiesto también en la prensa gráfica. En efecto, si tomamos las notas periodísticas publicadas entre mayo de 2011 y diciembre de 2013 (en total diez), seis de ellas definen a sus integrantes como "trabajadores de la Secretaría de Obras Públicas de la Nación", dos la definen como agrupación de "ex empleados estatales" o hacen hincapié en este aspecto y por último, otras dos definen a sus integrantes como hijos de trabajadores estatales desaparecidos o hacen énfasis en este aspecto. Dicho de otro modo, en las diferentes notas periodísticas referidas a la Comisión la misma se presenta alternativamente como compuesta de trabajadores actuales de la SOP, ex empleados de la APN sobrevivientes a la dictadura, esto es, que pasaron por centros clandestinos de detención e hijos de desaparecidos.[31]

Sin embargo si nos guiamos por lo establecido a través de los documentos oficiales la composición de la Comisión debía tener un carácter mucho más restringido, ya que sus integrantes debían ser efectivamente empleados de la APN. En efecto, en el Acuerdo de Colaboración que sancionó por primera vez las tareas de relevamiento de la Comisión se establecía la creación de una "coordinación mixta" que estaría integrada por un representante de la SOP y otro del Archivo Nacional de la Memoria designados por la máxima autoridad de cada organismo. De acuerdo con nuestra hipótesis, el hecho de que la composición se haya ampliado para incluir a ex empleados que sobrevivieron a la represión y a hijos de trabajadores desaparecidos, sugiere un trabajo de articulación con otros actores sociales en el marco del cual el reparto de funciones propio de la burocracia estatal tal como se expresaba en el documento oficial no portaba demasiada significación *a priori.* De hecho hasta donde pudimos relevar, los primeros integrantes de la Comisión no se habían desempeñado antes dentro del ámbito de los derechos humanos ni tampoco contaban con experiencia en la función pública. En ese contexto, y teniendo en cuenta el lugar predominante que el campo de los derechos humanos otorga a los "afectados directos" en Argentina (Jelin, 2010; Vecchioli, 2005) la inscripción de la Comisión como formada por ex empleados

[31] Véase Corso, P. (12 de abril de 2012); Fuertes, G., (21 de julio de 2012); Fuertes, G. (5 de noviembre de 2011); Arcomano, R. (24 de diciembre de 2011); Veiga, G. (22 de agosto de 2011).

“sobrevivientes” y a la vez como “hijos de desaparecidos”, reportaba mayor legitimidad social que si se tratara solamente de empleados actuales del Ministerio o de la Secretaría. En efecto, como señala Jelin ya desde la transición democrática “la propia noción de “verdad” y la legitimidad de la palabra (o si queremos ser más extremos, la “propiedad” del tema) llegaron a estar encarnadas en la experiencia personal y en los vínculos genéticos” (Jelin, 2010: 227) de un modo que daba una preeminencia “paradójica” a la posición de víctima como aquella capaz de reclamar al Estado por un daño particular y al mismo tiempo, representar la voluntad de justicia del pueblo (Jelin, 1995: 122). Dicho de otro modo, por medio de esta triple inscripción identitaria (empleados actuales, ex empleados, hijos) la Comisión se constituyó como un actor legítimo para actuar en el ámbito de la memoria a partir de la inclusión de las víctimas directas así como de lo que se ha denominado el “relato de la sangre”.

A su vez esto nos lleva a considerar que los vínculos con otros actores sociales que no formaban parte de la estructura del Estado han sido tan relevantes para la conformación de la Comisión como los recursos provenientes de esta última. En efecto, como parte del proceso de afianzamiento institucional la Comisión construyó lazos con algunos de los organismos históricos de derechos humanos afines al gobierno nacional, especialmente Abuelas de Plaza de Mayo (con quien la Comisión firmó un convenio de colaboración en julio de 2015), Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas y de manera más informal con distintas filiales de HIJOS. Estos contactos incluyeron el intercambio de datos, la participación mutua en actos, actividades, etc., e incluso un apoyo explícito a la promulgación del Decreto n° 1199 por parte de algunos organismos. En ese sentido, puede decirse que así como la promulgación de normativa fue un factor clave para la estabilización de la Comisión, su inscripción como agente de memoria y su creciente institucionalización en la estructura del Estado estuvo íntimamente ligada a su identificación con otros actores sociales ya legitimados en su carácter de afectados directos así como a la inclusión, a lo largo del proceso, de otras legitimidades no provenientes del aparato estatal y la movilización de sus adhesiones.

Este señalamiento puede ser leído, a su vez, en términos de una creciente "porosidad" (Cueto Rúa, 2016) entre los organismos de derechos humanos y las diferentes agencias estatales. Si bien ello no estuvo ausente en gobiernos anteriores, los intercambios se materializaron con mayor intensidad durante los gobiernos kirchneristas de un modo que, como hemos visto en el capítulo uno, operó como parteaguas al interior del movimiento y por el otro, implicó importantes transformaciones en las maneras de concebir el trabajo al interior de las agencias estatales.

En ese sentido, y como hemos adelantado, a diferencia de otros estudios que han caracterizado la relación entre el movimiento de derechos humanos y los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández en términos de cooptación, la noción de "porosidad" aspira a poner de manifiesto las zonas de confluencia entre los diferentes actores, sin suponer una partición binaria del espacio social donde "Estado" y "sociedad" constituirían objetos autónomos y separados. Así, en el caso de la Comisión de Trabajo por la Reconstrucción de Nuestra Identidad, la "porosidad" se verifica en el intercambio de saberes y modalidades de acción (por ejemplo, en lo que se refiere a la identificación de personas desaparecidas), en el refuerzo mutuo de las propias legitimidades a la hora de intervenir públicamente en la conformación de un relato memorial sobre el pasado y en la importancia de la figura de los "militantes de la memoria" en el sostenimiento de la iniciativa. Ello implica, a su vez, que lejos de realizarse en el vacío, la progresiva construcción de la política de reparación de legajos laborales se conformó sobre la base de los repertorios de acción y las claves interpretativas tejidas por el movimiento de derechos humanos en décadas anteriores.

2.3. "Emprendedores" y "militantes" de la memoria

A la hora de dar cuenta de quiénes son los actores que efectivamente llevan adelante los procesos de encuadramiento de la memoria, la literatura especializada suele referirse a los denominados "emprendedores" (Jelin, 2002) o "militantes de la memoria" (Rousso, 2000; Pollak, 2006) entendidos como aquellos actores que dedican sus energías personales a hacer un "uso político y público" del pasado (Jelin, 2002: 48). De acuerdo con Jelin el "emprendedor

de la memoria" se caracteriza por involucrarse personalmente con su proyecto y a la vez comprometer a otros, generando participación y una tarea organizada de carácter colectivo (50).

Ambos conceptos resultan útiles para describir el trabajo de la Comisión en la medida en que ésta se sostenía en gran parte sobre el compromiso de un conjunto de actores movilizados. De hecho, como adelantamos, la Comisión comenzó a conformarse por iniciativa de Joaquín[32], uno de los empleados del área de "Personal" de la Secretaría de Obras Públicas (SOP) que había ingresado como pasante a inicios del gobierno de Kirchner y participaba a su vez de una agrupación denominada "Juventud Obras Públicas" formada en el marco de la Secretaría. Según señala Vázquez (2014) en una investigación que explora algunas de las propiedades del activismo durante el kirchnerismo (más precisamente, las relaciones que se construyen entre el "compromiso militante" y el trabajo en el Estado), los orígenes de este colectivo se encuentran en la agrupación estudiantil universitaria "La Vallese" de orientación peronista. Algunos de sus miembros, a quienes Vázquez entrevista, reconocen su ingreso al Ministerio de Planificación durante los gobiernos kirchneristas específicamente en calidad de "militantes". Del mismo modo, según el relato de Joaquín (luego coordinador de la Comisión) fue su propia convicción o "militancia" lo que lo condujo a indagar acerca de lo ocurrido en esa dependencia durante la dictadura militar y la posible existencia de trabajadores desaparecidos.[33] Con ese propósito se acercó al entonces Secretario Ejecutivo del Archivo Nacional de la Memoria (ANM), Carlos Lafforgue, quien le dio impulso a la iniciativa habilitando la búsqueda de datos y los pedidos de legajos laborales a las diferentes áreas.

Como dijimos arriba, esta búsqueda se oficializó por primera vez a partir de la firma del referido Acuerdo de Colaboración entre la SOP y el Archivo Nacional de la Memoria el 22 de Marzo de 2007.[34] Según se establecía en el acuerdo, el objeto del mismo era el relevamiento de los casos del personal del

[32] En el caso de los integrantes de la Comisión se preservan sus identidades por razones de confidencialidad. En el caso de los funcionarios públicos, figuran con sus nombres y apellidos completos.
[33] Entrevista con Joaquín, Coordinador de la Comisión de Trabajo por la Reconstrucción de Nuestra Identidad, 10 de agosto de 2015.
[34]Acuerdo de Colaboración. Anexo en la Resolución n°1486, Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, 18 de diciembre de 2008.

entonces Ministerio de Obras Públicas y Servicios que fueron víctimas de desaparición forzada durante la dictadura militar (1976-1983), para lo cual las partes acordaron la referida creación de una “coordinación mixta”. A su vez se estableció que la labor debía ser desarrollada en el “mayor espíritu de colaboración”, ya que la suscripción del acuerdo no contemplaba presupuesto para ninguna de las partes. Aun cuando la designación de los representantes no se realizó como estaba previsto, esta doble inscripción institucional (es decir, por un lado la SOP y por otro el ANM) constituyó uno de los rasgos característicos de la Comisión. Gracias a ello, comenzó a contar con un espacio de trabajo en el Archivo, lo cual le permitió acceder de modo más directo a la base de datos que obraba allí, ampliar la conformación de su equipo y sus redes de contacto, así como inscribirse institucionalmente en el ámbito de los “derechos humanos”.

En ese marco, durante los años previos a la salida del decreto presidencial —que habilitaría oficialmente sus tareas para toda la administración pública— la Comisión desarrolló diferentes iniciativas de memoria entre las que se destacan las visitas guiadas al Espacio Memoria y Derechos Humanos de la Ex ESMA para trabajadores estatales. Estas visitas se integraron más tarde a los denominados “Ciclos de formación en Derechos Humanos para la Administración Pública”, que también eran organizados por la Comisión en conjunto con algunos sindicatos afines.

La proliferación de iniciativas de memoria desvinculadas de la función propia de la Secretaría de Obras Públicas, así como la búsqueda autónoma de los recursos institucionales para concretarlas, resultan contrapuntos útiles para relativizar el nivel de institucionalización alcanzado por la Comisión (y en ese sentido, diferenciarlo de otros proyectos de gestión pública) pero además, como decíamos, para dar cuenta del papel jugado por la convicción y el compromiso personal de sus miembros con la causa de la memoria. El “deber de memoria” (Levi, 1995; Rousso, 2000) entendido como la deuda o el imperativo de recordar a los “compañeros” desaparecidos y “buscar sus historias”, funcionó como el motor a partir del cual la Comisión logró dar estado público a su iniciativa de memoria y comprometer en ella a otros actores. Así “acordarse de los que no están” era una de las consignas a partir de las cuales

se definía la propia tarea.[35] Siguiendo esta línea el concepto de "emprendedores" o "militantes" nos permite enfatizar el papel jugado por los actores y sus motivaciones personales en la producción de memorias al interior del Estado nacional de manera relativamente independiente de la estructura originariamente burocrática en la que estaban insertos.

Sin embargo, el uso de la noción de "emprendedores" —originalmente acuñada para referirse a iniciativas organizadas desde la sociedad civil— plantea importantes reservas. Por un lado, como anota la propia Jelin, el peso semántico de la noción de "emprendimiento" la vincula con el universo empresarial y por ende, la asocia con el lucro económico privado. Por otro, dejando de lado esta asociación semántica, se plantea un obstáculo vinculado al hecho de que la descripción de los "emprendedores de la memoria" refiere a un repertorio de acciones más afín a la lógica del movimiento social antes que a la gestión pública. Como señala Lifschitz, "el *habitus* de los agentes de memoria no se construyó dentro de la normatividad del Estado sino más bien contra esa normatividad. El permanecer en una demanda ética y jurídica que responsabiliza al Estado y a su vez estar fuera de la lógica del campo político, marca una de las principales singularidades de estos agentes" (2012: 52). En ese sentido, la noción se ajusta poco al entorno político, administrativo y burocrático en el que se desempeñaban los integrantes de la Comisión, así como a la intención de reivindicar por medio de la propia práctica de memoria su condición de trabajadores estatales.

A su vez, debe decirse que el proceso de institucionalización al interior del Estado nacional sugiere que a lo largo del tiempo la iniciativa logró cierta autonomía respecto de los propios actores (es decir, excedió su carácter de "emprendimiento") en la medida en que la recuperación de los legajos laborales se convirtió en una política de reparación documental regulada para toda la Administración Pública Nacional. En ese sentido, la promulgación de normativa así como la inscripción de la Comisión al interior del Estado y la movilización de

[35] En este sentido señalaba una de las integrantes de la Comisión: "Porque acá lo importante es que son los compañeros. Es recuperar la memoria de los compañeros. No hay otra cosa que sea más importante. Eso nos supera a todos nosotros" (Entrevista con Mabel, integrante de la Comisión de Trabajo por la Reconstrucción de Nuestra Identidad, 7 de septiembre de 2015)

sus estructuras, la diferencian de un “emprendimientos de memoria” llevado adelante por la sociedad civil.

Esta tensión entre lo que podríamos llamar la marca de origen de la Comisión (vinculada fuertemente al compromiso personal) y la gestión de una política pública se reflejó especialmente en las representaciones que los miembros sostenían respecto de la división de tareas al interior de la misma. Así, el coordinador de la Comisión refería:

> Cada uno tiene un rol, Carolina habla con los familiares, Mariana se encarga de la articulación institucional con respecto al decreto y los actos de reparación. Oscar se encarga del despacho y la mesa de entradas de nuestras notas, Enrique, Pablo y Mabel se encargan de la investigación, pongámosle así, del área de investigación, por eso están en el ANM, y yo coordino a todos. Esa sería como la estructura interna […] No está todo mezclado. No todos hacen todo. Eso no es bueno. Porque uno tiene que tender a la profesionalidad en cada función, a la institucionalización y una política de Estado tiene que tender a la profesionalidad. También tiene que ver con eso. No somos todos haciendo todo por voluntarismo. (Entrevista con Joaquín, coordinador de la Comisión, 10 de agosto de 2015)

Esta organización interna fue ratificada en diferentes oportunidades. La referencia a la “profesionalidad” y la “institucionalización” como objetivos a alcanzar aparecen como una forma de trazar una línea divisoria respecto del “voluntarismo” indicando que la tarea de la Comisión no era el producto de la espontaneidad de sus integrantes sino que debía comprenderse como una “política de Estado”.[36]

Sin embargo, aun si es cierto que la Comisión atravesó un creciente proceso de institucionalización, ello no implica que sus tareas puedan describirse *in toto* como parte del desarrollo de una política pública, o para decirlo a la inversa, que su crecimiento no estuviera permeado por lógicas estratégicas afines a las de los movimientos sociales. En efecto, aun cuando el proyecto de reparación fue dotado de una normativa específica y se estableció para su aplicación un circuito de gestión intragubernamental, la posición de la Comisión respecto del organigrama de la estructura del Estado no dejó de tener un carácter ambivalente que se basaba en su carácter *sui generis* dentro

[36] En rigor, también la caracterización de Jelin en torno a los “emprendimientos de memoria” destacaba la organización y división del trabajo al interior de sus integrantes.

del Ministerio de Planificación. En efecto, como producto de su posición, la Comisión se veía habilitada a solicitar información a cada una de las dependencias (especialmente los legajos laborales) sin estar orgánica o jerárquicamente por encima de ellas. Dicho de otro modo, aunque la Comisión estaba formada por trabajadores del área de Personal de la SOP del Ministerio de Planificación y no tenía injerencia alguna en otras áreas, a través del apoyo de la Secretaría del ANM y la ratificación de sus tareas por parte del decreto, debía acceder a documentación que excedía su inscripción orgánica institucional.[37]

Para sus miembros esta condición ambivalente funcionó como una ventaja o una desventaja según el caso. Por un lado esta exterioridad respecto del organigrama fue percibida como un espacio de autonomía que permitió a sus miembros articular diversas redes de contacto y movilizar adhesiones sin la rigidez que suponen los canales burocráticos "normales" (por ejemplo, a través de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, con la cual las relaciones no estuvieron exentas de rispideces). Por otro lado, este carácter de exterioridad determinó que la concreción de las reparaciones de los actos conmemorativos excediera el dominio de la Comisión para estar sujeta a la voluntad política de las diferentes autoridades de cada uno de los organismos. En este sentido, es destacable que un factor decisivo en la concreción de los actos estuvo vinculado con la visibilidad que los mismos fueron alcanzando al interior del Estado nacional. De hecho, durante los primeros años luego de la salida del Decreto n°1199 la concreción de las reparaciones tuvo un carácter más bien lento, signado por ciertas tensiones, resistencias e incluso desinterés por parte de determinados organismos o ministerios, y como veremos sólo hacia el final de la gestión el número de actos realizados aumentó considerablemente.

Teniendo en cuenta estos factores es que proponemos hablar de un proceso de institucionalización híbrido que responde en parte a una práctica de memoria sostenida por individuos particulares que se movilizan según una lógica no burocrática (entendiendo por esta una serie rasgos que le son

[37] Esta ambivalencia respecto de los organigramas establecidos fue subsanada en la reglamentación del decreto de modo nominal por el papel otorgado a la Jefatura de Gabinete de Ministros que es él área a cargo de la gestión de la APN. Véase Decreto nº1199/2012.

tradicionalmente atribuidos: impersonalidad, desapego, división jerárquica del trabajo, etc.) y en parte a lo que tradicionalmente se considera una política pública sancionada en una normativa de vigencia nacional.

Asimismo este carácter "híbrido" así como la "porosidad" que se establecía en relación con los organismos de derechos humanos y otras organizaciones, puede ser mejor comprendido en relación con un conjunto de investigaciones que analizaron los vínculos que se establecieron entre militancia política y trabajo durante los gobiernos kirchneristas (Vázquez, 2014, 2018; Perelmiter, 2010, 2011). Según estas investigaciones esta doble inscripción de "militantes" y agentes estatales se verifica en otras áreas donde también encontramos la incorporación de activistas de los movimientos sociales como la Dirección Nacional de Juventud y el Ministerio de Desarrollo Social.

De acuerdo con esta perspectiva, estas y otras incorporaciones a la gestión pública ilustran una cuestión doble que reencontraremos a lo largo de la tesis: por un lado, el modo en que a lo largo de los gobiernos kirchneristas el Estado fue concebido como un espacio donde se tramitaban compromisos militantes (además de la tradicional militancia "territorial" o "estudiantil") y, por el otro, el modo en que esa concepción fue transformando el quehacer de las agencias estatales en función de determinadas lógicas asociadas al activismo (Perelmiter, 2010). Particularmente y como venimos señalando, una de las cuestiones a considerar es que el trabajo en el Estado quedó asociado a una "ética del compromiso" según la cual el desempeño laboral se definía como una forma de "entrega personal" (Guglielmucci, 2013). Ello suponía una suerte de tensión respecto de la caracterización de la tarea como un trabajo asalariado y las respectivas condiciones laborales, así como un *ethos contraburocrático* (Perelmiter, 2010) que tomaba como indicador del éxito de un programa o curso de acción un conjunto de criterios políticos por sobre el ajuste a determinadas normas y requisitos formales. Así por ejemplo, en relación con la presentación de un proyecto de ley que preveía la rectificación de los legajos de los trabajadores desaparecidos en el sector privado señalaba Joaquín:

> Al principio [otros funcionarios] decían que no. Siempre está el no. O el no porque no había legajos… no hay una obligatoriedad de guardarlos. Pero se guardan. Están, hay una cultura de guardarlos.

> Por lo tanto, yo lo que plantee es que si en un universo de mil, nosotros logramos recuperar cien esos cien generan un hecho político y cultural… por lo tanto vale la pena, no es que cae en un saco vacío. (Entrevista con Joaquín, 10 de agosto de 2015)

En otros términos, de acuerdo con el coordinador de la Comisión el sentido fundamental de la iniciativa estaba en su impacto simbólico como política de memoria. Por eso, aun cuando la entrega de legajos y la reparación que se proyectaba para el sector privado no alcanzaran a completarse, la iniciativa conservaba su propósito como modo de mantener una "hegemonía cultural"[38], es decir, como manera de producir un cambio en la percepción del Estado y de los trabajadores.

A su vez, esta lógica política (antes que burocrático-administrativa) puede inscribirse de manera coincidente en lo que Vázquez (2014, 2015, 2018) denomina una militancia "por", "para" y "desde" el Estado. Según la autora, este modo del activismo caracterizó a diferentes colectivos que se formaron al interior de la administración pública, como es el caso de la Juventud Obras Públicas a la cual pertenecía el coordinador de la Comisión. En efecto, según señala Vázquez, al interior este colectivo las tareas militantes se definían "en función de tres tipos: trabajar en el Estado 'de forma militante', formar como 'militantes' a los trabajadores estatales y 'militar' comunicando las acciones impulsadas por el área en la que se trabaja" (Vázquez, 2014: 84). La movilización de la estructura estatal (por canales burocráticos y extraburocráticos), la inclusión de otras legitimidades sociales y la recuperación de legajos entendida como un "hecho cultural" pueden ser entendidas, desde esta perspectiva como formando parte de esas tareas "militantes".

Asimismo, en relación con otros miembros de la Comisión cuyas trayectorias previas no necesariamente se inscribían en organizaciones políticas ni tampoco en organismos de derechos humanos, es posible hablar no sólo de militantes que se incorporan al Estado sino también, de aquellos que ingresan a una forma particular de la militancia a partir de las tareas que desempeñan en una dependencia estatal. Pensando en estos casos, Vázquez se refiere no ya a los "militantes *en* la gestión" sino a lo que denomina

[38] La expresión es de la entrevista con Joaquín, 10 de agosto de 2015.

“militantes *de* la gestión”, es decir, individuos para quienes el carácter militante no está asociado a una organización, sino a un modo de trabajar “por” y “para” el Estado (2014, 2015, 2018). En estos casos (y de un modo análogo a lo documentado por la misma autora, 2018), hemos encontrado que la importancia del Estado como objeto y parte integrante de esta nueva “militancia” es asociada a menudo una experiencia generacional. De acuerdo con diversas entrevistas (dentro y por fuera de la Comisión) estos trabajadores destacan haber experimentado una vinculación con el Estado en su faceta “neoliberal” o “represiva” durante los años noventa, que los lleva no sólo a revalorizarlo durante el kirchnerismo, sino además a reivindicar políticamente ser parte de aquél. En el mismo sentido, estas/os “militantes de la gestión” destacan el “carácter reparatorio” de las “políticas de memoria, verdad y justicia” llevadas adelante durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, al tiempo que reconocen la legitimidad moral de los organismos de derechos humanos como “baluartes” del proceso. Por eso tiene sentido que, a la hora de definirse, los integrantes de la Comisión se identifiquen como “movilizados por el Proyecto Nacional y Popular de Néstor y Cristina Fernández de Kirchner”.

Esta narrativa nos remite a un último punto ligado a cómo se imbrican aquí la “militancia en el Estado” durante los gobiernos kirchneristas con la “militancia por la memoria”, según una narrativa que, como veremos, ubica ambas causas en una relación de continuidad. Dicho de otro modo el solapamiento —que aquí hemos introducido adrede — entre la noción de “militantes por la memoria” tal como la elaboran Rousso y Pollak y la militancia asociada a un compromiso político partidario es indicativo del modo en que se proyecta para los propios actores la articulación de ambas causas. En este sentido, la tarea de estos trabajadores puede ser definida como “militante” no solo de una memoria relativa a los crímenes del terrorismo de Estado sino de la memoria enmarcada en un proyecto político. En efecto, la concurrencia entre ambas nociones de “militancia” hace patente que la “militancia por la memoria” nunca supone una memoria en abstracto, sino siempre una forma muy concreta y situada de recordar el pasado. Dicho de otro modo, si es cierto que la militancia por la memoria supone siempre una dimensión política, no necesariamente se encuentra articulada –como sucede en este caso– con una

determinada conducción política o partidaria. Aquí la noción de “militancia por la memoria” se encuentra doblemente ligada a las necesidades del colectivo de identificación, en su inscripción no solo en el campo de la memoria, sino también en el “proyecto político kirchnerista”. Veremos cómo se conforma esta narrativa en el caso de la Comisión de Trabajo por la Reconstrucción de Nuestra Identidad en el próximo apartado.

2.4. Conformación de una “comunidad de recuerdo”

Como adelantamos, la receptividad que la Comisión alcanzó en los espacios institucionales (que tendría su punto culmine en la firma del decreto y su reglamentación así como en la entrega de legajos laborales por parte de la presidenta de la Nación) debe ser explicada atendiendo a un último punto que se vincula con la conformación de una “comunidad de recuerdo”, entendida como la constitución de un “nosotros” con legitimidad para recordar (Jelin, 2002: 58). Al respecto, es útil recordar que como señala Pollak, “la memoria es un elemento constitutivo del sentimiento de identidad tanto individual como colectivo, en la medida en que es un factor extremadamente importante del sentimiento de continuidad y de coherencia de una persona o de un grupo en su reconstrucción de sí mismo” (Pollak, 2006: 37). Es decir que para fijar ciertos parámetros de identidad (ya sea nacional, de género, política o de otro tipo) los sujetos seleccionan ciertos acontecimientos del pasado que les permiten identificarse con otros y construir una historia común.

Este vínculo entre memoria e identidad resulta central para comprender el proceso de conformación e institucionalización de la Comisión, especialmente porque la memoria que se propuso construir la Comisión en torno a los “trabajadores estatales desaparecidos” se vinculó no sólo con la reivindicación de una determinada figura de víctima sino con el proyecto de reconstrucción de una imagen del Estado (y de los trabajadores en ella) en el marco de los gobiernos kirchneristas. En efecto la novedad más evidente que la práctica de memoria propuesta por la Comisión introdujo respecto del régimen de memoria previo es su presentación del vínculo de los desaparecidos con el Estado no en tanto que víctimas de su accionar represivo, sino como formando parte del mismo en su condición de empleados

de la administración pública. Esta asociación era difícilmente sostenible durante la década del noventa, no sólo porque el Estado era el principal objeto de impugnación del movimiento de derechos humanos en relación con el pasado dictatorial —respecto del cual funcionaba como garante de la impunidad—, sino también y de modo creciente, respecto de las políticas que se desarrollaban bajo el signo del neoliberalismo.

Retomando una narrativa que hizo eclosión en el vigésimo aniversario del golpe de Estado y que fue fuertemente resignificada por el kirchnerismo como identidad política, la Comisión percibía sus tareas no sólo como "reconstrucción" de la memoria del terrorismo de Estado sino también de la memoria de los trabajadores del Estado que habría sido "desguazada" por los gobiernos menemistas. Un ejemplo de esta percepción puede apreciarse en el vínculo que la Comisión establecía entre el derrotero de la SOP del Ministerio de Planificación Federal con el Ministerio de Obras Públicas, que fue creado por primera vez en 1898, alcanzó su máximo esplendor durante el primer gobierno peronista (1946-1952), fue disuelto luego de algunas interrupciones en 1972, vuelto a crear en 1981 y disuelto nuevamente en 1991 en pleno proceso menemista de reforma del Estado. A la hora de referirse a este vínculo, Joaquín cuenta que el permanente contacto que tenía con los legajos de los empleados que se desempeñaban junto a él en la SOP lo condujo a indagar sobre los "compañeros" desaparecidos:

> Entonces me pasan los expedientes, los contratos [actuales] y me planteo eso, ¿no?, ¿dónde están los compañeros que no están?... ¿Dónde están los compañeros que no están? Y la primera respuesta era que no había compañeros desaparecidos acá… porque este ministerio nació en el 2003, entonces… "no tiene historia", "es nuevo", me decían. (Entrevista con Joaquín, 10 de agosto de 2015)

De acuerdo con este relato la pregunta acerca de las personas desaparecidas que trabajaban en la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Planificación suponía un primer salto al pasado. En efecto, el Ministerio de Planificación "era nuevo" en la medida en que su decreto de creación se remontaba al 27 de mayo de 2003 durante la presidencia de Néstor Kirchner.[39]

[39] Decreto n° 27/2003, 27 de mayo de 2003 (*BO*, 28 de mayo de 2003)

Sin embargo, la transferencia a dicho Ministerio de una serie de áreas que luego de la disolución del "viejo" Ministerio de Obras Públicas en 1991[40] habían quedado bajo la órbita de la Presidencia de la Nación o bien como una Secretaría dentro del Ministerio de Economía (por ejemplo las de Energía, Comunicaciones, Obras Públicas, Recursos Hídricos, entre otras[41]) permitía establecer la continuidad entre ambos. Según lo entendía la Comisión, las diferentes agencias y organismos en los cuales se habían desempeñado los trabajadores del Ministerio de Obras Públicas durante el período de la dictadura militar (1976-1983) se encontraban en su mayor parte bajo la órbita del "nuevo" Ministerio de Planificación Federal, razón por la cual era posible encontrar allí información acerca de los empleados que habían sido desaparecidos o asesinados.

Sin embargo, lo cierto es que desde 1974 hasta 1978 las empresas públicas estaban agrupadas y coordinadas por la denominada Corporación de Empresas Nacionales (CEN) que era un ente autárquico dependiente del Ministerio de Economía.[42] Luego de la disolución del CEN bajo la presidencia de Jorge R. Videla, las empresas públicas pasaron bajo control de la Sindicatura General de Empresas Públicas (SIGEP) que se hallaba también en la órbita del Ministerio de Economía según la ley 21.801 de mayo de 1978. Recién en 1981, con la asunción de Roberto Viola como presidente de la Nación se sanciona una nueva ley de ministerios que prevé la creación del Ministerio de Obras y Servicios Públicos disuelto en 1972 (Iramain, 2015). De acuerdo con un decreto posterior de ese mismo año, las empresas públicas pasan a depender de las secretarías de dicho Ministerio, conforme al organigrama que se presentaba en el sitio web de la Comisión y que sufriría diversas modificaciones en las décadas subsiguientes.

Teniendo en cuenta este derrotero puede decirse que el trazado de una continuidad entre los trabajadores desaparecidos de las empresas públicas nacionales, el ex Ministerio de Obras Públicas y el Ministerio de Planificación en el que se inscribía la Comisión responde no tanto a una constatación lineal

[40] Véase Ley de Ministerios n°23.930, 18 de abril de 1991 (*BO*, 22 de abril de 1991)
[41] Decreto 1142/2003, 26 de noviembre de 2003 (*BO*, 28 de noviembre de 2003)
[42] El mismo fue creado por ley 20.558 en 1974, durante la tercera presidencia de Juan Domingo Perón. Agradezco a la Dra. Paula Canelo el haberme hecho notar este punto en el marco del "Núcleo política, sociedad y cultura en la historia reciente del Cono Sur", con sede en el Instituto de Altos Estudios Sociales (IDAES) de la UNSAM.

del pasado sino a un modo de encuadramiento de la memoria cuya significación es en alguna medida independiente de las consideraciones históricas.[43] Una de las integrantes de la Comisión relata la conexión de la siguiente manera:

> Recordemos que Obras Públicas era el corazón del gobierno peronista porque se dedicaba justamente a llevar servicios y obras a todo el país. Entonces tenía muchísimo personal, vialidad nacional, redes de gas y muchas más. Y entonces los compañeros empiezan a preguntar por teléfono, personalmente, a otros organismos, ¿ustedes tuvieron tales desaparecidos…? ¿Qué pasó con esos legajos? Y la respuesta era: no, acá no hubo desaparecidos, si este Ministerio es nuevo…Porque justamente el Ministerio de Obras Públicas fue disuelto en la década del '90… es decir [cuando] ya no hacía falta que el Estado haga ningún tipo de obra, "no era necesario"… entonces fue disuelto. Mucha gente quedó cesanteada, [hubo] retiros obligatorios y jubilaciones anticipadas y de esa manera se aniquiló un ministerio y una historia política del país. (Entrevista con Carolina, 3 de julio de 2015)

Según el relato de Carolina, el entonces Ministerio de Planificación Federal era de algún modo una "recreación" del viejo Ministerio de Obras Públicas, que tuvo preponderancia en el primer gobierno peronista y fue "aniquilado" por el proyecto menemista de desarticulación del Estado. Algo similar señaló en la entrevista Andrés, quien tomó contacto con la Comisión en el año 2008, a raíz de la recuperación del legajo de su padre desaparecido:

> Te voy a contar una cosa, cuando viene Menem lo disuelven al Ministerio de Obras Públicas. Claro, porque no tenían… la única obra era una orden de Estados Unidos. La visión de Estado era no hacer obra pública y fíjate cómo Néstor [Kirchner] y Cristina [Fernández de Kirchner] vuelven a tomar el tema del Estado y la recuperación del Estado constantemente. Y que hoy es una Comisión que labura el tema de la memoria y la historia de sus propios militantes, de sus propios trabajadores es fundamental. Porque ellos, los milicos, quisieron hacer la desaparición de los compañeros y después Menem la desaparición del Estado… Porque precisamente querían desaparecer la identidad de lucha de los trabajadores y esto para mí es importante. (Entrevista con Andrés, 30 de octubre de 2015)

[43] En efecto la mayor parte de los legajos de los trabajadores que se desempeñaban en empresas públicas se entregaron en uno de los "actos homenaje" realizados en el Ministerio de Economía el 1 de octubre de 2014 (y no en el Ministerio de Planificación) ya que los legajos laborales fueron localizados en el ámbito de la Coordinadora de Entes Liquidados que depende de dicho Ministerio.

Este modo particular de identificar la propia pertenencia institucional de la Comisión sugiere una interpretación del pasado según la cual los años noventa constituyeron el punto máximo de desarticulación del Estado, que hizo eclosión en la crisis social que atravesó la Argentina en el año 2001 y que vendría a revertirse con la llegada al gobierno de Néstor Kirchner. Los años kirchneristas representan, en este marco, el denominado "retorno" de un Estado "desaparecido", junto con la vuelta del otrora MOP y hoy Ministerio de Planificación Federal en el que se inscribía la Comisión.

Así el trazado de esta línea de continuidad entre el Min Plan y el MOP puede leerse como un modo de encuadramiento de la memoria en el marco de una representación sobre el pasado reciente que es constitutiva del discurso kirchnerista. Según algunos autores, el kirchnerismo se caracterizó por inaugurar una doble ruptura histórico-política: una de corto plazo respecto del menemismo y las consecuencias sociales de las reformas pro-mercado y una ruptura de largo plazo con la dictadura militar iniciada en marzo de 1976 y el desarrollo de un patrón socioeconómico regresivo cuyos efectos sociales perdurarían hasta el presente (Aboy Carlés, 2009). De este modo el discurso kirchnerista establecía "una continuidad y una identidad política, económica, ideológica y simbólica entre la última dictadura militar y un régimen económico —el neoliberalismo— cuyo corolario y máxima expresión se habrían manifestado en la década del '90 y en el estallido del año 2001" (Montero, 2012: 81). Así se construye una representación de las últimas tres décadas como un "bloque temporal unificado" que va de 1976 con el comienzo de la dictadura militar al año 2001 donde se homologan las prácticas dictatoriales con el modelo neoliberal. En este marco la Comisión propone su propia inscripción simbólica en un sentido doble: por un lado brega por la recuperación de la "memoria de los trabajadores del Estado" perseguidos y desaparecidos por la dictadura militar, pero a su vez, por la "recuperación de la identidad" del empleado público:

> **Recuperar la identidad de los empleados públicos** detenidos-desaparecidos redefine el concepto bastardeado que se tiene del empleo público dejando de lado el paradigma de los ´90 (con el recordado personaje de Gasalla) **y recuperar la dignidad del trabajador del Estado**, quien debe cumplir un rol social, para la gente, que implica construir viviendas, que llegue el agua a un barrio

> o instalar cloacas. **Es importante que el empleado público cumpla sus tareas todos los días con esa convicción**[44]. (Folleto producido por la Comisión, s/f. Destacado en el original).

De este modo, la Comisión traza un hilo de continuidad entre ambas tareas (la recuperación de la identidad de los trabajadores desaparecidos y la recuperación de la dignidad del empleo estatal y del rol del Estado en general) sobre la base de una relectura del pasado reciente que tiene inmediata resonancia sobre su propia constitución identitaria. Esta operación es la que permite, a su vez, dotar de sentido la recuperación de los legajos laborales como soportes de memoria. A partir de la narrativa desarrollada por la Comisión, los legajos laborales dejan de ser solo un resto burocrático para constituirse en el reflejo de una historia de vida: lejos del arrumbamiento se encuentran allí las señas personales de los trabajadores (sus huellas digitales, sus firmas, sus fotografías), sus estudios y capacitaciones, el detalle de las tareas que desempeñaban, los datos de sus familiares e incluso la constancia de los esfuerzos de búsqueda que las familias iniciaron una vez acontecida la desaparición forzada.

Así puede decirse que el relevamiento de los trabajadores estatales víctimas del terrorismo de Estado y la recuperación de sus legajos era para sus integrantes un proceso que concernía a sus propias identidades como empleados que se desempeñaban en la Administración Pública Nacional bajo las gestiones de Néstor Kirchner y Cristina Fernández. La denominación poco común de la Comisión (“de Trabajo por la Reconstrucción de Nuestra Identidad”) es decir, la ausencia de referencias a los desaparecidos, a los derechos humanos o incluso al terrorismo de Estado como categorías nativas usualmente utilizadas en estos contextos, da cuenta de cómo la construcción de un colectivo de identificación —que incluía a las víctimas de la represión y a quienes ocupaban los resortes del Estado o trabajaban en él durante las gestiones mencionadas— se hallaba en el centro de la práctica de memoria. Como veremos en los capítulos siguientes estas transformaciones resultan indispensables para comprender la construcción de “políticas de memoria” y

[44] El “recordado personaje de Gasalla”, refiere al personaje interpretado por Antonio Gasalla, en la pieza “Flora, la empleada pública” en el programa televisivo “El mundo de Antonio Gasalla”, emitido por ArgentinaTelevisora Color entre 1989 y 2000.

sus modos de dotación de sentido. A su vez, este nuevo horizonte narrativo explica junto con los factores antes señalados (*i.e.* la triple inscripción identitaria y la "militancia por la memoria") la receptividad que la Comisión alcanzó en los espacios institucionales al punto tal de convertirse —con sus limitaciones y características específicas— en una política de reparación documental válida para toda la APN con el aval del Poder Ejecutivo Nacional.[45]

2.5. El andamiaje legal de la Comisión: "1955-1983" como eje narrativo

Si como señalamos arriba el proceso de institucionalización de la Comisión puede describirse en su carácter híbrido, es necesario referirse a algunas particularidades que suponen su inscripción y desenvolvimiento dentro de la estructura del Estado. Estas particularidades refieren, además de las ya señaladas, al establecimiento de un marco legal necesario no sólo para ordenar la acción de los agentes y/o funcionarios, sino también para enmarcar esas acciones en una determinada interpretación del pasado. Por eso nos interesa en este apartado describir y analizar los instrumentos legales que regularon la tarea de la Comisión y especialmente la periodización establecida por el Decreto nº 1199, según la cual eran pasibles de ser reparados legajos laborales de empleados "víctimas del terrorismo de Estado" desde 1955 a 1983.

Con ese propósito partiremos de considerar que los dispositivos legales y jurídicos resultan decisivos a la hora de instituir clasificaciones sociales y establecer modos legítimos de nombrar los hechos del pasado. Dichos dispositivos contribuyen a construir una determinada figura de "víctima" que

[45] En la actualidad la Comisión de Trabajo por la Reconstrucción de Nuestra Identidad continúa su tarea de identificación y reparación de legajos laborales en el marco de la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda. Este Ministerio fue creado al comenzar el mandato del Presidente Mauricio Macri y absorbió parte de las funciones del ex – Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios en el que se inscribía orgánicamente la Comisión. Hasta donde pudimos relevar, la Comisión cuenta con el aval del Secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj y el Jefe de Gabinete, Marcos Peña, para continuar con la tarea de relevamiento del personal de la Administración Pública Nacional que fue víctima de desaparición forzada o asesinato a causa del accionar del terrorismo de Estado, aunque la realización de "actos homenaje" ha disminuido sensiblemente. En cuanto a su composición, la Comisión ha variado levemente. Dos de los miembros que se desempeñaban como empleados de la Secretaría de Obras Públicas o se encontraban en comisión de servicios realizando tareas en el marco de la Comisión no siguen en sus puestos. La mayor parte del equipo continúa en sus tareas, subrayando que la reparación de los legajos laborales constituye una política pública que debe considerarse independiente de los avatares gubernamentales.

debe considerarse no como expresión de un estatuto objetivo, sino como una construcción social específica (Vecchioli, 2001). A su vez, las diferentes leyes concebidas como "reparatorias" delimitan un conjunto de responsabilidades y suponen una interpretación histórica de lo sucedido que puede expresarse de manera más o menos explícita. Por eso desde esta perspectiva el desarrollo de las "políticas de memoria" en general y de políticas reparatorias en particular[46] no supone solamente una forma de gestionar los efectos de un pasado violento sino que, aun sin proponérselo, constituyen marcos de interpretación del pasado o modos de encuadramiento de la memoria de lo sucedido. Más aún, el efecto de verdad producido por este tipo de leyes puede ser tal que contribuyen a afianzar una versión del pasado entre otras que circulan en la memoria social.

Retomando el planteo de Mitchell, ello puede ser concebido como una consecuencia del "efecto de distancia" que caracteriza a los Estados modernos respecto de la sociedad (Mitchell, 1991, 1992). Según el autor, el Estado y sus acciones no deben ser concebidas como un objeto separado de la sociedad, sino como hemos dicho, como el poderoso efecto por medio del cual un conjunto de estrategias político discursivas generan que ciertas funciones y personal aparezcan como separadas. Dicho de otro modo, lo que encontramos no son dos entidades, esferas o agentes separados y preconstituidos ("Estado" y "sociedad"), sino un conjunto de prácticas que producen ese efecto de separación o distancia, como una línea diferencial trazada en función de los diferentes contextos. Las leyes son un ejemplo privilegiado de este tipo de prácticas, en la medida en que constituyen precisamente la apariencia de un orden legal abstracto que se sobreimpone a los hechos sociales concretos. La ley, entendida como un marco constituido por un conjunto de principios abstractos a ser aplicados en casos individuales, tiene la capacidad de aparecer como algo fijo en oposición a la mutabilidad de los hechos, algo abstracto, en oposición a concreto, algo general antes que particular (Mitchell,

[46] Hacemos hincapié en las denominadas "leyes reparatorias" ya que sin ser una categoría absolutamente adecuada (especialmente porque refiere al otorgamiento de compensaciones de carácter monetario) la noción de "reparación" es la que se utilizó más a menudo para referirse al trabajo de la Comisión. Para una definición de "políticas reparatorias" en términos del derecho internacional véase De Greiff, 2008. Una descripción y un análisis de las políticas desarrolladas en el caso argentino puede hallarse en Guembe, 2008; Varsky y Filippini, 2005 y Luzzi, 2015. Por último una revisión crítica de las leyes reparatorias desde la perspectiva de los estudios sobre genocidio está disponible en Surraco, 2013.

1991: 20). Como hemos adelantado, este efecto de separación o distancia resulta particularmente relevante en los conflictos por la memoria, ya que dota a la versión enunciada desde las agencias estatales de un carácter diferencial (autorizado, fijo, general) respecto de las memorias "sociales" y contribuye de esa manera a su propia cristalización, aun cuando, como veremos, el proceso de producción de esas versiones del pasado esté lejos de constituirse como algo único y acabado.

Ahora bien, para analizar los instrumentos que regularon la tarea de la Comisión es pertinente señalar que la promulgación de normativa específica se inscribe en un marco legal preexistente que estableció las coordenadas básicas de interpretación de lo acontecido en el país durante la última dictadura militar. Este marco legal comenzó a forjarse bajo el gobierno de Raúl Alfonsín (1983-1989) con algunas medidas que resultaron vitales para construir retrospectivamente una cesura respecto del Estado terrorista y reponer las responsabilidades de las Fuerzas Armadas en la puesta en práctica de un proceso represivo de aniquilamiento (Vezzetti, 2002). En este marco debe insertarse la promulgación del Decreto n°158 de 1983 que ordenaba el procesamiento de las Juntas Militares, así como la creación en diciembre del mismo año de la CONADEP. Instrumentos posteriores que se desarrollaron bajo la presidencia de Carlos Menem (1989-1999) como la ley que crea la figura de "ausencia por desaparición forzada", el otorgamiento de jerarquía constitucional a los tratados y convenciones internacionales sobre derechos humanos y especialmente las leyes destinadas a indemnizar a las víctimas de desaparición forzada, constituyeron antecedentes indispensables para la conformación y el funcionamiento del conjunto de "políticas de memoria" impulsadas durante los gobiernos kirchneristas. De hecho, es en función de un conjunto de nociones consagradas en este marco preexistente (especialmente el derecho a la verdad y el derecho a obtener reparaciones) que el Acuerdo de Colaboración y el Decreto n°1199 que sancionaron lo actuado por la Comisión de Trabajo por la Reconstrucción de Nuestra Identidad construyen los fundamentos de la iniciativa de reparación de legajos y también los circuitos burocráticos o administrativos a seguir. Esto resulta evidente, por ejemplo, si atendemos a los mecanismos previstos por el decreto para constatar la condición de desaparecidos o asesinados de las personas cuyos legajos

laborales se pretende reparar, ya que para que ello se requiere no sólo del reconocimiento legal de la figura de "ausente por desaparición forzada" (Ley 24.321, promulgada en 1994) sino también de los mecanismos acreditantes previstos por otras leyes, específicamente las Leyes nº 24.411, nº 24.321 o nº 26.564, según los certificados que emite la Secretaría de Derechos Humanos.[47] Asimismo, a la hora de detallar el procedimiento a seguir para la corrección de los legajos se indica que deberá agregarse en ellos la inscripción de detenido-desaparecido "con el número de Registro de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP)", lo cual es un modo ya consagrado de identificar a las víctimas y permite oficializar la rectificación a partir de una verdad social y jurídicamente establecida. La referencia a este marco preexistente se extiende también a la justificación, ya que se considera que es responsabilidad del Poder Ejecutivo Nacional encarar acciones de "reparación moral y colectiva" para dar "cumplimiento al deber de recordar y al derecho de toda sociedad de conocer la verdad".[48]

Estos breves ejemplos apuntan a mostrar que el accionar de la Comisión se inscribe en un conjunto de acciones de encuadramiento de la memoria de larga data. Sobre ellas se monta la propuesta novedosa sobre el reconocimiento de la responsabilidad del Estado en el destino de los trabajadores. En este sentido, se debe tener presente que la instalación de las leyes reparatorias y de todo el conjunto de "políticas de memoria" es producto de una secuencia temporal que excede por mucho a los gobiernos kirchneristas y que se superpuso, articuló o contrapuso con las actitudes de muy diferentes agencias y niveles estatales (Alonso, 2011), así como las luchas, avances y retrocesos del movimiento de derechos humanos.

Al mismo tiempo resulta indispensable tener en cuenta que, a pesar de su apariencia fija, ese marco legal debe ser creativamente movilizado por los agentes para generar nuevas acciones. Esto es especialmente relevante para explicar cómo se dio en los inicios el desenvolvimiento de la tarea de la Comisión. Según relata Carlos Lafforgue, Secretario ejecutivo del ANM:

[47] Resolución n° 493, Secretaría de Gabinete y Coordinación Administrativa (SGCA), 4 de diciembre de 2012 (*BO*, 6 de diciembre 2012)
[48] Decreto n°1199, 19 de julio 2012 (*BO*, 20 de julio 2012)

> Al principio casi nos sacan volando. Tuve que desenrollar el decreto presidencial, que es un decreto que firmó Néstor Kirchner, que nos da mucho poder. El decreto de creación del Archivo y las funciones de investigación del Archivo. Nosotros teníamos capacidad como para ir no sólo a una oficina sino a un cuartel y pedir que tiren abajo esa pared, por ejemplo. Es un decreto muy fuerte, y que siempre fue muy respetado. El primer lugar donde para mi sorpresa pusieron un gesto de asombro fue en este organismo [la coordinadora de entes liquidados del Ministerio de Economía], donde fuimos a pedir los legajos… Yo no me esperaba una situación así pero bueno… la superamos rápidamente, era gente que no estaba acostumbrada a eso ni que le pidan nunca nada de eso y nada más que pensar en el trabajo de revolver todas esas pilas de papeles… (Entrevista a Carlos Lafforgue, 4 de noviembre de 2015)

El decreto al que se refiere es el que dispone la creación del Archivo Nacional de la Memoria promulgado en el año 2003. En efecto, allí se establecen como actividades fundamentales del ANM "obtener, analizar, clasificar, duplicar, digitalizar y archivar informaciones, testimonios y documentos sobre el quebrantamiento de los derechos humanos y las libertades fundamentales en que esté comprometida la responsabilidad del Estado Argentino y sobre la respuesta social e institucional ante esas violaciones".[49] Más específicamente, por medio del artículo quinto el ANM tiene la potestad de:

> b) Tener acceso directo, para los fines y objetivos de este Decreto, a los archivos de los organismos integrantes de la administración centralizada y descentralizada del Poder Ejecutivo Nacional, incluyendo las Fuerzas Armadas y de Seguridad.
> c) Requerir directamente a dichos organismos informaciones, testimonios y documentos sobre la materia de este Decreto obrantes en sus archivos los que deberán cumplimentarse en el término que se fije en el requerimiento y conforme a las normas legales en vigencia. (Decreto n° 1259/2003, 16 de diciembre de 2003, *BO*, 17 de diciembre de 2003)

Estas disposiciones del artículo quinto permitían a los funcionarios del ANM acceder a todos los documentos vinculados con el terrorismo de Estado de manera directa sin necesidad de la aprobación de las autoridades de cada dependencia. Ello es indicativo no sólo de la potestad otorgada al ANM (y por ende la importancia concebida a sus misiones y funciones) sino de la manera en que la política reparatoria se enlaza con otras agencias estatales (con sus respectivas tensiones) de un modo que hace posible su crecimiento y

[49] Decreto n° 1259/2003, 16 de diciembre de 2003 (*BO*, 17 de diciembre de 2003)

efectividad. Por otro lado, como hemos mencionado, el primero de los documentos que da existencia jurídica a la Comisión es el Acuerdo de Colaboración celebrado entre la Secretaría de Obras Públicas de la Nación, cuyo titular era el Ing. José Francisco López y el Archivo Nacional de la Memoria, representado por su entonces Presidente Dr. Eduardo Luis Duhalde, el 22 de marzo de 2007. Según se establecía, el objetivo del Acuerdo lo constituía el relevamiento de los casos del personal del entonces Ministerio de Obras Públicas y Servicios (MOP) que fueron víctimas de desaparición forzada "principalmente durante la dictadura militar que usurpó los poderes del Estado entre los años 1976 y 1983".[50]

Si bien este tipo de relevamiento era una práctica un poco más extendida en ámbitos educativos (colegios, universidades) y también en otras instituciones públicas, constituía una iniciativa incipiente al interior de la Administración Pública Nacional.[51] En efecto, según los testimonios brindados por los primeros integrantes de la Comisión, la indagación acerca de los trabajadores desaparecidos en el ámbito de la APN implicó inicialmente romper con una "cultura del silencio", en el marco de la cual se negaba o se silenciaba la represión vivida por los trabajadores al interior de los organismos.[52]

Ahora bien, ¿cómo se establecían los límites del relevamiento? Una primera delimitación se fijaba en relación con el lugar de trabajo ya que el objetivo del Acuerdo era relevar al conjunto de los empleados desaparecidos que se desempeñaban en el ex – MOP, es decir, de aquellos que trabajaban en alguno de los organismos u empresas que se encontraban bajo su órbita. Esta delimitación implicaba un trabajo de reconstrucción del organigrama del Estado que permitiera a los integrantes de la Comisión identificar a los trabajadores de entonces. En la práctica constituía un primer obstáculo no sólo porque como hemos señalado el Ministerio de Obras Públicas y Servicios había sido disuelto en 1972, sino además porque para 1981 (año en que vuelve a constituirse) el ex – MOP incluía el personal de grandes empresas como Yacimientos

[50]Acuerdo de Colaboración. Anexo en la Resolución n°1486, Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, 18 de diciembre de 2008.

[51] En muchos casos y sobre todo en el interior del país el relevamiento mencionado no corrió a cargo de las instituciones en sí, sino de centros de estudiantes, asambleas o foros contra la impunidad, agrupamientos informales constituidos para la ocasión y otros colectivos.

[52] La expresión aparece en la entrevista con Joaquín (3/07/15) y Oscar, ex empleado público detenido desaparecido, integrante de la Comisión de Trabajo por la Reconstrucción de Nuestra Identidad (4/11/15).

Petrolíferos Fiscales (YPF), Yacimientos Carboníferos Fiscales (YCF), Servicios Eléctricos del Gran Buenos Aires (SEGBA), Ferrocarriles Argentinos, Obras Sanitarias de la Nación, Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTeL), entre muchas otras.

Por otro lado, el Acuerdo de Colaboración se circunscribe al relevamiento de aquellas personas que fueron víctimas de desaparición forzada entre los años 1976 y 1983. Como veremos, ambas limitaciones serían modificadas en documentos posteriores ya que constituía un universo de casos que excluía no sólo al resto de los empleados estatales sino a todos aquellos que, sin ser desaparecidos fueron asesinados por el accionar represivo del Estado. Notemos solamente que este punto da cuenta del modo en que la víctima desaparecida se ubicó desde el comienzo en el centro de la práctica de memoria propuesta por la Comisión, según un gesto que evidencia la persistencia de la narrativa humanitaria instituida desde la transición democrática y al mismo tiempo la omisión o no problematización respecto de otras violencias perpetradas por el Estado en el ámbito laboral, especialmente las numerosas cesantías y declaraciones de prescindibilidad.

Por otra parte, como adelantamos este modo ya consagrado de delimitar el período (1976-1983) sufrirá una variación significativa en el Decreto n°1199, sancionado el 20 de julio de 2012 y reglamentado el 6 de diciembre de ese mismo año. En efecto, si bien el lapso de tiempo establecido en el Acuerdo se ceñía a la delimitación dominante, el decreto propone una periodización según la cual es posible identificar el accionar del terrorismo de Estado –de manera independiente de la distinción entre gobiernos democráticos y dictatoriales– a partir del 16 de junio de 1955 (fecha en la que se produjo el bombardeo a Plaza de Mayo) hasta el 10 de diciembre de 1983 (día de la asunción presidencial del Dr. Raúl Alfonsín)[53] De este modo, por efecto de esta normativa se instituye

[53] El bombardeo a la Plaza de Mayo que tuvo lugar el 16 de junio de 1955 en la ciudad de Buenos Aires fue un ataque producido por un sector de las Fuerzas Armadas con el objeto de llevar adelante un golpe de Estado contra el gobierno del entonces presidente Juan Domingo Perón (1946-1955). Hasta donde pudimos rastrear, a excepción de la ley 26.564 ninguna otra campaña o iniciativa de memoria propuso de manera explícita la periodización que aquí analizamos. De acuerdo con la memoria de gestión de la Secretaría de Derechos Humanos, el Registro Unificado de Víctimas del Terrorismo de Estado (Ruvte) sistematiza la información referida a víctimas del accionar represivo en el período 1966-1983. Por otro lado, la campaña de rectificación de los legajos de conscriptos que constituye un antecedente importante del trabajo de la Comisión toma como período 1976-1980. Véase SDH. (2015). *Memoria de gestión Secretaría de Derechos Humanos de la Nación*, 2012-2015, p. 187 y Resolución n°420,

una nueva figura que ya no es la del “trabajador estatal víctima de desaparición forzada” en el marco de la última dictadura militar sino la del “trabajador estatal víctima del terrorismo de Estado” en un período que abarca casi 28 años.

La amplitud de este período es posible dada la vaguedad del término “terrorismo de Estado” y el hecho de que a lo largo de toda la legislación reparatoria el mismo no es definido ni cuenta con una tipificación en la normativa internacional. Por esta razón, las diferentes leyes que se han propuesto reconocer y reparar las denominadas violaciones a los derechos humanos cometidas por el Estado argentino comportan una notable ambigüedad a la hora de establecer los límites temporales. Esta cuestión resulta significativa porque el establecimiento de los períodos implica no sólo una restricción concreta en términos de accesibilidad, sino también una interpretación no necesariamente explícita sobre los hechos del pasado que se pretenden reparar, así como sus responsables y sus afectados. Dicho de otro modo, se trata de una discusión política.

En este caso la fecha de inicio del 6 de junio de 1955 se propone sin mayores justificaciones, aun cuando a lo largo del decreto se menciona a las “víctimas de desaparición forzada” haciendo referencia en una primera instancia a la periodización establecida por el Acuerdo de Colaboración. La reglamentación del decreto la ratifica, indicando que “la reparación documental alcanza a todos/as aquellos/las empleados/ as de la Administración Pública Nacional que se encuentren en condición de desaparición forzada o hayan sido asesinados/as como consecuencia de la acción del terrorismo de Estado entre 1955 y 1983”.[54]

Este modo de periodizar se compagina mal con las justificaciones que se establecen en los considerandos. En efecto, en el Decreto n°1199 se hace mención explícita a la Junta Militar indicando no sólo que la misma había dispuesto “despidos masivos” a través de las Leyes 21.260 y 21.274 (las cuales fueron promulgadas en marzo de 1976) sino una interpretación histórica más amplia según la cual la Junta “disponía la expulsión del ámbito laboral como

Ministerio de Defensa, 7 de mayo de 2009. Esta disparidad en las periodizaciones habla de la variedad de sentidos y tensiones que atraviesan los procesos de encuadramiento de las memorias al interior del Estado nacional.

[54] Resolución n° 493, Secretaría de Gabinete y Coordinación Administrativa (SGCA), 4 de diciembre de 2012 (*BO*, 6 de diciembre 2012).

una acción intimidatoria y de persecución previa al secuestro y desaparición de los trabajadores del Estado". Más aún, en la reglamentación se señala que

> … la baja, cese, suspensión, limitación de los servicios, el despido o la renuncia forzada de estos trabajadores, fue un mecanismo utilizado como forma de persecución política previa a la desaparición forzada o asesinato, o como una forma de ocultamiento o encubrimiento posterior a la comisión del delito de lesa humanidad. (Resolución n° 493, SGCA, 4 de diciembre de 2012, *BO*, 6 de diciembre 2012)

Estas interpretaciones que se presentan como resultados del trabajo de la Comisión consignan una lectura acerca del funcionamiento de la represión ilegal al interior de la Administración Pública Nacional. Podría plantearse aquí la pregunta respecto del rol jugado por el Estado en el establecimiento de una interpretación histórica de los hechos y en todo caso, por medio de qué procedimientos se la construye. A los fines de nuestro propósito la cuestión es ¿cómo explicar esta variación en el establecimiento de un marco temporal? ¿Por qué el decreto y su correspondiente reglamentación incluyen como fecha de inicio una fecha que a todas luces no cuaja con los delitos que se pretenden reparar?

Para responder esta cuestión nos remitiremos a una discusión que tuvo lugar en el Congreso nacional en ocasión de la sanción de la Ley 26.564, conocida como "ley de presos políticos". Si bien allí no se trató el Decreto aquí analizado, sí se puso en discusión la periodización establecida y también los límites de la noción de "reparación". El análisis de los argumentos vertidos por la oposición y el oficialismo nos permitirá extraer algunas conclusiones en torno a la narrativa que se puso en juego desde el gobierno nacional para encuadrar el pasado reciente. Para avanzar en ello es necesario tener en cuenta que el grueso de las leyes que se propusieron ofrecer algún tipo de reparación a las víctimas de las violaciones a los derechos humanos (sancionadas durante los gobiernos de Carlos Menem, 1989-1999) y aun las anteriores, sancionadas por el gobierno de Alfonsín (1983-1989) se caracterizan por establecer como fecha de corte (es decir, fecha a partir de la cual se considera excluido el caso) el 10 de diciembre de 1983 pero omiten fijar una fecha de inicio. Tal es el caso de las leyes 24.411 y 24.823 que establecieron una "indemnización por desaparición forzada o fallecimiento por el accionar del terrorismo de Estado" donde no se indica fecha de inicio sino sólo de finalización. Incluso la Ley 24.321, que crea

la figura de “ausente por desaparición forzada” coloca como única referencia temporal el 10 de diciembre de 1983. La excepción la constituye la Ley 24.043 sancionada en noviembre de 1991, que otorgaba una reparación patrimonial a los presos políticos que habían estado a disposición del Poder Ejecutivo Nacional durante la vigencia del estado de sitio. Así, de acuerdo con la reglamentación de dicha ley la fecha a partir de la cual se contemplaba el caso era el 6 de noviembre de 1974 (día en el que se declaró el estado de sitio bajo el gobierno de María Estela Martínez de Perón) y la fecha de corte se establecía como en el resto de los casos el 10 de diciembre de 1983. Al respecto cabe destacar dos cuestiones: en primer lugar que dicha fecha de inicio estaba ausente en el texto de la ley y sólo fue incluida en su decreto de reglamentación. En segundo lugar que teniendo en cuenta las implicancias políticas de la fecha la ley no fue sometida a debate parlamentario debido a las altas chances de que no se cumplieran los requisitos para su aprobación (Guembe, 2008).

Esta omisión generalizada de la fecha de inicio en las leyes promulgadas a fines de la década del ochenta y del noventa puede ser interpretada atendiendo a las características del régimen de memoria vigente en ese contexto. Por un lado, dicha omisión muestra que en los primeros años de la democracia la principal preocupación no era la de la integración o no de casos previos a 1976 (lo cual se resolvió luego por vía de resoluciones administrativas) sino que se trataba de evitar que estas mismas leyes reparatorias fueran utilizadas en relación con crímenes cometidos ya entrado el período democrático (Guembe, 2008). Dicho de otro modo, lo que estaba en cuestión no era tanto establecer una interpretación sobre los inicios de la represión clandestina sino por el contrario afianzar la cesura producida por el retorno de la democracia.

Por otro lado, es posible señalar que el establecimiento de una fecha de inicio –ya sea la de noviembre de 1974, febrero de 1975 o la más extendida del 24 de marzo de 1976– resultaba conflictiva porque implicaba diferentes repartos de responsabilidad de los actores políticos en el desencadenamiento del proceso represivo. Así, la fecha del 6 de noviembre de 1974 no ha sido retomada por las leyes reparatorias posteriores en la medida en que, como

dijimos, traía aparejado el reconocimiento del carácter represivo de las políticas adoptadas por el gobierno justicialista de entonces.[55]

En ese contexto, la diferencia más significativa en torno a las periodizaciones se dio en la Ley 26.564 sancionada en diciembre de 2009 durante el primer mandato de Cristina Fernández de Kirchner.[56] Según los propios parlamentarios, la ley estaba destinada a otorgar reparaciones a las víctimas de la denominada "resistencia peronista" y establecía para ello la ampliación de los beneficios previstos por las Leyes nº 24.043 y nº 24.411 para quienes "entre el 16 de junio de 1955 y el 9 de diciembre de 1983, hayan estado detenidas, hayan sido víctimas de desaparición forzada o hayan sido muertas en alguna de las condiciones y circunstancias establecidas en las mismas [leyes]".[57] Especialmente, en el artículo segundo se hace referencia "a las víctimas del accionar de los rebeldes en los levantamientos del 16 de junio y 16 de septiembre de 1955" y en los artículos subsiguientes a quienes durante ese período hubieran estado "detenidos, procesados, condenados y/o a disposición de la Justicia o por los Consejos de Guerra, conforme lo establecido por el Decreto 4161/55, o el Plan CONINTES (Conmoción Interna del Estado)", entre otros.

El desplazamiento del eje temporal o mejor dicho su ampliación hacia 1955 supone importantes variaciones interpretativas. En primer lugar diluye la

[55]De hecho, en el denominado "régimen reparatorio para ex presos políticos de la República Argentina" (Ley 26.913) que se sancionó luego en noviembre de 2013 la declaración de estado de sitio ya no es tomada como parteaguas como ocurría en la Ley 24.043 y la única referencia temporal es el 10 de diciembre de 1983. Dicho régimen fue aprobado en la Cámara de Diputados por unanimidad (véase Orden del Día Nº 2676/12, trámite parlamentario n°40) El 3 de julio de 2013 la ley debía ser tratada en la Cámara de Senadores. Sin embargo, ocurrió algo llamativo relacionado justamente con la fecha de inicio que impidió su tratamiento. Según el Senador Rodríguez Saá el texto que había sido tratado en diputados colocaba como fecha a partir de la cual podía solicitarse el beneficio el 24 de marzo de 1976. Sin embargo, el despacho remitido a la Cámara de Senadores establecía como fecha el 6 de noviembre de 1974. Decía Rodríguez Saá: "Acá tenemos que pensar que si se trata de un error: en tal caso sería bueno que la Cámara de Diputados lo repare antes de tratarlo. Si se trata de una avivada me parece que no corresponde que tratemos este tema, o es un delito porque se ha adulterado la sanción parlamentaria, más allá del derecho que tenga el Senado de sancionar el texto que corresponda. Pero lo que pasa es que lo que ha venido acá no es lo que sancionó la Cámara de Diputados". Véase versión taquigráfica, Cámara de Senadores de la Nación, Período 131º 12ª Reunión, 6ª Sesión ordinaria, 3 de julio de 2013: 43.

[56] El proyecto fue presentado por primera vez en 2006 aunque no fue tratado en el recinto. En 2008 fue nuevamente presentado por los diputados Dovena, Moreno, García y Salim del Frente para la Victoria. Recordemos, por otra parte, que la sanción de la ley tenía efectos sobre todo simbólicos, ya que según la intervención del diputado Agustín Rossi (FPV) los casos relevados de personas vivas a quienes les correspondería la reparación sumaban un total de ochenta y seis.

[57] Ley 26.564, 25 de noviembre de 2009 (*BO*, 16 de diciembre de 2009)

distinción entre regímenes autoritarios y democráticos salvo para configurar el corte en 1983. Del mismo modo que lo hace el Decreto n°1199 que sanciona lo actuado por la Comisión, la Ley 26.564 identifica todo el período que va de 1955 a 1983 como un continuo signado por el accionar represivo del Estado. A su vez, este accionar represivo se representa específicamente dirigido al movimiento peronista. En efecto, la mención aparte de los levantamientos del 16 de junio y 16 de septiembre de 1955 y del plan CONINTES tiene como objeto delimitar una figura de víctima que se distingue por su adscripción al peronismo, razón por la cual se reúnen en una misma ley acontecimientos en principio tan disímiles. Teniendo en cuenta ese propósito se entiende además que en el artículo 3° se incluya específicamente como beneficiarios a aquellos "militares en actividad que por no aceptar incorporarse a la rebelión contra el gobierno constitucional fueron víctimas de difamación, marginación y/o baja de la fuerza"[58], es decir a aquellos integrantes de las Fuerzas Armadas que se mantuvieron leales al gobierno de Perón.

La construcción de este continuo 1955-1983 se ve afianzada por el hecho de que las reparaciones que se establecen para las víctimas del plan CONINTES o del bombardeo a Plaza de Mayo, por ejemplo, no derivan específicamente de las características de esos acontecimientos sino que resultan de una ampliación de beneficios que se habían establecido para las víctimas desaparición forzada (Ley24.411) o de detenciones por causas políticas durante la década del setenta (Ley 24.043). Este modo de plantear el proyecto, como una ampliación de la 24.411 y no como una ley aparte, puede ser leído como parte de un proceso de encuadramiento de las memorias sostenido por el bloque que impulsó el proyecto, esto es, el bloque kirchnerista, para tensionar los sentidos dominantes en torno al pasado reciente. Así, de acuerdo con el meta-relato que ofrecen las leyes reparatorias con sus respectivas "ampliaciones", el eje de la narrativa histórica ya no está dada por el par democracia y dictadura (se admite incluso la necesidad de reparar crímenes de lesa humanidad cometidos durante los gobiernos constitucionales

[58] Ley 26.564, 25 de noviembre de 2009 (*BO*, 16 de diciembre de 2009)

de Héctor J. Cámpora y Juan D. Perón)[59] sino por el devenir del peronismo frente al accionar represivo del Estado.[60]

En relación con ello resulta interesante señalar que este modo de concebir el pasado no resulta en absoluto novedoso. Según señala Daniela Slipak esta narrativa binaria referida a la historia nacional (esto es, como una lucha entre dos actores enfrentados) debe inscribirse en una tradición de largo aliento cuyos orígenes se remontan a una combinación de la lectura que ciertos exponentes de la izquierda nacional hicieron del peronismo con algunos esquemas del revisionismo histórico (Slipak, 2015). Esta concepción signó a su vez la identidad de la organización Montoneros, lo cual resulta un dato relevante ya que algunos de los legisladores y funcionarios que se desempeñaban en el gobierno kirchnerista habían formado parte de esa organización, se inscribían en el peronismo de izquierda de la década del setenta o bien recuperaban de algún modo esa tradición. De acuerdo con ésta, la historia nacional podía comprenderse "en clave de un único conflicto anclado en torno al pueblo y la oligarquía, lo nativo y lo extranjero, la patria y el imperialismo".[61] De un modo análogo a como lo proponía la Ley 26.564, aquello que resultaba decisivo no se cifraba en la sucesión de órdenes institucionales sino en los modos en que a lo largo de cada una de las coyunturas históricas se había inclinado la balanza a favor de uno u otro bando. En ese sentido, la construcción narrativa que se desprende de la Ley 26.564 y del Decreto n°1199 así como los fundamentos esgrimidos por los legisladores resultan de algún modo herederos de esa tradición: bajo ese prisma se forja una reinterpretación

[59] El diputado Malacuse (Solidaridad e Igualdad) señala en el debate: "Se ha dicho que esta iniciativa es mezquina. Sin embargo, el bloque oficialista ha tenido la audacia de incluir dentro de los períodos en los que plantea que hubo avasallamiento de los derechos humanos a la etapa democrática transcurrida entre 1973 y 1976, quedando así incorporada a las reparaciones. Me parece que este es un dato que no podemos dejar de tener en cuenta desde la oposición, porque es audaz desde el punto de vista histórico y creo que es un paso profundo desde el punto de vista político".

[60] De hecho, esta no era la primera vez que se proponía un proyecto de ley relativo a las víctimas de la represión en la década del '50. En noviembre de 1999 se había sancionado una ley que –bajo la influencia de Operación masacre– establecía una reparación patrimonial para aquellas personas que formaron parte del levantamiento comandado por el Gral. Valle contra la denominada "revolución libertadora" cuyo límite temporal se establecía entre el 9 y el 12 de junio de 1956 (Ley 25.192). Sin embargo, esta ley no es mencionada como antecedente en la Ley 26.564 ni tampoco se recurre a ella en el debate parlamentario.

[61] Así lo proponía una de las historietas de la revista *El Descamisado*, una de las publicaciones de difusión de Montoneros (Slipak, 2015:78).

del terrorismo de Estado, del pasado inmediatamente anterior y de las identidades políticas en el presente.

El análisis de los debates que precedieron a la aprobación de la Ley 26.564 muestra, en efecto, que la disputa con los otros bloques giraba en torno a este eje narrativo. Veamos cómo se expresa al respecto la senadora Parrilli (FPV):

> El 19 de septiembre de aquél año [1955], no sólo se inició un baño de sangre contra el pueblo argentino, sino que comenzó la destrucción de la soberanía política, la independencia económica y la justicia social. Muchos setentistas nos iniciamos a la vida política escribiendo en paredones de escuelas y fábricas, en cuadernos y carpetas la "v" y la "p": "Vuelve Perón". Muchos de ellos hoy no están pero por la lucha de Madres [de Plaza de Mayo] y de Abuelas [de Plaza de Mayo] y de los organismos de derechos humanos han sido reconocidos. Pero hoy le toca el día a los que protagonizaron esta gesta histórica; sin ellos no hubiera sido posible todo lo que vino después. (Versión taquigráfica, Honorable Cámara de Senadores de la Nación, 18°Reunión, 14° Sesión ordinaria, 25 de noviembre de 2009: 13).

La cita es significativa en la medida en que expresa esta lectura según la cual las víctimas del '55 constituían el antecedente de las víctimas de la represión ilegal de la década del setenta. De acuerdo con la senadora estas víctimas son identificadas por su adscripción al peronismo y fueron posteriormente reconocidas gracias a la "lucha de Madres y Abuelas". En este marco la Ley 26.564 se presenta como una distinción necesaria a las "primeras víctimas" que no fueron reconocidas hasta el momento y que sin embargo, deben inscribirse (según esta concepción) en esa misma genealogía.

En la Cámara de Diputados la justificación propuesta por los legisladores iba en esta misma línea incluyendo un desplazamiento más pronunciado. De acuerdo con la posición del bloque kirchnerista, la ley reparatoria pretendía no sólo reparar a las "víctimas" en razón del daño que les fue provocado sino sobre todo constituirlas como "héroes" y/o "mártires" de la lucha popular. Así el diputado Remo Carlotto (FPV) señalaba:

> Cuando uno habla de leyes reparatorias lo hace refiriéndose a las víctimas. Este proyecto considera historias de vida desde 1955 hasta 1983, período en que compañeros sufrieron y padecieron la cárcel, la persecución, las consecuencias más terribles de los procesos dictatoriales que se vivieron en nuestro país. En este sentido, quiero decir que la denominación debe cambiar, porque nosotros no

> estamos haciendo un acto de reparación para las víctimas sino para los héroes y mártires del campo nacional y popular que resistieron durante años cualquier acción tendiente a vulnerar los derechos del pueblo argentino. (Versión taquigráfica Honorable Cámara de Diputados de la Nación, HCDN, 35a. Reunión, 2a. Sesión ordinaria de prórroga, 3 de diciembre de 2008: 91).

En efecto, aun cuando la denominación heredada del régimen de memoria previo así como de los instrumentos legales forjados a la luz del paradigma de los derechos humanos sancionó la categoría de "víctima" para las leyes reparatorias, la caracterización de "mártires" y "héroes" se inserta de manera más coherente en la narrativa descripta arriba. Así este modo de delimitar a los "beneficiarios" por su adscripción al peronismo y su defensa del "campo nacional y popular" es también un modo de rechazar el carácter pasivo que la noción de "víctima" parecería traer aparejada y al mismo tiempo dotar al peronismo de un sentido épico. Este desplazamiento habla a las claras de hasta qué punto la aprobación de la ley constituía una batalla simbólica y no solamente una iniciativa de reparación material a los damnificados. En efecto, la cuestión del "reconocimiento moral" fue uno de los aspectos más reiterados en el debate en la Cámara de Senadores. De hecho, el día de la sesión se hicieron presentes en el recinto familiares y militantes que se inscribían en la "resistencia peronista", a quienes finalmente se les entregó un diploma. [62]

Ello explica por qué el desacuerdo con el proyecto de ley se centraba en el pronunciamiento de varios legisladores en contra del establecimiento del 16 de junio de 1955 como fecha de corte. Lo que estaba en discusión no remitía a las responsabilidades por los acontecimientos arriba señalados (tampoco a si constituía un deber del Estado nacional otorgar una reparación) sino a la pregunta sobre en qué fecha datar el inicio del *continuum* represivo, y en ese sentido, quiénes podían ser consagrados con el título de "víctima". Así el diputado Pedro Azcoiti (UCR) señalaba:

> Nosotros entendemos que es un error poner como fecha tope hacia atrás el 16 de junio del 55 o el 16 de septiembre del 55. Adelanto que estamos de acuerdo con esta iniciativa porque el Estado tiene la obligación de resarcir los daños y nosotros la obligación del reconocimiento moral. Pero me pregunto si antes de esa fecha no había militancia nacional y popular. ¿Acaso el 6 de septiembre de

[62] Véase las intervenciones de Osuna, Corregido, Parrilli en versión taquigráfica, Cámara de Senadores de la Nación, 18°Reunión, 14° Sesión ordinaria, 25 de noviembre de 2009.

> 1930 no cayeron muertos en la esquina de la confitería del Molino, bajo las balas golpistas, militantes radicales? (Aplausos) ¿A lo largo de nuestra historia no hubo violencia, represión y muerte que merezcan el reconocimiento moral de esta Cámara? Por estas razones, hemos presentado un despacho de minoría por el que extendemos hacia atrás, sin límite de tiempo, este reconocimiento. (Versión taquigráfica HCDN, 35a. Reunión, 2a. Sesión ordinaria de prórroga 3 de diciembre de 2008: 91).

Más allá de la evidencia de que el bloque de la Unión Cívica Radical se oponía a otorgar una reparación que tal como estaba prevista se dirigía a las víctimas de la "resistencia peronista", la intervención del diputado da cuenta del carácter hegemónico de la narrativa que proponía la ley. En efecto, desde el radicalismo no se trataba de negar este modo de concebir la historia nacional sino de incluirse en ella, anotando la presencia de militantes populares radicales que se enfrentaron al golpe de 1930. Así la propuesta de alargar el período hacia atrás no está destinada a cuestionar el carácter binario de la narrativa histórica sino sólo el papel protagónico que se le atribuía al peronismo. Tal vez por eso la propuesta del diputado resulta inviable en términos de política pública. En efecto, ¿cómo se determinarían en este caso las víctimas? ¿Quiénes serían los perpetradores? ¿Cómo se definiría el daño a reparar?

Sin embargo, la diputada Gil Lozano (Coalición Cívica) se pronunciaba en contra de la ley no sólo por el establecimiento de la fecha de corte sino por la intención de sancionar como un *continuum* el período que va desde 1955 a 1983. Para ello, en su intervención señaló la existencia de otras "víctimas no peronistas" o lo que resulta aún más incómodo para la narrativa descripta arriba, de militantes peronistas que fueron víctimas de acciones impulsadas por el peronismo en el poder:

> Si queremos equiparar terrorismo de Estado con golpe de Estado o Estado de sitio, ¿qué deberíamos hacer con las víctimas de la masacre de Ezeiza del 20 de junio de 1973? ¿Qué debemos decir de los fusilados, torturados, amenazados por la organización que comandaba José López Rega, ministro de Bienestar Social ya desde la época de Cámpora? ¿Nos olvidaremos también de los asesinados y perseguidos por el Comando Moralizador Pío XII y por el Comando Anticomunista, surgidos ambos a mediados de 1974 en la provincia de Mendoza y vinculados al jefe de la policía provincial? ¿O vamos a silenciar en este debate que el 24 de enero de 1974, bajo la Presidencia de Perón, se aprobó en este Congreso la reforma del Código Penal impulsada por el Poder Ejecutivo que incluía nuevas

> figuras represivas y a su vez reponía en versión corregida y aumentada los tipos penales de la dictadura denominada la Revolución Argentina de Onganía? (Versión taquigráfica HCDN, 35a. Reunión, 2a. Sesión ordinaria de prórroga 3 de diciembre de 2008: 93).

La diputada Morandini (Frente Amplio Progresista), por su parte, esgrimió un argumento diferente según el cual las leyes reparatorias sancionadas anteriormente (esto es las Leyes 24.043 y 24.411) al no establecer una fecha de inicio incluían de hecho "a las víctimas del '55 y a las de la Década Infame". Según Morandini, la omisión de la fecha de inicio de las Leyes 24.043 y 24.411 era motivo suficiente para entender que las mismas preveían otorgar reparaciones a las víctimas de los sucesos de los cuales se discutía en la sesión y que en todo caso, su aplicación restrictiva a casos vinculados con el accionar del terrorismo de Estado era producto de una decisión infundada de la autoridad de aplicación.[63] Puede decirse que se trataba de un giro argumentativo algo tendencioso ya que no era tal el espíritu de las leyes mencionadas. En efecto, las mismas se proponían como parte de las reparaciones debidas del Estado por las violaciones a los derechos humanos acaecidas durante la última dictadura militar y habían sido sancionadas en parte como respuesta del gobierno frente al Informe 28/92 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que recomendaba, entre otras cosas, reparar económicamente a las víctimas.[64]

Teniendo en cuenta estos debates es posible extraer algunas conclusiones. Por un lado, lo cierto es que los argumentos presentados por los legisladores así como la superposición de casos y períodos (que se repetiría en ocasión de la sanción del régimen reparatorio para ex presos políticos según la Ley 26.913) puede comprenderse como derivada de la ausencia de una política reparatoria integral que estableciera límites y figuras más precisas. Esto se debe, a su vez, a que las leyes reparatorias fueron sancionadas respondiendo a variados factores: las presiones externas –como en el caso de la CIDH–, las demandas de diferentes sectores del movimiento de derechos humanos, así como a los "vaivenes y tensiones" de los gobiernos en su relación con el pasado (Alonso, 2009).

[63] En rigor la primera sí reglamentaba una fecha de inicio, como hemos visto.
[64] Nos referimos al Informe anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 1992-1993, OEA/Ser.L/V/II.83, 12/03/93 Disponible en: www.oas.org.

Por otro lado y de un modo tal vez más fundamental, las disputas que se dieron en torno a la periodización de la Ley 25.564 muestran de qué modo los límites y sentidos de la categoría de "víctima del terrorismo de Estado" se fueron transformando progresivamente tanto en sus fronteras temporales como sociales (Vecchioli, 2013). La presentación periódica de proyectos de ley destinados a reparar a familiares de personas que fueron víctimas de acciones armadas[65] o incluso la discusión renovada sobre el proyecto de "ley de exiliados", son un índice de hasta qué punto las fronteras de dichas categorías continúan en disputa. Así lo que queda en evidencia en este *racconto* es cómo la inclusión de nuevas figuras, acontecimientos y períodos permanece atada a la correlación de fuerzas y al corrimiento de los límites que los propios actores puedan imponer respecto del régimen de memoria dominante.

En este caso y según la perspectiva que proponemos, la delimitación del período que ofrece la Ley 26.564 y el Decreto n°1199 que sanciona lo actuado por la Comisión evidencia dos cuestiones que se hallan entrelazadas: por un lado, una correlación de fuerzas favorable a la identificación del peronismo como principal blanco del accionar represivo del Estado (recordemos que la ley fue aprobada gracias a la mayoría kirchnerista y sus aliados en ambas cámaras)[66] pero además, como dijimos, un proceso activo de encuadramiento de las memorias encarado por este mismo bloque (y en relación con el decreto, por el Poder Ejecutivo) cuya novedosa relectura consistía en interpretar en

[65] A fines del año 2012 recibió media sanción en la Cámara de Diputados de la Nación un proyecto de ley que se proponía otorgar el reconocimiento del carácter de víctima y una indemnización a los familiares de los miembros de las fuerzas de seguridad y defensa que murieron como consecuencia del intento de copamiento del Regimiento de Infantería de Monte de Formosa producido por la organización Montoneros durante el gobierno constitucional de Isabel M. de Perón. Otro proyecto, que no ha sido tratado, aspira a otorgar una indemnización a las "personas fallecidas o con lesiones graves por el accionar de grupos terrorista subversivos en el período 1960-1989", incluyendo una nómina de organizaciones comprendidas como "terroristas". Véase Honorable Cámara de Diputados de la Nación. Expediente 6042-2012. Trámite parlamentario 112 (29/08/2012). Ambos proyectos citados en Vecchioli, 2013.

[66] El bloque de diputados de la Unión Cívica Radical se abstuvo de la votación. Véase HCDN, Exp. 412-D-08, Orden del Día 1372, votación en General, 03/12/2008. A excepción de Massei, Oscar Ermelindo Frente para la Victoria, PJ Neuquén, quien se abstuvo, todo el peronismo representado por el Partido Justicialista y el Frente para la Victoria votó afirmativamente. En la Cámara de Senadores, la UCR había apoyado un dictamen de minoría que proponía eliminar la fecha de corte del 16 de junio de 1955. Durante el debate en el recinto el dictamen fue retirado y el bloque radical decidió apoyar el dictamen de mayoría para que el proyecto no volviera a la Cámara de Diputados. El mismo fue finalmente aprobado por 53 votos afirmativos y una abstención de la Senadora Estenssoro (Coalición Cívica). Véase la versión taquigráfica – Cámara de Senadores de la Nación, 18°Reunión, 14° Sesión ordinaria, 25 de noviembre de 2009.

clave de “terrorismo de Estado” con sus respectivas “víctimas” la sucesión de órdenes institucionales (y sus interrupciones) que se dieron en la Argentina desde mediados de siglo XX. En ese sentido así como la Ley 26.564 da existencia jurídica y reconocimiento moral a la categoría de “víctima del plan CONINTES” o “víctima del golpe militar de 1955”, el Decreto n° 1199 que sancionó lo actuado por la Comisión instituye la figura del “trabajador estatal víctima del terrorismo de Estado” en el marco de una relectura del pasado reciente donde 1955 – 1983 representan un bloque temporal unificado.[67] En términos prácticos, esto tendrá su impacto en la “peronización” (Alonso, 2006; 2011) de las prácticas de homenaje que analizaremos en el capítulo siguiente y de forma más general, en los límites que se fueron trazando en torno a la “comunidad de recuerdo” que sostenía y dotaba de sentido la reparación propuesta por la Comisión.

[67]Resulta de interés señalar otra deriva de la institución de la figura del “trabajador estatal desaparecido” al ámbito privado. En abril de 2015 el Frente para la Victoria presentó un proyecto de ley que apuntaba a la reparación de los legajos de los “trabajadores de empresas privadas que fueron víctimas del terrorismo de Estado” (HCDN, N° de expediente 1736-D-2015) utilizando en su artículo sexto la misma periodización propuesta en el decreto n°1199 y la ley 26.564 (en el artículo primero, por el contrario, la fecha que se establece es la del 6 de noviembre de 1974, “cuando fue decretado el estado de sitio que continuó vigente hasta el 10 de diciembre de 1983”). En este caso, se proponía la inscripción de la condición de “detenido-desaparecido” en los legajos laborales de los trabajadores “que revistaban al momento de su desaparición como personal en relación de dependencia del sector privado, aun cuando figurasen desvinculados por cualquier otra causa”, y se establecía como responsabilidad de los empleadores llevar adelante dicha rectificación. El proyecto obtuvo dictamen favorable en las Comisiones de Derechos Humanos y Garantías y de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados de la Nación pero no llegó a ser tratado en el recinto. De acuerdo con los fundamentos, el proyecto de ley constituía un modo a través del cual “El Honorable Congreso de la Nación de cara a la sociedad cumple […] en establecer una normativa para la reconstrucción de la memoria del movimiento obrero argentino”. Esta formulación que incluye como destinatario de la reparación de los legajos otra entidad colectiva cuya incumbencia tampoco era reconocida en el marco de las leyes reparatorias (las mismas no mencionan de ningún modo al movimiento obrero) funciona como una muestra del modo en que las clasificaciones instituidas por los instrumentos legales preexistentes pueden generar nuevas acciones y variados efectos de sentido. Así, aun cuando la iniciativa no haya progresado la presentación del proyecto resulta un ejemplo adicional de las tensiones y transformaciones de algunos aspectos de la narrativa del pasado reciente.

Capítulo 3: La puesta en escena de una narrativa de la memoria: la conformación de una "comunidad de recuerdo"[68]

3.1. Introducción

Los actos de recuerdo o conmemoración sobre el terrorismo de Estado han adoptado diversas formas a lo largo del tiempo. Su variación ha acompañado los momentos de "auge" y de "latencia" de las disputas en torno del pasado reciente y también ha reflejado los cambios en la actitud de las diferentes gestiones estatales (Valdez, 2004). Durante los gobiernos kirchneristas el protagonismo en la organización de actos conmemorativos así como en otros aspectos de las denominadas "políticas de memoria" fue progresivamente asumido por el Estado en lo que constituía un proceso novedoso de articulación con sectores afines del movimiento de derechos humanos.

Dentro de este panorama, en este capítulo nos proponemos analizar el conjunto de los actos conmemorativos realizados y/o promovidos por la Comisión de Trabajo por la Reconstrucción de Nuestra Identidad en el marco de la política de reparación de legajos laborales de empleados desaparecidos prevista por el Decreto nº 1199. En ellos, se recordó a los ex-empleados y empleadas y se hizo entrega de los legajos reparados a sus familiares. Desde fines de 2013 a fines de 2015 se llevaron a cabo más de veinticinco actos en los que participaron, en la mayoría de los casos, los máximos representantes de cada organismo (ministros, directores, secretarios, etc.), además de organismos de derechos humanos, sindicatos, empleados actuales de la APN y familiares. Este análisis nos permitirá mostrar una serie de transformaciones que se dieron en los modos de narrar el pasado reciente al interior de la Administración Pública Nacional durante el último gobierno de Cristina Fernández, en continuidad con la conformación de una "comunidad de recuerdo" según la hemos identificado en el capítulo anterior: ¿cómo se

[68] Una versión anterior y resumida de este capítulo fue publicada en Balé, C. (2018). La construcción de una 'comunidad de recuerdo': los actos conmemorativos de 'reparación' de legajos laborales de empleados estatales desaparecidos y las transformaciones en la narrativa en torno al pasado reciente argentino. En *Sociohistórica*. vol.e044 n°41. La Plata: Universidad Nacional de La Plata, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación.

representó a los “trabajadores estatales desaparecidos” en los “actos homenaje”? ¿Qué vínculos se establecieron entre estas representaciones y las identidades políticas de los homenajeados? ¿De qué modo se vinculan estas representaciones con los sentidos otorgados al Estado y a los trabajadores estatales en el presente?

Con ese propósito, dividiremos la exposición en dos partes: por un lado realizaremos algunas indicaciones sobre las formas de organización de los “actos homenaje” tratando de dar cuenta de los diferentes actores que intervinieron en ellos así como de las modalidades y los efectos generados por su participación. Por otro lado, analizaremos la puesta en escena de los actos conmemorativos prestando especial atención a los tópicos discursivos que se reiteraron y especialmente a la narrativa construida en torno a la rememoración de los empleados estatales desaparecidos. En una segunda parte del capítulo, trabajaremos en clave de “memorias disonantes” un conjunto de cuestiones que resultan difícilmente inscribibles en la práctica de memoria propuesta por la Comisión y que constituyen un límite de la “comunidad de recuerdo” trazada en los actos conmemorativos.

Como hemos indicado, hemos trabajado con entrevistas orales semi-estructuradas y abiertas realizadas con los miembros de la Comisión así como a diferentes funcionarios y colaboradores. Los actos conmemorativos, por otra parte, fueron registrados mediante técnica de observación participante con grabación sonora y fotografías. Esta técnica nos permitió apreciar los sentidos dominantes en cada una de las conmemoraciones, los diferentes grados de emotividad o “mística” que se recreaban en ellas, así como la relación de los diferentes auditorios con las agencias en las que se llevaban a cabo los actos y los funcionarios involucrados. Asimismo, hemos recurrido al análisis de la normativa pertinente y prensa gráfica cuando lo consideramos necesario.

3.2. El papel de los funcionarios en los actos conmemorativos

Como hemos adelantado, los actos conmemorativos que analizaremos aquí se llevaron a cabo entre diciembre de 2013 y noviembre de 2015 en diferentes dependencias que componen la Administración Pública Nacional. Con sus variaciones estos actos tuvieron como objetivo homenajear a los

trabajadores estatales que fueron víctimas de desaparición forzada o asesinato así como entregar sus legajos laborales “reparados” a sus familiares. Específicamente, el análisis que realizamos en este apartado se basa en el registro de siete actos conmemorativos de un total de veinticinco. Estos fueron los actos realizados en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, Dirección Nacional de Vialidad, Ministerio de Salud y Ministerio de Desarrollo social, Ministerio de Economía, Instituto de Ayuda Financiera para el Pago de Retiros y Pensiones Militares, Sindicato de Trabajadores Judiciales y Hospital Nacional “Profesor Alejandro Posadas”. Incluimos también el acto homenaje a los trabajadores desaparecidos de Empresa Nacional de Correos y Telégrafos que se llevó a cabo en el Centro Cultural Kirchner el 14 de noviembre de 2015, aunque su objetivo no era la entrega de legajos sino la colocación de baldosas conmemorativas.

Una primera cuestión a tener en cuenta es que si bien los diferentes actos contaron con la participación de algunas entidades sindicales y el apoyo de algunos de los organismos de derechos humanos, una de las particularidades que asumió el proceso de reparación y entrega de los legajos laborales es que la organización de los actos conmemorativos fue responsabilidad de las autoridades de cada una de las dependencias.[69] Según lo establecía el Decreto n°1199 la autoridad superior del organismo en la cual se localizara el legajo laboral a reparar debía producir su “enmienda material” incorporando al mismo una resolución conjunta de la Secretaría de Gabinete y Coordinación Administrativa y la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Según lo dispone el decreto, el legajo así “reparado” debía ser entregado a la familia de la víctima con participación de la Comisión de Trabajo por la Reconstrucción de Nuestra Identidad y a su vez remitido en copia al Archivo Nacional de la Memoria.

La participación de diferentes actores y a su vez, la centralidad de las autoridades en la realización de los actos conmemorativos supuso diversas consecuencias. En términos prácticos es posible señalar que la participación de

[69] La variedad en las modalidades organizativas así como la autonomía de cada una de las dependencias a la hora de cumplimentar el Decreto n° 1199/12 es indicativa del carácter heterogéneo y multiforme de aquello que llamamos “Estado”. Aunque, como veremos, dicha noción aparece como una entidad uniforme en los discursos y representaciones que aquí analizamos.

los funcionarios de las diferentes dependencias condicionó el formato de los actos que se realizaron según una modalidad fuertemente protocolar. Las principales excepciones fueron los actos que se realizaron en la Escuela Secundaria 9 "Justo José de Urquiza" de San Nicolás, Provincia de Buenos Aires, en homenaje a la docente Irma Zucchi y el acto realizado por el Sindicato de Trabajadores Judiciales (SITRAJU) ya que ambos se realizaron al menos en parte en la vía pública y fueron convocados por diferentes actores sociales además de la Comisión.[70] En el resto de los casos los actos se realizaron al interior de los organismos o Ministerios con una convocatoria cerrada que se organizaba en torno a la agenda del funcionario correspondiente. Esto determinó que hubiera demoras, postergaciones e incluso superposiciones, es decir, que se realizaran dos actos conmemorativos en dos dependencias diferentes en el mismo horario. Por otra parte el nivel de articulación que se alcanzara entre los diferentes actores involucrados, entre los que cabe incluir no sólo a los funcionarios sino también a los familiares de las víctimas, los sindicatos, las “comisiones de memoria” preexistentes en algunos organismos (por ejemplo la “Comisión de Reparación Histórica de los trabajadores de INTA” o la “Comisión por la Memoria, la Verdad y la Justicia” del Ministerio de Economía) y los empleados actuales de las dependencias, influyó decisivamente en los modos de distribución de la palabra (es decir, en la definición de quiénes serían los oradores) así como en la masividad y envergadura de las convocatorias. Ello condicionó a su vez la posibilidad de que se singularizara de manera más o menos concreta la identidad de los homenajeados, es decir, que se pudieran indicar aspectos de sus desempeños en los organismos, sus militancias políticas o gremiales, sus vidas familiares, etc., más allá de su clasificación genérica como “trabajadores estatales”. Esta posibilidad de singularización estuvo atada a su vez a la cantidad de

[70] El acto realizado en San Nicolás fue organizado y convocado conjuntamente con la Mesa de la Memoria por la Justicia de San Nicolás, el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (SUTEBA) y el Ministerio de Educación de la Nación el 15 de septiembre de 2015. En dicho acto, se entregó el legajo reparado de la docente a sus familiares y se colocó en la vereda del colegio una baldosa conmemorativa construida por alumnos de la institución. En el caso de SITRAJU el acto se llevó a cabo frente al edificio del Consejo de la Magistratura en homenaje a diecinueve empleados judiciales asesinados o desaparecidos por la dictadura militar. En este caso, fue la comisión de derechos humanos del sindicato la que impulsó la reparación de los legajos ya que su corrección no estaba contemplada por el Decreto n°1199 (el mismo se restringía a los trabajadores de la Administración Pública).

trabajadores recordados en cada acto cuyo número también era variable. De un total de veinticinco actos, en quince de ellos los homenajes eran individuales o por pares, mientras que en el resto podían ser grupos que iban de cuatro a cuarenta y dos (siendo esta última la cantidad de trabajadores homenajeados en el acto realizado en la sede de la compañía Yacimientos Petrolíferos Fiscales).

Por otra parte se debe tener en cuenta que el papel preponderante de la voluntad política de las autoridades de las agencias estatales generó que la realización de las conmemoraciones no siguiera un orden prefijado sino que estas fueran realizándose a medida que aparecían los actores interesados y se lograba captar el interés de las autoridades involucradas.[71] Por eso, si bien la política de reparación documental ordenada por el decreto entró en vigencia en el año 2012, la mayoría de los actos se realizaron en los dos últimos años de gobierno de Cristina Fernández de Kirchner: en 2014 se realizaron nueve "actos homenaje" de los cuales tres contaron con la participación de ministros. Al año siguiente el total de actos realizados ascendió a quince, con nueve participaciones ministeriales y la presencia frecuente del Secretario de Derechos Humanos de la Nación. Parte de este crecimiento se vincula con la visibilidad que la tarea de la Comisión fue alcanzando al interior de la Administración Pública Nacional y también con un contexto signado por la cercanía de las elecciones presidenciales. En efecto, como hemos indicado, desde el comienzo de la campaña electoral el 20 de septiembre de 2015 hasta el *ballotage* del 22 de noviembre se realizaron seis de los quince actos realizados en ese año.

En este sentido, es destacable que uno de los principales obstáculos que enfrentó la Comisión para la concreción de los actos radicó en que los funcionarios apreciaran la relevancia de la reparación y sus beneficios simbólicos en un contexto dominado por cuestiones de coyuntura. Según el relato de Mariana, encargada de la articulación institucional de la Comisión con

[71] Esto explica también que los primeros ciento veintidós legajos cuya reparación se preveía en el Decreto n°1199 no necesariamente se encuentran entre los primeros que fueron entregados a las familias en los actos conmemorativos (Resolución n° 493, Secretaría de Gabinete y Coordinación Administrativa (SGCA), 4 de diciembre de 2012. *BO*, 6 de diciembre 2012). Por lo que pudimos relevar se han entregado públicamente alrededor de cincuenta. También ha habido organismos donde se realizaron dos actos conmemorativos a raíz de la localización de nuevos casos. Esto ha ocurrido en Aerolíneas Argentinas, en la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) y en el Ministerio de Economía de la Nación.

otros organismos y dependencias: “[los funcionarios] entienden el tema el día del acto o el día que toman contacto con los familiares, hasta que ellos no toman contacto es que no lo pueden ver…”.[72] Más aun, tal como la oradora de la Comisión se encargaba de señalar a la hora de hablar en los actos conmemorativos, la importancia simbólica de rectificar la información contenida en el legajo debía ser continuamente resaltada.

En esa línea es importante señalar que si bien el decreto ordenaba la reparación para todas las entidades que conformaban la APN, la realización del acto conmemorativo no fue una política seguida de manera uniforme por todos los organismos. Hasta noviembre de 2015 tres de los doce Ministerios en funcionamiento no habían estado involucrados en ningún acto conmemorativo de reparación de legajos (estos son Ministerio del Interior, Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Seguridad) y en lo que se refiere a la administración descentralizada sólo habían concretado reparaciones diecisiete organismos de un total aproximado de ochenta. Si bien no es posible afirmar que todas ellas tuvieran legajos laborales pendientes de reparación (de hecho, algunas no existían en tiempos de la dictadura militar) las cifras dan cuenta del modo en que la realización de las conmemoraciones no constituía un mero trámite administrativo – burocrático sino que portaba otras significaciones. El hecho de que no todos los organismos del Estado cumplieron con lo ordenado por el decreto y además no lo hicieron con el mismo nivel de adhesión a la causa, involucramiento personal, celeridad, etc., nos permite afirmar no sólo que el Estado está lejos de constituirse como un bloque homogéneo, sino que la participación de los funcionarios en los actos conmemorativos portaba significaciones vinculadas tanto con el pasado como con el lugar que el recuerdo de ese pasado ocupaba en el presente de la gestión.

Para pensar este punto resulta útil recurrir al análisis de las conmemoraciones en términos de su carácter performativo. Como señala Schindel, las conmemoraciones pueden ser consideradas prácticas performativas en la medida en que en ellas el recuerdo no se materializa en una tercera instancia —como en la construcción de museos y memoriales— sino que se realiza en sí mismo. Según esta perspectiva en los actos

[72] Entrevista de la autora con Mariana, integrante de la Comisión de Trabajo por la Reconstrucción de Nuestra Identidad, 2 de septiembre de 2015.

conmemorativos “la memoria es menos un relato apoyado en soportes diversos que un compromiso del cuerpo y un modo alerta de la conciencia; no un contenido a ser transmitido sino un acontecimiento colectivo” (2009: 84). En ese sentido es importante considerar que la participación en los actos como acontecimientos colectivos conlleva por sí misma un conjunto de significaciones vinculadas a la identidad de quienes conmemoran, independientemente de que, como sucedía en los casos analizados, el objeto del mismo se centrara en una inscripción o un soporte material como el legajo laboral. Como lo analizaremos a continuación, estas significaciones se expresan tanto en las diferentes intervenciones orales como en el conjunto de acciones rituales que daban forma a la conmemoración. Al respecto, nuestra hipótesis es que para las distintas agencias y ministerios que concretaron el acto conmemorativo, su realización constituía una práctica que permitía a los funcionarios legitimar su vínculo con la “cuestión de la memoria” o “los derechos humanos” y al mismo tiempo performativizar la propia inscripción en el proceso político kirchnerista que, como estamos analizando, no sólo estaba en el centro de la práctica de memoria propuesta por la Comisión, sino también de la narrativa propuesta en las conmemoraciones.

Por otra parte, el análisis del ritual tal como estaba contenido en los actos conmemorativos resulta valioso a la hora de identificar cuáles son los límites que se trazaban en torno a la identidad de quiénes conmemoran y la construcción de un “nosotros” con legitimidad para recordar (Jelin, 2002). Al hablar de ritos o “acciones rituales” (Geertz, 1992; V. Turner, 1988) nos referimos a conductas específicas (palabras, actos, gestos y secuencias estructuradas) que resultan capaces de generar conciencia de identidad en un determinado grupo o colectivo. Dicho de otro modo, la apelación a un conjunto de elementos o símbolos que se distinguen por su capacidad performativa permiten, en el contexto de la acción ritual, celebrar la pertenencia a un grupo determinado (Rementería Arruza, 2006).

En ese sentido, es posible señalar una serie de conductas que se repetían en los diferentes actos conmemorativos que tuvimos ocasión de registrar. Usualmente los actos comenzaban con la presentación de un locutor o locutora que conducía la ceremonia y la inscribía en el marco normativo del

Decreto n°1199.[73] Luego seguía la entonación del himno nacional. En tercer lugar se hacían los saludos y nombramientos de las autoridades presentes según una modalidad protocolar. A continuación se escuchaban los discursos de los oradores que solían ser Carolina (integrante de la Comisión de Trabajo por la Reconstrucción de Nuestra Identidad e hija de un trabajador estatal desaparecido), las autoridades del organismo correspondiente, un representante de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y en ocasiones algún familiar. Luego de los discursos se procedía al sellado de legajos laborales con la leyenda "Legajo reparado. Decreto 1199/2012" y la entrega a las familias presentes. Para finalizar se tomaban fotografías oficiales y a veces se incluía el descubrimiento de placas alusivas que podía realizarse al comienzo o al final del acto. Además era frecuente la entrega de folletería por parte de la Comisión para difundir su tarea y en algunos casos la exposición de fotografías de las personas que iban a ser recordadas. Antes de que el acto finalizara, era usual que algún integrante de la Comisión pronunciara una conocida consigna acuñada por el movimiento de derechos humanos: "¡30.000 compañeros desaparecidos, presentes! Ahora y siempre", con la correspondiente respuesta de los asistentes.

De esta serie de pasos es posible destacar el solapamiento de dos series de ritualidades: mientras la presencia de un locutor, la entonación del himno nacional, el sellado de legajos y los saludos protocolares remiten a una escenografía de lo oficial (Bourdieu, 2014) otras pautas como la exposición de fotografías, la palabra de familiares e incluso la consigna mencionada son prácticas más frecuentes en las conmemoraciones organizadas por los organismos de derechos humanos sin participación estatal. Este solapamiento habla de la porosidad existente entre las agencias estatales y los mencionados organismos según la hemos mencionado en el capítulo anterior, pero también de un sentido relativo a la identidad de quienes conmemoran: se trata de funcionarios y agentes de la Administración Pública Nacional pero también de "militantes" o "compañeros" de los homenajeados; en suma, de sujetos que se

[73] Por lo general la fórmula seguida por los locutores era: "En el marco de la política de Estado "memoria, verdad y justicia", iniciada el 25 de mayo de 2003, el gobierno nacional ha dispuesto mediante el Decreto presidencial n°1199 del 19 de julio de 2012 el relevamiento y reparación material de los legajos de los empleados de la Administración Pública Nacional desaparecidos u asesinados entre 1955 y 1983" (Locutor, Acto en el Ministerio de Salud, 4 de agosto de 2015)

perciben como comprometidos con la “causa de los derechos humanos” de manera previa o independiente a su responsabilidad institucional. En ese sentido, la mera presencia de los “funcionarios/compañeros” en los actos conmemorativos supone una transformación del modo en que quienes recuerdan se perciben y son percibidos. A contrapelo de la dinámica confrontativa que signó por mucho tiempo la relación del movimiento de derechos humanos con distintos sectores del Estado nacional (así como de los Estados provinciales y municipales) no hay aquí una oposición entre militantes y agentes estatales: la práctica de memoria los incluye a ambos en una relación de legitimación recíproca, o como lo hemos dicho, en una relación de continuidad entre la causa de la “memoria” y la pertenencia o identificación al “proyecto político kirchnerista”.

Al mismo tiempo, cabe notar que este solapamiento no está ausente de tensiones. Elementos como la bandera y el himno nacional, la enumeración de los cargos que detentan las autoridades así como el sello que se imprime a los legajos laborales, remiten a una “escenografía de lo oficial” o a una “teatralización” que es propia del Estado como invención organizativa. Sin embargo, estas “verdades públicas” u oficiales que se suponen inscriptas en el orden social (Bourdieu, 2014) se ven tensionadas por otro conjunto de significaciones que aparecen en los “actos homenaje” y que antes que escenificar acuerdos suponen, como veremos, contenidos específicos de adhesión a una determinada identidad política. Así, la construcción de un “nosotros” que recuerda supone una suerte de superposición entre un conjunto de reivindicaciones y sentidos particulares (vinculados a la inscripción de una memoria afín al “proyecto político kirchnerista”) sostenidos desde un escenario que *prima fascie* adquiere su potencia nominativa bajo la escenografía de lo oficial. Dicho de otro modo, si es cierto que como señala Bourdieu la performatividad del ritual se sostiene sobre la autoridad de quien lo enuncia (Bourdieu, 1985) asistimos aquí a una suerte de refuerzo entre dos lógicas que si bien no son necesariamente contradictorias, ciertamente no pueden considerarse equivalentes: por un lado, aquella legitimidad que proviene de la adscripción a la “causa de la memoria” desde una perspectiva “militante” y por otro, la autoridad inherente a la posición del funcionario como “delegado”. En varios sentidos, la convivencia entre ambas (o en otros términos, este modo

"militante" de habitar el Estado según el cual los/as funcionarios/as son también activistas de la causa) constituye, como lo veremos también más adelante, una matriz que signó la producción de "políticas de memoria" durante los gobiernos kirchneristas y que, por contrapartida, sería uno de los principales blancos de críticas de la oposición.[74]

Teniendo en cuenta esto, la presencia de los funcionarios generaba a su vez un doble efecto: por un lado sancionaba el aval institucional a la tarea de reconocimiento de los trabajadores desaparecidos e introducía la cuestión del terrorismo de Estado en diversas reparticiones al interior de la APN por primera vez. Este efecto se potenciaba en los casos en que se preveía la interrupción de las actividades laborales y/o se invitaba a los empleados de los organismos a asistir al acto conmemorativo. Por otro lado, como adelantamos, la participación de los funcionarios performativizaba o ponía en acto la propia identidad política. Por eso a la hora de explicar su creciente participación señalaba uno de los integrantes de la Comisión:

> [Esa participación] es de ahora, es de este año. Evidentemente la temática se hizo visible. Y al ver la temática y si se llega a un entorno que lo pueda transmitir al ministro, capaz que se suman o les gusta, o evidentemente estamos en un momento en el Estado donde los ministros están comprometidos con esa temática. (Entrevista a Joaquín, 3 de julio de 2015)

La noción de "compromiso" aparece nuevamente como una clave cargada de significación en la medida en que, como vimos, no se trata de una noción abstracta sino que se encuentra ligada a la pertenencia de los funcionarios al espacio político kirchnerista (el "proyecto nacional y popular") y sobre todo al desarrollo de las denominadas "políticas de memoria, verdad y justicia".[75] En términos de Montero, ello evidencia la proyección de un *ethos* militante en el discurso kirchnerista que "se figura como la encarnación de un legado y un mandato heredados del pasado y que enraíza su práctica política en valores, ideas, convicciones, modos de hacer y de decir la política que lo preceden y lo constituyen" (2012: 296). Una vez más, vemos que esta

[74] Revisaremos estas críticas que se enuncian en términos de "sectarismo", "uso político" u "apropiación de la memoria" en el capítulo siete.

[75] Entrevista de la autora a Mariana, integrante de la Comisión de Trabajo por la Reconstrucción de Nuestra Identidad, 2 de septiembre de 2015.

modalidad militante ocupa el imaginario de los agentes estatales respecto de sus tareas: aun cuando la reparación de los legajos laborales constituyera una obligación conforme el Decreto n°1199, la participación de los funcionarios en el proceso es interpretada como un signo de adhesión a un determinado proyecto político antes que como la expresión de una responsabilidad institucional. En ese sentido la presencia de los funcionarios en las conmemoraciones pone en escena la pertenencia a un espacio político que se ve reforzada por el hecho de que como lo señalamos arriba no todos los organismos del Estado cumplimentaron con lo ordenado por el decreto y ciertamente no todos los hicieron con el mismo nivel de adhesión a la política.

A su vez debe considerarse que la presencia de los ministros y otras autoridades adquiere un valor distintivo si se lo compara con el papel que tenían funcionarios de gobiernos anteriores en cuanto a su presencia en actos conmemorativos.[76] El hecho de que los funcionarios de la gestión kirchnerista protagonizaran junto con familiares de desaparecidos un espacio de conmemoración y homenaje al interior del Estado nacional constituyó una novedad significativa, ya que resultaba un modo simbólico de sancionar la cesura entre un "Estado terrorista" o un "Estado ausente" —tal era la representación compartida en estos actos sobre el rol del Estado en la década del noventa— y el "Estado kirchnerista". En el marco de estos actos, los funcionarios en el gobierno no eran ya calificados como "cómplices" o "responsables" de la impunidad de la dictadura (en parte gracias al desarrollo de los juicios por crímenes de lesa humanidad) ni eran identificados directamente con la faz represiva del Estado, sino que se integraban dentro de la narrativa de la memoria sostenida por los organismos de derechos humanos al tiempo que la tensionaban y la modificaban.

En este sentido en los actos conmemorativos circulaba una representación del Estado según la cual el mismo se constituía por quienes fueron "compañeros" de las víctimas o bien por funcionarios más jóvenes que

[76] Por ejemplo en julio de 1999 en ocasión de la colocación de la piedra fundamental del Monumento a las víctimas de Terrorismo de Estado en el Parque de la Memoria en la Ciudad de Buenos Aires, las madres de desaparecidos agrupadas en la Asociación Madres de Plaza de Mayo, algunos miembros de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos y de H.I.J.O.S insultaron a los legisladores y miembros de partidos políticos por considerar que pertenecían a las mismas fuerzas políticas que votaron las leyes de Punto Final y Obediencia Debida. Véase Valdez, 2003.

compartían con aquella “generación diezmada” la lucha por determinados “valores” y “convicciones”. Siguiendo este hilo, podríamos decir que lo que se recordaba en los “actos homenaje” no era sólo la ausencia de los trabajadores desaparecidos sino la reactualización de un mandato heredado de la “militancia setentista” que se renovaba en el presente. Se trataba así de la puesta en escena de una vuelta o un retorno: quienes ocupaban los resortes del Estado se percibían como herederos de “los 30.000 compañeros desaparecidos” constituyéndose de este modo como sujetos legítimos para recordar.

De manera simultánea puede señalarse que la participación de los funcionarios en los actos homenaje implicó además la puesta en escena de un reconocimiento de la responsabilidad del Estado en el ocultamiento de lo sucedido con los trabajadores y en última instancia en su desaparición forzada o asesinato. Este reconocimiento puede ser leído como una réplica a menor escala del pedido de perdón que formuló el entonces presidente Néstor Kirchner en la ex – ESMA en ocasión del traspaso de dicho predio al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el 24 de marzo de 2004. Allí Kirchner no sólo se inscribió explícitamente “en esa «generación» de jóvenes militantes cuyas prácticas, valores, ideales, creencias y sentidos de la política reivindica” (Montero, 2012: 91) —de un modo similar a como lo haría luego el conjunto de funcionarios kirchneristas cuyos discursos pudimos registrar en los “actos homenaje” — sino que además inauguraba una nueva gestualidad del Estado nacional respecto de los crímenes del pasado (Lvovich y Bisquert, 2008). En efecto al menos cuatro funcionarios remedaron ese gesto en los actos conmemorativos pidiendo perdón a los familiares por haber mantenido la adulteración documental de los legajos durante todos estos años de democracia.[77]

Teniendo en cuenta estos señalamientos la participación activa de los funcionarios condensa al menos dos elementos que resultan centrales para comprender el carácter novedoso del régimen de memoria en el que se inserta

[77] Estos fueron: la presidenta del consejo de la magistratura Gabriela Vázquez, el presidente de Aerolíneas Argentinas Mariano Recalde, el CEO de YPF Miguel Galuccio y la presidente de Casa de Moneda, Katia Daura. La intervención de Galuccio puede verse en línea en el canal de YPF en youtube: https://www.youtube.com/watch?v=gau2oCQz-ug (Fecha de consulta 15/05/2016)

la “reparación” de los legajos laborales y la comunidad de recuerdo que la sustenta: la construcción de un “nosotros” con legitimidad para recordar basada en la identificación del kirchnerismo como heredero de la “militancia setentista” y al mismo tiempo la instalación de una cesura respecto del Estado terrorista que, como lo ha señalado Montero para los usos de la memoria en los discursos del presidente Néstor Kirchner, se concibe en bloque junto con los gobiernos de la década del noventa. A continuación, analizaremos cómo estos elementos se reencuentran y resignifican en las intervenciones orales que pudimos relevar en los “actos homenaje”.

3.3. La puesta en escena de una narrativa de la memoria

Si bien la figura del “trabajador estatal desaparecido” constituía el objeto del homenaje, es necesario advertir que en la mayoría de los actos su configuración asumió un carácter abstracto. Las referencias a las tareas y/o trayectorias laborales de los homenajeados fueron escasas y sólo en algunos casos se mencionaron datos concretos sobre el rol que cumplían los trabajadores en cada uno de los organismos. Algo similar ocurrió con las menciones relativas a la participación gremial o sindical. Por otra parte, aunque la entrega de los legajos constituía el objetivo de la conmemoración, pocas veces se recurrió a ellos para reconstruir el universo laboral de los trabajadores. De hecho hasta la entrega efectiva del legajo muchos de los familiares desconocían su contenido. En uno de los casos en que se recurrió al legajo laboral la representación sobre dos trabajadoras desaparecidas discurría de este modo:

> Graciela entró a trabajar al I.A.F el 1 de abril de 1970, como empleada administrativa. Trabajó en distintas áreas del Instituto, en créditos hipotecarios, en el área de retiros y pensiones y en auditoría. Mientras estaba trabajando en el instituto se recibió de abogada en el año 1975 y luego comenzó a estudiar sociología. Como les decía, el 28 de diciembre de 1976 fue secuestrada de la puerta del Instituto, ella permanece desaparecida y los testimonios dan cuenta de que enero de 1977 se la ve en el centro clandestino de detención que funcionó en la ESMA. El directorio del I.A.F en el año 77 declara cesante a Graciela por abandonar su trabajo, sin causa justificada. A pesar de que los padres habían iniciado reclamos aquí en el Instituto diciendo que su hija faltaba de la casa y que desconocían el motivo. María Magdalena, empezó a trabajar en I.A.F el 21 de julio de 1974, también como empleada administrativa y

> el legajo da cuenta de que se desempeñó en el área de retiros y pensiones en el sector de intereses devengados. Ella presenta su renuncia el 23 de diciembre de 1976, renuncia que inmediatamente es aceptada por el directorio y ella también fue secuestrada el 28 de diciembre del 76. Graciela tenía 27 años al momento de su secuestro y María Magdalena 21 años, ella estaba estudiando psicología. (Presidenta del I.A.F, Ivana Besmalinovich, Acto en el I.A.F.P.R.P.M, 9 de noviembre de 2015)

Otro ejemplo puede leerse en la gacetilla interna que publicó el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) con ocasión de la realización del "acto homenaje" en el cual se entregaron los legajos de Alfredo Giorgi y María del Carmen Artero, el 4 de agosto del 2015:

> Alfredo tenía 33 años cuando fue detenido. Estaba casado y era doctor en química. Giorgi era investigador del Centro INTI-Plásticos y estaba realizando algunos desarrollos de punta para la época tal como materiales plásticos para un combustible líquido para cohetería y otro de encapsulado de microsensores. A Giorgi se lo llevaron el 27 de noviembre de 1978. (Gacetilla interna del INTI, s/f)

> María del Carmen Artero era secretaria del Centro INTI-Química y estaba de licencia cuando fue secuestrada el 11 de octubre de 1978 junto a su hija Carmen. La última vez que su hijo Pablo la vio fue en abril de 1978, seis meses antes de su desaparición. En septiembre de 1976, su casa donde vivía con su familia, fue atacada por la Policía Federal. Desde hacía un tiempo, María del Carmen sabía que corría peligro y buscaba refugio, ya que dos años antes había presenciado el asesinato del padre Mujica. Además, había participado del gremio y estaba al tanto de la persecución sindical que ocurría en aquellos años. A María del Carmen primero la llevaron al Centro Clandestino de Detención conocido como "El Banco" y luego a "El Olimpo" (Gacetilla interna del INTI, s/f)

En ambos ejemplos la presentación de los "trabajadores desaparecidos" se realizaba a partir de un conjunto de datos básicos que remite a una clasificación de tipo demográfica (según el género, la edad, el estado civil) y socio-ocupacional (empleo, estudios alcanzados). A su vez en ambos casos se mencionan datos vinculados a la materialidad del crimen: se presentan la fecha y el lugar del secuestro así como el lugar o centro clandestino de detención donde los trabajadores fueron vistos por última vez.[78]

[78]Esto resulta evidente también en la gacetilla interna producida por el Ministerio de Trabajo en ocasión del acto conmemorativo que se realizó el 26 de marzo de 2015, en la cual sólo se mencionaba que "se entregó el legajo "reparado" a los familiares de Guillermo Osvaldo Paryszewski, trabajador de la Delegación Córdoba del Ministerio, secuestrado y desaparecido".

Esta presentación sociodemográfica o socio ocupacional y vinculada a la materialidad del crimen es una modalidad de identificación que puede rastrearse tempranamente en los modos de representación desplegados por los familiares y organismos de derechos humanos en sus estrategias de resistencia a la dictadura así como por el posterior informe final de la CONADEP publicado en 1984. Como señala Crenzel (2010) en ese momento la incorporación de la narrativa humanitaria en la producción de denuncias generó, junto con otros factores, que se privilegiaran en la representación de los desaparecidos aquellos datos que referían a su carácter de individuos cuyos derechos humanos habían sido avasallados, antes que a su pertenencia política. En este marco fueron construidas *ex post facto* categorías que agrupaban a los desaparecidos según criterios no políticos como "los desaparecidos judíos", "los desaparecidos españoles", las "desaparecidas embarazadas", los "periodistas desaparecidos" (Crenzel, 2010: 73). Si bien eran comprensibles en el contexto de la transición, estos agrupamientos producían un efecto paradójico: al mismo tiempo que posibilitaban la difusión de las denuncias a nivel internacional, ocultaban simultáneamente las "razones políticas" por las cuales los desaparecidos fueron víctimas y la "matriz política selectiva" (73) que los había avasallado.

Teniendo en cuenta esto la figura del "trabajador estatal desaparecido" que analizamos aquí como categoría a ser recordada se inscribe también en un esquema narrativo que, a contrapelo de lo que venimos señalando, implica cierto soslayamiento de las claves políticas como modos de identificación y privilegia una presentación corporativa. Independientemente de las intenciones de los miembros de la Comisión (para quienes la reivindicación de la condición de "trabajadores" constituía una apuesta en sí misma) las dificultades a la hora de traer a la memoria la trama gremial y sindical así como la conflictividad social e histórica en la que estaban insertos los "trabajadores estatales" hace que la potencialidad evocativa de la categoría encuentre allí su límite. De un modo similar, la mención de las características sociodemográficas así como las referencias al secuestro y cautiverio (que, huelga aclararlo, no son exclusivas

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, *Gacetilla de prensa* "Tomada y Fresneda encabezaron acto de reparación histórica a trabajador desaparecido en la dictadura", Buenos Aires, 26 de marzo de 2015.

de los actos aquí analizados) hablan del modo en que la condición del *cuerpo vejado* continúa siendo el centro de la práctica de memoria. Incluso en estos actos cuya figura central es la del "trabajador estatal", la pérdida del trabajo no aparece como un daño digno de ser rememorado y atestiguado: lo que se recuerda o se conmemora no son las bajas, cesantías o renuncias forzadas sino que a la inversa, éstas adquieren sentido en la medida en que constituyeron un preludio a la desaparición.[79] Así se las menciona tanto en el Decreto n°1199 como en su reglamentación, cuando se indica que: "la baja, cese, suspensión, limitación de los servicios, el despido o la renuncia forzada de estos trabajadores, fue un mecanismo utilizado como forma de persecución política previa a la desaparición forzada o asesinato".[80] Dicho de otro modo, en continuidad con el relato memorial consagrado desde la transición a la democracia, el foco está puesto en la desaparición de un modo que omite otras formas de violencia perpetradas por el Estado ya no en su faz clandestina sino legal. Así la persecución en el ámbito laboral y/o la pérdida del trabajo permanecen por fuera de la narrativa instituida: no adquieren un peso por sí mismas sino cuando son puestas en relación con los crímenes del poder desaparecedor.

Por otra parte, así como la referencia a la condición de "trabajadores estatales" tuvo un carácter más bien nominal es posible señalar que las representaciones relativas a la militancia en los "actos homenaje" se caracterizaron, hasta cierto punto, por la dilución de referencias históricas concretas. Desde una perspectiva crítica compartida por diferentes autores es posible señalar la recurrencia a la categoría de "militancia setentista" como sinónimo de un conjunto homogéneo y sin fisuras en el marco del cual se soslayan las diferencias que los distintos actores de la época sostenían entre sí. Así por lo general estuvieron ausentes las alusiones a las agrupaciones u organizaciones a las que pertenecían los homenajeados y también algunos

[79] Agradezco a la Dra. Marina Franco haberme señalado este punto en el marco del núcleo "Política, sociedad y cultura en la historia reciente del Cono Sur", con sede en el IDAES/UNSAM.
[80] Resolución n° 493, Secretaría de Gabinete y Coordinación Administrativa (SGCA), 4 de diciembre de 2012 (*BO*, 6 de diciembre 2012).

tópicos centrales del imaginario de la "militancia setentista" como "socialismo" "revolución" o incluso "liberación" (Alonso, 2011).[81]

La pregnancia de la clave humanitaria arriba señalada y el bloqueo discursivo que ella implica respecto de las identidades políticas de los desaparecidos obedece a un conjunto de razones que exceden la especificidad de la práctica de memoria propuesta por la Comisión de Trabajo por la Reconstrucción de Nuestra Identidad. Al respecto nos interesa señalar solamente que, como lo mencionaba Nicolás Casullo, la imposibilidad de restituir en el presente el relato que dotaba de sentido a las prácticas de los y las homenajeadas, esto es, las experiencias revolucionarias de las décadas del sesenta y setenta, configura una especie de "borramiento de los mundos histórico simbólicos" (2006: 38) que resulta especialmente complejo reponer o actualizar en el presente.[82] Sumado a ello, parte de ese borramiento puede explicarse en función de lo que se ha denominado una "peronización" de los homenajes (Alonso, 2009, 2011), es decir una sobre-representación del peronismo a la hora de referir las pertenencias políticas de los desaparecidos y también un predominio de las claves asociadas a dicha identidad para la interpretación del pasado reciente. Como señala Alonso esta "peronización" no se encuentra signada necesariamente por una impronta del peronismo setentista (muchos de sus tópicos continúan aún obturados) sino que debe ser entendida como un efecto de la hegemonía justicialista en la escena política. En la práctica esta hegemonía se refleja en la referida presencia en los actos conmemorativos de ex militantes reconvertidos en agentes estatales que fueron compañeros de las víctimas, así como en la asociación (inscripta por los propios actores) entre las políticas llevadas adelante por los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández y los ideales emancipatorios de la década del setenta.

[81] Una excepción a esta observación la constituye el cuadernillo que se entregó a los participantes en el acto de homenaje a Marta Sierra y Carlos Alberto Costa que se llevó a cabo en la sede Castelar del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) el 2 de junio de 2015. Allí se reúnen las biografías de seis trabajadores del INTA desaparecidos con referencias concretas a sus espacios y organizaciones de militancia. El cuadernillo fue elaborado por la Comisión de Reparación Histórica del INTA con la colaboración de los familiares de las víctimas.

[82] Esta dificultad puede asociarse a lo que, desde la perspectiva de la sociología de las prácticas sociales genocidas, se denomina "realización simbólica" del genocidio. Véase Feierstein, 2007.

Dentro de este panorama ya de por sí complejo es posible interpretar algunas de las intervenciones presentes en los "actos homenaje" según otra mirada que se propone hacer hincapié en las novedades surgidas en los marcos de interpretación del pasado desde los años 2000 en adelante. Según este análisis el discurso dominante en los actos conmemorativos puede inscribirse en una línea signada por la aparición en el escenario público de una nueva narrativa "producida por una tendencia del peronismo con ojos de izquierda" (Lesgart, 2006: 182) que apuntó a reescribir la historia de los setenta desde una mirada menos anclada a la visión negativa que la "cultura política democrática" de los ochenta consignó respecto de aquella década. Esta narrativa, que tuvo a Néstor Kirchner como uno de sus principales enunciadores, se montó sobre la necesidad de restituir politicidad a la década del setenta y en ese mismo gesto inscribir al peronismo en un tiempo anterior a la derrota (184), es decir, por la necesidad de encontrar un nuevo lugar para el peronismo otrora "satanizado e impronunciable" (Casullo, 2005 en Lesgart, 2006: 183). En línea con las "memorias militantes" construidas desde mediados de la década del noventa esta narrativa abandonó la centralidad que adquirió durante los años ochenta la representación de los desaparecidos como víctimas inocentes para acentuar su carácter de "luchadores populares" de acuerdo con determinados valores y convicciones. Veamos algunos ejemplos de esta narrativa:

> Por eso este acto de reparación no es solo para ellas sino que aquí está presente una generación de la cual ellas formaron parte, con profundos dolores, con profundas convicciones que fueron un ejemplo de lucha […] Nuestro mejor homenaje a Graciela y Magda como la conocían sus amigos es recuperar la verdad histórica, fortalecer la memoria colectiva y reivindicar el trabajo de fuerte compromiso social y los valores que ellas tenían. (Presidenta del Instituto, Ivana Besmalinovich, Acto en el I.A.F.P.R.P.M, 9 de noviembre de 2015)

O bien:

> Este acto de reparación y de justicia nos pone una vez más en el centro de lo que hacemos y somos. Los compañeros que hoy recordamos dieron su vida por la justicia social, por hacer una Patria más igualitaria. Tenemos un doble logro: reparar los legajos y haber hecho realidad aquello por lo que tantos argentinos lucharon: las políticas de inclusión implementadas en los últimos 12 años.

> (Secretario general de la ANSES, Rodrigo Ruete, Acto en ANSES, 5 de octubre de 2015)

Siguiendo el análisis propuesto por Montero (2012) para los usos de la memoria en los discursos de Néstor Kirchner, es posible señalar que aquí la militancia aparece ligada a la reivindicación de un conjunto de prácticas y valores según "[…] un registro que acentúa más el carácter fraternal, afectivo, heroico y voluntarista de esa tradición que su aspecto más trágico" (Montero, 2012: 115). En ese contexto, se reivindica a la generación de los setenta como ligada a una "*praxis* ético-moral, animada por la esperanza de cambio" (Lesgart, 2006: 183). Al hacer hincapié en las convicciones esta narrativa resignifica el carácter políticamente comprometido de aquella generación relativizando la narrativa humanitaria que referimos arriba. En ese sentido, aun si el recuerdo de los homenajeados tal como se desarrollaba en los actos conmemorativos prescindía de las especificidades relativas a sus historias de militancia, es posible sostener que su carácter político se cifraba en la renovada inscripción de sus memorias en unas nuevas y determinadas coordenadas dentro del espectro político argentino. Al respecto, es llamativa la reiteración de dos tópicos discursivos que consideramos relativamente novedosos:

> Quiero agradecer el esfuerzo que ha hecho este Ministerio [de Economía] que lleva políticas sin duda políticas de inclusión y distribución de la riqueza más importante en los últimos años de la Argentina pero lo lleva de la mano de los derechos humanos y eso siempre se lo digo a Axel [Kicillof]: gracias, gracias por poder unir esas dos cosas tan importantes que era la lucha de nuestros padres (Secretario de Derechos Humanos de la Nación, Martín Fresneda, Acto en el Ministerio de Economía, 1 de octubre de 2015)

> La reparación no es solamente esto, estos legajos, sino la reparación de que hoy haya una Asignación Universal por Hijo, una asignación para nuestros compañeros desaparecidos, que haya un plan de viviendas como el PROCREAR, reparación para ellos, esa es la reparación, este es el camino que tiene que seguir este pueblo, estamos convencidos de que así el pueblo va a ser más feliz y seguramente ellos hubieran estado aquí también, aplaudiendo esto. (Subsecretario de Promoción de Derechos Humanos de la Nación, Carlos Pisoni, Acto del Sindicato de Trabajadores Judiciales, 9 de noviembre de 2015)

Nos referimos a la identificación del “proyecto político kirchnerista” con las luchas de la “militancia setentista” y con ello, la decodificación de dichas luchas en clave de “derechos humanos”. Se trata en ambos casos de dos funcionarios que son hijos de desaparecidos, se incorporaron al sistema político desde su activismo en el movimiento de derechos humanos y vinculan explícitamente las políticas de los gobiernos kirchneristas con la lucha de sus padres. En una clave anacrónica a la militancia de los sesenta y setenta, las políticas económico sociales llevadas adelante por estos gobiernos son decodificadas como políticas de “derechos humanos”. Esta identificación puede deberse a la extendida circulación que esta última noción alcanzó a la hora de pensar los conflictos sociales en el país desde la transición democrática (Jelin, 2005) pero también al referido abandono de las categorías de la militancia revolucionaria.

El segundo tópico se vincula con el trazado de una continuidad, ya indicada en el capítulo anterior, entre dictadura y neoliberalismo:

> Este acto de reparación tiene que ver con un proceso mucho más profundo que vive nuestra patria en los últimos años que es la recuperación de la memoria y por lo tanto la recuperación de la identidad y por lo tanto la pérdida del miedo. Porque si algo ha significado este proceso histórico que estamos viviendo desde el 25 de mayo de 2003 es dejar atrás el miedo. Miedo que se había instalado, que muchos no lo percibíamos pero que estaba ahí en el fondo nuestro, chiquito, a veces impidiendo, a veces trabando que pudiéramos desplegar todo nuestro potencial. Y no fue un proceso de pocos años, fue el terrorismo de estado, fue una década donde también tuvimos miedo a la pérdida del trabajo, fundamentalmente como elemento de disciplinamiento social y eso había que darlo vuelta, eso formaba parte de lo que Néstor Kirchner decía “recuperar la autoestima”. (Ministro de Trabajo, Carlos Tomada, Acto en el I.A.F.P.R.P.M, 9 de noviembre de 2015)

Si bien el origen de esta clave que vincula ambos procesos puede rastrearse en la emergencia de las denominadas memorias “militantes” a mediados de la década del noventa (Lvovich y Bisquert, 2008), el discurso kirchnerista retoma esta continuidad entre “dictadura” y “neoliberalismo” y la resignifica, incorporando ambos procesos en un bloque temporal que va desde 1976 hasta 2001. Dicho bloque conforma un “pasado denostado” (Montero,

2012: 85) respecto del cual el proyecto kirchnerista se presenta a la vez como ruptura y como inauguración de un nuevo ciclo.

En esa línea esta última intervención resulta ilustrativa no sólo porque recupera de manera explícita la cuestión identitaria sino porque reúne en un mismo vocablo —"miedo"— aquello que por razones diferentes podía considerarse común para la sociedad argentina tanto en época de dictadura como de gobierno constitucional. Así la noción de "miedo" funciona como un hilo conductor de aquel "pasado denostado" que el kirchnerismo habría venido a clausurar. En este discurso, el sentido de la práctica recordatoria va más allá del homenaje a los trabajadores desaparecidos y se transforma en un testimonio de aquello que se concibe como la superación de un tiempo histórico:

> Si bien cuando uno reflexiona un poquito sobre el tema, rápidamente se da cuenta que el proyecto de la dictadura militar no era el proyecto de exterminio por el exterminio mismo, no era un proyecto guiado por la crueldad, por el horror, por el odio, sino que era una herramienta más de las tantas, tal vez la más inhumana, pero no por eso una más [sic] de las tantas herramientas que usó el liberalismo en argentina para instaurar un proyecto económico que no podía ser instalado sino era mediante el quiebre de lo que se venía haciendo en el país, particularmente desde el primer gobierno de Perón. Que era un proyecto de inclusión, de crecimiento, de industrialización, de soberanía, que se tuvo que destruir un proyecto político económico y social que en el país seguía vigente con sus variadas formas pero se tuvo que coartar y desviar la trayectoria de la sociedad argentina a través de las más cruenta y más horrible de las dictaduras, a través de un verdadero genocidio (Ministro de Economía, Axel Kicillof, Acto en el Ministerio de Economía, 1 de octubre de 2015)

Por último a la "continuidad entre dictadura y neoliberalismo" se le agregan dos elementos. Por un lado, un peso renovado de la interpretación de carácter instrumental o economicista del proyecto represivo de la dictadura según la cual la desaparición forzada de personas constituía una "herramienta" para instaurar un nuevo régimen económico y social. Por otro, la caracterización del primer gobierno peronista como "un proyecto de inclusión, de crecimiento, de industrialización, de soberanía" cuya trayectoria también habría sido "desviada" por la dictadura militar y reanudada por el kirchnerismo. En este marco, la identificación entre dictadura y neoliberalismo resulta reactualizada y reinterpretada en función de la configuración de la identidad

política kirchnerista que, como lo hemos dicho en consonancia con otros autores, se asume como heredera tanto del primer peronismo como de la "militancia setentista" y se presenta como antítesis del bloque dictadura-neoliberalismo. En este marco, y a los fines de definir los marcos de memoria que resultaban dominantes en los actos conmemorativos, resulta evidente que las luchas de los sesenta y setenta así como las identidades de los homenajeados resultan reinterpretadas y reactualizadas en función de las necesidades de la propia comunidad de recuerdo.

Una última cuestión a pensar se vincula con el posicionamiento de la figura del trabajador como víctima del terrorismo de Estado. Si bien el tema no ha sido explorado todavía por los estudios de memoria es posible sugerir que dicha centralidad se ubica en un proceso más general según el cual los trabajadores fueron de algún modo reposicionados como víctimas del terrorismo de Estado tanto desde instancias académicas como políticas y judiciales en el período que nos ocupa.[83] Este desplazamiento, cuyo auge puede vincularse con las investigaciones relativas a la complicidad empresarial con la dictadura, resulta particularmente novedoso en el caso analizado ya que se refiere no a los trabajadores a secas sino a los trabajadores cuyo empleador era el Estado nacional. En este sentido, la representación de los desaparecidos no sólo como víctimas sino como formando parte del Estado en tanto empleados de la administración pública constituye una novedad respecto del régimen de memoria imperante en los años noventa. Como henos dicho, en aquellos años, esta asociación era difícilmente sostenible porque el Estado seguía siendo el principal objeto de impugnación del movimiento de derechos humanos en relación con el pasado dictatorial —respecto del cual funcionaba como garante de la impunidad—y también de modo creciente, respecto de las políticas que se desarrollaban bajo el signo del neoliberalismo.

De modo adicional, el estigma que pesaba sobre el empleo público desde los tiempos de la dictadura y especialmente durante el menemismo[84],

[83] En la escena pública tuvieron especial resonancia las investigaciones relativas al caso Papel Prensa, así como la causa judicial en la que está imputado el empresario Carlos Blaquier, dueño del Ingenio Ledesma. Asimismo es necesario mencionar la creación de la Comisión Bicameral de identificación de las complicidades económicas y financieras durante la última dictadura cívico militar en noviembre de 2015.

[84] Estigma que los integrantes de la Comisión ubicaban en la representación denigratoria del empleado público presente en la pieza televisiva "Flora, la empleada pública", interpretada por

hacía imposible pensar su asociación con los desaparecidos, cuya representación pública se vinculaba desde mediados de la década del noventa con el sacrificio militante e incluso con una idealización de sus objetivos de transformación social. Dicho de otro modo la tarea burocrática del empleado del Estado era difícilmente compatible con esa representación cuya heroicidad se pretendía recuperar. Las transformaciones que se dan desde 2003 en adelante, tanto en relación con el pasado (la reapertura de las causas judiciales por crímenes de lesa humanidad, el acercamiento de una importante porción del movimiento de derechos humanos al gobierno nacional y dicho de modo general, la inauguración de una nueva gestualidad en torno al pasado reciente) como los cambios progresivos en las modalidades de ocupación del Estado desde un punto de vista "militante" modifican decisivamente el panorama. Estas transformaciones marcan los límites de una nueva coyuntura en el marco de la cual cobra un sentido la reivindicación de los trabajadores estatales desaparecidos, no sólo como ejercicio de memoria ligado al pasado sino como modo de reinventar a su vez la identidad de los empleados públicos que se desempeñaban entonces bajo los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández.

Teniendo en cuenta esto, durante el período aquí analizado se produjo una nueva representación de los desaparecidos en el marco de la cual las ansias de transformación social que les eran atribuidas ya desde la década del noventa, se proyectan no desde su militancia política –como era habitual– sino desde el trabajo que desempeñaban en el Estado, concebido ahora como una forma de compromiso social. Bajo esta nueva impronta, los "trabajadores estatales desaparecidos" pasan a ser "ejemplos" a seguir por sus "compañeros"

Antonio Gasalla en el programa "El mundo de Antonio Gasalla". El programa fue emitido por Argentina Televisora Color, el canal de la televisión pública nacional entre 1989 y 2000. En términos académicos esto ha sido trabajado por Diana Menéndez recurriendo a esa misma figura televisiva: "Este personaje se constituyó en una referencia a la hora de mencionar a los empleados públicos, la idea dominante era (y no se distancia mucho de la idea actual) la de trabajadores de edad avanzada, algo desquiciados, holgazanes, con el mate a mano, la "cháchara personal" constante y ajenos a cualquier exigencia laboral". Véase Diana Menéndez, N. (2007) La representación sindical en el Estado: los casos de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN). Tesis de Maestría en Ciencias Sociales del Trabajo, p. 130. Recuperado de http://www.ceil-conicet.gov.ar/wp-content/uploads/2013/02/2007dianamenendez.pdf (Fecha de consulta 21 de octubre de 2016).

actuales de la administración pública, quienes los recuerdan y los reivindican en una línea de conexión tan imaginaria como efectiva.[85]

Así puede decirse que los actos conmemorativos se sostuvieron sobre la base de una transferencia simbólica según la cual la noción cristalizada del compromiso con ciertos valores que se atribuían a la militancia de los desaparecidos resulta proyectada sobre su trabajo en el Estado. Dicho de otro modo, la categoría de "trabajador estatal" aparece concebida no como una circunstancia más o menos azarosa dentro de una trayectoria laboral sino como el producto de una posición subjetiva que daría cuenta de determinadas convicciones. Por eso no resulta un obstáculo para este esquema de interpretación que los propios homenajeados no se hayan concebido a sí mismos como "trabajadores estatales" o que no hayan dado necesariamente algún valor estratégico o simbólico a su ocupación del Estado.

Según esta narrativa es posible derivar del trabajo en el Estado un compromiso político que se identifica con el "proyecto político kirchnerista", y que, en ese mismo gesto, desplaza las referencias al imaginario revolucionario o socialista atribuible a la militancia política de las décadas del sesenta y setenta. Por eso el sentido de la memoria no debe buscarse en el pasado sino en el presente: la reivindicación de los "compañeros" desaparecidos *qua* trabajadores estatales (con independencia de su identidad política) es una construcción hecha *a posteriori* que adquiere su sentido en el marco de la construcción de una identidad política kirchnerista y sus modalidades de ocupación del Estado. Dicho de otro modo, las representaciones que resultaron dominantes en la práctica de memoria bajo análisis son un índice del modo en que los "actos homenaje" constituyeron espacios de consolidación de una determinada comunidad de recuerdo. Los actos conmemorativos resultaron, así, prácticas de memoria performativas donde lo que se realiza no es tanto la memoria "en sí misma" sino la redefinición o puesta en escena de la identidad de quienes participaban en ellos. En el marco de estas conmemoraciones, los actores dotaron de un sentido histórico a su inscripción política en el presente, anclándola a una selección del pasado (esto es, a una memoria) y a una

[85] Esto es congruente con los hallazgos de Perelmiter, 2016 y Vázquez, 2014; 2015, en el sentido de concebir la "mística militante" como un recurso simbólico y organizativo que permitió al kirchnerismo recomponer la capacidad de gestión estatal en el marco de una vacancia de la burocracia en un sentido clásico.

promesa de futuro. En ese sentido predomina aquí un “uso político” del pasado siempre que se entienda por ello no la instrumentación o manipulación de un discurso por parte de un actor concebido de modo homogéneo, sino un proceso colectivo de reapropiación y reinterpretación de un legado en el presente.

3.4. En torno a los límites de una comunidad de recuerdo

La noción de “comunidad de recuerdo” tal como la hemos utilizado hasta aquí hace especial hincapié en la función social de la memoria y particularmente en su papel cohesivo en los diferentes grupos y colectivos. Sin embargo, en la medida en que toda memoria es ante todo un proceso de selección, cada “comunidad de recuerdo” delimita sus propias fronteras de lo decible y convive hacia el interior con sus propios silencios y olvidos y hacia el exterior con lo que denominamos, siguiendo a Pollak (1993), “memorias denegadas” y otras “memorias locales” o “subterráneas”, como las que se sostienen desde el interior del país o en otros grupos victimizados por la dictadura (Da Silva Catela, 2011) A menudo, la conformación de determinadas narrativas dominantes, o como en este caso, narrativas oficiales –en el sentido de que son enunciadas por una o más agencias estatales– conlleva el eclipse u opacamiento de otros relatos que son “más débiles, menos visibles, periféricos, subterráneos y críticos” (2011: 107), aunque como tenemos intención de señalar, estos relatos no permanecen olvidados o borrados y pueden emerger en la medida en que encuentren una coyuntura favorable para ello.

En consonancia con ello en este apartado nos proponemos señalar una serie de elementos que sin permanecer por completo subterráneos (razón por la cual podemos referirnos a ellos) resultan difícilmente inscribibles en la práctica de memoria propuesta por la Comisión y de modo general, en la narrativa sostenida por los funcionarios kirchneristas en los actos conmemorativos. Estos elementos subterráneos o disonantes remiten a aquellos recuerdos “prohibidos”, “indecibles” o “vergonzosos” que suelen permanecer silenciados o son transmitidos en círculos de sociabilidad reducidos. Desde esta perspectiva, los silencios en torno a ciertos aspectos del pasado no deben considerarse equivalentes al olvido, sino que obedecen a

diferentes estrategias de reacomodamiento o “modos de gestión de identidad” que los individuos o los grupos realizan para adaptarse a las condiciones del presente. Tal es el caso de las memorias que remiten a las “actitudes sociales” (Águila, 2015) que se desplegaron al interior de las agencias o empresas estatales —especialmente aquellas que refieren a diferentes grados de complicidad o colaboración civil con el accionar represivo—, aquellas memorias que recogen las herencias que supuso el gobierno de la dictadura a nivel micro institucional y las memorias relativas a la lucha armada según las analizaremos a continuación.

En relación con las actitudes sociales es interesante señalar el desarrollo de una campaña que se denominó “Contanos tu verdad” y que tenía por objetivo recoger testimonios de empleados de la APN que hayan “sufrido o visto” violaciones a los derechos humanos. Así lo señalaba su slogan: “Si trabajaste en el Estado desde el año 1976 hasta 1983 y sufriste o viste alguna violación a los Derechos Humanos: Contanos tu verdad”. Gracias a esta campaña la Comisión de Trabajo por la Reconstrucción de Nuestra Identidad recogió decenas de testimonios de trabajadores estatales que registraban diferentes experiencias sobre el accionar represivo en los organismos estatales en tiempos de la dictadura. Los testimonios obtenidos fueron registrados de manera audiovisual y entregados al Archivo Nacional de la Memoria. Según algunos integrantes de la Comisión esta campaña fue la ocasión que encontraron muchos empleados estatales para transmitir una serie de experiencias traumáticas que habían atravesado en los años de la dictadura y que habían guardado en silencio incluso ya entrada la democracia. En este sentido señalaba Oscar (integrante de la Comisión, ex detenido-desaparecido y empleado público durante la dictadura):

> Aparecen testimonios que colaboran con juicios. Por ejemplo, antes que llegara Carolina, a través de repartir estos volantes, una señora llamó, tenía un acento paraguayo y fuimos a verla a la casa en Moreno […] Llegamos a una casa muy humilde, cito este caso porque hay varios, cito lo más emblemáticos… Una señora que era enfermera, trabajaba en un hospital en Moreno y que durante la dictadura la trasladaron a un sitio que ella no sabía exactamente cuál era y que traían parturientas y ella les ayudó a parir… de forma bastante precaria… y lo que a ella le llamaba la atención es que las traía el ejército o gendarmería. Y que tenían muy penado relatar nada de esta situación. Y esta señora se encontraba muy enferma,

> de hecho estaba casi en su lecho de muerte y decía que no se quería llevar esa carga a la tumba, que ella no era una mala persona, que ayudó a parir a mucha gente pero que lo que ella había visto tenía que decirlo. (Entrevista con Oscar, 3 de julio de 2015)

Por un lado Oscar atribuía la emergencia del testimonio a la necesidad de liberarse o incluso de confesar la propia participación en aquello que para mediados de la década del 2000 aparecía claramente como parte del accionar represivo. La posibilidad de testimoniar se vinculaba así con el paso del tiempo pero además con las transformaciones en la coyuntura histórico – política:

> Otro ejemplo son choferes del ministerio de al lado, gente que quiere testimoniar porque sí. Dicen que recibían los Falcón a la mañana y les ordenaban que los laven durante la dictadura. Y cuando los lavaban encontraban sangre, empapados, baúl, asiento trasero y ellos hasta ahí sabían. Sabían que los autos los llevaban a la tarde, los usaban toda la noche y de día los dejaban en ese lugar… Porque [los militares] usaron siempre el dinero, los bienes del Estado para las acciones represivas. Es costoso… la gente no habla. Tiene que llegar un estado de crisis para hablar o saber que está cerca de la muerte. El miedo está muy instalado. Hablar esto es porque la época Kirchner puso los derechos humanos como una política de Estado, y por eso podemos estar hablando de esto… porque en el Estado argentino esto no se habla, no se habló nunca….Cuesta hablar. (Entrevista con Oscar, 3 de julio de 2015)

La emergencia de estos testimonios así como la apertura de la temática al interior de la APN debe leerse en el marco de ciertas condiciones de posibilidad. Como señala Da Silva Catela, “lejos de depender únicamente de la voluntad o de la capacidad de los testigos potenciales para reconstruir su experiencia, todo testimonio también se ancla en las condiciones sociales que lo vuelven comunicable, condiciones que evolucionan con el tiempo y que varían de un lugar a otro” (en Pollak, 2006: 13).

A su vez, desde el punto de vista de la Comisión, el desarrollo de la campaña puede vincularse al carácter cada vez más extendido que tuvo, desde mediados de la década del 2000, el registro y la denuncia de las responsabilidades compartidas entre civiles y militares en el accionar represivo. Este carácter se pone en evidencia en la extendida circulación del término “dictadura cívico militar” como clave interpretativa de lo sucedido, tanto en un cierto lenguaje periodístico como político (Águila, 2015). Del mismo modo, resulta propio del contexto de emergencia de la campaña el hecho de que los

testimonios hayan sido recogidos con miras a su utilización en los juicios por crímenes de lesa humanidad, lo cual tiene sentido en el marco del proceso de reapertura de estas causas y especialmente teniendo en cuenta la centralidad que la escena judicial porta para el procesamiento del pasado reciente en el país.

Sin embargo la recogida de testimonios en el marco de la campaña planteaba una restricción significativa. En una difusión previa los volantes repartidos por la Comisión incluían otro slogan tomado de una campaña similar que estuvo destinada a quienes fueron soldados conscriptos entre 1975 y 1983. Esta fue organizada en una primera instancia por una comisión del ex CCD Campo de Mayo y luego a partir del año 2012 retomada por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de La Nación. El slogan de esta campaña decía: "Si fuiste colimba entre 1975 y 1983, en cualquiera de las fuerzas armadas o de seguridad, tal vez viste cosas que hubieras preferido no ver. Tu testimonio ayudará a combatir la impunidad. El servicio militar ya no es obligatorio. El silencio tampoco". La campaña propuesta de la Comisión proponía de modo similar: "Si fuiste estatal entre 1976 y 1983 tal vez viste cosas que hubieras preferido no ver. Si querés contar tu verdad llamá a la Comisión de Trabajo Por la Reconstrucción de Nuestra Identidad. La Junta Militar ya no es tu empleador. El silencio no es obligatorio".

La referencia a la campaña organizada para recoger testimonios de los soldados conscriptos resulta interesante en la medida en que pone en juego los modos de comprensión de las actitudes sociales de los empleados estatales bajo gobierno dictatorial. En efecto, de acuerdo con una nota periodística publicada en la Revista *El guardián* la campaña desarrollada por la Comisión "incomodó" a Daniel Cabezas "uno de los ideólogos de campaña destinada a los colimbas", ya que según él "el mensaje no es correcto y confunde. No es lo mismo un colimba que un empleado, que no fue obligado a nada".[86]

Esta distinción entre el "colimba" y el empleado estatal remite a la cuestión de los niveles de responsabilidad que les cabe a cada uno de estos actores en relación con su involucramiento en los circuitos represivos. En ese sentido, lo que resulta particularmente llamativo de la campaña propuesta por

[86] Revista *El guardián* (2012) "En busca de testigos del horror", 12 de abril de 2012.

la Comisión es que la misma se dirige a los empleados estatales partiendo de la premisa de que los mismos pueden haber “sufrido” o “visto” violaciones a los derechos humanos pero no participado en ellas. Esto se vincula con la construcción narrativa que la Comisión proponía respecto de la figura del trabajador estatal (y su interés por resignificar su tarea en el marco del “proyecto político kirchnerista”) pero también con un régimen de responsabilidad centrado tradicionalmente en el actor militar (Quaretti, 2016). En efecto, aún si podía ser evidente que al menos una porción de los empleados estatales habían prestado su colaboración en el ocultamiento de los secuestros y desapariciones (lo cual se desprendía de los cierres administrativos fraudulentos dados a los legajos laborales), la campaña se refiere a los empleados estatales solamente en su calidad de testigos pasivos.

Esta problemática excede el marco de la campaña y emerge tanto en los actos conmemorativos como en la construcción de la figura del trabajador estatal que la Comisión proponía en sus breves publicaciones. Así tanto en los artículos de prensa como en los folletos de difusión es posible encontrar referencias a diferentes formas de resistencia al disciplinamiento patronal-estatal, como por ejemplo el “trabajo a tristeza” o la firma de la asistencia a una persona desaparecida para evitar el cese del salario y al mismo tiempo, a la cuestión de las “delaciones”. En el folleto de mayor circulación producido por la Comisión se señala:

> En los legajos que recuperamos había cartas de compañeros pidiendo por alguien que no estaba asistiendo al trabajo. Firmaban notas sabiendo que arriesgaban su vida al pedir por un desaparecido. Se dice que había delaciones de unos a otros, pero nosotros vemos que los legajos dicen otra cosa. (Folleto producido por la Comisión de Trabajo por la Reconstrucción de Nuestra Identidad, s/f)

El fragmento citado refiere a una memoria que se mantiene sin especificar según la cual la actitud de los empleados estatales habría estado signada por la colaboración con el régimen militar. La Comisión apela al carácter documental de los legajos para mostrar el carácter errado de dicha percepción, aun cuando de los casos que se mencionan sea imposible sacar conclusiones en un sentido o en otro. La presencia de documentos que dan

cuenta de una actitud de rechazo de la dictadura resulta especialmente reivindicada ya que, como vimos en el capítulo anterior, dentro de los objetivos de la práctica de memoria propuesta por la Comisión se encontraba el de "recuperar la dignidad del trabajador del Estado" así como su "rol social", "para la gente", en un sentido difícilmente compatible con la imagen de una colaboración extendida con el accionar represivo.

Ahora bien la existencia de silencios y memorias contrapuestas en relación con las actitudes de los empleados estatales puede explicarse si se tiene en cuenta *grosso modo* cuáles fueron las condiciones que imperaron en las diferentes agencias estatales durante la dictadura. En efecto, la mayor parte de las reparticiones públicas atravesaron fuertes procesos de disciplinamiento de acuerdo con las objetivos refundacionales del régimen dictatorial. Según el esquema institucional adoptado por las Fuerzas Armadas —que preveía un ejercicio directo del poder y la distribución de los cargos públicos en forma tripartita (Novaro y Palermo, 2003) — todas las empresas y reparticiones estatales a nivel nacional estuvieron sujetas a la intervención militar al menos por un período de tiempo y la designación de nuevos directivos por parte del poder castrense. Con diferentes niveles de intensidad y articulación, los ministerios, agencias y empresas fueron objeto no sólo del accionar represivo bajo la forma del secuestro y la desaparición de trabajadores sino también de las diferentes estrategias de "normalización" y "racionalización" del sector público que implicaban, en la práctica, el incremento de cesantías, renuncias forzadas, persecuciones ideológicas, etc. (Iramain, 2013)

Esta problemática fue escasamente abordada luego del retorno de la democracia. Si bien durante el gobierno de Alfonsín se promulgaron un conjunto de leyes que permitían el retorno de una porción de trabajadores cesanteados a sus cargos públicos (especialmente las Leyes 23.117 y 23.278 de septiembre de 1984 y 1985) no se llevó adelante una revisión institucional de carácter sistemático que permitiera desandar el camino dispuesto por la dictadura militar (por ejemplo, no se revisaron los ingresos ni los ascensos) ni tampoco los nuevos rumbos y dinámicas que había tomado la implementación de las políticas públicas en cada una de las reparticiones.

Este contexto de continuidad o falta de revisión de lo sucedido explica la existencia de memorias contrapuestas así como también la instalación de un

“silencio oficial” respecto de lo sucedido durante la dictadura al interior de las agencias.

En este marco, los actos conmemorativos de entrega de legajos podían constituirse en ocasiones donde no sólo se instalaba o se proponía una narrativa dominante (según fue analizada en el capítulo anterior) sino también donde se ocluían las memorias que resultaban disonantes respecto de esa misma narrativa. Dicho de otro modo, los actos conmemorativos podían constituirse en prolongaciones de la “cultura del silencio” arriba referida o incluso de la ignorancia respecto de lo sucedido en el organismo (sobre todo por parte de los empleados actuales) o bien en un momento de reactualización y disputa entre las diferentes memorias contrapuestas. En esa línea es útil traer aquí lo señalado por Jelin en relación con las conmemoraciones como coyunturas claves de reactivación de memorias, es decir, ocasiones en las que las interpretaciones del pasado se renuevan y vuelven a entran en conflicto.

Un caso particularmente relevante refiere al acto conmemorativo que se desarrolló en la sede Castelar del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) en agosto de 2015. Un trabajador del INTA entonces señalaba:

> Por supuesto que en el mismo acto van los que defendieron la dictadura, van los buchones, va gente que está involucrada en casos de secuestro… ¿está todo, no? Digo, obvio, no es blanco y negro. Y en el mismo acto hay gente que no va y te dice que no va, porque van todos estos. Eso se vio en el día del legajo, no es un conflicto visibilizado, explicitado. (Entrevista a trabajador del INTA, 21 de agosto de 2015)

La convivencia con empleados que prestaron diferentes niveles de apoyo al accionar de la dictadura en el organismo aparece como un conflicto irresuelto que si bien se mantiene en un nivel subterráneo, aparece con más fuerza en ocasión del acto conmemorativo. En efecto, como señalamos no hubo una política de revisión o depuración del personal que ingresó a dicho organismo o ascendió en tiempos de dictadura. Esta falta de revisión explica en parte la instalación del silencio como modo de reacomodamiento, es decir, la necesidad por parte de quienes habían sido víctimas de la represión (en

calidad de cesanteados o perseguidos) de silenciar sus propias memorias para convivir con aquellos que asistieron al daño que se les había producido.

En el caso del INTA esta necesidad de callar se veía especialmente potenciada si tenemos en cuenta que la instrumentación de los mecanismos de disciplinamiento se ligó a una articulación cívico militar y a su vez se apoyó sobre la propia dinámica institucional que se desplegaba en las diferentes estaciones experimentales que poseía el organismo a lo largo y a lo ancho del país (Gárgano, 2011). Según señala Cecilia Gárgano, en una investigación que estudia la trayectoria del INTA durante la dictadura militar:

> Distintos investigadores del organismo vinculan la resistencia oficial a revisar la historia reciente del INTA, con la articulación que operó entre la esfera civil y la militar. Así, una investigadora afirma que en muchos casos "la gente que está en cargos gerenciales, o que se han jubilado pero ha estado en cargos gerenciales muy altos, es la gente que elaboró las listas negras". (Entrevista Ing. Agr., investigadora del INTA desde 1969. Bs. As., 15 de julio de 2010, en Gárgano, 2011: 139)

Esto sucedió especialmente en la sede de INTA en Castelar, provincia de Buenos Aires, donde la intervención militar fue directa e incluyó el despliegue de un operativo que culminó con detenciones ilegales de trabajadores. Este operativo de disciplinamiento supuso consecuencias perdurables para los trabajadores que permanecieron en sus puestos alterando las relaciones entre colegas al interior del Instituto y generando diferentes estrategias de reacomodamiento, supervivencia u autoprotección.[87] De este modo, el accionar represivo configuró en este caso un silencio respecto de aquello que había acontecido, a lo cual se sumó luego la ausencia de revisión de la historia institucional una vez entrada la democracia. Además, como señala Cecilia Gárgano:

> […] como producto de la intervención militar, no sólo se instrumentaron despidos en las distintas unidades y se desplegó en

[87] Al respecto un investigador del INTA señala que ese operativo "tuvo como objetivo principalísimo instalar el miedo. (…) Estás en tu escritorio, de pronto las tanquetas, 500 militares metiéndose y llevando gente presa vendada…Vos al día siguiente te quedás quietito… El poder intimidatorio es brutal." Entrevista ex integrante de la EPG y del Departamento de Economía INTA Castelar, detenido junto con otros trabajadores del INTA en el operativo realizado en Centro Nacional de Investigaciones Agropecuarias del organismo. Bs. As., 25 de junio 2010, citado en Gárgano, 2011: 140.

> algunos espacios la presencia militar, sino que se produjo también una “reestructuración selectiva” en los contenidos y destinatarios de las tareas de investigación y extensión. En este sentido, fueron discontinuados los enfoques que realizaban diagnósticos críticos del sector agropecuario nacional y proponían orientar las tareas de CyT del organismo en función de las principales problemáticas de éste, así como las actividades de inserción en las comunidades rurales desarrolladas por los extensionistas. Simultáneamente, se consolidó una línea de trabajo funcional a los intereses de las grandes corporaciones terratenientes, dando inicio a un proceso de fragmentación y mercantilización del conocimiento producido en el Instituto. (Gárgano, 2011: 141)

Es decir que las intervenciones de la dictadura lejos de ceñirse a la violencia física o simbólica, supusieron fuertes reordenamientos en las tareas, las políticas y los objetivos asignados a los organismos. En este sentido, aquello que permanece silenciado y por fuera de la “comunidad de recuerdo” se vincula con los “mundos histórico simbólicos” de aquellos que fueron víctimas del terrorismo de Estado, es decir, el borramiento de los proyectos que llevaban adelante, las agendas de investigación que sostenían y de modo general, los compromisos con determinadas concepciones sobre la función que debían desempeñar los organismos del Estado en el país. Sin querer implicar por ello que estas concepciones o compromisos fueran uniformes, lo cierto es que el recuerdo de esas trayectorias resulta difícil de reponer o recuperar. Desde esta perspectiva, la memoria permanece así como un ejercicio inacabado, que al quedar anclada al pasado permanece incapaz de pronunciarse sobre el presente.

Otro caso referido a las complicidades al interior de los organismos, refiere al acto conmemorativo realizado en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) en homenaje a Alfredo Giorgi. Como señalamos arriba Giorgi era investigador del Centro de plásticos del INTI y fue secuestrado el 27 de noviembre de 1977 mientras se desempeñaba en el Instituto. Tal vez por ello la denuncia de la “complicidad civil” al interior del organismo no pudo sino asumir un carácter particularmente explícito. Allí el Secretario de Derechos Humanos, Martín Fresneda, mencionó en su intervención oral:

> Esta es la forma de hacer realidad el “nunca más”. Ojalá nunca más exista, porque también hay que nombrarlo, Enrique Sturzenbaum, que fue el canalla que entregó. El canalla que cuando vinieron [sic] la

> Marina a buscarlo a Alfredo Giorgi, fue el que lo llamó a Alfredo engañado y lo entregó. Ojalá nunca más permitamos como sociedad que nos pase lo que nos pasó. (Secretario de Derechos Humanos de la Nación, Martín Fresneda, Acto en el INTI, 4 de agosto de 2015)

En ese mismo sentido en la gacetilla de prensa publicada por el Instituto se leía:

> A Giorgi se lo llevaron el 27 de noviembre de 1978. Un grupo armado, vestido de civil, franqueó el acceso custodiado del Parque Tecnológico Miguelete, con la conformidad de la guardia de seguridad y control del lugar que les permitió su ingreso. En el pabellón de la Administración del Instituto fueron atendidos por el Administrador General del Parque, Enrique Sturzenbaum, a quien le requirieron la entrega de Alfredo, que se encontraba trabajando normalmente. Éste le ordenó telefónicamente a Giorgi que se presentara a su despacho y sin dar otro tipo de información lo entregó al grupo armado, identificado como Fuerzas del Estado, ante el personal de vigilancia, empleados y personal superior del INTI. Ninguna autoridad del Instituto informó a los familiares sobre el secuestro y posterior desaparición del científico. (Gacetilla interna del INTI, s/f)

En ambos casos se mencionaba explícitamente la responsabilidad del administrador del parque en el secuestro de Alfredo Giorgi. La denuncia de esta responsabilidad puede explicarse si se tiene en cuenta la resonancia que tuvo la causa judicial impulsada por sus familiares en los años de la transición. El caso fue incluido en el Juicio a las Juntas militares dándose por probadas las circunstancias de la detención, esto es que: “El 27 de noviembre de 1978 personal que dependía operacionalmente del Ejército detuvo en forma ilegal a Alfredo Giorgi en su lugar de trabajo, un establecimiento perteneciente al INTI ubicado en Migueles, provincia de Buenos Aires y lo trasladó al «Olimpo» donde permaneció en cautiverio clandestino y fue sometido a tormentos físicos”.[88] El hecho de que la verdad de lo acontecido haya sido establecida judicialmente puede ser una de las razones que explican el carácter explícito de las referencias, que no se dieron en ninguno de los otros actos conmemorativos a los que tuvimos ocasión de asistir. Sin embargo, es importante notar que al mismo tiempo dicha explicitación favorece la clausura respecto de otras preguntas relativas al resto del personal jerárquico del

[88] Véase causa 13/84, disponible en línea: http://www.mpf.gov.ar/Institucional/UnidadesFE/Tomo309-005-completo.pdf. Fecha de consulta: 26/07/2018

Instituto y de los mecanismos represivos implementados al interior del organismo, incluyendo las numerosas cesantías y diversas formas de persecución ideológica. En efecto, si bien en la gacetilla se menciona que "ninguna autoridad informó a los familiares sobre el secuestro" este tema no es interrogado y el reconocimiento de otras responsabilidades fue omitido. Esto es consistente con la centralidad ya señalada del cuerpo vejado como eje de la narrativa propuesta por la Comisión, en la medida en que según este enfoque el sentido del relato no está en los agentes que perpetraron la violencia (así como tampoco se reconocen otras violencias más allá de la desaparición) sino en la víctima.

Un último caso especialmente ilustrativo de las tensiones que subyacen a la conformación de una comunidad de recuerdo (y al régimen de memoria en el que se inserta) refiere a los dilemas que supone la clasificación de "víctima del terrorismo de Estado" y a su vez a las fronteras de decibilidad que se establecen en relación con la lucha armada.

Al respecto es útil analizar la reparación del legajo laboral de José Luis Dios, un militante montonero que se desempeñaba en la Dirección General de Situación Exterior e Interior de la Subsecretaría de Planeamiento del Ministerio de Defensa. De acuerdo con la resolución conjunta de la Secretaría de Gabinete y la Secretaría de Derechos Humanos, Dios trabajaba en la mencionada subsecretaría "hasta el día 18 de diciembre de 1976, fecha en que fue dado de baja por Resolución del Ministerio de Defensa n°32 de fecha 6 de enero de 1977". A partir de la información recabada por la Comisión (encargada de constatar el lugar de trabajo) y las certificaciones emitidas por la SDH, así como por orden del Decreto n°1199, se resolvió reparar el legajo laboral de Dios indicando que "la verdadera causal de interrupción de la relación laboral fue la baja y posterior asesinato como consecuencia del accionar del Terrorismo de Estado".

La particularidad de este caso es que de acuerdo con un comunicado de la organización Montoneros, José Luis Dios fue responsable de la colocación de un artefacto explosivo en el microcine de la propia Subsecretaría de Planeamiento en la que se había desempeñado mientras que se desarrollaba allí un "seminario sobre represión al movimiento obrero". Como producto de esa acción, José Luis Dios pasó a la clandestinidad y un tiempo más tarde fue

asesinado en un presunto enfrentamiento con las Fuerzas Armadas el 9 de septiembre de 1977.

Esta trayectoria resulta interesante de señalar en la medida en que presenta al menos dos problemas para la práctica de memoria propuesta por la Comisión: en primer lugar el de reivindicar en el marco del propio ministerio a un trabajador que cometió allí un atentado que presuntamente causó la muerte de varios militares y civiles; en segundo lugar hacerlo a partir de la clasificación de "víctima del terrorismo de Estado". Este segundo aspecto no se restringe sólo a este caso sino que se plantea respecto de todos aquellos militantes que, lejos de pensarse como víctimas, se concebían a sí mismos como militantes revolucionarios y murieron "en combate" contra las fuerzas de seguridad. En relación con ello surge la pregunta respecto de si es adecuado homenajearlos como "víctimas", en un sentido que hace aflorar los límites de dicha categoría, entendida como una construcción social. En relación con lo primero, por otra parte, la cuestión que se plantea no refiere solo a un acto clasificatorio sino a los conflictos del régimen de memoria vigente en el establecimiento de aquello que es decible e indecible en un momento histórico determinado (en este caso, la opción por las armas) lo cual se agudiza cuando son las agencias estatales las enunciadoras de memoria. En ese sentido es destacable que el único acto conmemorativo de reparación de legajos que se realizó en la órbita del Ministerio de Defensa fue el que se realizó el 9 de noviembre de 2015 en el Instituto de Ayuda Financiera para Pagos de Retiros y Pensiones Militares (I.A.F.P.R.P.M) que depende de dicho Ministerio, en el cual la reparación del legajo de José Luis Dios no fue incluida a pesar de que había sido identificado y reparado por resolución de mayo del 2014, con bastante anterioridad al acto conmemorativo.

A pesar de que no pudimos relevar las razones concretas de la exclusión, este caso permite dar cuenta de los límites de la práctica de memoria propuesta por la Comisión y de modo general, de una enunciación estatal de las memorias que se inscriben en tradiciones revolucionarias. En efecto aún si durante el año 2014 —en el que el legajo fue reparado administrativamente— la realización de los actos conmemorativos no había alcanzado la notoriedad que tuvo luego al interior de la APN (lo que nos permite pensar que los funcionarios que ordenaron la reparación no

necesariamente habían previsto la realización del acto público), lo cierto es que ya desde el Decreto n°1199 se disponía la entrega de los legajos reparados a las familias, como parte de las acciones "de reparación moral y colectiva emprendidas por el Poder Ejecutivo Nacional". Por eso es válido preguntarse por las condiciones que hacen posible que un Ministerio decida reivindicar, en el marco de una política pública, la memoria de un trabajador que atentó contra esa misma institución, independientemente de que el acto no se haya realizado. De algún modo esta reivindicación es posible en la medida en que opta por jerarquizar determinados aspectos de una trayectoria individual por sobre otros así como determinados crímenes perpetrados por el Estado por sobre otros; en este caso, se reivindica la memoria de José Luis Dios en tanto que perseguido y asesinado por el accionar del terrorismo de Estado (es decir, en tanto que víctima) pero se omite su carácter de combatiente revolucionario o guerrillero. En parte esta omisión puede ser explicada ya que la realización del acto conmemorativo en su homenaje no sólo podría ser leída como una provocación al aparato castrense sino que constituye un gesto difícil de sostener desde el punto de vista institucional. En efecto, aún si para algunos actores la lucha armada puede ser aceptada e incluso reivindicada como parte de un determinado contexto histórico y político, no lo es para un organismo del Estado que debe concebirse a sí mismo como garante del orden social y portador del legítimo monopolio de la violencia. El carácter inconsistente de esa reivindicación (no en sí misma sino cuando es enunciada por agentes del Estado) subyace a los límites de la Comisión en particular y del Estado en general como enunciador de memorias.

Así lo que se desprende del análisis va en línea con lo que sostuvimos previamente en relación con la figura del "trabajador estatal desaparecido": para la práctica de memoria propuesta por la Comisión la reivindicación de los trabajadores estatales se mantenía en los límites de la interpretación sancionada por la CONADEP, según la cual los desaparecidos eran representados como víctimas sin ninguna relación con los proyectos revolucionarios encarados por las organizaciones político militares. Esta concepción, utilizada entonces por el incipiente movimiento de derechos humanos y por la propia CONADEP para refutar la justificación dictatorial de las desapariciones (que se basaba en la identificación de los desaparecidos como

miembros de la guerrilla) continúa signando el horizonte interpretativo en relación con la violencia armada de los setenta. Esto es válido incluso para una identidad política como el kirchnerismo que se propuso reivindicar el carácter políticamente comprometido de esa generación.

La trayectoria de José Luis Dios desafía las claves interpretativas ya instaladas poniendo en evidencia el carácter construido de la equivalencia entre "trabajador estatal", "muerto en 1977" y "víctima inocente" allí donde este término es entendido como sinónimo de ajenidad a la guerrilla. Dicho de otro modo, muestra que la omisión tensa de los compromisos políticos y la opción por las armas de quienes son hoy rememorados como "víctimas del terrorismo de Estado" continúa siendo una frontera constitutiva de los marcos de interpretación del pasado, más allá de la cual parecería "acechar la recaída en el autoritarismo y la violencia" (Montero, 2012: 132).

Del mismo modo, las dificultades para reconocer y trabajar sobre los distintos niveles de responsabilidad que caben a los civiles en el accionar represivo también se inscriben una interpretación del pasado que, como dijimos, centra su mirada en el actor militar o en todo caso, sobre las grandes corporaciones (eclesiástica y empresarial o financiera) pero permanece incapaz de mirar las actitudes y comportamientos cotidianos de quienes convivían o formaban parte de los circuitos represivos al interior del Estado nacional.

Este último señalamiento es útil a la hora de ponderar las transformaciones en el régimen de memoria vigente: si bien el recuerdo en clave reivindicativa de la "militancia setentista", el trazado de un continuidad entre dictadura y neoliberalismo (como entre regímenes democráticos y autoritarios que se distinguen por su accionar represivo contra el peronismo) y la construcción de una "comunidad de recuerdo" basada en la identificación de las luchas de las décadas pasadas con las políticas encaradas por los gobiernos kirchneristas, constituyen nuevos elementos a la hora de interpretar el pasado reciente, ello no implica por sí solo el desplazamiento absoluto de las coordenadas establecidas por el régimen de memoria previo. La reivindicación de la democracia como mecanismo institucional para la resolución de los conflictos políticos continúa vigente y el horizonte revolucionario (asociado a un modo específico de la militancia y de la lucha armada) permanece más allá de las fronteras de lo decible.

3.5. Conclusiones

En los capítulos precedentes, nos propusimos describir y analizar el proceso de institucionalización de la Comisión de Trabajo para la Reconstrucción de Nuestra Identidad, dando cuenta de las diferentes figuras, lógicas y tensiones que se entrecruzaron en su práctica de memoria. Este análisis nos ha permitido mostrar el modo en que, aún al interior de las agencias estatales, los "emprendedores" o "militantes de la memoria" tuvieron un papel central a la hora de transformar una determinada cuestión en un tema público. La conversión de la iniciativa en una política de reparación documental de alcance nacional (y con ello, la movilización de una serie de circuitos intragubernamentales) fue posible gracias a la existencia de un conjunto de actores comprometidos en un "deber de memoria", de un modo que les permitió exceder y a la vez inscribirse de manera novedosa en el reparto de funciones propio de la burocracia estatal. Al mismo tiempo hemos visto cómo el trabajo de la Comisión se sostuvo sobre la inclusión de otras legitimidades no provenientes del Estado como la de los organismos de derechos humanos y los afectados directos que prestaron su apoyo o se incorporaron progresivamente a sus tareas.

Por otra parte, hemos analizado el modo en que la práctica de memoria propuesta por la Comisión supuso el trazado de una línea de continuidad entre la "reconstrucción" de la identidad de los trabajadores estatales desaparecidos, la consolidación de una determinada identidad política y sus modalidades de trabajo al interior de las agencias estatales. En ese marco hemos situado la emergencia del "trabajador estatal desaparecido" como figura novedosa en el régimen de memoria dominante en la Argentina sobre el terrorismo de Estado, no sólo en tanto instituía una nueva categoría clasificatoria (de índole corporativa antes que política), sino también una nueva asociación entre los desaparecidos y el empleo estatal según una clave vinculada con la idea del "compromiso militante". Al mismo tiempo, hemos identificado el trazado de una nueva temporalidad centrada en el período que va desde el 16 de junio de 1955 al 10 de diciembre de 1983 (según un eje narrativo centrado en el devenir del peronismo frente al accionar represivo del Estado) y entre la dictadura militar (1976-1983) y los gobiernos "neoliberales", que son entendidos como la

concreción del proyecto económico y social de la dictadura militar. Como veremos, ambos tópicos reaparecerán en los capítulos que siguen, configurando sendos marcos de memoria que permanecen a través de las diferentes políticas que vamos a analizar.

Para terminar, hemos indicado también cómo algunos de los elementos vigentes en los regímenes de memoria previos continúan signando las fronteras de decibilidad en torno al pasado reciente. Así, a pesar de las novedades, la reivindicación de los trabajadores estatales tal como se realizó en los "actos homenaje" no supuso una ruptura respecto de la interpretación sancionada por la CONADEP, según la cual los desaparecidos eran representados como víctimas según una clasificación socioprofesional que soslayaba las pertenencias a las diferentes organizaciones político-militares (Crenzel, 2008). Del mismo modo, hemos indicado la existencia de un conjunto de "memorias disonantes" que referían a las actitudes sociales al interior de las agencias estatales durante la dictadura militar. Como hemos visto, estas memorias circulan de manera reducida y expresan los límites en la conformación de una comunidad de recuerdo a la hora de tramitar las violencias del terrorismo de Estado al interior del Estado.

Capítulo 4: La política de "apertura" de los archivos militares: la conformación de los Equipos de Relevamiento y Análisis Documental[89]

4.1. Introducción

Una de las demandas persistentes del movimiento de derechos humanos en Argentina ha sido la búsqueda y la apertura de los denominados "archivos de la represión", es decir, documentos producidos por las Fuerzas Armadas y/o de seguridad que dieran cuenta del accionar represivo ilegal durante el terrorismo de Estado. Ya desde la transición a la democracia la CONADEP había advertido la existencia de un "cúmulo importante de documentación" que se había destruido o que se mantenía oculta por los autores del accionar represivo (CONADEP, 1984). Las Fuerzas Armadas alegaron entonces y durante varias décadas que la documentación no existía o bien había sido destruida, remitiéndose a un decreto de 1983 según el cual el ex presidente *de facto* Reynaldo Bignone había ordenado "dar de baja" la documentación referida a las personas que fueron detenidas a disposición del Poder Ejecutivo Nacional.[90] El sostenimiento de esa negativa implicó que, a lo largo de todo el proceso transicional, fueran los organismos de derechos humanos y otros actores de la sociedad civil los encargados de reconstruir lo ocurrido con la documentación encontrada y/o producida por ellos mismos en el marco de la búsqueda de justicia y la resistencia a la dictadura.

En el 2006, luego de varios años de declaraciones cruzadas entre miembros de las Fuerzas Armadas, el Ministerio de Defensa dispuso oficialmente la "apertura y el acceso" a sus acervos documentales para la "obtención de elementos" vinculados a las "investigaciones de las violaciones masivas de los derechos humanos" cometidas durante la última dictadura

[89] Una versión anterior y resumida de este capítulo y el siguiente fue publicada en Balé, C. (2018). Usos del archivo y políticas de la memoria: un análisis del proceso de "apertura" de los archivos militares en Argentina (2003-2015), *Nuevo Mundo Mundos Nuevos [En línea*], Cuestiones del tiempo presente, Puesto en línea el 10 diciembre 2018, URL: http://journals.openedition.org/nuevomundo/73860.

[90] Se trata del Decreto n°2726 de 1983. En el caso específico del Ejército, las respuestas se remitían a una orden secreta de incineración de la documentación que habría sido impartida ese mismo año por el entonces jefe del Ejército Cristino Nicolaides.

militar. El objetivo de dicha "apertura" era contribuir al desarrollo de los procesos judiciales por crímenes de lesa humanidad que habían sido recientemente reabiertos.[91] El anuncio se realizó en el marco de las conmemoraciones previstas por el gobierno de Néstor Kirchner para el trigésimo aniversario del 24 de marzo, en una coyuntura signada por la reactivación de las luchas por la memoria y la disputa, hacia el interior de las Fuerzas Armadas, por la designación de Nilda Garré como ministra.[92] Sin embargo, el impacto de dicha "apertura" estuvo lejos de ser inmediato. En efecto, se trataba de documentos que –a veces sin demasiada significación *a priori*– permanecieron en archivos oxidados durante largas décadas: ¿cómo explicar su renovada trayectoria? ¿Qué disputas y estrategias se pusieron en juego a la hora de acceder, analizar y utilizar esos acervos? ¿Cuáles fueron las condiciones de pervivencia y aparición de esas "huellas" del pasado que frente a otras muchas posibles, aparecieron dotadas de nuevos sentidos?[93]

Para responder a estos interrogantes, nos proponemos describir y analizar la tarea de los Equipos de Relevamiento y Análisis Documental de los Archivos de las Fuerzas Armadas, que fueron creados en el año 2010 en el marco de la Dirección de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario del Ministerio de Defensa con el objeto de contribuir a las causas por crímenes de lesa humanidad. Específicamente mostraremos cómo la intervención de la Dirección debe ser entendida en el marco de una disputa por el control civil de los archivos militares y al mismo tiempo, una disputa por los documentos como metonimia del control sobre las narraciones públicas respecto del pasado.

---

[91] Recordemos que en agosto de 2003 el Congreso Nacional sancionó la ley 25.779 que declaraba la nulidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. En junio de 2005 la Corte Suprema de Justicia declaró la invalidez e inconstitucionalidad de ambas leyes, reafirmó la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad y sostuvo la imposibilidad de amnistiar estos crímenes y la consecuente obligación estatal de prevenir, investigar y sancionar toda violación de los derechos reconocidos por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Véase Corte Suprema de Justicia de la Nación, *Arancibia Clavel, Enrique Lautaro,* Fallos: 327: 3312, 24 de agosto de 2004 y Corte Suprema de Justicia de la Nación, *Simón, Julio Héctor y otros,* Fallos:328: 3248, 14 de junio de 2005.

[92] Las resistencias se debían tanto a la trayectoria de Garré, quien había sido militante peronista de izquierda, como a su condición de género.

[93] Esta lógica de pervivencia y activación de documentos producidos por el Estado como "huellas" del pasado es equivalente a la trayectoria seguida por los legajos laborales de empleados públicos desaparecidos que se constituyeron como soportes de memoria en la práctica de la Comisión analizada en los capítulos precedentes.

En términos metodológicos, trabajaremos con entrevistas en profundidad realizadas con quince miembros de los Equipos de Relevamiento y Análisis Documental de los Archivos de las Fuerzas Armadas, del Programa de Modernización de Archivos y de la Dirección Nacional de Derechos Humanos, todos ellos pertenecientes al Ministerio de Defensa. Asimismo, hemos utilizado técnicas de observación etnográfica de los seis Archivos Generales e Históricos de las Fuerzas Armadas, según la perspectiva trazada por Da Silva Catela (2007) para el "mundo de los archivos". Por último, recurrimos al análisis de la normativa pertinente y de diferentes materiales (informes de investigación, ponencias, reportes a organismos internacionales) elaborados por los equipos arriba mencionados.

4.2. ¿Los archivos militares como “archivos de la represión”?

Antes de avanzar en el análisis, en el marco de los estudios de memoria latinoamericanos resulta indispensable referirse a la noción de “archivos de la represión” que fue tempranamente introducida gracias a los trabajos de Elizabeth Jelin y Ludmila da Silva Catela (2002). En un volumen pionero sobre la temática, Jelin señalaba la necesidad de pensar los archivos no como meros depositarios de restos del pasado sino como escenarios de luchas por las memorias individuales y públicas. En ese contexto, identificaba a los archivos de la represión como “archivos de las instituciones represivas de las dictaduras, instituciones que en mucho casos fueron cerradas antes o después de la transición” (Jelin, 2002: 5). En un sentido amplio, la noción incluía también archivos de organizaciones no gubernamentales y privadas. Siguiendo un recorte básicamente temático, Jelin identificaba tres tipos de acervos: en primer lugar, los ya mencionados archivos de las instituciones represivas, cuyos ejemplos paradigmáticos eran los archivos del Departamento de Policía Política y Social (DOPS) en Río de Janeiro, el denominado “Archivo del Terror” en Paraguay y el para entonces recientemente hallado archivo de la ex Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires; en segundo lugar, los acervos acumulados en base a listados y denuncias de casos, reunidos por comisiones de la verdad como la chilena o la argentina y en ocasiones basados en los acervos de los organismos de derechos humanos; por último, un tipo no

exactamente definido en el cual Jelin reunía acervos dispersos “que recogen documentos, restos y rastros del período dictatorial”, materiales sobre la vida cotidiana durante las dictaduras, el movimiento de derechos humanos, la resistencia individual y colectiva, entre otros.

En el mismo volumen, Da Silva Catela se refería a los archivos de la represión en un sentido más restringido como “al conjunto de objetos secuestrados a las víctimas o producidos por las fuerzas de seguridad (policías, servicios de inteligencia, fuerzas armadas) en acciones represivas (allanamientos, persecución, secuestros, tortura, desaparición, asesinatos, etc.) perpetradas durante las últimas dictaduras militares en los países del Cono Sur” (2002: 209). En esa definición se especificaba una de las principales cuestiones usualmente asociadas a este tipo de acervos: el hecho de que guardan información referida directamente a las víctimas y/o a las condiciones de su secuestro, detención o cautiverio.

Por otra parte, en una reflexión que inauguraba un punto de vista etnográfico respecto de este tipo de archivos, Da Silva Catela señalaba también que éstos no deben ser comprendidos como instituciones “neutras o estáticas”, sino que “componen conjuntos de relaciones sociales específicas” (2002: 210) que pueden ser aprehendidas por el investigador o la investigadora. En la medida en que los documentos de archivo atraviesan procesos de selección y valorización, por más rutinarios o burocráticos que éstos sean, deben leerse como resultado de la sociedad que los produce según relaciones de fuerza que se establecen entre los agentes que los produjeron, los guardan, los clasifican y los consultan (2002: 218). En el caso de los “archivos de la represión” ello supone dar cuenta de algunas especificidades adicionales: en primer lugar, la idea de que estos archivos están sometidos a un efecto *boomerang* (González Quintana, 1998) de acuerdo con el cual una vez que los procesos represivos han finalizado, los documentos sirven para una función social diametralmente opuesta a la que tuvieron en su origen. Es decir, aquellos archivos que fueron utilizados como insumos para el accionar represivo o son el resultado de ese accionar, pueden servir para reconstruir las historias fragmentadas de las víctimas y recomponer “las identidades quebradas por la situación extrema” vivida durante los años de represión (Da Silva Catela, 2002: 213). Asimismo, estos archivos pueden resultar vitales para

la formulación de pruebas en el plano jurídico, así como para la obtención de medidas reparatorias. Por último, en lo que refiere a su efecto *boomerang*, estos archivos pueden ser el eje de nuevas acciones pedagógicas o "políticas de memoria" (a menudo se convierten en museos, centros de documentación, monumentos, etc.), así como pueden ser fundamentales para la investigación histórica acerca del pasado reciente. Todo lo cual supone a su vez un conjunto de dilemas vinculados con el problema de la "verdad" de los documentos producidos en situaciones límites, así como también con la tensión que supone el traspaso de esta información a la esfera pública.[94]

En el ámbito de la archivística, por otra parte, la noción de "archivos de la represión" adquirió relevancia internacional a partir del informe elaborado para UNESCO y el Consejo Internacional de Archivos sobre "gestión de los archivos de servicios de seguridad del Estado de los desaparecidos regímenes represivos" de 1995.[95] Este informe se proponía realizar un estudio de un conjunto de casos paradigmáticos así como ofrecer una propuesta de código deontológico para el tratamiento de la documentación. [96] A partir de allí, se inauguraba una línea de reflexión que vinculaba la problemática archivística con la cuestión de los derechos humanos, con la intención de salvaguardar los documentos producidos por regímenes represivos como esenciales para los procesos de democratización que se vivían en cada uno de los países. En este primer informe por "archivos de la represión" se entendían específicamente los archivos estatales producidos por los servicios de seguridad, tales como la *Stasi* alemana y las policías políticas del régimen franquista, entre otros. Sin embargo, más tarde, en una revisión de ese Informe producida en 2008, el equipo del Consejo Internacional de Archivos modificó sustantivamente el alcance de su intervención para incluir archivos vinculados con la violación masiva de los derechos humanos en un sentido amplio. En gran parte

[94] Ambas cuestiones fueron trabajadas por la misma autora, entre otros, en relación con los archivos de las policías secretas en Brasil (Da Silva Catela, 2002: 15-84).
[95] Un resumen del informe se publicaría por el Consejo Internacional de Archivos, en inglés y francés. Véase González Quintana, A. (1998). Archives of the Security Services of Former Repressive Regimes", *Janus*(2). OJO referencias
[96] Los casos analizados en aquél primer informe fueron Alemania, Brasil, Chile, España, Hungría, Letonia, Lituania, Paraguay, Polonia, Portugal, Rusia, Sudáfrica y Zimbabwe.

basándose en la tipología desarrollada por Karababikian para la Argentina[97], el informe actualizado introduce la siguiente clasificación:

> 1. Archivos de organismos represivos, que estarían integrados por varios subconjuntos: archivos de los Servicios de Seguridad del Estado, archivos de los tribunales especiales, archivos del régimen carcelario o concentracionario, archivos de la Justicia ordinaria y lo que resulta de nuestro especial interés, archivos militares y de las "fuerzas de orden público".
> 2. Archivos generados desde la sociedad civil, incluyendo archivos de organizaciones de víctimas, archivos de partidos, sindicatos y asociaciones políticas y de organismos de defensa de los derechos humanos.
> 3. Archivos de las instituciones creadas tras la desaparición de los regímenes represivos para juzgar a los responsables de las violaciones de derechos humanos o para llevar a cabo la reparación de los daños causados a las víctimas por la actuación represiva del Estado: especialmente las comisiones de verdad, las agencias que implementan políticas reparatorias y las causas judiciales referidas al juzgamiento de los responsables.[98]

Por último, el informe menciona la importancia de los archivos públicos en general. Si como se define desde la disciplina archivística, los archivos son el sedimento de la actividad de una institución o persona en el cumplimiento de sus misiones y funciones (Nazar, 2007, 2010), los documentos producidos por

[97] Véase Karababikian, 2007.

[98] Una tipología similar, planteada con anterioridad puede hallarse en Nazar, 2007. Allí la autora propone clasificar los archivos "de la dictadura" o "de la represión", según hayan sido producidos en la órbita estatal o de la sociedad civil. Entre los primeros, menciona tres categorías: archivos "del accionar clandestino", cuya existencia se presume pero no se ha encontrado; "archivos de organismos de represión", como las secciones especiales de inteligencia de las Fuerzas Armadas o de las policías provinciales y los servicios penitenciarios, entre otros; y los archivos de "instituciones que no poseen actuación represiva directa", como distintas dependencias de la Administración Pública Nacional. Es destacable, para nuestro caso de estudio, que la autora señala tempranamente la necesidad de recuperar otros fondos documentales que sin ser los archivos "del accionar clandestino", pueden otorgarnos información sobre ese accionar. Dichos fondos documentales son aquellos producidos en el funcionamiento cotidiano del Estado. Como veremos en lo que sigue, tal es el caso de la política de relevamiento de los archivos de las Fuerzas Armadas que se desarrolló a partir del año 2010.

las instituciones públicas en contextos de violaciones masivas a los derechos humanos pueden servir como indicios para la reconstrucción de los hechos. En términos de González Quintana "la espontaneidad con que se generan los documentos de archivo convierte a estos en espejos de las sociedades en que se producen" (2008: 38) razón por la cual es posible encontrar información sobre acciones represivas en los documentos producidos día a día en la administración pública, como es el caso de los legajos laborales referidos en el capítulo dos.

Ahora bien, esta necesidad de ampliar la noción de "archivos de la represión" se basa en el interés por incluir dentro de las políticas de protección patrimonial a otros archivos como los mencionados en los puntos dos y tres. Como señala Karababikian, éstos no sólo completan y confrontan la información de las instituciones represivas (lo cual resulta de vital importancia si consideramos la tendencia a fraguar, ocultar o tergiversar que es propia de los organismos de inteligencia) sino que en muchos casos constituyen la única fuente de información respecto de personas, acontecimientos y procesos (2007: 12). Esto es especialmente cierto en los países como Argentina donde la represión adquirió una modalidad eminentemente clandestina, por lo cual es probable que no todas las acciones hayan sido registradas por escrito.[99] Por ello, Karababikian sugiere hablar de "archivos *en función* de la represión", así sea "para llevarla a cabo, para resistir a la misma, o para investigarla una vez concluida" (12).

Teniendo en cuenta este panorama, al hablar de la "política de apertura de los archivos de las Fuerzas Armadas", pareceríamos situarnos *a priori* en el primer punto de la tipología señalada arriba, esto es, los archivos militares entendidos como un subconjunto de los archivos de los organismos represivos. Especialmente la política de "apertura" inaugurada en 2006 estuvo centrada en siete archivos cuyas actuales denominaciones son: Archivo General e Histórico del Ejército, Archivo General e Histórico de la Armada, Archivo General e

[99] Si bien no se han encontrado, se conoce la existencia de documentos que registraban las operaciones clandestinas ya sea por testimonios de ex detenidos desaparecidos, así como por algunos documentos que salieron a la luz. Por ejemplo, el 6 de noviembre de 2001, los diarios *Clarín* y *Página/12* publicaron la noticia de un archivo donado anónimamente a Cedinci (Centro de Documentación e Investigación de la Cultura de Izquierdas en Argentina) con una serie de carpetas originales escritas a máquina o con un mimeógrafo y encuadernaciones de hojas fotocopiadas que habían sido elaboradas directamente por los represores de la Escuela Superior de Mecánica de la Armada (Nazar, 2007).

Histórico de la Fuerza Aérea y el archivo del ex Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas (CONSUFA).

Sin embargo, el uso de la noción de “archivos de la represión” para referirse a estas instituciones y sus acervos plantea importantes limitaciones que nos gustaría señalar. Ya sea que, como vimos, el término haga referencia al tipo de instituciones que produjeron los documentos, o como en otros casos, designe un recorte temático basado en el contenido de los mismos, y en otros, se utilice para referir a un contexto de producción de los acervos (de modo tal que se incluyen en ellos los archivos de los organismos de derechos humanos, asociaciones de víctimas, entre otros), para el caso que vamos a analizar los tres sentidos se presentan como problemáticos. Por un lado porque referirse a los archivos de las Fuerzas Armadas como archivos de organismos represivos —si bien tiene la virtud de dar cuenta de una "mirada ideológica y un posicionamiento político respecto de una ‘burocracia del mal’" (Funes, 2008) — soslaya que las Fuerzas Armadas en la Argentina poseen funciones legítimas de defensa nacional que se inscriben en el estado de derecho vigente. En ese sentido, aun si durante largos períodos asumieron funciones represivas, caracterizar sus archivos de ese modo no contribuye a comprender las especificidades de su accionar ni tampoco la lógica de producción de los documentos. Al mismo tiempo, y a la inversa, caracterizar los “archivos de la represión” como sinónimo de archivos producidos por organismos represivos, implica de algún modo suponer que la represión se sostuvo exclusivamente sobre éstos y excluye *a priori* la posibilidad de encontrar documentación que, habiendo sido producida por las instituciones “normales” del Estado (hospitales, cementerios, universidades) expresara al mismo tiempo funciones de represión política. Un ejemplo notable de ello son los legajos laborales cuyo proceso de “reparación” se analizó en los capítulos precedentes.[100]

Por otra parte, la noción de “archivos de la represión” no permite dar cuenta de que, como veremos, la documentación obrante en los acervos de las Fuerzas Armadas no se restringe a las décadas del sesenta y setenta (mucho menos al período 1976-1983) sino que, como es el caso del Archivo Histórico del Ejército, conserva documentación que se remonta a los orígenes del Estado

[100] Para un análisis de los legajos laborales como pruebas documentales del accionar represivo véase Balé, 2018.

nacional. En ese sentido, nominar a estos archivos según su contexto de producción impide dar cuenta de la existencia de documentos que fueron producidos mucho tiempo después (e incluso mucho tiempo antes) de ese período, e igualmente fueron utilizados para reconstruir diferentes aspectos del accionar represivo. Por último, en lo que se refiere al recorte temático, la noción de “archivos de la represión” resulta insuficiente para dar cuenta del entramado por medio del cual los documentos obrantes en los acervos pudieron hablar del accionar represivo de las Fuerzas Armadas. Este punto resulta especialmente clave: como veremos, a diferencia de los archivos de inteligencia, los documentos obrantes en los acervos analizados no fueron producidos con el objetivo de vigilar, controlar o clasificar al "enemigo interno", y por ello, desde su literalidad no refieren al accionar represivo. Incluso en los casos donde por su contundencia remiten a la comisión de delitos, esa remisión es el producto de un entramado específico, por intermedio del cual los documentos salieron de sus respectivos “sótanos” y fueron seleccionados, reinterpretados y traspasados a la esfera judicial. En ese sentido, optamos aquí por referirnos sencillamente a los “archivos de las Fuerzas Armadas” teniendo en cuenta que los documentos resguardados no constituyen reflejos directos del accionar represivo o su prueba directa, sino que tal como sucede en otros casos, el carácter “valioso” de los documentos (incluso como prueba judicial) no preexiste a las disputas para dotarlos de valor (Da Silva Catela, 2002).

4.3. La disputa por el control civil de los archivos militares

Como señala Pittaluga (2007), referirse a la cuestión de los archivos estatales en la Argentina implica lidiar con la historia de una ausencia, de la supresión del archivo o de su privatización. La prolongada falta de una política integral de preservación, tratamiento y difusión del patrimonio documental así como la ausencia de una política de acceso a la información pública convirtieron a la mayor parte de los archivos estatales en territorios marginales e inhóspitos. Los archivos de las Fuerzas Armadas no constituyeron una excepción: tanto los archivos generales —que resguardan la documentación producida por cada una de las Fuerzas en el cumplimiento de sus misiones y funciones en todo el territorio nacional— como los departamentos o servicios

históricos de cada una de ellas, estuvieron sujetos a diferentes formas del abandono y atravesaron, desde la segunda mitad del siglo XX, derroteros que incluyeron derrumbes, inundaciones, mudanzas, cambios de denominación y/o de dependencia orgánica de todo tipo.

En efecto, hasta la intervención del Ministerio de Defensa, especialmente con la creación de los mencionados Equipos de Relevamiento y Análisis Documental en el año 2010 y luego del Programa de Modernización de Archivos (PMA), creado en el año 2012, los siete archivos a los que nos referimos funcionaban como meros depósitos de documentación. Al momento de su anunciada "apertura" en el 2006, los archivos/depósitos llevaban varios años ignorando sus funciones sociales y presentaban grandes restricciones de accesibilidad tanto de orden normativo como práctico (Nazar, 2007: 420). Este dato es significativo a la hora de evaluar la trayectoria trazada por estos acervos y, como dijimos, la compleja trama por medio de los cuales éstos fueron configurados como archivos capaces de documentar responsabilidades y funciones del proceso represivo.

Esa trayectoria tiene uno de sus hitos un día antes de conmemorarse el 30° aniversario del golpe de Estado de 1976, cuando el entonces Presidente Néstor Kirchner "ordenó abrir los archivos militares de la dictadura".[101] En términos concretos, la resolución ministerial n°173/2006 autorizaba el acceso a los archivos del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas (EMCO), de los Estados Mayores Generales del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea y del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas con el objetivo ya mencionado de obtener "elementos que pudieran resultar de interés en las investigaciones de las violaciones masivas de los derechos humanos cometidas durante la dictadura militar". La resolución levantaba el secreto militar en relación con la documentación referida y ordenaba que la misma debía ser remitida al Archivo Nacional de la Memoria, según lo preveía el decreto de creación de este último en el año 2003.[102]

Aquella formulación según la cual se abrían los "archivos de la dictadura", fue reproducida por los principales diarios del país y se hacía eco de

[101] *Clarín*, 23 de marzo 2006; *La Nación*, "Ordenan abrir archivos militares de la dictadura", *Página 12*, "Ordenan la apertura de los archivos militares".
[102] Como veremos, la mecánica de implementación fue finalmente diferente y la mayor parte del relevamiento se realizó directamente en los archivos militares.

dos confusiones que como veremos no eran del todo casuales: el titular así descripto daba la impresión de que la dictadura militar (1976-1983) había producido sus propios archivos de manera separada y que eran éstos los que se abrían por primera vez, o bien, a la inversa, que los archivos militares cuya apertura se anunciaba poseían exclusivamente documentos referidos al último período dictatorial. Ninguna de las dos opciones era precisa, ya que los Archivos Generales poseían documentación eminentemente administrativa y como se verificó después en su abrumadora mayoría no contenían información explícita acerca de las víctimas de la represión. Además, si bien existían documentos que habían sido producidos durante la represión militar (o se referían a ella) y que, como veremos, probaron ser de valor para su reconstrucción histórica o judicial, la mayor parte de los acervos contenidos en los archivos de las Fuerzas Armadas databan de otros períodos. Por último, aunque las noticias recogían adecuadamente la negativa sistemática que las Fuerzas Armadas habían dado el acceso a cualquier documento referido a la represión ilegal, la idea de "apertura" debía ser matizada ya que, de acuerdo con la decisión inicial de Kirchner, *a priori* no se trataba de otorgar acceso público a los documentos, sino de habilitar el acceso para su uso judicial.

En este escenario, aun cuando búsquedas anteriores habían dado resultados negativos, la expectativa por parte de los organismos de derechos humanos era que la “apertura” de los archivos podía ser útil para ratificar por medio de documentos escritos la operatoria represiva que sobrevivientes y testigos habían estado describiendo oralmente durante décadas. Más aún, el diario *Página 12* afirmaba que la apertura de los archivos era “un reclamo histórico de los organismos de derechos humanos, que suponen que allí está contenida la información para saber qué pasó con los 30 mil desaparecidos”.[103] Por otro lado, el diario *Clarín* refería que, dentro del ámbito castrense, la “apertura” era percibida como un gesto meramente simbólico que no iba a arrojar resultados relevantes.[104]

[103] *Página 12*, 23 de marzo de 2006.
[104] En efecto, el diario *Clarín* mencionaba que “la medida aparece como simbólica, a dos días de que se cumpla el 30º aniversario del golpe militar de 1976 […] En el Ejército, los ex jefes Martín Balza y su sucesor Ricardo Brinzoni ordenaron en su momento revisar los archivos, pero los resultados fueron negativos”.

Ahora bien: ¿qué esperaban encontrar en aquellos archivos los funcionarios del Ministerio de Defensa que impulsaron su "apertura"?

Al respecto es necesario considerar que dado el carácter ilegal de las acciones represivas era una hipótesis plausible que no hubiera quedado un registro escrito o documental de ellas. Sin embargo, la práctica represiva respondió a una cadena "natural" de mando que, a su vez, dependió de instancias institucionales y administrativas que sí debían guardar registros. En ese sentido, la Dirección Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario (en adelante, DNDHH) que tenía a su cargo el seguimiento de las respuestas a los oficios judiciales,[105] apostó no tanto a hallar documentación producida con fines exclusivamente represivos sino a encontrar aquella que habiendo sido elaborada para otros fines, pudiera aportar información sobre aquéllos. En ese sentido, Natalia Federman, (ex directora de Programas de la DNDHH del Ministerio de Defensa entre 2006 y 2010) recuerda como puntapié inicial el caso del ex teniente coronel Bruno Laborda, quien en un reclamo administrativo del año 2004 relataba con lujo de detalles los crímenes que "la oficialidad superior le ordenó hacer cuando era subteniente y teniente", durante la dictadura. Laborda se proponía recurrir la decisión de la Junta Superior de Calificaciones de Oficiales que le había rechazado su ascenso a coronel, para lo cual en una carta dirigida al Jefe General del Ejército "confesaba" de manera pormenorizada los crímenes de cinco militantes, una de ellas embarazada.[106] Para los funcionarios de la DNDHH, el caso Laborda hizo evidente que aun si las Fuerzas Armadas no habían elaborado registros explícitos de la represión ilegal mientras la cometían (o si tales registros no se conservaban), era necesario relevar la totalidad de los archivos. Incluso documentos producidos muchos años después podían contener información sobre delitos y sus respectivos perpetradores.

[105] La Dirección Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario fue creada en 2006 y sus funciones eran las siguientes: "organizar el dictado de contenidos en derechos humanos, delinear políticas de género, intervenir en el análisis de legajos para ascensos y designación de destinos, ofrecer información a pedido de los juzgados en ocasión de la imputación o procesamiento de militares e intervenir en la redacción del código de justicia militar". (Frederic, 2013:156).

[106] El entonces Jefe del Ejército, Roberto Bendini, le negó el ascenso y presentó la carta a la justicia que la evaluó como prueba. Laborda murió mientras estaba siendo enjuiciado en la mega causa La Perla. *Véase Infojus Noticias* http://www.infojusnoticias.gov.ar/provinciales/murio-laborda-el-represor-que-queria-un-ascenso-por-sus-crimenes-327.html. 24/07/2013.

Paralelamente, el episodio da cuenta de que luego de varias décadas y hasta la intervención del Ministerio de Defensa, los archivos militares no aparecían hacia el interior de las Fuerzas Armadas como una cuestión relevante y no eran considerados un territorio en disputa.

Ahora bien, pese a lo anunciado, la “apertura” prevista por la Resolución n°173 no produjo resultados inmediatos. En noviembre de 2007, casi dos años después, el Ministerio de Defensa promulgó una nueva resolución que si bien no estaba referida a los archivos, los implicaba directamente.[107] Considerando que se habían evidenciado “demoras” en la contestación de los oficios judiciales y que éstas podían deberse a la “falta de un procedimiento predeterminado para la tramitación de solicitudes”, la ministra instruía a los Jefes del EMCO, y de los Estados Mayores de cada una de las Fuerzas para que designaran un oficial encargado de realizar el seguimiento de los requerimientos. Su función sería constatar que no se produjeran “demoras injustificadas” y debía reportar a la DNDDHH. Al respecto, distintos funcionarios e integrantes de los Equipos de Relevamiento señalan que las respuestas de las Fuerzas Armadas se hallaban signadas por un “principio de descortesía”, según el cual frente a requerimientos mal formulados o vagos se respondía negativamente o se aseguraba la dilación del trámite (Federman, 2015). Así inexactitudes en el grado militar, apellidos mal escritos o confusiones en el tipo documental solicitado eran causales (y siguen siéndolo) de respuestas negativas. Por esa razón, en los años siguientes la DNDDHH se propuso desarrollar una estrategia diferente.

De acuerdo con Federman, teniendo en cuenta la existencia de una "voluntad política" que emanaba del Poder Ejecutivo respecto de la conducción civil de los asuntos castrenses, así como del avance de los juicios por crímenes de lesa humanidad, en el año 2010 la Dirección se propuso crear un grupo de trabajo propio para que emprendiera “la tarea de relevamiento y análisis de toda la documentación que pueda resultar de valor histórico y/o judicial que se encuentre archivada y/o custodiada”[108] en las dependencias militares. Según señala Federman:

[107] Ministerio de Defensa, Resolución n°1711 del año 2007.
[108] Resolución n°308 del año 2010.

> Esta resultó una estrategia novedosa en la búsqueda de información, ya que por primera vez el plan de trabajo no implicaba solicitar al jefe de una fuerza que enviara determinada documentación cuya existencia se conociera o se presumiera, sino que investigadores propios del Ministerio de Defensa recorrerían los archivos y accederían a la documentación directamente en el lugar donde esta se encontrara. (Federman, 2005: 103)

Según se señala en la resolución respectiva, dicha tarea tenía como antecedente el trabajo que la DNDDHH había realizado en relación con los archivos del recientemente disuelto CONSUFA, con la diferencia de que ahora se trataba de relevar archivos cuyas instituciones productoras seguían en pleno funcionamiento.[109] Como veremos, ello implicó una reorganización o una nueva "configuración del archivo" (Ricoeur, 2004) que giró en torno a aquello que los integrantes de los Equipos de Relevamiento y la DNDDHH en general consideraron de "valor histórico o judicial". Al mismo tiempo esta reorganización implicó alterar el *status quo* al interior de los Archivos como instituciones e intervenir en un terreno que las Fuerzas Armadas consideraban de su exclusiva propiedad. La normativa de creación de los Equipos, esto es, la Resolución n° 308 del año 2010, es elocuente al respecto: no sólo ordenaba a los Jefes de los Estados Mayores que permitieran el ingreso irrestricto de los investigadores y habilitaran copia de “todas las llaves de acceso a las dependencias y/o oficinas y/o armarios” sino que además se facultaba al entonces denominado “grupo de trabajo” a “precintar y/o limitar el acceso temporal” de las dependencias que consideraran pertinentes. Ello suponía de manera explícita que el ingreso de los Equipos de Relevamiento constituía una intervención del Ministerio que no podía contar con la colaboración de las Fuerzas Armadas. Así, de un modo análogo a las inspecciones realizadas por la CONADEP en el proceso de localización de los Centros Clandestinos de Detención, la apertura de los archivos de las Fuerzas y la instalación de los Equipos de Relevamiento conformados por civiles, implicaban el “avance sobre un territorio y una soberanía específicos, habitualmente restringidos a la vista pública” (Crenzel, 2014: 75). La entrada de los civiles a los archivos implicaba

[109] Inicialmente el Ministerio de Defensa creó el Archivo Histórico de la Justicia Militar por medio de la Resolución 240/10, quedando bajo su custodia la documentación producida por el CONSUFA. Posteriormente y con la resolución 1419/10 el Ministerio dispuso la transferencia de dicho archivo al Archivo General de la Nación en cumplimiento de la ley 15930.

un conflicto doble: la disputa por la conducción civil de los asuntos castrenses[110] (y dentro de eso, las resistencias que los procesos de cambio *per se* generan al interior de las instituciones) y una disputa por la memoria, en el sentido de encuadrar y/o controlar los discursos posibles en torno del pasado.

En relación con lo primero, a la hora de referirse a la entrada de los Equipos al Archivo General de la Armada, Natalia Federman señalaba lo siguiente:

> Pero sí me acuerdo de la escena de tener que saludar a todo el mundo en el archivo, porque los habían puesto todos en fila… y había que reconstruir… Nosotros teníamos una legitimidad que también tenía sus resistencias y todo, pero con tantos años -ya casi cinco años de gestión- con tanta gestión habíamos superado la instancia en la cual si no llamaba a la Ministra [Garré] avisando que iba alguien de la Dirección [Nacional] de Derechos Humanos no nos dejaban entrar. Ya está. Ya sabían que si íbamos, la ministra estaba al tanto. Porque hubo muchas de esas situaciones, nosotras llegábamos y 'ah, no pero hay que ver si…' Ya para ese momento tenían claro que no era necesario el llamado a la Ministra. Entonces eso había que transferirlo al Equipo. (Entrevista de la autora a Natalia Federman, 9 de octubre 2017).

Así el primer desafío implicó la construcción de una legitimidad que si bien se fundaba normativamente en el aval de la Ministra, debía ser "transferida" a los Equipos. La construcción de esta legitimidad debió atravesar las resistencias – más o menos explícitas– de los jefes o directores de los Archivos e implicó una continua negociación respecto de los modos en que el personal de los Archivos percibía la tarea de los Equipos y a sus integrantes.

En efecto, en una estructura jerárquica como la militar —donde la producción y la reproducción del orden dependen de la afirmación de la jerarquía, el mando y la disciplina, y donde cada integrante está necesariamente inscripto en relaciones de subordinación y superordinación (Soprano, 2015: 80)— la "transferencia" de autoridad y el lugar ocupado por cada uno (incluso por quienes se encuentran fuera de la estructura) está fuertemente mediado por la disposición de quien ocupa el lugar más alto de la pirámide. En ese sentido, algunos miembros de los Equipos mencionan que la

[110] La disputa por la conducción civil de las Fuerzas Armadas constituye un proceso que se enmarca en la incorporación de las Fuerzas Armadas al orden democrático. Al respecto y para una evaluación de la gestión de Nilda Garré (2005-2010) como Ministra de Defensa en ese contexto véase Frederic, 2013.

relación que pudieran establecer con los jefes de los Archivos tenía una fuerte influencia sobre el nivel "hostilidad" o "rispidez" que pudieran experimentar con el resto del personal. Por ese motivo es que si bien todos los entrevistados reconocen la existencia de un antagonismo, los niveles de tensión y afinidad fueron variables a lo largo del tiempo. Salvo por episodios puntuales, como el desplazamiento de un militar que se encontraba destinado a la Dirección de Bienestar del Ejército, donde el Equipo consultaba legajos de personal retirado,[111] las disputas solían tener un carácter larvado que se expresaba en las interacciones cotidianas. Las más destacadas se vinculan con la colocación de "fajas de seguridad" en las puertas y ventanas de las oficinas donde trabajaban los Equipos. Estas eran colocadas por los propios investigadores o investigadoras para prevenir el acceso de otras personas, especialmente del personal militar. Asimismo, en las entrevistas se recogen otros altercados referidos a la disponibilidad de los insumos y también bromas que si bien no eran exclusivas del personal militar hacia los Equipos (sino que pueden inscribirse en una cierta noción de "camaradería militar"), daban cuenta de un proceso de tensión y negociación continua. Asimismo esta clase de convivencia cotidiana puso en juego los modos de percepción de cada grupo respecto de aquellos que calificaba como "otros": para los integrantes de los Equipos trabajar en compañía de personal militar implicó aprender a manejar un conjunto de códigos asociados al mando y a la disciplina que les resultaban ajenos. A su vez, el trato cotidiano implicó descomponer aquello que aparecía como un conjunto homogéneo —"los militares"—, para comenzar a percibir diferencias generacionales y socio profesionales. Del mismo modo y a la inversa, la presencia de los Equipos implicó enfrentarse a los prejuicios que dominaban "del otro lado", por ejemplo, la idea de que quienes se desempeñaban en los Equipos estaban allí porque tenían un vínculo directo con el gobierno de turno o que cobraban salarios muy por encima de la media.

Al mismo tiempo, toda esta serie de disputas estaban condicionadas por la condición etaria y de género de quienes conformaban los Equipos de

[111] Por lo que pudimos saber se trataba de un familiar de un militar retirado que, para el momento de los hechos, estaba imputado en una causa por delitos de lesa humanidad en la provincia de Salta.

Relevamiento.[112] En su mayor parte, los Equipos fueron coordinados por mujeres jóvenes, para quienes la tarea de construcción de una legitimidad para trabajar en el ámbito castrense se presentaba como doblemente problemática. Si bien esto constituye un denominador común en lo que se refiere a las desigualdades entre mujeres y hombres en una sociedad como la argentina, al tratarse de una institución jerárquica conducida y constituida principalmente por varones y basada, a su vez, en un orden disciplinario que tiene a los más "antiguos" –de mayor edad y grado– como "superiores" (Frederic, 2013: 403) la incidencia de tal disputa se multiplicaba. En este sentido, tanto las funcionarias de la DNDDHH (que estuvo a cargo de mujeres en todo el período analizado)[113] como las investigadoras y archivistas que formaron parte los Equipos, refirieron distintos mecanismos de invisibilización o denostación por parte del personal militar masculino. En un relato que refleja varias de estas tensiones recuerda Stella Segado, directora de la DNDHH entre 2011 y 2015:

> De hecho tengo una anécdota que fue impactante que fue la primera semana que yo llego al ministerio. Me avisan desde la Dirección que un fiscal había allanado un archivo en busca de algo y… ¿cómo nosotros no lo sabíamos? Parece que [el fiscal] directamente habló con las Fuerzas… la cosa es que yo lo llamo al tipo que estaba acompañándolo, que era en ese momento el director de los archivos de la fuerza en cuestión. Lo llamo a su celular y le digo si él estaba con este fiscal… "¿Y por qué yo no sé?", le digo. Entonces el tipo empieza a decir "Eh, yo… no sé… terminó acá y voy para allá señora". Entonces viene y me hizo un discurso "célebre"… tengo ese recuerdo porque era la primer semana, yo no entendía nada, no sabía ni cómo funcionaban las cosas… entonces yo pensaba "me estoy peleando con este tipo al que ni siquiera conozco"… el tipo me hace todo un discurso… "sepa señora que mis huesos… exudan agua de mar", una cosa espantosa. Bueno, entonces yo le vuelvo a decir: "yo estoy a cargo de los archivos, usted me tiene que informar antes de que vaya el fiscal". El fiscal le había pedido a la Fuerza directamente y ellos aprovechan la bolada para mostrarle lo que quieren mostrar… pero cuando se va el señor, sale y parado en la puerta, porque era la primera vez que nos veíamos, me dice: "Le quería hacer una consulta: ¿usted es actriz, no?..." Entonces me doy cuenta que él me había googleado y yo aparecía en una obra, hacía muchos años y yo le dije que no. Pero pensé "qué increíble"… porque en realidad quiso rebajarme… como decir, sos civil y encima… (Entrevista de la autora con Stella Segado, 19 de septiembre de 2017)

[112] Incluimos más información sobre la composición de los Equipos en lo que sigue.
[113] Durante la gestión de Nilda Garré, la Directora Nacional era Ileana Arduino y, luego, como hemos dicho, Stella Segado.

Por otro lado, en relación con las disputas por el control de los discursos sobre el pasado, las diferentes Fuerzas lidiaron de maneras diversas con el relevamiento que realizaban los Equipos. A diferencia de lo que ocurría en Ejército y en Armada, donde el acceso a los legajos de servicio estaba mediado por personal militar (los suboficiales destinados al archivo retiraban los legajos de su lugar de guardado y los colocaban una vez finalizado el relevamiento), en la Fuerza Aérea el Equipo tenía un acceso directo a los legajos que se almacenaban en la Dirección de Retiros y Pensiones. Es decir que mientras en Ejército y Armada las Fuerzas llevaban un registro de qué documentos habían sido relevados, en el caso de la Fuerza Aérea (tal vez por su participación subsidiaria en la denominada "lucha contra la subversión") el acceso de los investigadores a un material tan sensible como los legajos de personal retirado era directo.[114] Asimismo, la disputa por el control de la documentación se expresaba en los modos diferentes en los cuales los Equipos y los Archivos respondían a los oficios judiciales. En relación con ello, es importante tener en cuenta que los oficios podían estar directamente dirigidos a las Fuerzas Armadas, siendo éstas las encargadas de responderlos o bien a la Dirección Nacional de Derechos Humanos. En el primer caso, la respuesta involucraba directamente al personal pre-existente en los Archivos (por ejemplo cuando se trataba de la remisión de un legajo a la Justicia) y eventualmente a las respectivas áreas legales de cada fuerza. En el segundo caso, eran los Equipos de Relevamiento los encargados de remitir la documentación e incluso, como veremos, de producir informes que contextualizaran los documentos requeridos y/o se explayaran respecto de un pedido que podía ser formulado desde la Procuraduría de Crímenes de Lesa Humanidad o desde un tribunal en específico. De acuerdo con los miembros de los Equipos, las diferencias entre las respuestas (en los casos en que pudieron conocer las formuladas por los Archivos) podían ser sutiles o más notorias, ya sea por omisiones o remisiones incompletas de documentación.[115]

Por esa razón, una de las tareas de los Equipos de Relevamiento fue la realización de un instructivo especialmente destinado a los operadores judiciales, en el que se explicitaban cuáles eran los tipos documentales

[114] Entrevista de la autora a parte del Equipo de Fuerza Aérea, 14 de julio de 2017.
[115] Entrevista de la autora al Equipo Armada, 12 de junio de 2017.

obrantes en cada uno de los Archivos y se incluían recomendaciones respecto de cómo pedirlos y para qué utilizarlos. Este instructivo, que analizaremos con algún detalle más adelante, constituyó una de las estrategias que la DNDDHH puso en juego para “traspasar” la información que contenían los archivos a la esfera judicial. Específicamente, se trataba de salvar las restricciones prácticas de accesibilidad y especialmente las simbólicas, teniendo en cuenta que existía un desconocimiento generalizado del tipo de documentación que las Fuerzas Armadas producían así como la jerga militar en la que estaban escritos.

Estos dos tipos de disputas que distinguimos analíticamente (es decir, las disputas por el control civil y por el control sobre la memoria del pasado) se hallaban entrelazadas en la práctica cotidiana del trabajo en los Archivos. El solapamiento de ambas tensiones da cuenta de hasta qué punto la decisión del Ministerio de Defensa de intervenir sobre un territorio hasta entonces exclusivamente militar convirtió a los otrora archivos/depósitos en territorios en disputa. Esta decisión debe inscribirse no sólo en un cambio de posición de las más altas autoridades del Poder Ejecutivo Nacional en torno a cómo lidiar con el pasado reciente, sino en un “enfoque práctico singular sobre la conducción civil de la Defensa [que] derivó en cambios normativos organizacionales y valorativos, inéditos y sustantivos” en el área, especialmente entre los años 2005 y 2010 (Frederic, 2013: 36). En efecto, ambas cuestiones (la subordinación política de las Fuerzas Armadas y el cambio de gestualidad respecto del pasado) se anudaban con un conjunto de escenas emblemáticas, como la decisión ya mencionada, del entonces presidente Kirchner de conmemorar el 24 de marzo de 2004 en el Colegio Militar de la Nación y también de ordenar al entonces Jefe del Ejército que retirara con sus propias manos los retratos de los Generales Videla y Bignone que permanecían colgados allí. El punto es que esa superposición o anudamiento de disputas se replicó a nivel micro institucional al interior de los archivos. Como hemos adelantado, en términos de Ricoeur la entrada de los Equipos de Relevamiento puso en tensión "la configuración del archivo" (2004: 217), entendida como unas reglas y un conjunto de interacciones específicas que delimitan qué, cómo y cuándo algo es archivable, es decir, pasible de ser guardado y consultado. En efecto, desde este punto de vista, las restricciones de acceso no constituían meros problemas técnicos (es decir, solucionables a partir de un conjunto de

procedimientos) sino un modo de “configuración del archivo” derivado de una historia institucional y de determinadas relaciones de fuerza al interior y al exterior de los mismos. Dicho de otro modo, que los documentos obrantes en los acervos de las Fuerzas Armadas se hayan deteriorado, abandonado u ocultado o que luego hayan sido desempolvados y dotados de valor histórico o judicial, no remite a meras cuestiones prácticas sino a modos activos y políticamente cargados de encuadrar el pasado y seleccionar determinadas huellas entre la infinidad de huellas posibles. Desde ese punto de vista, los archivos de las Fuerzas Armadas se reconfiguraron como “territorios de memoria” (da Silva Catela, 2002), es decir, como espacios dinámicos en los cuales los diferentes actores involucrados desarrollaron estrategias de encuadramiento, conquista y disputa por la “soberanía” de los documentos, entendidos como una metonimia del control sobre el pasado (2002: 22). A continuación, veremos con más detalle las estrategias que los integrantes de los Equipos de Relevamiento pusieron en juego para disputar ese territorio, reconfigurar la "puesta en archivo" de estos acervos y responder a las expectativas sociales que la “apertura” de los archivos traía aparejada.

4.4. La producción de un saber experto y el traspaso de la documentación a la esfera judicial

Para comprender de manera más específica el trabajo de los Equipos de Relevamiento es necesario considerar los modos en que los propios investigadores concibieron su tarea así como las modalidades de trabajo que fueron adoptando a lo largo del tiempo. Según señalan los entrevistados, en un primer momento la tarea de los Equipos fue entrar a los Archivos y “ver qué había”, teniendo en cuenta que, como se dijo, el objetivo de la “apertura” era aportar documentación relevante en las causas por delitos de lesa humanidad. Sin embargo, tal tarea se presentaba como especialmente dificultosa: “¿cómo encontrar aquello que no sabemos cómo está registrado ni dónde?”.[116] Al respecto señala Federman:

> Entonces nosotros sabíamos cómo funcionaba la Fuerza administrativamente, cómo registra su funcionamiento, y eso no

[116] Guembe y Federman, 2016.

> quiere decir que vas a encontrar registro de participación en delitos, pero podes tener idea de dónde estaría ese registro si es que está. Es una aguja en un pajar, la idea era buscar una aguja en un pajar. Pero hacerlo de modo tal que fuera sistemático, serio, con una perspectiva determinada. Y sacarlo del pajar y ponerlo donde tenía que estar que era por ejemplo en una causa judicial. (Entrevista de la autora a Natalia Federman, 9 de octubre 2017).

Esta tarea —"encontrar una aguja en un pajar"— debió enfrentarse, como mínimo, a un doble desafío. Por un lado, como señalamos, el estado de los fondos era bastante precario y también lo eran los instrumentos de búsqueda con los que contaban la mayor parte de los Archivos. Por otro, encontrar documentación que pudiera tener relevancia judicial implicaba comenzar a comprender la lógica de funcionamiento del archivo como un todo, es decir, requería dar cuenta del "punto de vista nativo" con el cual esa documentación se había producido, seleccionado y acumulado (Muzzopappa, 2015). Por ello, en una primera etapa, la tarea de los Equipos fue identificar los tipos documentales existentes y dar cuenta de la información que contenían sin asistencia del personal militar. Durante los primeros años y como parte de esta tarea, encontraron documentos que, por su contundencia, resultaban inmediatamente relevantes. Si bien esto no sucedió a nivel masivo, el carácter explícito de la información contenida en esos documentos (especialmente Actuaciones de Justicia Militar y reclamos a las Juntas de Calificación) resultó clave para la imputación judicial de algunos responsables. Un ejemplo de ello es el expediente conocido como "caso Colquhoun" que fue hallado en un cuarto que contenía documentación clasificada como "secreta" en el Archivo General de la Armada. Se trataba de un sumario administrativo que la Fuerza había iniciado en 1976 al entonces teniente de navío Aníbal Roberto Colquhoun y a un grupo de suboficiales por "presunto delito de hurto", luego de dos operativos de secuestro de militantes montoneros. Según señalan las investigadoras integrantes del Equipo dedicado a los archivos de la Armada, la Actuación de Justicia Militar contenía las declaraciones que la fuerza tomó a todos los integrantes del grupo operativo, de modo que, una vez hallado el expediente, sirvió para identificar al personal involucrado y para aportar información respecto de las prácticas paralegales de ese grupo de tareas en relación con el robo de bienes que pertenecían a las víctimas. Gracias a ello, en abril de 2013

fue ordenada la detención de Colquhoun y otros cuatro cabos cuyas responsabilidades permanecían desconocidas hasta el momento.[117]

Por otra parte, como resultado de esa primera etapa de relevamiento los Equipos elaboraron el arriba mencionado "Instructivo para la consulta de los acervos documentales de las Fuerzas Armadas", cuyo principal objetivo era "orientar la búsqueda documental en las diversas instancias del Poder Judicial desde donde se producen requerimientos oficiales a las Fuerzas". Teniendo en cuenta lo mencionado arriba en relación con el "principio de descortesía", así como el desconocimiento por parte de los operadores judiciales del tipo de documentación que las Fuerzas producían, el instructivo se proponía describir de manera detallada los tipos documentales que podían ser de utilidad para las investigaciones judiciales. Para ello, se hallaba dividido en tres partes (una por cada Fuerza) y exponía de manera pormenorizada la modalidad de acceso, los criterios de búsqueda y el contenido de aquellos documentos que fueran clave para una investigación sobre el desempeño operativo de cada una de las Fuerzas en la denominada 'lucha contra la subversión' (Ministerio de Defensa, 2010: 80). Así se incluían explicaciones sobre el orden y la organización de los legajos de personal superior, subalterno, civil y conscripto, las actas de las juntas de calificación y su sistema de funcionamiento, las actuaciones de justicia militar y los posibles criterios de búsqueda, así como un detalle de los reglamentos, manuales y diccionarios disponibles. Para el caso del Ejército, se detallaba además el contenido de los Libros de Escalafón, Libros Históricos, Boletines Públicos y Reservados, y recibos de haberes, entre otros. En el caso de la Armada, se incluían explicaciones sobre el Escalafones, Listados Generales de Pagos, Partes de Personal Superior y Memorias de unidad. En el caso de la Fuerza Aérea, se especificaba la información que contenían los Boletines Aeronáuticos Públicos, Reservados y Confidenciales, las Órdenes del día, las Memorias, junto con el análisis del contenido de sus respectivos capítulos, los listados de personal, resoluciones, etc.

Según se señala en el prólogo firmado por el entonces Ministro Arturo Puricelli, el instructivo era el resultado de un "trabajo exploratorio", que "careció de orientación por parte del personal de las Fuerzas" (Ministerio de Defensa,

[117] Véase Dandan, 2013.

2010: 3). Esta aclaración resulta relevante en tanto evidencia la disputa por el control civil de los Archivos según la mencionamos arriba y muestra hasta qué punto el proceso implicó, por parte de los y las investigadoras, ingresar a un "mundo exótico", es decir, un "sentido común" ajeno respecto del cual se encontraban a una distancia social considerable (Muzzopappa, 2015). Así, por ejemplo, frente a la pregunta de si tuvieron oportunidad de consultar con personal de la Armada el significado de determinados códigos que solían aparecer en los documentos, las integrantes del Equipo respondían:

> Florencia: La verdad que no se dio. Hay dudas que tenemos que las vamos a tener, en algún momento las dejaremos de tener si encontramos la documentación. Pero bueno también nosotros tratamos de buscar tipos documentales como el Diccionario de la Armada, el Catálogo de Códigos Administrativos, que te aportan una luz sobre las cosas, que es mucho más clara que la respuesta que te puedan llegar a dar.
> Ana: Hemos compartido búsquedas de cosas que parecen obvias y que de repente buscas el significado de una palabra y te das cuenta de que la vía de investigación tiene que cambiar. En [la investigación referida a la] ESMA pasó, por ejemplo.
> Florencia: claro, el libro de códigos es un coso así… lleno de códigos que quieren decir un montón de cosas.
> Ana: inagotable… Vos decías, ¿cómo hicieron para aprender? No, es continuo. Es una materia viva. (Entrevista de la autora al Equipo Armada, 12 de junio de 2017.)

La metáfora de la "materia viva" es elocuente en la medida en que para que el trabajo de los Equipos pudiera avanzar más allá del carácter manifiesto de los documentos, fue necesaria la construcción de un saber experto que al comprender el archivo como un todo, pudiera dar cuenta del conjunto de relaciones sociales que expresaba. Así, en una segunda etapa (especialmente durante la gestión de Stella Segado como Directora de la DNDDHH) la tarea estuvo signada por una tarea de cruce documental que permitiera producir información que no estuviera contenida en los documentos tomados individualmente. Esta segunda lógica implicaba considerar al archivo no solamente como una fuente de datos sino como un artefacto cultural donde cada pieza tomada en forma aislada remitía a un universo de referencia mayor (Muzzopappa, 2015). En términos archivísticos, esto significaba restituir, aunque sea lógicamente, el orden original de los documentos (es decir, el orden en el cual habían sido producidos) y leerlos como parte de un sistema

orgánico y seriado, es decir, sujetos a un determinado ciclo, determinadas reglas y determinados “usos y costumbres” de funcionamiento institucional. Así, desde el año 2010 en adelante, los Equipos se abocaron no tanto a remitir y relevar documentación específica sino a producir informes que eran remitidos a distintas dependencias de la Administración Pública y especialmente a demanda del Poder Judicial. Entre 2010 y 2015, los Equipos produjeron alrededor de sesenta informes que fueron entregados a fiscalías y juzgados[118]. A la hora de explicar la mecánica de trabajo, señalan Lavintman, López y Pankonin, integrantes del Equipo Ejército:

> Respecto a qué datos se pueden recabar en los archivos, despejaremos el siguiente supuesto común: no obran en dichos fondos documentales fichas de entrada a Centros Clandestinos de Detención (CCD) ni información específica sobre detenidos/as desaparecidos/as.

Sin embargo, señalan los investigadores:

> A través del uso de diferentes tipos documentales producidos por la misma fuerza, reconstruimos la operatoria represiva y sus registros, que se presentan de modo fragmentado. En los casos en que la justicia requiere la reconstrucción del accionar de la fuerza se enmarca en un recorte temporal y territorial (Zona, Subzona, Área). A partir de un relevamiento integral de la documentación referida a las unidades pertinentes se sistematizan los datos en un informe que “traduce” lo encontrado en los documentos en un corpus expositivo, para ser utilizado como insumo por las fiscalías en la reconstrucción de los hechos. (Lavintman, López, Pankonin, 2017: 8.)

Este señalamiento da cuenta de la existencia de un "supuesto común", o en otros términos, una demanda social que debieron enfrentar los y las investigadoras en relación con aquello que se esperaba del contenido de los Archivos. En efecto, como vimos al inicio, la expectativa en relación con estos acervos estaba signada por la prolongada e infructuosa búsqueda de documentos oficiales que dieran cuenta del accionar represivo ilegal y, especialmente, del destino de las personas desaparecidas. El hecho de que gran parte de la documentación hallada respondiera a la gestión cotidiana de

[118] Informe sobre los Equipos de relevamiento y análisis de los Archivos de las Fuerzas Armadas. Dirección Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. Mimeo. Ministerio de Defensa.

las Fuerzas Armadas en un período que va más allá de la dictadura militar, o lo que es lo mismo que los Archivos de las Fuerzas Armadas no constituyeran "archivos de víctimas" generó que los y las integrantes de los Equipos elaboraran otras estrategias para, como ellos mismos lo dicen, "cumplir con las mismas expectativas".[119] Así, puede decirse que la generación de informes que reconstruyeran estructuras represivas fue el modo particular en que desde la DNDHH se respondió a la demanda de "apertura de los archivos" entendida no como una política archivística *per se,* sino como sinónimo de obtención de "verdad" e incluso de "prueba jurídica".

Un buen ejemplo de esta reconfiguración de la "puesta en archivo" es la experiencia del Equipo Armada en relación con el pedido de información que les hiciera la fiscalía para la "mega causa ESMA", donde se juzgaron los crímenes cometidos en la Escuela de Mecánica de la Armada. Según relatan sus integrantes, el Equipo confeccionó dos informes que fueron incorporados a la causa con documentos anexos digitalizados. Entre otras cuestiones, el aporte documental fue decisivo para el bloque referido a la "aviación naval", es decir, aquél donde se juzgaba a los pilotos acusados de participar en los denominados "vuelos de la muerte". Si bien la existencia de los vuelos ya se consideraba probada con anterioridad (gracias a testimonios, investigaciones periodísticas e incluso confesiones de perpetradores)[120], en este caso el aporte documental permitió reconstruir la mecánica por medio de la cual la Armada movilizaba los aviones que se utilizaron para los vuelos, según una estructura que excedía a los grupos de tareas de la ESMA e involucraba el Comando de Operaciones Navales.[121] Así, a partir del uso de documentos de carácter público como reglamentos, boletines y manuales, la fiscalía pudo reconstruir la operatoria de los "vuelos de la muerte" y detectar toda una cadena de responsabilidades. Al respecto las integrantes del Equipo Armada señalan:

> ¿Cómo podíamos aportar a través de un archivo administrativo con los vuelos de la muerte? Ese era el pedido que nos hacia el tribunal. Y en relación a eso nosotros elegimos una vía que fue presentar la toda la documentación que teníamos sobre aviación naval en ese

[119] Entrevista de la autora al Equipo Armada, 12 de junio de 2017.
[120] El ejemplo paradigmático es la confesión del ex capitán de corbeta Adolfo Scilingo, en entrevista con el periodista Horacio Verbitsky en marzo de 1995.
[121] Véase Entrevista a Luz Palmás Zaldúa (CELS), "La logística de los vuelos de la muerte", *Página 12*, 7 de agosto de 2017.

> momento. Y estamos hablando de reglamentos públicos, después de 35, 40 años, tomar un reglamento público era una decisión porque vos decís, ya pueden haber circulado en todos los juicios, los pueden tener digamos, pero bueno nuestra función desde el archivo era presentar los documentos con los que contábamos, entonces realizamos un informe que estaba basado en tipos documentales que no solíamos utilizar, reglamentos, publicaciones, manuales, boletines. Y eso lo completamos con los legajos de algunas cuadrillas que relevamos. Y el resultado fue súper positivo de parte de la fiscalía. (Entrevista de la autora al Equipo Armada, 12 de junio de 2017)

El hecho de que esos documentos hayan sido en su mayoría públicos –es decir, no estaban sometidos a ninguna clasificación de seguridad– constituye un punto a subrayar, ya que evidencia lo que hemos venido sosteniendo en el sentido de que sin importar las expectativas que se articulen en torno a ella, la documentación no es "autodescriptiva", sino que su valor surge de la aplicación de un conjunto de estrategias y saberes específicos en el marco de un conjunto de disputas por los usos del archivo, es decir, los sentidos del pasado.

Asimismo, ello muestra que la "activación" de esos documentos, antes invisibles, se inscribe también en un estado específico de la memoria social y del conocimiento histórico en torno a la puesta en práctica del plan represivo. Este conocimiento, producido por los historiadores profesionales y también en sede judicial, implicó destacar la dimensión *institucional* de lo que las Fuerzas Armadas denominaron "lucha contra la subversión". En ese sentido, podemos decir que el proceso por el cual los archivos burocrático-administrativos pudieron aportar información que contribuyera al desarrollo de los juicios por crímenes de lesa humanidad, partía de suponer que el accionar de las Fuerzas no se reducía a un conjunto de responsabilidades aisladas –lo cual se expresó socialmente bajo la recurrencia a la noción de "excesos" – ni tampoco a la existencia de una dimensión sobrenatural o excepcional como la que subyace a la denominada "teoría de los dos demonios".[122] Por el contrario, la idea de que el análisis y el relevamiento de documentos administrativos podía proveer información a la hora de reconstruir el entramado represivo, partía de entender que dicho entramado se ligaba de manera orgánica y funcional a la normalidad

[122] Para un análisis de la "teoría de los dos demonios" véase Franco, 2015 y para la cuestión de los excesos en la conformación de la memoria militar véase Salvi, 2012.

de las actividades de las Fuerzas en el período, a la vez que contribuyó a ratificar esa idea.[123]

A su vez, ello evidencia un vínculo fuerte entre memoria social y modos de configuración del archivo, que si bien no es exclusivo del tipo de archivos aquí analizados se vuelve aquí particularmente evidente. Al contrario del uso historiográfico, donde el archivo no es un lugar de convalidación de un conocimiento previo sino el espacio en el cual emergen nuevos problemas, la intervención del Ministerio de Defensa sobre los Archivos de las Fuerzas Armadas se configuró en función de una memoria de los crímenes cuyas "pruebas" era necesario revelar.

Ahora bien, una cuestión clave es que esa nueva configuración fue posible gracias a la progresiva consolidación de un actor que hemos mencionado a lo largo del capítulo: los y las investigadoras jóvenes que integraron los Equipos de Relevamiento y que conformaron el Programa de Modernización de Archivos a lo largo del período analizado. En relación con los Equipos pudimos relevar la participación de veintisiete investigadores, trece de ellas mujeres (cuatro de las cuales se desempeñaron como coordinadoras internas) y catorce varones, que se desempeñaron a intervalos variables de tiempo. En referencia a sus trayectorias, es destacable que ninguno de ellos tenía formación específica en archivística (lo cual se explica por la escasez de espacios de formación en el país), sino que se trataba de jóvenes que provenían de la carrera de historia u otras disciplinas sociales o humanísticas y se habían formado en universidades nacionales. En muchos casos, la formación específica fue adquirida en el transcurso del propio desempeño tanto gracias a las capacitaciones que se llevaban a cabo desde el Archivo General de la Nación como a partir de iniciativas personales que incluyeron la realización de cursos de especialización, posgrados, etc.

En una proporción que es necesario indagar más a fondo, algunos investigadores/as contaban con una militancia previa en el movimiento de derechos humanos u otros espacios políticos, ya sea de origen académico o en

[123] Lo cual no significa, al mismo tiempo, que los documentos conservados en los archivos de las Fuerzas deban ser tenidos como "verdades absolutas". Tal suposición caería en la paradoja de tomar como "más verdadera" la palabra de los perpetradores, que no sólo está sujeta a sus propias lógicas de funcionamiento (por ejemplo, el sistema de ascensos de grado en cada una de las Fuerzas) sino que además se presenta como moral y éticamente cuestionada.

organismos de derechos humanos propiamente dichos. Hasta donde pudimos relevar la entrada a trabajar en los Equipos se producía por recomendación de otros miembros o de la propia Dirección, de modo que el trabajo se sustentaba, a su vez, sobre un tejido de relaciones pre-existentes y de confianza que era percibido como indispensable para desarrollar la tarea en el marco de un territorio de disputas como el que describimos arriba.

Por otra parte, las condiciones laborales eran sumamente precarias ya que los contratos se renovaban de manera temporal y la continuidad de las tareas dependía fuertemente de las partidas presupuestarias (en el caso del PMA, como veremos, las mismas provenían de fondos PNUD–Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo). Asimismo, las condiciones al interior de los archivos eran difíciles: no sólo por las tensiones entre civiles y militares sino por las deficiencias de infraestructura, la falta de insumos indispensables y la sensibilidad de la tarea que tenían encomendada.

Estas cuestiones son significativas en la medida en que evidencian la existencia (no homogénea, pero en absoluto despreciable) de una ética del compromiso que sustentaba la tarea cotidiana. En efecto, era la creencia en el valor del propio trabajo (y hasta cierto punto, en su carácter excepcional) lo que en muchas ocasiones permitía a los y las trabajadoras sobreponerse a las dificultades cotidianas. A su vez y con más fuerza respecto de lo que ocurría en el caso de la Comisión de Trabajo por la Reconstrucción de Nuestra Identidad, este compromiso se asociaba con la incorporación y formulación de saberes expertos que fueron progresivamente sistematizados. Así, los/as miembros de los Equipos impulsaron la elaboración de bases de datos propias, la digitalización de documentos, la escritura de ponencias y artículos que dieran cuenta de la modalidad de trabajo y sus resultados así como la participación en distintas instancias que sirvieran para dar visibilidad pública a sus tareas..

Esta asociación entre *expertise* y activismo es interesante ya que si bien tradicionalmente el conocimiento técnico no ha sido considerado suficiente para fundar una posición legítima en el campo de los derechos humanos —según señala Guglielmucci (2013), para alcanzar ese *status* es necesaria la integración del trabajador a una misma "comunidad moral" cuyos integrantes se reconocen mutuamente como "compañeros comprometidos"—, en este caso se observa que la acreditación y posesión de ciertos saberes funcionaba como un

instrumento de legitimación.[124] En ese sentido, el Estado emergía para estos investigadores e investigadoras como un espacio de activismo en el marco del cual se desarrollaba un compromiso con la causa de los derechos humanos y también como un destino profesional y laboral posible. Esto es especialmente cierto para quienes permanecieron en la Dirección por varios años, ocupando diferentes posiciones e incluso trabajando luego en otros archivos o dependencias de la administración pública nacional.

De hecho, es probablemente esta combinación de activismo con producción de saberes expertos lo que explica la productividad que alcanzaron los archivos militares en el período analizado. Dicho de otro modo, la trayectoria y activación de los documentos (podríamos decir, del sótano a los tribunales) si bien tenía como condición necesaria la decisión política de intervenir sobre ellos, no emanaba directamente de la voluntad presidencial sino que fue el producto de las capacidades introducidas por estos "trabajadores de la memoria" cuyo rol no estaba previsto previamente y sin embargo, resultó crucial en el progresivo desarrollo de la política.

[124] Esta articulación entre *expertise* y activismo no es exclusiva de la agencia que aquí analizamos. Vázquez (2014) la señala en relación con una agrupación surgida en el Ministerio de Economía denominada "La gran Makro". Según la autora, se verificaba allí el desarrollo de un tipo de activismo basado en un repertorio de conocimientos específicos vinculados con la propia formación académica y con el desempeño en áreas económicas de la gestión pública. También Vecchioli (2009) ha trabajado esta articulación para estudiar la reconversión de abogados laboralistas militantes de la década del setenta a expertos miembros de una élite trasnacional vinculada al derecho internacional.

Capítulo 5: Los usos del archivo entre la política y la memoria. El Programa de Modernización de Archivos y las "Actas Secretas de la Dictadura"

5.1. Introducción

Una mirada "plural" del Estado como la que hemos venido desarrollando debe atender no sólo a la permeabilidad de las agencias estatales respecto de otras lógicas sociales sino también a las disputas que se desarrollan a nivel intra-estatal. En ese sentido, en este caso es pertinente referirse no sólo a las tensiones por el control civil de los archivos militares como la desarrollamos en el capítulo anterior sino también a la convivencia y superposición de otros criterios y modos de configuración del archivo que se pusieron en juego a partir de la intervención de nuevos actores como funcionarios y archivistas. Para mostrar ese punto, en este capítulo analizaremos en primer lugar el desarrollo del "Programa de Modernización del Sistema de Archivos del Área de la Defensa" (en adelante, PMA) que comenzó a implementarse desde el año 2012 y en segundo lugar, nos detendremos especialmente en el análisis del "hallazgo", tratamiento y difusión de la documentación conocida como "Actas Secretas de la Dictadura". En ambos casos lo que encontraremos es la existencia de distintos saberes, competencias y lógicas de acción que en ocasiones se enfrentaron o se superpusieron entre sí y con la tarea de relevamiento analizada en el capítulo anterior. En efecto, así como en ese caso la demanda judicial y el documento concebido como "prueba", aunque indirecta, del accionar represivo permearon fuertemente la intervención sobre los archivos, veremos en lo que sigue cómo aparecieron de otras lógicas signadas por la disciplina archivística, por un lado, y las coyunturas políticas, por el otro.

Este análisis apunta una vez más al hecho de que—en ésta como en otras materias— la acción de las agencias estatales no puede ser referida a un actor burocrático uniforme. O lo que es lo mismo, las "políticas de memoria" implementadas por las diferentes agencias estatales (en ocasiones denominadas "memorias oficiales") no pueden reducirse a una imposición directa que se ejerce sobre la sociedad ni tampoco a la mera enunciación que

hacen de ellas los principales mandatarios. Como lo sugerimos en el capítulo anterior, la intervención del Estado no es el resultado racional de un curso de acción planificado previamente (algo que es evidente también en el caso de la Comisión de Trabajo por la Reconstrucción de Nuestra Identidad) sino una compleja negociación que incluye identidades, saberes, marcos de interpretación y lógicas de poder que resulta necesario desentrañar.

5.2. El intento de definir una política archivística: el Programa de Modernización del Sistema de Archivos del Área de la Defensa

Teniendo en cuenta el estado de los fondos y las restricciones prácticas que la entrada en los archivos había revelado desde sus inicios, a partir del año 2012 comenzó a implementarse el llamado “Programa de Modernización del Sistema de Archivos del Área de la Defensa”. Como adelantamos, este Programa estuvo financiado a lo largo de todo su desarrollo con fondos del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y fue implementado bajo la gestión de Stella Segado como Directora Nacional de Derechos Humanos. En coordinación con el Archivo General de la Nación (específicamente, su Departamento de Archivo Intermedio), el Programa se orientó a proponer una normalización de criterios y pautas de gestión archivística y contribuyó en la formación de un equipo de digitalizadores, conservacionistas y archivistas. Particularmente, avanzó en la clasificación y descripción de la documentación obrante en los seis archivos militares a partir de los instrumentos de descripción preexistentes y de un trabajo permanente con el personal civil o militar destinado a cada archivo.[125]

A diferencia de la tarea de los Equipos de Relevamiento, esta intervención se gestó sobre criterios archivísticos y partió de una premisa diferente respecto de la política de "apertura" de los Archivos entendida como un modo de aportar exclusivamente a las causas judiciales por crímenes de lesa humanidad. En efecto, si bien los Equipos de Relevamiento y Análisis trabajaron en conjunto con el Programa de Modernización de Archivos (PMA) en proyectos específicos de desclasificación documental (especialmente como veremos, en el Fondo Junta Militar, el Fondo Isaac Francisco Rojas y el

[125] Entrevista colectiva de la autora a seis de los integrantes Equipo del Sistema de Archivos del Área de la Defensa (ex Programa de Modernización de Archivos), 2 de agosto de 2017.

"Informe Rattenbach"[126]) la tarea de este último no se restringió a la documentación referida al período dictatorial 1976-1983.

Con un equipo inicial de formación disciplinar dispar, el Programa comenzó a realizar visitas y asistencias técnicas a los archivos militares, identificando las áreas de intervención prioritarias tanto a nivel de gestión documental como de infraestructura y mobiliario.[127] Esta intervención fue decisiva en lo que se refiere a la mentada "apertura" de los archivos a la ciudadanía, si consideramos que para que un archivo pueda cumplir con sus principales funciones, debe no solamente estar abierto en términos nominales (algo que ya ocurría incluso antes de la intervención del Ministerio) sino también poseer determinadas condiciones que hagan posible su consulta.[128] Para comprender los alcances y limitaciones de esta transformación delinearemos en primer lugar el escenario con el que se encontraron los miembros del PMA en el momento de ingreso a los archivos, específicamente en relación con las funciones que debían llevar adelante.

Una de las primeras cuestiones a trazar se vincula con la accesibilidad que caracterizaba a los Departamentos o Servicios Históricos respecto de los denominados Archivos Generales de cada Fuerza. Esta diferencia se debe en parte a que el personal destinado a los Archivos Generales así como los procedimientos instituidos no estaban orientados a brindar un servicio público

[126] Se conoce como "Informe Rattenbach" al documento resultante del trabajo de la "Comisión de análisis y evaluación de las responsabilidades políticas y estratégico militares en el conflicto del Atlántico Sur", creada en 1982 para evaluar el desempeño de las Fuerzas Armadas en el conflicto bélico. Para su desclasificación, véase Decreto n°200/2012. Por otra parte, cabe notar que tanto el trabajo archivístico sobre el Fondo Rojas como sobre las colecciones referidas al conflicto bélico refieren a una ampliación de los marcos temporales y de sentido en torno de los cuales se organiza la memoria del terrorismo de Estado. La desclasificación del Fondo Rojas es congruente con una narrativa que, como hemos visto en el capítulo dos, identifica al peronismo como principal blanco represivo del Estado e instala el período "1955-1983" como eje narrativo. Por su parte, la desclasificación del "Informe Rattenbach" y luego, de toda la documentación referida al conflicto bélico debe insertarse en una serie más prolífica que no hemos analizado aquí y que refiere a distintas operaciones de encuadramiento de la memoria de la guerra que también fueron impulsadas por el kirchnerismo a la hora de recordar el pasado reciente. La inauguración del Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur en el año 2014 y su ubicación en el predio de la ex ESMA constituyen un ejemplo de dicha serie.

[127] Especialmente al Archivo General del Ejército (AGE), Archivo General de la Armada (AGARA), Archivo General de la Fuerza Aérea (AGFA), Servicio Histórico del Ejército (SHE), Departamento de Estudios Históricos Navales (DEHN) y la Dirección de Estudios Históricos de la Fuerza Aérea (DEHFA).

[128] En ese sentido, al momento de la intervención del Ministerio de Defensa los archivos no estaban estrictamente cerrados, razón por la cual utilizamos la palabra "apertura" como una denominación nativa para referirnos al proceso por el cual se fueron removiendo los diferentes obstáculos que impedían el acceso a los mismos.

de acceso a la información y por lo tanto, tampoco a atender consultas por parte de investigadores no pertenecientes a las Fuerzas. En términos normativos, parte de la documentación administrativa obrante en los archivos generales está protegida por la Ley Nacional de Datos Personales. A ello hay que sumarle cierta confusión respecto de qué documentación fue progresivamente desclasificada durante los gobiernos kirchneristas, ya que el curso de la desclasificación siguió una lógica más bien espasmódica. En efecto, en primer lugar se desclasificó específicamente la documentación relativa al personal de inteligencia que prestó servicios en el destacamento n° 121 entre los años 1976-1979, lo cual constituía una necesidad puntual de la causa judicial conocida como "Causa Guerrieri III".[129] En segundo lugar, en vista de la necesidad de avanzar en el resto de la documentación, se formuló un decreto más amplio que desclasificaba "toda aquella información y documentación vinculada con el accionar de las Fuerzas Armadas durante el período comprendido entre los años 1976 y 1983, así como a toda otra información o documentación, producida en otro período, relacionada con ese accionar" y más tarde, en 2015, (luego de un decreto específico que desclasificaba el "Informe Rattenbach"), se hizo lo propio con toda la documentación referida al conflicto bélico en las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur.[130] En todo caso, la desclasificación de documentos puntuales evidencia la falta de una política consistente e integral en términos archivísticos que no se circunscribe al ámbito militar sino también a toda la Administración Pública Nacional.[131]

Volviendo a los Archivos Generales, el hecho de que tradicionalmente hayan permanecido al margen de sus funciones sociales y se hayan apegado solamente a las cuestiones administrativas internas repercutió negativamente sobre la organización de la documentación y la existencia de adecuados instrumentos de descripción. Por esa razón, una de las tareas principales del PMA fue la elaboración de la "Guía de Archivos Históricos y Generales de las Fuerzas Armadas Argentinas", que constituye actualmente el principal instrumento de consulta con el que cuentan los Archivos Generales. La

[129] Decreto n° 1137/2007.
[130] Decreto n° 503/2015.
[131] Para este señalamiento en relación con la Administración Pública Nacional y otras cuestiones véase Cipoletta y Pak Linares, 2012 y Nazar, 2007; 2017.

elaboración de esa guía implicó un trabajo de reconocimiento de los fondos, secciones o series custodiadas y la referencia a datos básicos como sus metros lineales, fechas extremas y tipos documentales. En los denominados Archivos o Departamentos "Históricos", por el contrario, prevalecieron criterios más ordenados de organización y clasificación documental. Sin embargo, según señalan los miembros del PMA, en su mayoría estos criterios no eran específicamente archivísticos sino temáticos, es decir, se derivaban de los usos que los investigadores asiduos del Servicio o Departamento habían realizado a lo largo de los años. En términos de la archivística, esto constituía un serio problema ya que este tipo de ordenamiento y descripción documental no respeta el principio de procedencia y ocasiona el desmembramiento de fondos y colecciones. Más aún, según señala Nazar (2005) para los índices temáticos:

> (…) en el caso del índice, suele no surgir de un inventario, sino que se transforma en el único auxiliar para consultar esos documentos, auxiliar que suele ser incomprensible para aquellos que no comparten la disciplina del investigador-descriptor o que no comparten su corriente de pensamiento debido a la ausencia de tesauro y que requiere de una gran inversión en tiempo de descripción sin el resultado proporcionado de una búsqueda rápida (Nazar, 2005: en línea)

Teniendo en cuenta esto, parte del trabajo del PMA fue combatir los criterios temáticos existentes y bregar por una organización y clasificación de los fondos que no estuviera sujeta a los intereses de los usuarios y a las consultas internas que habitualmente recibían. Así, a contrapelo de las tensiones que analizamos en el capítulo anterior, según relatan los miembros del PMA, su intervención tuvo como precondición la construcción de relaciones de "confianza" con el personal militar y civil de los archivos que les permitiera generar un "entendimiento común" en torno a la utilidad y la razón de ser de la tarea que debían desarrollar.[132] Al momento de la presente investigación, el personal de los archivos se encontraba distribuido según la siguiente proporción:

[132] Entrevista colectiva de la autora a seis de los integrantes del Equipo del Sistema de Archivos del Área de la Defensa (ex Programa de Modernización de Archivos), 2 de agosto de 2017. Para completar este punto, queda pendiente la realización de entrevistas al personal militar de los archivos.

Archivo	Personal
Archivo General del Ejército (AGE)	Ochenta y cinco (sin datos)
Archivo General dela Armada (AGARA)	Doce civiles y diecisiete militares
Archivo general de la Fuerza Aérea (AGFA)	Seis militares
Servicio Histórico del Ejército (SHE)	Nueve civiles y nueve militares
Departamento de Estudios Históricos Navales (DEHN)	Seis civiles y dos militares
Dirección de Estudios Históricos de la Fuerza Aérea (DEHFA)	Tres civiles

(Fuente: elaboración propia, septiembre 2017)

Por lo general los archivos se encontraban a cargo de un director militar (con los grados de Teniente de Navío, Comodoro y Coronel) y cuentan con escasos recursos humanos capacitados en la temática. A su vez, el personal militar que se desempeña en cada archivo está sujeto a una alta variación ya que de acuerdo con los reglamentos internos de cada fuerza deben rotar de destino cada dos años.[133] Según se recoge de las entrevistas realizadas a los miembros del PMA, su ingreso era vivido por el personal preexistente en los archivos como una intrusión en un espacio considerado como propio, sino que además activaba un prejuicio común derivado de los modos en que los medios de comunicación se referían al ingreso de jóvenes a la administración pública durante los gobiernos kirchneristas, según el cual todos los ingresantes pertenecían a "La Cámpora" —una organización política juvenil ligada a los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner— y como dijimos, cobraban salarios por encima del resto. A la inversa, para los integrante del PMA, la convivencia en el espacio implicaba un "pivoteo" permanente entre su posición crítica respecto de "los militares" concebidos como un todo homogéneo —más específicamente del papel que las Fuerzas Armadas argentinas habían jugado

[133] Esa situación puede ser revisada en el caso de las autoridades de los archivos y de acuerdo a una dinámica interna; de hecho, durante los años que aquí analizamos (2003-2015) algunos directores han permanecido en sus cargos durante varios años.

en el pasado— y la construcción de un horizonte de entendimiento que permitiera el trabajo en conjunto en el presente.[134]

Por otra parte, debe tenerse en cuenta que, como señala Alves (2017), los archivos en la Argentina están sujetos a una marginalización de sus funciones, al punto tal que en la mayoría de los organismos públicos las áreas de archivo no se encuentran reconocidas en las estructuras orgánicas. En este panorama, los archivos de las Fuerzas Armadas no escaparon al sentido común que los considera meros depósitos, lo cual se refuerza socio-espacialmente por su ubicación en sótanos, zonas subsidiarias de los edificios públicos o lugares antiguos con infraestructura precaria. En efecto en el diagnóstico elaborado por el PMA en el momento de su entrada a los archivos, se señalaba que la documentación se encontraba en mal estado, con roturas por plagas como ratas y en un estado de extrema suciedad.[135] Por ello, no es de extrañar que para el personal militar el destino "archivo" sea usualmente considerado como un "lugar de castigo" o de "aislamiento para personal considerado problemático" (Alves, 2017: 5; Cesareo y Novarini, 2013). Teniendo en cuenta esto, además de construir un horizonte de "entendimiento común" la tarea del PMA se orientó, en sus propios términos, a "re-jerarquizar" la tarea de los archivistas al interior de las Fuerzas y darle importancia a la "triple función social de los archivos", que consiste en preservar documentos que sean posibles fuentes para "la historia, para la memoria y para el ejercicio de derechos".[136]

Ahora bien, por otra parte, es necesario considerar que en los archivos institucionales también se juegan los deseos de perpetuar intencionalmente una cierta imagen de la institución productora de los documentos (Da Silva Catela, 2002). Esto es evidente si consideramos las funciones y prácticas de los servicios o departamentos históricos. En un repaso rápido por algunas de sus publicaciones veremos que en su mayoría, los "historiadores oficiales" (Cesareo y Novarini, 2013) se ajustan a la descripción de una sucesión de batallas, hazañas, y/o héroes, en un afán por contribuir al desarrollo de una

[134] Entrevista colectiva de la autora a seis de los integrantes de la autora al Equipo del Sistema de Archivos del Área de la Defensa (ex Programa de Modernización de Archivos), 2 de agosto de 2017.
[135] Véase Anexo de la Resolución n°47 del año 2012 del Ministerio de Defensa.
[136] Entrevista colectiva de la autora a seis de los integrantes del Equipo del Sistema de Archivos del Área de la Defensa (ex Programa de Modernización de Archivos).

historia que podríamos describir como cuasi decimonónica, concebida como relatora de una identidad institucional y nacional. Así, por ejemplo en el caso de la Armada, de un total de cuarenta reseñas históricas que se encuentran subidas a su sitio web, seis se refieren a figuras destacadas de la historia naval o nacional (Juan Bautista Azopardo, Manuel García Mansilla, Guillermo Brown, Onofre Betbeder, Bartolomé Mitre), siete se refieren a acontecimientos históricos apreciados como hazañas o epopeyas (la toma de posesión de las Islas Malvinas, un salvataje en la Antártida, el combate de los Bajíos de Arregui, combate de la vuelta de Obligado) y seis se refieren a cuestiones de armamento (adquisiciones navales, auge del torpedo). Las restantes remiten a hitos del desarrollo institucional como la creación de bases navales, liceos y viajes inaugurales. Asimismo se incluyen tres reseñas referidas a la historia de los escudos navales del rompehielos "Almirante Irizar", "General San Martín" y del aviso "Suboficial Castillo".[137]

En línea con esta concepción, estos historiadores funcionan a menudo como "guardianes de la documentación" (Da Silva Catela, 2002), es decir que se conciben a sí mismos como encargados de vigilar y eventualmente restringir el acceso a los documentos. Según Cesareo y Novarini, (quienes formaron parte y coordinaron el equipo del PMA respectivamente) para los "historiadores oficiales", "el único acceso 'bien visto' es aquél en el que incurre la misma Fuerza, los investigadores de los 'círculos de amantes' o investigadores extranjeros" (Cesareo y Novarini, 2013: 10) lo cual es congruente con la idea de que se juegan allí los deseos de perpetuar una determinada imagen institucional. En ese mismo sentido las autoras señalan que los historiadores de las Fuerzas "han despojado los Archivos con el paso del tiempo, porque dentro de sus concepciones, les pertenecen: están ahí para ser no sólo utilizados, sino recortados, reorganizados, rearmados a gusto y *piacere* del objeto de estudio que se investigue" (9). Esta percepción da cuenta no sólo de una jerarquía sino de un terreno de disputas entre un saber experto (la disciplina archivística) y una determinada cultura institucional. En ese marco, el ingreso de personal civil nuevo y especializado puso en tensión la propia representación de las Fuerzas sobre la función de los archivos y su lugar en la

[137] Las reseñas pueden verse en línea en http://www.ara.mil.ar/pag.asp?idItem=442. Fecha de consulta octubre de 2017.

historia institucional, más allá del período 1976-1983, así como también enfrentó a los seis archivos con un conjunto nuevo de demandas y de usos para su patrimonio documental. Así el proceso de "apertura" de los archivos y la renovada atención del Ministerio de Defensa sobre ellos enfrentó a su personal con la necesidad de profesionalizar sus tareas y adaptarse al desarrollo de una función social de los archivos. Esa demanda, que no necesariamente tuvo su contrapartida en un aumento de las consultas, implicó abandonar el lugar subordinado que los archivos tenían incluso al interior de las fuerzas para "salir al exterior". En esa línea, es llamativo que el Departamento de Estudios Históricos Navales haya creado su propia cuenta en las redes sociales o que el Archivo General del Ejército y el Servicio Histórico hayan participado en 2016 del evento "La Noche de los Museos", organizado por el Gobierno de la Ciudad, con la intención de habilitar la visita nocturna a ambos espacios (aunque hasta donde sabemos, el hecho no se volvió a repetir). Al mismo tiempo, esta visibilización no fue "gratuita" en la medida en que sometió los archivos a un mayor escrutinio público. Ello se ve reflejado en que tanto el Archivo General de la Armada como la Dirección de Estudios Históricos de la Fuerza Aérea, tienen personal especializado en Relaciones Públicas. Esta sensación de estar al escrutinio público se profundizaba cuando las preguntas se refieren al período relativo a la dictadura militar. De manera más o menos justificada, los archivos militares y quienes se desempeñan en ellos cargan con el estigma del "ocultamiento" o la falta de credibilidad por parte de los potenciales usuarios (Alves, 2016). En efecto, en el imaginario colectivo continúa primando la idea de que estos archivos se encuentran cerrados o inaccesibles, a pesar de que, a lo largo del período analizado aquí se han generado diferentes políticas para garantizar su accesibilidad.

En resumen, en varios niveles la intervención del PMA en los años aquí analizados re-configuró los archivos militares bajo la premisa de normalizar las pautas de gestión según una lógica que provenía de la disciplina archivística como saber experto ya institucionalizado y que, como dijimos, se encontraba fuertemente influenciada por los lineamientos y capacitaciones provistas por el Departamento Intermedio del Archivo General de la Nación. En ese sentido, los miembros del PMA bregaban por un tratamiento no restringido por un recorte temporal o temático (lo cual contrastaba tanto con la práctica de los

Departamentos Históricos como de los Equipos de Relevamiento) y sostenían la voluntad de democratizar el acceso a los archivos más allá del círculo restringido de usuarios de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, lejos de aplicarse como un conjunto de prescripciones abstractas, está voluntad debió lidiar con las condiciones concretas en las que se encontraban los archivos y la manera en que eran concebidos tanto por el propio personal como desde el exterior. En efecto, como señala Da Silva Catela, en el "mundo de los archivos" los diferentes agentes que intervienen se vinculan entre sí como individuos jerárquicamente relacionados: directores, archiveros, funcionarios y usuarios de diferentes tipos tejen entre sí diversos lazos de "afinidad, tensión o alianza", que se encuentran condicionadas, a su vez, por la coyuntura política y memorial en curso. En ese sentido, el intento de definir una política de gestión archivística para todo el denominado "Sistema de Archivos del Área de la Defensa" se vio tensionado tanto por los usos o abandonos previos a su intervención, las expectativas y las prácticas que identificaban a los archivos como posibles fuentes de "prueba judicial" o, a la inversa, como archivos secretos o restringidos, y por último como veremos, por la concepción de los archivos como herramientas clave para la formulación de "políticas de memoria".

5.3. La "apertura" de los archivos como una "política de memoria": las "Actas Secretas de la Dictadura"

Paralelamente al conjunto de disputas que se dieron al interior de los Archivos en su funcionamiento cotidiano la política de "apertura" se enfrentó con nuevos desafíos. En este apartado, nos interesa analizar particularmente el modo de tratamiento, gestión y difusión de la documentación conocida como "Actas secretas de la Dictadura" o también, entre los Equipos del PMA, como el "hallazgo Cóndor", debido a que la documentación se encontró el 31 de octubre de 2013 en el subsuelo del edificio Cóndor, sede central del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea Argentina. Como lo hemos trabajado hasta aquí, veremos a lo largo del análisis cómo se configuran las batallas en los archivos como "territorios de memoria" e identificaremos qué usos prevalecen en ocasión de la presentación pública de los documentos.

De acuerdo con el relato ofrecido por Stella Segado y el entonces Ministro Agustín Rossi, la existencia del conjunto documental fue conocida a través del Jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea, Mario Miguel Callejo, luego del recambio institucional que supuso la asunción de Rossi en junio de 2013.[138] A pesar de que, como hemos visto, la Dirección venía trabajando sobre los archivos hacía varios años —e incluso según señala Segado, habían revisado las dependencias del edificio— de acuerdo con la propia Fuerza el "hallazgo" se produjo recién entonces en el marco de la realización de "tareas de limpieza". Al respecto, señala Segado:

> Nosotros veníamos trabajando, habíamos pasado por ahí, abriendo, porque a todos los lugares que íbamos, decíamos "por favor me abre esa puerta, esa puerta y esa puerta". Entonces sabíamos que ahí no había nada. Si por acá pasamos en el 2010, esto lo tienen que haber puesto después de que pasamos sabiendo que no íbamos a volver a pasar. Cuando cambia el jefe, el nuevo dice, "no, este *bagayo* no me lo dejan". Yo creo que por eso lo entregaron. (Entrevista de la autora con Stella Segado, 19 de septiembre de 2017).

En efecto, la idea de que fue el recambio institucional lo que habilitó la "aparición" de la documentación, cobra fuerza si consideramos las características propias de la institución militar, esto es la inscripción de cada individuo en una estructura donde la producción y reproducción del orden dependen de la afirmación de la jerarquía, el mando y la disciplina. Desde ese punto de vista, decir que el fondo fue "hallado" equivale a señalar que se activaron una serie de mecanismos institucionales (dentro de la propia Fuerza Aérea) que permitieron que las autoridades políticas del Ministerio accedieran a esa documentación cuya existencia evidentemente debía ser conocida por las instituciones productoras. En ese sentido, la activación de estos mecanismos, es un indicio de la reducción del margen de autonomía con el que contaban los Jefes de Estado Mayor para lidiar con las consecuencias de la represión ilegal durante los gobiernos kirchneristas respecto de gobiernos anteriores. Así, la "aparición" del fondo no puede interpretarse por fuera de las disputas por el control civil de los archivos, como la hemos mencionado en el capítulo anterior, y de modo más general, de una política de conducción civil de la defensa,

[138] Entrevista de la autora a Stella Segado, 19 de septiembre de 2017.

implementada y sostenida con altibajos desde los inicios del gobierno de Kirchner.

En todo caso, el fondo documental así “activado” que se dio a conocer en 2013 estaba compuesto por mil quinientas unidades de conservación (cajas, biblioratos, carpetas) y se encontraba disperso en armarios y dos cajas fuertes que, luego del aviso, fueron precintadas con la presencia de diferentes funcionarios del Ministerio. Estas últimas fueron abiertas al día siguiente y, luego de una revisión preliminar, la documentación fue trasladada al “Edificio Alas” perteneciente a la misma Fuerza. A través de una resolución ministerial el entonces Ministro encomendó al PMA y a los Equipos de Relevamiento “realizar las tareas de preservación y de identificación del fondo documental hallado, en un periodo de seis meses”.[139]

A pesar del lapso previsto, cuatro días después, el “hallazgo” fue anunciado oficialmente en un acto encabezado por el entonces Ministro Agustín Rossi con la presencia de los Jefes de Estado Mayor de las tres Fuerzas, representantes de organismos de derechos humanos, funcionarios y legisladores del partido oficialista. En este acto el Ministro exhibió parte de la documentación encontrada así como distintas fotografías que remitían al trabajo preliminar de traslado y relevamiento realizado. De acuerdo con Rossi se trataba de una documentación "histórica" y con potencial valor probatorio en las causas judiciales por crímenes de lesa humanidad. Desde ese momento, este conjunto documental adquirió notoriedad pública con los nombres de "actas secretas", "actas de la dictadura" o incluso "listas negras", en referencia a algunas de las temáticas o elementos que habían sido señalados por el Ministro y que habían sido detectados por los Equipos de Relevamiento y Análisis en los tres días transcurridos desde el "hallazgo" de la documentación hasta que se produjo el anuncio oficial. Así por ejemplo, el 4 de noviembre el diario *La Nación* titulaba “Revelan el hallazgo de actas secretas de la dictadura que mencionan a Papel Prensa”; el diario *Clarín* “El Gobierno dio a conocer «listas negras» y documentos de la dictadura”, mientras que *Página 12* aunaba ambas categorías en su título “Actas secretas, biblioratos y listas negras”.

[139] Ministerio de Defensa, Resolución Nº 445, 2013.

De acuerdo con la descripción archivística elaborada por el PMA con fecha de noviembre de 2014, las denominadas “actas secretas” constituyen una serie compuesta por doscientos ochenta actas de las reuniones que la Junta Militar celebró periódicamente desde julio de 1976 hasta noviembre de 1983. En efecto, se trataba de un hallazgo sumamente valioso en la medida en que si bien ya circulaban un conjunto de copias de actas aisladas, por primera vez se encontró y luego se garantizó el acceso por vía digital al conjunto documental completo y original. En efecto, las actas fueron publicadas como *Actas de la Junta Militar* en un portal *ad hoc* del Ministerio de Defensa (“Archivos Abiertos” www.archivosabiertos.org.ar) que tenía como función asegurar el acceso libre a la documentación a medida que ésta iba siendo digitalizada. Sumado a ello, el Ministerio se encargó de editar las copias impresas que fueron entregadas aproximadamente a diez universidades nacionales a lo largo del país, más de diez municipios de la provincia de Buenos Aires, gobernadores, legislaturas y concejos deliberantes, asociaciones gremiales (la CTA, la Bancaria y la Asociación Argentina de Actores) organismos de derechos humanos y personalidades destacadas. Las entregas se realizaban habitualmente en actos públicos que contaban con la presencia y los discursos del Ministro Rossi.

Ahora bien, el modo en que trascendió la categoría de “Actas Secretas de la Dictadura” (incluso en un diario opositor al gobierno kirchnerista como *La Nación*) y, de modo más general, la manera en que desde el Ministerio se difundió la documentación, cifra algunas coordenadas que nos interesa analizar en términos de la construcción de una narrativa memorial. Por un lado, la referencia a la dictadura militar de 1976-1983 como “la dictadura” por antonomasia, aun cuando la instauración de dictaduras militares fue una constante en la Argentina del siglo XX. Por otro lado, es destacable el papel de la categoría “secreto”, ya que si bien tal era la calificación otorgada por la Junta Militar a las actas de reuniones (frente a otras posibles, como “confidencial” o “reservado”) el adverbio tiene la potencialidad de convocar sentidos adicionales, especialmente para el público lego. Así, la idea de “actas secretas” no sólo sugería una determinada clasificación de seguridad, sino también el desconocimiento del contenido de los documentos e incluso el hecho mismo de que hubieran sido producidos. Tal no era el caso porque, como señalamos, se

conocían copias de actas aisladas y además las reuniones de la Junta Militar estaban establecidas por su propio reglamento de constitución estipulado por la Ley 21.256. Por esa razón, el carácter público o secreto de las temáticas que allí se trataban debía ser objeto de análisis historiográfico y no podía ser declarado *a priori*. Desde ese punto de vista y en términos memoriales, el adverbio reforzaba el aura oscura y separada de la Junta Militar respecto de la sociedad, a la vez que subrayaba un punto clave, esto es, la operación de "develamiento" atribuida al gobierno kirchnerista respecto de la "verdad" de "la dictadura". Además, debe tenerse en cuenta que si bien a esa altura las Actas de Reunión habían sido una de las pocas series documentales detectadas, en realidad el fondo hallado era mucho más amplio y contenía también documentación de la Secretaría General de la Fuerza Aérea, la Comisión de Asesoramiento Legislativo, CAL (cuyo archivo original obraba ya en el Archivo General de la Nación) además de otros documentos de la Junta Militar no "secretos", como comunicados de prensa, publicaciones, notas y planes de todo tipo.

En su primera presentación, a la hora de referirse al contenido de los documentos, el Ministro Rossi mencionó específicamente tres elementos: un comunicado de la Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA), las actas de reuniones de la Junta Militar referidas al caso "Papel Prensa" y finalmente, la cuestión de las "listas negras". Como veremos, la mención de estos temas, detectados de manera muy preliminar y previa a cualquier trabajo archivístico sobre el fondo, se fundaba en (y contribuyó a) afianzar determinados "lugares de memoria" colectiva, es decir, un conjunto de coordenadas narrativas en función de las cuales se producía y reproducía socialmente un relato en relación con el terrorismo de Estado. Así, respecto de las denominadas "listas negras", Stella Segado mencionaba:

> Cuando empezamos lo primero que le dije a Rossi en ese momento fue: mira aparecieron las listas negras… y le digo hay que subirlas a la página [web]. "¿Por qué?" Me dice, "¿por qué las vamos a subir?". "Porque esto hay que hacerlo público". La realidad es que todo lo que es 76-83 está desclasificado por el decreto n°4 del 2010, no tenemos ningún problema… pero ahí hay una cuestión cultural… Que todo el mundo siempre habló de las listas negras pero nunca nadie las vio… Entonces le dije eso, nunca nadie las vio… "lo vamos a subir", me dijo y fue lo primero que subimos a la web de Defensa,

del ministerio. (Entrevista de la autora a Stella Segado, 19 de septiembre de 2017).

Esta urgencia por dar visibilidad a las "listas negras" se explica por el lugar que la categoría ocupa en el imaginario colectivo en torno a la dictadura militar. En ese sentido y dado que se trata de un "lugar de memoria" su sentido no está estrictamente definido: en ocasiones, el uso de la categoría remite a aquellas personas que eran objeto de persecución, secuestro y eventualmente desaparición forzada por parte del aparato represivo y en otras, simplemente a ser objeto de censura. En este caso las tres listas halladas dentro de la serie "Actas de la Junta Militar" anotaban nombre y profesión de la persona junto con un "índice de peligrosidad" que iba de la "fórmula 4" a la "fórmula 1" y que, de acuerdo a lo trascendido, se refería al "registro de antecedentes ideológicos marxistas que hacen aconsejable su no ingreso y/o permanencia en la administración pública".[140] Es decir que, si bien es indiscutible que las personas listadas eran objeto de algún tipo de seguimiento por parte de los organismos de inteligencia, no se desprende que pesara sobre ellas una orden de detención o censura directa, especialmente para aquellos definidos como de "menor peligrosidad".[141] Este señalamiento apunta no tanto a menoscabar la importancia del hallazgo (y mucho menos la presión del aparato represivo sobre los medios y la cultura) sino a señalar de qué modo a la hora de difundir la documentación (y por ende de "configurar el archivo", entendido como aquello que es pasible de ser consultado) los criterios memoriales prevalecieron sobre otros posibles, como el análisis archivístico y el análisis historiográfico: en efecto, es imposible comprender el sentido y la función de dichas listas para la propia Junta Militar sin insertar esos documentos en la serie y el fondo al que pertenecen y a su vez, sin cruzarlo con otras fuentes documentales.

Paralelamente, las menciones a ADEBA y a la empresa Papel Prensa se enmarcan en otra coordenada narrativa vinculada a la categoría de "dictadura cívico-militar" y a la complicidad civil y empresarial con el terrorismo de Estado.

[140] *Página 12*, "Los nombres prohibidos de la dictadura", 7 de noviembre de 2013. URL: https://www.pagina12.com.ar/diario/ultimas/20-233081-2013-11-07.html

[141] Agradezco a los miembros del PMA sus reflexiones en torno a los nombres de fantasía habitualmente utilizados para difundir acervos documentales.

Esta categoría fue ampliamente retomada y difundida por distintos actores identificados con el kirchnerismo tanto discursiva como institucionalmente, en el marco de las disputas que el gobierno sostenía con otro conjunto de actores políticos y empresariales.[142] En articulación con lo que ya hemos mencionado como una "continuidad entre dictadura y neoliberalismo", la noción de "dictadura cívico militar" subraya el apoyo prestado por las clases dominantes a la Junta Militar, en un esquema según el cual las Fuerzas Armadas habían sido el "brazo ejecutor" de una política diseñada para beneficiarlas.[143] En ese sentido, a la hora de referirse a los documentos encontrados en el marco de la serie Comisión de Asesoramiento Legislativo (CAL), señalaba Rossi:

> [Se trata de] documentos que daban sustento doctrinario o ideológico al plan de gobierno del proyecto de reorganización nacional (…) Me parece trascendente una comunicación de la Asociación de Bancos Argentinos, de ADEBA, de aportes al esquema de proyecto nacional. Con lo cual, esto que nuestra presidenta siempre dice de que el golpe del 76 no fue un golpe militar, sino que fue cívico militar, encuentra en este tipo de documentos algún tipo de prueba en ese sentido. (Discurso del Ministro de Defensa, Agustín Rossi, 4 de noviembre de 2015)

Se trataba, una vez más, de leer y evaluar la documentación en su calidad de "prueba" que demostrara la verdad de la narrativa memorial sostenida públicamente por el gobierno. Lo interesante es que de acuerdo con esta perspectiva, "memoria", "verdad" y "prueba" se encuentran íntimamente ligadas y a su vez, se imbrican de manera inescindible con una narrativa política. Dicho de otro modo, el "hallazgo" de los documentos y en particular, de piezas que "demostraran" la complicidad de determinados sectores con la dictadura militar se decodificaba, se presentaba y contribuía a fortalecer la comunidad de recuerdo que trazaba el kirchnerismo como identidad política.

---

[142] En términos institucionales, esa narrativa se materializó, entre otras iniciativas, en la creación de la "Comisión Bicameral de identificación de las complicidades económicas y financieras durante la última dictadura cívico militar", a pocos días del cambio de gobierno en noviembre de 2015, con el objetivo de "presentar un informe" de las "consecuencias de las políticas económica, monetaria, industrial, comercial y financiera" adoptadas por la Junta Militar y la "identificación de los actores económicos y técnicos que contribuyeron o se beneficiaron" durante la dictadura. La ley salió con el rechazo de la oposición y la Comisión nunca fue conformada.

[143] Para una crítica de esta visión algo "instrumental" puede verse Canelo, 2011. Para un análisis de la categoría de dictadura "cívico militar" véase Águila, 2015.

Ello explica también las referencias al caso de la empresa "Papel Prensa", un caso que constituía un núcleo del enfrentamiento que el gobierno de Cristina Fernández mantuvo especialmente con el diario *Clarín* y los medios de comunicación concentrados. La propiedad de la empresa y la venta de sus acciones a manos de los principales diarios (*Clarín* y *La Nación)* en plena dictadura militar, había sido objeto de disputa entre éstos y el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner desde el año 2010. Ese año, como socio minoritario de la empresa, el gobierno había ordenado a los directores en representación del Estado que investigaran lo que se presumía había sido la "apropiación ilegal" de las acciones de la compañía por parte de los diarios mencionados en el marco del terrorismo de Estado.[144] Unos meses más tarde, el gobierno había presentado públicamente el informe "Papel Prensa: la verdad" que había sido elaborado por la Secretaría de Comercio Interior del Ministerio de Economía con el objeto de "aportar pruebas con valor judicial suficiente para expropiar Papel Prensa y arrestar a Héctor Magnetto [CEO del *Grupo Clarín*] y Bartolomé Mitre [propietario del diario *La Nación*] por delitos de lesa humanidad" (Sivak, 2013: 379).[145] Seguidamente, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación había denunciado penalmente a ambos empresarios porque entendía que en la venta de las acciones de la familia Graiver (entonces propietaria de un porcentaje del paquete accionario) existieron delitos de "asociación ilícita, extorsión, privación ilegal de la libertad calificada, torturas, vejaciones, todas estas conductas constitutivas de delitos de lesa humanidad" (Sivak, 2013: 382). En concordancia con esa versión, y a pesar de las desmentidas de ambos conglomerados de medios[146], el Ministro Rossi señalaba a propósito del "hallazgo" de las Actas de la Junta Militar:

> De nuestro primer análisis de la información, además del valor histórico, hay algunas cosas que nos parece importante destacar porque pueden llegar a tener no solamente valor histórico sino algún tipo de valor jurídico. En el caso Papel Prensa, caso Graiver. Fueron

[144] Secretaría de comercio interior, Resolución Nº 126/2010, 31 de marzo de 2010 (*BO*, 5 de abril de 2010)

[145]Asimismo, en noviembre de 2011 se produjo con fondos subsidiados por el Estado nacional una miniserie llamada "El pacto" que relataba la historia de la venta fraudulenta de "Papel Prensa", con fuertes polémicas en torno a su estreno.

[146] Según señala Sivak el Grupo Clarín había argumentado en defensa de Magnetto que la Junta Militar "no estaba al tanto de las conversaciones con los Graiver por la venta de Papel Prensa" (2013: 380).

> encontradas trece actas originales de la Junta Militar donde se realiza un seguimiento exhaustivo del tema. Doce de ellas están fechadas entre el 15 de septiembre de 1976 y el primero de diciembre del '77. Lo que demuestra que el tema era de discusión permanente en la Junta. En el acta número 19, que es del 6 de abril del '77, queda claramente demostrado que para la Junta Militar el tratamiento de los arrestos de los familiares implicados en el caso Graiver se analizaba junto con el tema Papel Prensa [exposición amplificada de la copia del acta]. La Junta Militar analizaba la detención de la familia Graiver en conjunto con la venta de Papel Prensa. (Discurso del Ministro de Defensa, Agustín Rossi, 4 de noviembre de 2015)

Aunque no profundizaremos aquí en la compleja relación que los gobiernos kirchneristas mantuvieron con los principales medios del país y especialmente con el Grupo Clarín, nos interesa destacar de qué modo la difusión del hallazgo documental estuvo permeada por la necesidad de presentar evidencia a favor de la versión sostenida públicamente por el gobierno, según una disputa que se inscribía en la propia construcción de poder del kirchnerismo y su relación con los medios de comunicación.[147]

Asimismo la referencia a Papel Prensa reforzaba un capítulo de cierta perdurabilidad en la opinión pública respecto de la existencia de un "empresariado cómplice" con los delitos de lesa humanidad. Como lo señalamos arriba, esta memoria, que tenía raíces anteriores a la emergencia del kirchnerismo, se constituyó progresivamente como uno de los puntales de su relato identitario, independientemente de las relaciones fácticas y concretas que los gobiernos de Néstor y Cristina Fernández de Kirchner establecieron, cada uno a su turno, con los diferentes sectores del empresariado nacional. En ese sentido, el hecho de que se mencionaran y se detectaran estos temas (y no otros) remite a la manera en que la configuración de los archivos estaba sujeta a la identidad política de quienes recuerdan, según una lógica que signó no sólo la política de "apertura" de los archivos, sino de modo general, la intervención de los gobiernos kirchneristas sobre el pasado reciente. Desde la perspectiva que adoptamos, ello no equivale a concluir que se trata de una "manipulación" o un mero uso "instrumental" del pasado por dos razones. Por

[147] Debe considerarse en este punto la prolongada disputa del gobierno con los medios masivos de comunicación concentrados por la promulgación e implementación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.

un lado, porque tal “uso” supone como precondición la existencia de un sujeto situado en una posición de exterioridad respecto de su contexto político y social, capaz de evaluar racionalmente las opciones en juego y decidir exclusivamente en función de sus intereses e intenciones particulares. Por otro lado, porque la noción de instrumentalización supone la existencia de un pasado pasible de ser captado más allá de toda posición política en el presente. Por ambas razones, optamos aquí por poner en evidencia de qué modo se anudan y se tensionan criterios como “la memoria”, la “verdad” y la “prueba” en el marco de determinados contextos políticos y en relación con la configuración de identidades.

Este anudamiento de criterios políticos y memoriales se vio reflejada también en el tratamiento de la documentación, esta vez en detrimento de la archivística como saber experto. Si bien en un primer momento el traslado al Edificio Alas se realizó con miras a preservar el orden original de los documentos (es decir, siguiendo el principio archivístico) a la hora de tratarla se superpusieron diferentes criterios: ¿debía priorizarse la realización de una clasificación de fondos de lo general a lo particular, como sugería el equipo del PMA, o dada la expectativa generada por los documentos debía avanzarse en una lectura inmediata de su contenido?

Como señalamos arriba, inicialmente el Equipo de Relevamiento y Análisis fue convocado para realizar un “primer examen” que daría como resultado la detección de los documentos mencionados por Rossi en conferencia de prensa. Más tarde, luego de promulgada la Resolución n° 445/2013, la documentación fue sometida a cuatro procesos trazados por la Dirección Nacional de Derechos Humanos del Ministerio: 1. organización, registro y descripción de los documentos; 2. Relevamiento y análisis de la documentación; 3. Conservación preventiva y restauración; 4. Digitalización.

En relación con la primera etapa, y debido a que la realización de una clasificación de fondos que fuera de lo general a lo particular implicaba retrasar la lectura directa, se decidió (a pesar de la opinión de los expertos) trabajar con una planilla que registrara documento por documento.[148] Así, de acuerdo con

[148] Para comprender las virtudes de una clasificación de fondos en este caso y los problemas acarreados por su ausencia así como para un análisis del tratamiento que se le dio a la documentación hallada desde la perspectiva de la archivística, véase Novarini, 2018.

Novarini (la entonces coordinadora del PMA) “desde las autoridades políticas” se estableció como prioridad leer hoja por hoja en busca de un documento “«salvador»”, es decir, un documento que “«milagrosamente» diera cuenta del accionar represivo y clandestino, también identificado como búsqueda del documento fetiche” (Novarini, 2017: 211). Además de la premura por presentar el hallazgo, existió desde el Ministerio la necesidad de encontrar un documento “distinto del resto” que pudiera presentarse a la sociedad y que dilucidara algo no conocido hasta el momento.[149] Aunque no hemos podido corroborarlo en las entrevistas, presumiblemente existía la expectativa de encontrar información sobre el destino de las víctimas de la represión ilegal, lo cual había signado durante varias décadas la demanda de “verdad” del movimiento de Derechos Humanos en el país.

Finalmente, la planilla de registro que se implementó (y con la cual el usuario debe hasta el día de hoy realizar la búsqueda) constaba de los siguientes campos:

CODIGO DEL DOCUMENTO	DENOMINACIÓN DE LA DOC.	AÑO	FECHA		TIPO DOCUMENTAL /SERIE	UNIDAD PRODUCTORA	ALCANCE Y CONTENIDO (BREVE DESCRIPCIÓN)	PALABRAS CLAVES	TRADICIÓN		FICHA	DIGITALIZACION	FOJAS
			INICIO	FIN					ORIG.	COPIA		SI-NO	

El equipo de archivistas debió asignar un código de identificación a cada documento, compuesto por los datos que corresponden a la ubicación topográfica y al orden de las unidades de conservación. Asimismo, el equipo del PMA estuvo encargado de llenar los campos subsiguientes: denominación, año, fechas extremas, e identificar, en la medida de lo posible, el tipo documental y la unidad productora. En una segunda etapa, el Equipo de Relevamiento debía completar los campos “alcance y contenido” y “palabras claves”, para lo cual contó también con el asesoramiento de la Oficina de Coordinación de Políticas en Derechos Humanos, Memoria, Verdad y Justicia de la Comisión Nacional de Valores. Además, de acuerdo con la Dirección Nacional de Derechos Humanos: “en los casos en que la descripción excediera

[149] Para dimensionar la particularidad de las decisiones tomadas a este respecto puede ser útil comparar lo sucedido con el hallazgo de microfilms en el Ministerio de Defensa en Uruguay. Véase Markarian, 2016.

las siete líneas, fue necesario ampliar la información en una ficha. Se realizó ficha en los casos en que la información que el investigador considera relevante excede, por importancia o por la capacidad de la celda del inventario"[150]. En total, en un período de cinco meses el Equipo de Relevamiento y Análisis elaboró aproximadamente cuatrocientas setenta fichas, aunque por razones de tiempo no llegó a completar los dos campos mencionados para cada documento. Estas fichas, pensadas como herramientas de descripción ampliatorias, se fundaban, al igual que las "palabras claves", en la experiencia de investigación de los Equipos de Relevamiento de los archivos de las Fuerzas Armadas, que, como vimos, estaba orientada al hallazgo de pruebas documentales para delitos de lesa humanidad. A su vez, las aproximadamente setenta y cinco "palabras claves" fueron definidas en función de una lista de temas, nombres de empresas y personas, muchos de los cuales fueron incluidos "por estar relacionados con delitos económicos o penales"[151]. Así, se incluyen como palabras clave las temáticas referidas por Rossi como "ADEBA" y "Papel Prensa", entre otras. Una mención aparte merece el apellido "Macri", cuya aparición en ambos inventarios (denominados "Hilera" y "Armario"), suma un total de once veces. Si tenemos en cuenta que cada inventario registra más de cinco mil documentos, resulta evidente que su inclusión como palabra clave estuvo nuevamente determinada por la coyuntura política antes que por criterios archivísticos o incluso prácticos.

Independientemente de ello, la elaboración de estas herramientas de búsqueda de carácter temático, por sobre la realización de instrumentos de descripción que identificaran estructuras, series y secciones documentales, muestra el modo en que las expectativas y necesidades políticas prevalecieron a la hora de definir el tratamiento de la documentación. Desde los lineamientos planteados por la archivística, ello implicó postergar la elaboración de otras herramientas que, sin estar tan marcadas por la coyuntura (la realización de los juicios por crímenes de lesa humanidad así como las disputas del gobierno

[150] Dirección Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, *Modalidad de trabajo*, Ministerio de Defensa, 2013. Disponible en: www. archivosabiertos.org.ar
[151] Dirección Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, *Modalidad de trabajo*, Ministerio de Defensa, 2013, p. 6. Disponible en: www. archivosabiertos.org.ar

kirchnerista con sectores del empresariado nacional), pudieran guiar otras posibles investigaciones en el futuro.

Lo mismo puede decirse respecto de la digitalización. En la medida en que la misma comenzó cuando aún no se había terminado la descripción del fondo, se digitalizaron los documentos que el Equipo de Relevamiento seleccionó como prioritarios y se subieron al sitio web "Archivos abiertos" creado para tal fin. Según señalan desde el PMA –que actualmente tiene a su cargo la documentación– la digitalización y su puesta en disponibilidad en línea permitió un aumento de las consultas y aseguró la accesibilidad de los documentos digitalizados. Sin embargo, a su criterio, el hecho de que sólo se difundieran y se subieran las "Actas de la Junta Militar" (entre otros pocos documentos) determinó que el fondo quedara subexplotado y las consultas provengan sobre todo de investigadores extranjeros.[152]

Abonando a esta perspectiva, podríamos decir que el tratamiento y la difusión que se le dio a la documentación hallada en el Cóndor –si bien garantizó el acceso a los documentos digitalizados como al resto del fondo– se encontró limitado por determinados marcos de interpretación político-memoriales y en consecuencia, por sus propios fetiches, tabúes y olvidos.

5.4. Conclusiones

A pesar de sus diferencias, las diferentes líneas de acción analizadas a lo largo de los dos capítulos precedentes configuraron el núcleo de la política de "apertura" de los archivos militares durante los gobiernos kirchneristas. En este sentido, el análisis propuesto ha mostrado de qué modo la Dirección Nacional de Derechos Humanos fue progresivamente metabolizando y procesando la demanda social por la "apertura de los archivos" (vigente desde la transición) y construyendo dispositivos específicos que le permitieran intervenir sobre los archivos según una trayectoria que los convirtió de meros depósitos en territorios en disputa.

[152] Entrevista colectiva de la autora a seis de los integrantes del Equipo del Sistema de Archivos del Área de la Defensa (ex Programa de Modernización de Archivos), 2 de agosto de 2017.

En esa línea, en el capítulo cuatro analizamos la tarea de los Equipos de Relevamiento y Análisis y su ingreso a los archivos como un modo de intervención en las batallas por la memoria y en las disputas por los sentidos del pasado. Así, hemos visto cómo la "política de apertura" implicó la puesta en cuestión de la autonomía de las Fuerzas Armadas respecto de sus propios archivos y de qué modo éstos se convirtieron en “territorios de memoria”, es decir, en espacios jerarquizados donde los diferentes actores disputaron por la obtención de "soberanía" respecto de los documentos. Asimismo analizamos las estrategias de los Equipos de Relevamiento para dotar de valor a los archivos y otorgarles nuevos usos, específicamente en lo que se refiere a su traspaso a la esfera judicial. Nos detuvimos especialmente en lo que denominamos la producción de un saber experto que, al considerar el archivo como un todo, logró reconvertir la documentación administrativa en una fuente valiosa para la reconstrucción de las estructuras represivas vigentes durante el terrorismo de Estado.

Al mismo tiempo, vimos cómo la expectativa social articulada en torno a estos archivos así como el estado de la memoria social no fueron ajenas a los modos en que se moduló esta tarea. En ese sentido, aun si los archivos que habían sido abiertos no eran, como indicaban los titulares, "archivos de la dictadura" o “archivos de la represión”, el modo en que se trabajaron, analizaron y reconfiguraron sus acervos los reconfiguró como tales e hizo posible que se convirtieran en insumos para los juicios en curso. Ese proceso deja en evidencia que el valor de los archivos producidos durante regímenes represivos así como sus potenciales efectos y usos no es automático, sino que es construido por los actores sociales y reactualizado de manera permanente.

Ahora bien, a pesar de la distinción entre saberes expertos y lógicas políticas (de la cual nos hemos beneficiado a lo largo de ambos capítulos), vale la pena señalar que estos saberes expertos que se configuraron alrededor de los archivos no están desprovistos de toda politicidad: en efecto, como hemos señalado, es precisamente la combinación entre activismo y compromiso con la causa “de los derechos humanos” junto con la producción de saberes específicos lo que explica la productividad que alcanzaron los archivos militares y su potencialidad de hablar de los hechos del pasado. Este punto es importante para comprender el perfil y la índole de la tarea que desarrollaron

los miembros de los Equipos de Relevamiento y a su vez, para no separar demasiado rápidamente lo político de otras prácticas que no son habitualmente reconocidas como tales. En este sentido, vemos cómo se anudan también en este caso la causa por la "memoria" con un modo específico de trabajar en el Estado en el marco de una determinada identidad política.

Por otra parte, en el capítulo cinco el análisis de la tarea del Programa de Modernización de Archivos y por último el tratamiento del Fondo "Junta Militar" nos permitió mostrar la co-existencia, al interior de una misma política, de diferentes criterios, metas y expectativas, así como el otorgamiento de diferentes funciones y valor a los acervos disponibles. Estas diferencias dan cuenta de que la intervención de las agencias estatales no puede ser reducida, como hemos dicho al comienzo, al accionar de un actor burocrático uniforme. Por el contrario, los modos en que los documentos oficiales se ordenan, se clasifican, se usan, se valorizan y se difunden implican procesos complejos en los cuales se toman decisiones, se producen saberes y se establecen prioridades que son pautadas por los diversos actores estatales en el presente. Por esa razón, además, la existencia de una conexión entre el devenir de los procesos políticos y los modos de configuración del archivo no debería constituir un motivo de crítica o sorpresa: como lo hemos señalado arriba, a menudo es el juego político el que dicta la ley de "apertura" o "aparición" de los archivos vinculados a la represión estatal y es por ello que su tratamiento, uso y difusión se encuentran influenciados por las condiciones políticas y los escenarios memoriales vigentes.

En consonancia con ello, nuestro análisis del modo de tratamiento y difusión de las Actas Secretas de la Junta Militar nos ha permitido mostrar cómo se han imbricado las nociones de "memoria", "verdad" y "prueba" en el marco de una determinada narrativa política que hacía hincapié en la complicidad de determinados sectores empresariales con la dictadura militar. En ese sentido, hemos visto como el "hallazgo" de los documentos y la premura por presentarlos se subordinaban a la narrativa instituida por la "comunidad de recuerdo" que trazaba el kirchnerismo como identidad política, según la comenzamos a delinear en capítulos precedentes y como la retomaremos en el capítulo siguiente.

Capítulo 6: La política de "señalización" como un proceso de "desparticularización" de las memorias

6.1. Introducción

En Argentina durante la última dictadura militar más de setecientos lugares fueron utilizados de forma sistemática o eventual como centros clandestinos de detención o lugares de reclusión ilegal del terrorismo de Estado.[153] Entre los años 2005 y 2015, durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, ciento treinta y cuatro de estos lugares fueron "señalizados", es decir, fueron marcados por el Estado como "sitios de memoria".

Este proceso de "lugarización" de la memoria, por medio del cual determinados emplazamientos se constituyeron en "lugares en los que se condensan sentidos sobre el pasado e identidades políticas y sociales" (Messina, 2014: 136), ha sido abordado desde múltiples dimensiones y su crecimiento se encuentra inscripto en dos dinámicas interconectadas: la prolongada acción contenciosa del movimiento de derechos humanos en Argentina y la instalación de sus demandas en el espacio público y, al mismo tiempo, el rol protagónico asumido por el Estado en la producción de memorias durante los gobiernos kirchneristas.

En este marco, este capítulo se propone varios objetivos. En primer lugar nos interesa dar cuenta de la política de *señalización* de ex CCD y otros lugares emblemáticos de la represión ilegal llevada adelante por el área de Sitios de Memoria de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación (en adelante, SDH), en lo que constituyó, sin duda, la "política de memoria" más visible durante el período analizado. Como lo hemos hecho con los dos casos anteriores, analizaremos el papel de los diferentes actores involucrados así como las múltiples lógicas y tensiones en juego, con la mirada puesta en la

[153] Según el listado elaborado por el Registro Unificado de Víctimas del Terrorismo de Estado, dependiente de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y publicado en 2016, el total de Centros Clandestinos de Detención y lugares de reclusión ilegal identificados asciende a 762. Véase https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/6._anexo_v_listado_de_ccd-investigacion_ruvte-ilid.pdf

progresiva conformación de una agencia estatal específica y su espacio de intervención.

En segundo lugar, por medio de este análisis nos interesa comprender los sentidos y efectos generados por esta política en un contexto de "porosidad" entre las agencias estatales y los actores locales: ¿qué tipo de proceso político e institucional significó la *señalización* de sitios de memoria tal como se llevó a cabo a lo largo del territorio nacional? ¿Cómo conceptualizar ese proceso? Específicamente, en este capítulo nos interesa mostrar el modo en que, aun si el Estado no constituye una entidad uniforme y monolítica, conserva un papel decisivo como agente de memoria. Según la perspectiva que proponemos este carácter decisivo se fundamenta en la capacidad de las agencias estatales (como la aquí analizada) para constituirse en fuente de legitimidad simbólica que permite des-particularizar (Bourdieu, 2014) las memorias locales involucradas e inscribirlas en un régimen de generalidad. Al mismo tiempo, en el plano de la discusión local, nos interesa aportar elementos para pensar esta intervención sin reducirla a sus particularidades gubernamentales (en este caso, a las características que asumió este proceso bajo los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner) e incorporando seriamente el papel singular que los actores sociales adjudican al "Estado" como regulador de los relatos sobre el pasado.

Con ese objetivo, en primer lugar ofreceremos una cronología de la "política de señalización" que dé cuenta de la progresiva conformación del área de sitios y su correspondiente proceso de especialización funcional (Oszlak, 1980). Luego, analizaremos algunos aspectos de este proceso intentando responder a la pregunta acerca de los sentidos generados por las "políticas de memoria", haciendo hincapié en lo que hemos llamado un proceso de "desparticularización" (Bourdieu, 2014) y un efecto de distancia (Mitchell, 1991, 1992) entre Estado y sociedad. En un último apartado nos referiremos a un conjunto de limitaciones de este tipo de "políticas de memoria" considerando aquellas dificultades que pudimos sistematizar a partir de nuestro caso de estudio.

En lo que concierne a la conformación del "área de sitios" dado que nos interesa reconstruir los sentidos, prácticas y lógicas que resultaron dominantes en la conformación de la "política de señalización", el análisis que presentamos

se basa en once entrevistas en profundidad con trabajadores y funcionarios de la denominada Dirección Nacional de Sitios de Memoria de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y el análisis de documentación oficial. En relación con las entrevistas, cabe decir que tres de ellas fueron realizadas con trabajadores que se desempeñan en diferentes Espacios de Memoria de la Ciudad de Buenos Aires (desde 2015 dependientes de la Dirección Nacional de Sitios de Memoria); tres se realizaron con trabajadores que ingresaron en 2012 a la Dirección Nacional propiamente dicha, una con quien se desempeñó como coordinador (aunque sin designación oficial) a lo largo del período analizado y otra con la Directora Nacional del Área, Judith Said. Asimismo hemos realizado una entrevista con Agustín Cetrángolo, quien fue uno de los asesores parlamentarios que trabajó sobre la ley nacional de sitios de memoria y luego funcionario de la Secretaría de Derechos Humanos durante la gestión de Martín Fresneda. En cuanto a las modalidades de identificación de los entrevistados, en el caso de los trabajadores y trabajadoras decidimos utilizar seudónimos debido a la inestabilidad institucional que atraviesa el área bajo la gestión de Mauricio Macri como presidente de la Nación, aunque ello no nos fue solicitado. En el caso de quienes fueron funcionarios o funcionarias de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación bajo los períodos de gobierno aquí analizados, decidimos identificarlos/as con nombre y apellido completos teniendo en cuenta el carácter público de sus investiduras y tareas.

Asimismo hemos recurrido al análisis documental de distintos registros producidos por el área como memorias de gestión, protocolos y cuadernos de difusión. Ello nos ha permitido reconstruir algunos aspectos de su funcionamiento así como dar cuenta del discurso “oficial” que la sostenía (Pagani y Arce, 2017). Con ese mismo propósito, hemos incorporado también el análisis de la normativa que reguló sus tareas.

6.2. La progresiva conformación del área de sitios: de las “memorias emblemáticas” a la Red Federal

Como señalan Langland y Jelin (2003), los procesos de marcación pública de espacios territoriales constituyen complejos escenarios donde se despliegan luchas por la memoria y los sentidos sociales del pasado. Ello

explica que estos sitios hayan sido abordados aquí y en otros países atendiendo a múltiples aspectos, conformando un "sub campo" dentro de los estudios de memoria.[154] Para recoger sólo algunas cuestiones, podemos decir que en el plano local estos "lugares, marcas y territorios" de la memoria han sido considerados como procesos de inscripción simbólica de la memoria en la trama urbana (Huffschmid y Durán, 2012; Schindel, 2009); como procesos de activación del patrimonio donde se entretejen multiplicidad de actores y sentidos sociales (D'Ottavio, 2016; Croccia, Guglielmucci y Mendizábal, 2008) y también como eje de la movilización y acción colectiva del movimiento de derechos humanos (Alonso, 2013; Jelin, 2005). En esa línea, diversos autores indagaron en los procesos de "recuperación" de los ex Centros Clandestinos de Detención que desde mediados de la década del noventa atravesaron procesos de reconversión en "Espacios de memoria" (Durán, 2012; Messina, 2011; Feld, 2011; Fabri, 2010; Persino, 2008). En este marco, algunos trabajos se han preguntado especialmente por los procesos de institucionalización de estas iniciativas, así como por el vínculo que los diferentes proyectos y organizaciones de la sociedad civil asumieron con el Estado en sus distintos niveles (Garbero, 2019; Messina, 2016; Da Silva, 2014; Guglielmucci, 2013; Vezzetti, 2009; Carnovale, 2006)**.** Asimismo se han indagado los usos y sentidos que los diferentes actores (sobrevivientes, trabajadores, militantes y vecinos) otorgaron a la "memoria" y el reconocimiento de las diferentes nociones en disputa tal como se proyectan en la construcción de los "Espacios" (Garbero, 2017; Feld, 2017; Sosa, 2016; Escolar y Fabri, 2015; Da Silva Catela, 2014; Brodsky, 2005).[155] Sin embargo, hasta el momento, carecemos de un abordaje en torno a la política de lugarización de la memoria a nivel nacional, considerando la creación y especialización funcional de un ámbito de actividad relativamente autónomo de política pública. Por esa razón, comenzaremos

[154] Una muestra de la diversidad de abordajes se puede observar en las Jornadas "Espacios, Lugares, Marcas Territoriales de la Violencia Política y la Represión Estatal" que se vienen realizado en el Instituto de Desarrollo Económico y Social (IDES) desde 2009 hasta la actualidad.

[155] La distinción entre Sitios y Espacios de Memoria remite a los usos que han tomado estos lugares luego de su identificación como ex CCD o de reclusión ilegal. La definición normativa de "Sitios de Memoria" se establece en la ley 26.691 (ver abajo). Los Espacios de Memoria son aquellos sitios que se convirtieron en lugares públicos destinados de manera permanente a la trasmisión de la memoria, la educación y la promoción y defensa de los derechos humanos, ya sea bajo el formato de museos, archivos u otros. En este capítulo nos centramos únicamente en la señalización de los sitios de memoria como tales.

planteando una cronología de la conformación del área de sitios de memoria para luego avanzar en el análisis de algunos puntos.

Como hemos señalado, los procesos de disputa por los espacios que funcionaron como centros clandestinos de detención se inscriben en una temporalidad larga de acción contenciosa del movimiento de derechos humanos en el país. La mayoría de los autores coincide en que fue a fines de la década del noventa, en un contexto de cierre de la vía penal para el juzgamiento de los crímenes, cuando comenzaron a surgir las primeras iniciativas de marcación territorial y activación patrimonial en torno de los CCD (Barbuto, 2012; Guglielmucci, 2013; Da Silva Catela, 2014; Feld, 2015; D'Ottavio, 2016). Por esa razón, para el momento de asunción presidencial de Néstor Kirchner la demanda por la "recuperación" de los lugares se había extendido al interior del movimiento, con algunas experiencias pioneras de articulación entre organismos de derechos humanos y Estados municipales o provinciales.[156] Así, por ejemplo, en el año 2000 ya había sido inaugurada la experiencia pionera "Casa de la Memoria y de la Vida" en el predio donde funcionó el Centro Clandestino de Detención Mansión Seré. El Espacio dependía de la Dirección de Derechos Humanos de la Municipalidad de Morón, en la Provincia de Buenos Aires, mientras que una experiencia análoga se llevaba adelante en el ex CCD Club Atlético en articulación con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Sin embargo, fue a partir de la intervención del gobierno nacional que el proceso de lugarización de la memoria adquirió una dimensión inusitada. En consonancia con una discursividad que, como hemos visto, se proponía un nueva intervención del Estado en la materia, entre los años 2004 y 2007, el presidente Néstor Kirchner encabezó la cesión de tres predios emblemáticos que habían funcionado como CCD (ESMA, Olimpo y La Perla) con el objeto de que se proyectaran allí "Espacios para la Memoria y para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos".[157] Los tres predios fueron cedidos a los respectivos gobiernos locales (el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y el de

[156] Para una reflexión en torno a la idea nativa de "recuperación", veáse Feld, 2016.
[157] Así lo señala el Convenio n°08 del 2004 por medio del cual el Estado nacional acuerda con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires la creación de un Espacio de Memoria en la ex – ESMA. Para un análisis comparativo de los procesos políticos de marcación de los ex CCDyTE ESMA y Olimpo véase Guglielmucci y Messina, 2009.

la Provincia de Córdoba) con la implicación del gobierno nacional en la desafectación o el desalojo de las dependencias que funcionaban en cada uno de ellos de manera regular (pertenecientes a la Armada, la Policía Federal y el Ejército, respectivamente). En el marco de la alianza estratégica que el gobierno de Néstor Kirchner estableció con amplios sectores del movimiento de derechos humanos (Pérez y Natalucci, 2012; Andreotti Romanin, 2014), las tres cesiones se planteaban como un gesto simbólico que pretendía construir una diferenciación respecto de otros gobiernos democráticos, pero no establecía mecanismos institucionales de intervención del gobierno nacional en la posterior construcción y gestión de los mismos. De hecho, la concreción de cada uno de estos proyectos siguió lógicas y temporalidades diferentes, influidas por la diversidad de actores involucrados y las relaciones de fuerza en cada territorio.

La excepción la constituye, hasta cierto punto, la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA). El convenio de cesión del predio (por medio del cual la Nación restituía la propiedad a la Ciudad de Buenos Aires) estableció la conformación de una Comisión Bipartita con participación de un representante del gobierno nacional. Esta Comisión era la encargada de concretar el desalojo de las escuelas navales y estuvo en funciones hasta 2007, año en que se conformó el Ente Público Espacio para la Memoria y la Promoción de los Derechos Humanos ex ESMA, con participación de ambos gobiernos (nacional y municipal) y un directorio conformado por representantes de organismos de derechos humanos.

Este proceso, que cristalizó en el actual Ente Público como mecanismo de gestión institucional de la ex-ESMA resultó de vital importancia para la conformación de un área de sitios por dos razones. Por un lado, porque la participación del entonces presidente en la “recuperación” de un sitio tan emblemático como la ESMA fue leída como el signo de una nueva permeabilidad del sistema político a las demandas del movimiento de derechos humanos y marcó el inicio de un ciclo de incorporación de militantes al Estado que se prolongó al menos hasta el primer gobierno de Cristina Fernández. Por otro lado, porque fue originalmente como parte de aquella Comisión Bipartita que Judith Said (entonces representante del Poder Ejecutivo en dicha Comisión) comenzó a ocuparse de la problemática de los sitios a nivel

nacional, para finalmente ser designada Directora Nacional de Sitios de Memoria en el año 2015. Uno de los trabajadores trabajadores que se desempeñó en la Comisión Bipartita y luego coordinó el "área de sitios" relata el proceso de este modo:

> Durante los primeros dos, tres años, mi trabajo fue ese con Judith. El desalojo de la ESMA.Y las primeras convocatorias para la elaboración de proyectos con los organismos [de derechos humanos] para definir qué se iba a hacer en la ESMA. Ese fue el primer trabajo. En función de eso empezamos a tomar contacto y a recibir muchas inquietudes de distintas provincias en las que estaban empezando a gestarse proyectos espejados con la ESMA. La ESMA lo que generó fue como una revolución en el campo de los derechos humanos y las políticas de memoria que no existían, y en función de eso los cordobeses y otros, empiezan a empujar sus propios proyectos que después se concretan. (Entrevista con Esteban, 28 de junio de 2018).

De acuerdo con Esteban, la paulatina conformación de un "área de sitios" se vinculó a un proceso de multiplicación de las demandas en torno a los sitios de memoria, alimentada por lo que aconteció en torno a la ex ESMA como lugar emblemático y al mismo tiempo, por la receptividad que estas demandas comenzaron a encontrar en el sistema político. En esa línea, tres años después de iniciado formalmente el traspaso de la ESMA, surgió el primer dispositivo institucional que, dentro de la SDH, tomó a su cargo la cuestión de los sitios a nivel nacional: la Red Federal de Sitios de Memoria (REFESIM). Formada en el ámbito desconcentrado del Archivo Nacional de la Memoria[158], la Red tuvo como coordinadora a Judith Said, quien además de formar parte de la mencionada Comisión Bipartita era una militante política ligada a Néstor Kirchner, ex presa política y familiar de desaparecidos.[159] En la práctica, la Red Federal funcionó como el paraguas institucional bajo el cual se conformó el área de sitios y desde el cual se llevó adelante la política de señalización a la que referimos arriba. A pesar de que inicialmente la coordinación, gestión y marcación de los sitios de memoria no fue percibida como una problemática específica y autónoma de política pública (de hecho, hasta la salida de la ley

[158] Véase Secretaría de Derechos Humanos, Resolución n° 14, marzo de 2007.
[159] Said se mantuvo en el cargo durante los tres gobiernos kirchneristas y fue luego designada como directora de la Dirección Nacional de Sitios de Memoria creada en 2014. Véase Decreto n° 1986 del 2014.

26.691, el Estado nacional no contaba con una definición de sitios de memoria y la Red tampoco la proponía formalmente) la misma sí ofició como un punto de referencia para algunas iniciativas de marcación y recuperación que ya se venían llevando a cabo en distintos puntos del país. En ese contexto, la Red se encargó de organizar periódicamente encuentros nacionales entre los distintos actores que impulsaban o trabajaban en los sitios[160] y comenzó a dar respuesta a las demandas por marcar o señalizar un lugar como un ex centro clandestino de detención o reclusión ilegal. En noviembre de 2005 se produjo así la primera señalización oficial en donde funcionó el ex CCD "El Chalet" en el Hospital Nacional "Profesor Alejandro Posadas", en la Provincia de Buenos Aires y casi un año después, se señalizó la Base Aeronaval "Almirante Zar", donde tuvo lugar el asesinato de dieciséis militante peronistas y de izquierda, conocido como la "masacre de Trelew"[161]. De forma paralela, en noviembre de 2006 una resolución del Ministerio de Defensa autorizó la marcación de aquellos predios de las Fuerzas Armadas cuyo funcionamiento como CCD fuera acreditado por el Archivo Nacional de la Memoria, un paso clave para el desarrollo de la política de señalización ya que habilitó un circuito intragubernamental para gestionar la marcación de los sitios. En efecto, en la mayoría de los casos, éstos pertenecían a las Fuerzas Armadas o de Seguridad y seguían en funcionamiento.[162]

A pesar de ello, el ritmo de las señalizaciones siguió a paso lento: entre 2007 y 2010 se llevaron a cabo sólo catorce y la iniciativa no se había instalado aún como una línea de acción sostenida y autónoma. De un modo análogo a lo que sucedió en el caso de la Comisión de Trabajo por la Reconstrucción de Nuestra Identidad, el salto cualitativo al interior del área de sitios se dio en 2011, luego de la promulgación de una normativa específica, la "ley de sitios de memoria" (Ley 26.691), que declaraba como tales a los lugares que hayan funcionado como CCD, tortura y exterminio o donde sucedieron "hechos

[160] Parte de las exposiciones que se presentaron en dichos encuentros fueron publicadas por el ANM. Véase Red Federal de Sitios de Memoria. (2009). *Cuaderno I. Sitios de Memoria: experiencias y desafíos*. Ciudad de Buenos Aires: Archivo Nacional de la Memoria y Red Federal de Sitios de Memoria (2011) *Cuaderno II. Sitios de Memoria: experiencias y desafíos*. Ciudad de Buenos Aires: Archivo Nacional de la Memoria.

[161] Esta señalización da cuenta de la ampliación del límite temporal que regía el criterio de actuación de la REFESIM, más allá de la periodización canónica 1976-1983.

[162] Más tarde, el Ministerio de Seguridad promulgó una resolución similar (Ministerio de Seguridad, Res. n° 180 del año 2011)

emblemáticos" del accionar de la represión ilegal desarrollada durante el terrorismo de Estado y, además, establecía como obligación del Estado nacional garantizar la conservación de tales sitios para fines judiciales y de preservación de la memoria. En relación con la señalización, en su artículo sexto la ley preveía "disponer para cada uno de los Sitios una marca que lo determine como sitios, acompañada de una leyenda alusiva de repudio de los hechos que allí sucedieron". Dicha marca se entendía como una "como convención nacional, aunque no excluyente de otras, para todos los sitios".

En éste y otros aspectos, la ley puede ser leída como un momento de cristalización de un conjunto de discusiones que habían proliferado al interior del movimiento de derechos humanos desde mediados de la década del noventa, en relación con cuál era el papel que le cabía al Estado en los sitios de memoria. En ese sentido, es notable que la normativa no preveía establecer un mecanismo uniforme respecto de la gestión de los sitios (ni siquiera una marca excluyente) sino que hacía hincapié en la "autonomía funcional" de cada uno de ellos, en un reflejo del diseño institucional que tenían algunas experiencias en curso (especialmente el Instituto Espacio para la Memoria de la Ciudad de Buenos Aires y la Comisión Provincial por la Memoria).[163] En ese marco, el papel de la autoridad de aplicación (que era la SDH y no específicamente el área de sitios) se limitaba a elaborar una nómina de los sitios existentes y uniformizar la marca, que debía ser consensuada como producto de un concurso público que tendría como jurados a los organismos de derechos humanos (algo que finalmente no se realizó).

La salida de la ley, si bien no implicó cambios inmediatos, otorgó el marco normativo bajo el cual se desarrollaría la actividad del área en los años subsiguientes. Así, en el año 2011 se llevaron a cabo diez señalizaciones y al año siguiente, el número ascendió a veintiuno. Este aumento se vinculó con a la ampliación del equipo de trabajo: según se recoge de las entrevistas realizadas con María (6 de junio de 2018), Vanesa y Laura (4 de julio de 2018) por primera vez, el área comenzó a contar con un equipo de trabajadores y

[163] Lo cual me fue indicado en entrevista con Agustín Cetrángolo, entonces asesor de la diputada nacional Victoria Donda, quien presentó en esa ocasión el proyecto de ley y militante de HIJOS-Capital. Para un análisis de la Comisión Provincial por la Memoria de la Provincia de Buenos Aires, véase Cueto Rúa, 2016.

trabajadoras propio, es decir, cuyas tareas específicas referían a gestionar los pedidos de señalización.[164]

Fue en ese mismo año que el área sistematizó una serie de procedimientos internos así como una tipología de las señalizaciones en base a las que ya habían sido instaladas. Asimismo, en ese documento, fechado en mayo de 2012, la definición de los objetivos de la REFESIM aparecía más claramente respecto de su resolución de creación, dando cuenta de un creciente proceso de especialización funcional. En efecto, originalmente se preveía la realización de actividades bien diversas, que iban desde realizar talleres en las provincias para promover la identificación de sitios, tomar testimonios para actualizar el "registro de víctimas", hasta aportar elementos para la confección de una "base de datos Nacional":

> La RED FEDERAL DE SITIOS DE MEMORIA es un organismo interjurisdiccional creado en 2006 que articula el trabajo de las dependencias estatales de todo el país que tienen a su cargo la gestión de políticas públicas de memoria a nivel nacional, provincial y municipal, con eje en las iniciativas de investigación, transmisión y educación que se llevan adelante en los ex centros clandestinos de detención (CCD) y otros espacios relacionados con el terrorismo de Estado. La coordinación de la RED está a cargo de la Coordinación Ejecutiva del ARCHIVO NACIONAL DE LA MEMORIA (ANM). Uno de los ejes de su política es la recuperación y señalización pública de los lugares en los que el último régimen de facto planificó y ejecutó el exterminio sistemático de toda oposición política (1976 y 1983). (REFESIM (2012). *Señalización externa de ex CCD y otros espacios vinculados con el accionar del terrorismo de Estado. Objetivos, requerimientos y especificaciones para la gestión*. Buenos Aires: Archivo Nacional de la Memoria).

En relación con los procedimientos, el documento establecía que "toda solicitud de instalación de una señalización" debía realizarse por nota a la Coordinación de la Red, que tenía a su cargo articular con las autoridades provinciales de derechos humanos y con otras áreas del Estado Nacional para determinar la "viabilidad, la gestión y la instalación de la señalética"; gestionar las autorizaciones correspondientes ante los Ministerios de Defensa y de Seguridad de la Nación para la instalación de las señalizaciones en espacios pertenecientes a las Fuerzas Armadas y de Seguridad, respectivamente y

[164] Las tres trabajadoras se desempeñaban con anterioridad en otras áreas de la SDH o del Ministerio de Justicia e ingresaron al área de sitios como producto de "pedidos de pases", es decir, de la asignación de funciones en otra área diferente respecto de la cual fueron originalmente contratadas.

verificar la existencia de testimonios que dieran cuenta del funcionamiento de un CCD en el lugar a señalizar, en base a la información obrante en el Fondo Documental CONADEP/SDH del ANM. El documento señalaba asimismo que la señalética y su instalación debía costearse con fondos provinciales y/o municipales, ya que el área de sitios no contaba con presupuesto para ello – una cuestión clave que retomaremos en el apartado siguiente.

A su vez, como señalamos, el documento resultaba un instrumento ordenador respecto de la diversidad de señales que habían sido instaladas hasta el momento y contemplaba diferentes escenarios de colocación: 1. Una estructura de hormigón de tres pilares con las palabras "memoria", "verdad" y "justicia" al frente y la siguiente inscripción: 'Aquí funcionó el Centro Clandestino de Detención conocido como "(nombre)" durante la dictadura militar que asaltó los poderes del Estado entre el 24 de marzo de 1976 y el 10 de diciembre de 1983'. Al dorso, tres placas de acrílico "con información sobre el funcionamiento del campo de detención, un mapa de la Argentina con los centros hasta la fecha y los fundamentos de las resoluciones de los ministerios de Defensa (1309/06) o Seguridad (180/11), según se trate"; una estructura de hormigón análoga, pero de gran tamaño (siete metros de altura por quince de largo) para ser colocada en rutas o autopistas; otra estructura análoga de tamaño medio (tres metros por siete), diseñada para una "situación urbana" y una última a "escala peatonal" (dos metros por seis). Por otra parte, el documento preveía la instalación de las placas de acrílico de manera independiente a los pilares de hormigón. Finalmente, esta ha sido la modalidad más utilizada ya que los pilares de hormigón requerían mayor erogación presupuestaria. De acuerdo con los procedimientos citados, las placas debían describir "las características específicas que tuvo la dependencia señalizada en el marco del sistema represivo" e incluir "la firma institucional del Archivo Nacional de la Memoria y de las áreas provinciales y/o municipales de derechos humanos a cargo de la iniciativa, con la leyenda: "Los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles, por eso están siendo juzgados".[165]

[165] REFESIM (2012). *Señalización externa de ex CCD y otros espacios vinculados con el accionar del terrorismo de Estado. Objetivos, requerimientos y especificaciones para la gestión*. Buenos Aires: Archivo Nacional de la Memoria.

Entre 2013 y 2014, el ritmo de las señalizaciones continuó (se realizaron 23 y 33 respectivamente), cada una de ellas con un acto de inauguración del que participaban al menos un funcionario del gobierno nacional (Said participó de la gran mayoría de ellos), representantes de organismos de derechos humanos locales y nacionales, sobrevivientes, y organizaciones de la sociedad civil. La realización de estos actos constituía un momento clave del proceso de señalización, ya que allí convergían los diferentes actores que habían impulsado la activación de la marca junto con los agentes estatales, según una lógica que hemos analizado en el capítulo tres y en el marco de la cual los funcionarios se percibían a sí mismos y eran percibidos no como meros "delegados" sino como "compañeros" de las víctimas.[166]

A mediados de 2014, dos años antes del final de la gestión de Cristina Fernández de Kirchner, el área de sitios atravesó dos importantes cambios: en primer lugar, como hemos adelantado, el gobierno nacional acordó con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires el traspaso a su órbita de la gestión de los cuatro Espacios de Memoria que para ese entonces funcionaban en la Ciudad y cedió el usufructo de los edificios de la ex ESMA que se encontraban bajo guarda del entonces Instituto Espacio para la Memoria. Esta decisión, influida por el interés del Ejecutivo en concretar bajo su jurisdicción el actual museo en el sitio de memoria ESMA fue a contrapelo de la intervención que hasta entonces había tenido el gobierno nacional, en el sentido arriba señalado de no afectar las autonomías funcionales de los Espacios. Sin extendernos sobre este punto (que analizaremos en el capítulo siguiente), en términos de la estructura del área de sitios, el traspaso implicó una alteración total, ya que aparejó un incremento muy significativo de la planta del personal y la asunción de la gestión cotidiana de los Espacios de memoria, siendo que hasta entonces su rol se limitaba a gestionar la señalización, brindar asistencia puntual y organizar algunas iniciativas a nivel nacional. En segundo lugar, de manera independiente de esta transformación, se reglamentó la Ley 26.691 por medio de la cual se creó oficialmente la Dirección Nacional de Sitios de Memoria. Luego de casi diez años de trabajo, el área finalmente fue institucionalizada y provista de una estructura de funcionamiento inscripta en el organigrama de la

[166] En el caso de Said, como en otros, ella era efectivamente una ex presa política y familiar de desaparecidos.

Administración Pública Nacional. Asimismo, gracias a la reglamentación, el área dejó de depender del Archivo Nacional de la Memoria para estar directamente bajo la jerarquía de unidad Secretario de Derechos Humanos de la Nación.[167]

Teniendo en cuenta esta breve cronología, veamos ahora algunos aspectos referidos a las tensiones, modalidades y lógicas que caracterizaron el funcionamiento del área de sitios a lo largo del período.

6.3. La construcción de la política pública como un proceso de "desparticularización"

Como hemos indicado en la introducción, diferentes autores coinciden en señalar de qué modo, en la Europa de posguerra, las "políticas de memoria" centradas en las víctimas fueron objeto de una creciente institucionalización. Este proceso se trasladó con modulaciones específicas a lo largo del globo, bajo la premisa común de que la "memoria" contribuye a formar "mejores ciudadanos", o mejor dicho, que las "políticas de memoria" constituyen una herramienta para asegurar la "no repetición" de pasados violentos (Gensburger y Lefranc, 2016). Así, muy a menudo, funcionarios, "emprendedores de la memoria" (Jelin, 2002) y el público en general, se refieren al carácter "reparatorio" o "preventivo" de las acciones destinadas a recordar el pasado, como un modo de reforma de la sociedad y de los individuos.

Sin embargo, como señalan Gensburguer y Lefranc, es evidente que si se las piensa desde esta perspectiva, la efectividad de las "políticas de memoria" es por lo menos incierta. Y esto no sólo porque sea prácticamente imposible evaluar su impacto en el "corazón" y los "espíritus" de los individuos, sino porque además la idea de "no repetición" del pasado funge como una metáfora cuyo sentido concreto permanece indeterminado.

Por esa razón, y aun cuando el mandato de "no repetición" haya funcionado como una clave de condena del terrorismo de Estado (en Argentina y el Cono Sur, bajo la forma del "Nunca Más") comprender los efectos y sentidos producidos por las "políticas de memoria" requiere desplazar el foco del ciudadano individual (concebido de manera abstracta), para pensar en el

[167] Esto se modificó luego de la asunción de Mauricio Macri como presidente de la nación ya que la Dirección volvió a depender del ANM.

conjunto de relaciones sociales que estas políticas producen sobre el territorio y, desde la perspectiva que hemos adoptado aquí, sobre las propias agencias estatales concebidas en su permeabilidad con lo social. Así, siguiendo el planteo de Gensburger y Lefranc (2017) nos interesa ahora pensar en los sentidos generados por la política de "señalización" desde una perspectiva que considera no ya el carácter "preventivo" que habitualmente se les atribuye (esto es, la idea extendida de que las "políticas de memoria" apuntan a garantizar *per se* la "no repetición" de pasados violentos) sino a partir de una reflexión acerca de lo que este tipo de políticas implican y producen al interior de las propias agencias estatales en el caso argentino.

En ese sentido, uno de los efectos generados por la "política de señalización" se vinculó con el involucramiento de los Estados municipales y/o provinciales en la progresiva extensión de la marcación a distintos puntos del país. Dado que el área de sitios no contó con un presupuesto propio en todo el período analizado (en rigor, tampoco lo tenía la Secretaría de Derechos Humanos)[168] la concreción de cada una de las señalizaciones dependió de que se gestionaran los recursos presupuestarios para ello. Por esa razón, una de las principales tareas del área consistió en consensuar con las autoridades provinciales y/o municipales el financiamiento de la marca y con ello, el tipo de señal que se instalaría. Este punto, que constituía una limitación estructural en términos de política pública, se convirtió en uno de los activos del proceso de señalización en la medida en que "empujó" la definición de contra partes que pudieran dar respuesta a las necesidades de co-gestión en las distintas localidades. Al respecto, señala Esteban:

> Levantábamos el teléfono y si había… no había Secretaría de Derechos Humanos en las provincias en ese momento. Hoy casi todas las provincias tienen su Secretaría de Derechos Humanos. Es parte de lo mismo. Es parte de ese impulso de las gestiones que querían congeniar con el gobierno nacional, en parte, con el Estado nacional que avanzaba con sus distintas políticas y les decía "¿con quién hablo?" "¿a quién van a poner en esta área que es tan importante para nosotros?". (Entrevista con Esteban, 28 de junio de 2018)

[168] La SDH dependía presupuestariamente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.

La influencia del Estado central en la generación de políticas a nivel sub-nacional (asociada, entre otras cosas, al carácter presidencialista del sistema político argentino) ya ha sido señalada en relación con la formulación de otros aspectos de política pública. En este caso, la importancia de esta influencia es doble: por un lado, la demanda del Estado central de generar contrapartes y por el otro, la progresiva generación de un relativo piso de consenso en relación con los modos de referirse al pasado reciente. En relación con lo primero, es notable que de treinta y cuatro Espacios de Memoria que se encontraban inaugurados en 2015, siete de ellos habían sido reconvertidos como sede de la Secretaría de Derechos Humanos provincial o incluso de Archivos Provinciales de la Memoria recientemente creados. Ello indica que la acción del gobierno nacional en este punto impulsó o contribuyó en la creación de una nueva institucionalidad afín a la temática. En relación con lo segundo, al proveer los recursos materiales para la señalización, los Estados provinciales y/o municipales se convertían en co-gestores del proceso y aparecían como firmantes de la señal instalada y participantes del acto de inauguración. Al respecto, señala Judith Said:

> Porque, a ver… se trataba de dejar al desnudo una política de derechos humanos que tenía que ver con crímenes de lesa humanidad. Es muy difícil que alguien sienta que puede oponerse o decir que no existieron esos crímenes, porque sobre todo en los lugares más chicos, todos tuvieron un familiar, un amigo, un primo o que se exilió o que estuvo preso… Entonces en realidad lo que hicimos con esto también es dar la posibilidad de evidenciarlo, de que se supiera. Entonces no quedaba a cargo de los dirigentes locales, quedaba a cargo de Nación que podía visibilizar eso. Y de paso les dábamos lugar a ellos a "hacerse los derechos humanos". En realidad, es así. Yo creo que fue así y me parece bien que haya sido así. Me parece que si ellos querían subirse a esa ola, que se suban. De todos modos están haciendo lo que nosotros queríamos que hicieran. Los carteles tenían una descripción clara, y en ningún momento dejamos entrever una política dudosa en relación a quienes eran los responsables. Entonces en realidad ellos estaban apoyando lo que nosotros decíamos, por lo tanto, pensaran o no pensaran así… los estábamos llevando a nuestra política. (Entrevista con Judith Said, 7 de agosto de 2018).

De acuerdo con Said, la determinación por parte del gobierno central en avanzar en la política de señalización fue decisiva para que las distintas jurisdicciones –incluidas aquellas gobernadas por partidos de signos políticos

opositores al gobierno nacional– accedieran a participar en el proceso, al menos en una ocasión.[169] El interés por "congeniar" con el gobierno nacional o incluso por "hacerse los derechos humanos" (es decir, por producir acciones de auto-legitimación con el recurso a la temática) determinaba la subsunción a la política nacional de manera independiente de los matices o la indiferencia que las administraciones locales pudieran tener respecto del pasado reciente. Por medio de su participación, los Estados provinciales o locales avalaban en sus respectivos territorios la definición que las propias señales inscribían de los crímenes del terrorismo de Estado como crímenes de lesa humanidad –por lo tanto imprescriptibles–, que fueron producidos en el marco de un sistema represivo replicado a escala local. Este señalamiento remite a la necesidad de incorporar como un elemento del análisis la articulación entre la escala nacional (es decir, en este caso, el ámbito de actuación de la Dirección Nacional de Derechos Humanos) con sus múltiples escalas de injerencia territorial y administrativa, junto con la escala local en la cual intervienen organismos gubernamentales pero también otros actores sociales.[170]

Asimismo, resulta interesante señalar el modo en que por medio de este proceso, el Estado nacional apareció como una fuente de legitimidad simbólica para relatar lo ocurrido a nivel reticular e inscribirlo en un régimen de generalidad. La multiplicación de la demanda por señalizar lugares no puede ser enteramente comprendida sin tener en cuenta este plus diferencial progresivamente producido por el Estado como dispositivo organizador. Esta diferencia se vincula a lo que, siguiendo a Bourdieu (2014) denominamos un proceso de "desparticularización", que apunta a hacer hincapié en el rol del Estado como agente de memoria: en efecto, si una de sus funciones centrales es la producción de identidad social legítima (Bourdieu, 2014) entonces la intervención estatal resulta particularmente decisiva en la configuración de los

[169] Hasta donde pudimos relevar, la política tuvo como excepciones a la provincia de Tierra del Fuego, donde no hay ninguna señalización instalada (de acuerdo con el Registro Unificado de Víctimas del Terrorismo de Estado –actualizado al 2015– se identifica un lugar de reclusión ilegal en la Comisaría de Ushuaia) y la Provincia de La Pampa. En esta última se realizaron seis señalizaciones bajo gestión enteramente provincial.

[170] Como señala Águila (2015), las escalas de análisis no se encuentran definidas de antemano sino que constituyen una elección del investigador. En este caso, al proponernos aportar al conocimiento de la producción estatal de "políticas de memoria" durante los gobiernos kirchneristas (2003-2015), el recorte que proponemos se ubica en una escala nacional pero, como puede verse, se beneficiaría de la contraposición con estudios más densos que den cuenta del proceso de marcación de sitios de memoria desde una perspectiva local.

sentidos del pasado. Por medio de sus acciones, las agencias estatales habilitan un espacio en el marco del cual una forma de narrar el pasado se convierte en la visión autorizada acerca de los hechos, por oposición a la cual otras memorias pueden ser evaluadas negativamente o soslayadas. Entendemos este devenir decisivo (aunque no determinante) de las memorias oficiales como un proceso de "desparticularización", esto es, de la constitución de la posición del Estado como "punto de vista no relativizable" (Bourdieu, 2014: 47). En el caso de las disputas por la memoria, este proceso de "desparticularización" es especialmente relevante porque al enunciar un sentido que se pone más allá de todo punto de vista (tal es, de acuerdo con Bourdieu, la característica específica de la acción estatal) aparenta poner fin a la deliberación sobre los sentidos del pasado y fijar determinados marcos de interpretación más o menos estables en el tiempo.

Así, además de proveer o gestionar los recursos materiales y las autorizaciones necesarias para señalizar lugares de las Fuerzas Armadas o de Seguridad (o, justamente, por efecto mismo de esa provisión como su potestad exclusiva) las agencias estatales aparecen como habilitantes de una narrativa general en el marco de la cual se inscriben como relatos "verdaderos" u "oficiales" un conjunto de narraciones locales. Ello explica, entre otras cosas, la importancia que funcionarios y trabajadores daban a la cuestión de la "visibilidad" y el carácter "reparatorio" que atribuían a la política.[171] En efecto, el progresivo proceso de institucionalización del área fue paralelo a la producción de un saber cada vez más específico respecto de cómo debían diseñarse las señales y la información que debían contener para ser visual y socialmente significativas. Del mismo modo, "empoderar" y "acompañar" a los sobrevivientes, familiares y organismos de derechos humanos locales, así como "llegar a los lugares más perdidos" del país, constituía para los trabajadores uno de los objetivos centrales de la política. Así, el acto de inauguración se vivía como un momento de cristalización caracterizado por la posibilidad de expresar las memorias locales en aquellos lugares no considerados emblemáticos. Esta posibilidad de "poder hablar", "poder decir" fue referida por todos los entrevistados y puede ser interpretada como un

[171] Entrevistas con Esteban, Vanesa y Laura.

efecto de la transferencia del poder del Estado para enunciar un punto de vista no relativizable respecto del "mundo social" que es, por definición, el "lugar de enfrentamiento de los puntos de vista" (Bourdieu, 2014). En ese sentido señala Esteban:

> Por supuesto que sin los organismos [de derechos humanos], no hubiera sido posible nada de lo todo lo que estamos hablando. Pero la novedad, el hecho político es que el Estado está señalizando el Ingenio Ledesma, con los organismos, con [la dirigente social] Milagro Sala, con todos los actores territoriales. Que estuviera el Estado era lo novedoso y que el Estado nacional empujara de alguna manera a que estuvieran el Estado provincial y el municipal en esos territorios, donde históricamente no había habido políticas de memoria, sino más bien un desprecio, según los casos…. (Entrevista con Esteban, 28 de junio de 2018)

La presencia del Estado como un "hecho novedoso" refiere a que por primera vez las agencias estatales pusieron a disposición sus capitales específicos (especialmente el simbólico) para instalar una señal –en el doble sentido, metafórico y literal– que estableciera una narrativa oficial del pasado en lugares alejados del poder central. En términos de Mitchell (1991,1992), la existencia de un entramado institucional que involucraba al área de sitios, al Archivo Nacional de la Memoria (donde se verificaba el funcionamiento de cada sitio como CCD a partir de los testimonios disponibles), los Ministerios de Defensa o de Seguridad y las autoridades municipales o provinciales, contribuía a la producción de esa frontera o distancia (*separatedeness*) que llamamos "Estado" y que debe ser entendido como el efecto por medio del cual un conjunto de prácticas sociales aparecen como algo separado de la sociedad (Mitchell, 1991). Considerando ambos conceptos, ese mismo movimiento por medio del cual se produce un "efecto de distancia" refuerza el modo en que una versión del pasado puede "desparticularizarse" y ser percibida por los actores como algo diferente respecto del resto de los discursos sociales circulantes.

El mismo efecto se sigue de los mapas confeccionados por el Registro Unificado de Víctimas del Terrorismo de Estado/Sistema Federal de Datos sobre el Terrorismo de Estado (SiFeD) junto con el área de sitios/REFESIM. Hasta donde pudimos relevar, en el período analizado se produjeron tres mapas sucesivos (el primero, sin fecha definida, el segundo en diciembre de

2011 en articulación con el Ministerio de Educación y el tercero en julio de 2013) que tenían como objeto georeferenciar los sitios de memoria señalizados y próximos a señalizar. Estos mapas lograban dar cuenta del carácter extendido y reticular del accionar del terrorismo de Estado por medio de un lenguaje visual sencillo y accesible. La proyección de los CCD y otros lugares de reclusión ilegal sobre la silueta del territorio nacional –es decir, el uso de mapas como tecnología distintiva de los Estados nacionales– genera el mismo efecto de distancia analizado arriba: si bien tiene como objeto marcar las referencias locales, al mismo tiempo las desparticulariza; las sitúa en un relato nacional que aparece de esta manera autorizado y difundido por el "Estado" como entidad abstracta.

Ahora bien, ambos efectos de distancia y desparticularización deben ser comprendidos en situación, es decir, en el contexto de la porosidad que caracteriza a las agencias estatales y sus capacidades distribuidas de manera desigual a lo largo del territorio nacional, en el sentido en que lo advierte O'Donell (1993).[172]

Si efectivamente la demanda sostenida por distintos actores movilizados explica la institucionalización de la política y si como hemos sugerido, ésta fue progresivamente produciendo un plus diferencial que permite encuadrar las disputas respecto del pasado, es necesario considerar ahora el modo en que esa producción se sostiene, a su vez, sobre un conjunto de prácticas de articulación que remiten nuevamente a la porosidad de esa misma frontera entre Estado y sociedad. Paradójicamente, la posibilidad de producir ese "efecto Estado" por medio del cual una versión del pasado se desparticulariza y entra a formar parte de un relato general, no está atada al accionar impersonal

[172] La noción de "porosidad" a la que remitimos aquí se inspira simultáneamente en los dos sentidos en que la hemos venido trabajando. Por un lado, la ya mencionada reflexión de Mitchell (1991, 1992) para quien aquello que llamamos "Estado" no es un objeto separado de la "sociedad", sino "el poderoso efecto por medio del cual un conjunto de estrategias político discursivas generan que ciertas funciones y personal aparezcan como separadas" (Mitchell, 1991: 90, trad. propia). En ese sentido, nos referimos a una frontera porosa e inestable entre las agencias estatales y otros actores sociales que resulta trazada y retrazada en función de los diferentes contextos. Más específicamente, dentro del campo de estudios sobre memoria retomamos la noción de Cueto Rúa (2019) tal como la formula en su análisis sobre el proceso de institucionalización de la Comisión Provincial por la Memoria de la Provincia de Buenos Aires. Otros autores como Messina también se han referido a la existencia de "fronteras difusas" o "espacio híbridos" a la hora de referirse a los procesos de gestión de sitios y Espacios de Memoria y al modo en que se entremezclan en ellos "política, militancia y gestión" (2016: 122).

de una burocracia estatal sino al intercambio con los actores locales que podían recibir positivamente o por el contrario rechazar (en toda o alguno de sus aspectos) la iniciativa de señalización. Por ello, aun cuando cierta internalización de los procedimientos resultó necesaria para el afianzamiento de la política, las señalizaciones no se desarrollaban solamente como trámites burocrático-administrativos, sino como el producto de un consenso entre los diferentes actores involucrados. En ese sentido señala Laura, una trabajadora del área desde el 2012:

> Todos los carteles son distintos. En su diseño son similares, en su contenido son distintos salvo el arranque y el final. Y para cada cartel se genera el texto o se trabaja el texto. Nosotros una vez que tenemos el informe [del área de Investigaciones Históricas del ANM] se hace una propuesta de contenido, de lo que para nosotros podría ser, y en general se comparte con los que solicitaron la señalización: organismos, municipios, provincias. Se recepcionan sugerencias, cambios, hasta que se acuerde una versión final. Lo que está colocado es una versión que esta acordada con los distintos actores. Y además siempre tratando de poner en eje que sea reparatorio, que sea algo que represente, que diga lo que ahí sucedió y que el sobreviviente, o el familiar se vea reflejado en ese texto. Con fundamento. (Entrevista con Laura, 4 de julio de 2018)

La articulación con los actores locales fue una constante en el trabajo del área, al punto tal que, como sucedía en la Comisión de Trabajo por la Reconstrucción de Nuestra Identidad y en los Equipos de Relevamiento y Análisis de los archivos de las Fuerzas Armadas, los trabajadores reivindican el "compromiso" como un requisito necesario para que su tarea fuera exitosa y socialmente significativa. "Visitar" los sitios, "involucrarse" y "mediar" las expectativas que los actores locales tenían respecto del proceso aparecía como condición necesaria del desarrollo de la política.

La importancia otorgada a la cuestión del "compromiso" abona una vez más la hipótesis según la cual a lo largo de los gobiernos kirchneristas el Estado fue concebido como un espacio donde se tramitaban compromisos militantes, de un modo que, por un lado, fue transformando el quehacer de las agencias estatales en función de determinadas lógicas asociadas al activismo (Perelmiter, 2010) y, por el otro, fue anudando la causa de la "memoria" con una determinada identidad política. En el marco de este anudamiento, el

kirchnerismo se concibe a sí mismo como la encarnación de un legado y un mandato heredados del pasado, que a su vez "enraíza su práctica política en valores, ideas, convicciones, modos de hacer y de decir la política que lo preceden y lo constituyen" (Montero, 2012: 296).

Teniendo en cuenta esto es posible hablar también en este caso de una "gestión militante" (Vázquez, 2014, 2018), entendida como un modo de habitar las agencias estatales que se diferenciaba de un abordaje "técnico" o "burocrático" que se caracterizaría justamente por su falta de conexión con el "territorio". En este sentido, aun si la estandarización de los procedimientos y la homologación progresiva de las señales era percibida como un requisito ordenador del proceso (lo que, en términos de Bourdieu, es concomitante con su inscripción en modos de hacer específicamente estatales) la eficacia de la política se comprendía como producto de la interacción con otros actores sociales. Este punto nos instala de lleno en una paradoja: era precisamente el carácter poroso y, hasta cierto punto, la institucionalidad débil del área de sitios lo que permitía que la señalización fuera representativa de la particularidad local y al mismo tiempo, que la inscribiera en un marco de interpretación más amplio. Por esa razón, lo que hemos llamado un proceso de "desparticularización" debe ser comprendido no como el punto de partida del accionar estatal sino como un proceso en devenir (o incluso una voluntad de los actores) cuya expresión institucional la constituye la progresiva (y no planificada) especialización funcional del área de sitios.

En este sentido, como señala Perelmiter a la hora de analizar la incorporación de militantes piqueteros al Ministerio de Desarrollo Social (2012), el carácter inestable de la frontera entre Estado y sociedad no debe ser tomado *a priori* como sinónimo de ineficacia, sino más bien a la inversa. En este caso, para que la señalización fuera efectivamente un acto de memoria el involucramiento de los actores locales constituía un aspecto capital: sin ello la señal instalada podía aparecer (y puede devenir) de un día para el otro, parte del mobiliario urbano. Al mismo tiempo, para que el accionar del Estado se diferenciara de otras iniciativas sociales efectivamente existentes, debía trascender la demanda particular y expresar, en sus modos de hacer y de decir, una narrativa general. En relación con ello, señala Esteban:

> E: Nosotros no podíamos poner como Estado cuestiones que a veces nos pedían que eran en el terreno de una… no sé cómo decirte. En algunos casos era información sensible y en otros casos era un discurso que no era el discurso del Estado. Un discurso más militante…
>
> C: ¿por ejemplo?
>
> E: "Cárcel común, perpetua y efectiva a los genocidas", una consigna… nosotros no poníamos consignas. Capaz que decíamos lo mismo. Decíamos "los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles, por eso están siendo juzgados". No decíamos "adonde vayan los iremos a buscar"… no podíamos poner eso. Pero a veces había organizaciones que nos lo pedían, o nos pedían firmar el cartel y muchas veces era un tema eso, al final aflojábamos muchas veces y firmaba el Estado y firmaban las organizaciones pero la idea era que el cartel era del Estado y era muy importante que lo firmara el Estado nacional, provincial, y municipal. Era superador de que se pusiera una baldosa, en el caso de las señalizaciones de sitios. (Entrevista con Esteban, 28 de junio de 2018)[173].

La negociación respecto al contenido de las señales remite al modo en que la frontera entre aquello que llamamos "Estado" y "sociedad" debe ser continuamente re-trazada (Mitchell, 1991). La reticencia a incluir "consignas" o incluso un "discurso militante" se justifica por la voluntad explícita que aparece aquí de producir ese plus diferencial que permitiera distinguir el discurso del Estado del resto de los discursos sociales. Y ello no porque el "Estado" dijera algo diferente de esos discursos sino porque lo diferente era que lo dijera el "Estado": es decir, que el discurso producido por un conjunto de prácticas sociales y entramados institucionales apareciera como algo diferente ("oficial") respecto de la sociedad.

Al mismo tiempo, es significativo señalar que la precariedad institucional del área de sitios (es decir, la inestabilidad y escasez de recursos humanos y su falta de autonomía respecto de la estructura estatal –algo que fue subsanado sólo luego de la reglamentación de la "ley de sitios"), así como la desconfianza que muchas de las organizaciones sostuvieron históricamente respecto del involucramiento del Estado en la temática, explican también que

[173] El entrevistado se refiere a una iniciativa social de marcación territorial conocida como "Baldosas por la Memoria", llevada adelante en la Ciudad de Buenos Aires por la "Coordinadora de Barrios x Memoria y Justicia" desde el año 2005. Bettanin, C. y Schenquer, L. (2015). "Baldosas por la Memoria": marcas territoriales en las calles de Buenos Aires. *Conversaciones del Cono Sur*, 1(2). Disponible en línea. Referencias completas al final de la tesis.

en ocasiones no fuera posible resistir a la presión de las organizaciones que querían posicionarse como actores centrales de la señalización, o a la inversa, que ni siquiera fuera posible concretarlas. Una evaluación cuantitativa de la cantidad de señalizaciones realizadas en el período deja en evidencia estas dificultades: de los más de setecientos sitios de memoria identificados por el RUVTE, sólo ciento treinta y cuatro fueron señalizados en el período y más de la mitad de ellos (sesenta y dos) se encuentran en la provincia y la Ciudad de Buenos Aires.

Algo similar puede decirse en relación con la preservación de los sitios. Según la ley 26.691 es competencia del Ejecutivo nacional garantizar la conservación material de cada uno de los sitios "a los fines de facilitar las investigaciones judiciales" y la "preservación de la memoria de lo acontecido". Sin embargo, según señala Agustín Cetrángolo, desde la Dirección Nacional de Sitios de Memoria no se previó, a lo largo del período analizado (2003-2015), ningún mecanismo institucional para definir el alcance de dicha preservación y abordar las tareas que ello implicara en los más de setecientos lugares distribuidos a lo largo del territorio nacional, con la correspondiente erogación presupuestaria que ello hubiera implicado.[174] Así, aun cuando el carácter "probatorio" de los sitios de memoria para los juicios de crímenes de lesa humanidad constituía uno de los elementos recurrentes en el discurso de las diferentes agencias estatales implicadas (incluidas el parlamento y el poder judicial), en términos institucionales la preservación de los sitios no se encontró garantizada.[175]

6.4. Una adenda entre el "Estado" y el "gobierno"

A lo largo del capítulo hemos analizado en detalle la política de "señalización" de sitios de memoria tal como fue propuesta desde el Estado nacional. En relación con ello, hemos destacado la manera en que dicha

[174] Entrevista realizada con Agustín Cetrángolo, 25 de julio de 2018.

[175] La situación es algo diferente en los treinta y cuatro sitios que han sido reconvertidos como Espacios de Memoria. Bajo dicho rótulo se subsumen una variedad de procesos sociales y políticos vinculados a la capacidad de movilización de recursos por parte de las organizaciones sociales involucradas en la recuperación de los predios. En este sentido, los Espacios de Memoria responden a una variedad de modalidades institucionales, discusiones memoriales, realidades presupuestarias e inserciones locales que difícilmente pueden ser abarcadas por un análisis situado a nivel nacional.

política requería de una articulación con los actores locales que pudieran hacer de la señalización un proceso socialmente significativo. Al mismo tiempo, hemos indicado que dicha articulación requería una negociación permanente en relación con el papel del Estado en el proceso, de modo que fuera posible construir ese plus diferencial que fue progresivamente distinguiendo a la política de otras iniciativas de marcación territorial. Ese proceso, que siguiendo a Mitchell (1991) hemos identificado como el (re)trazado permanente de la distancia entre "Estado" y "sociedad", constituye una frontera porosa (aunque no ilusoria) que si bien podía constituir un problema para el fortalecimiento de las capacidades estatales, también puede ser visualizada como uno de los principales activos de la política.

Ahora bien, como hemos visto, esta lectura implica destacar que la función estatal o, en términos de Mitchell, el "efecto Estado" no constituye el punto de partida de la implementación de la política, sino un proceso de construcción en el marco del cual el sentido de esa perspectiva estatal debía ser continuamente renegociada. De hecho, esta preocupación por construir un "efecto Estado" fue compartida en otros ámbitos igualmente dedicados a las "políticas de memoria", particularmente en el "Programa Educación y Memoria" del Ministerio de Educación de la Nación sobre el cual nos interesa detenernos.[176]

En un texto en el cual reflexiona sobre su experiencia como trabajador del Programa, Santiago Cueto Rúa señala: "éramos conscientes del esfuerzo que estábamos encarando: producir una enunciación estatal sobre el terrorismo de Estado que tuviera alcance nacional y que al mismo tiempo diera cuenta de las memorias locales" (2017: 4). Según el autor, producir una enunciación estatal implicaba "subrayar una serie de verdades históricas cuya comprobación había sido responsabilidad precisamente del Estado argentino" y

[176] Los inicios del Programa datan del año 2005 a partir de un proyecto inicialmente pensado desde el Ministerio de Educación para intervenir en las conmemoraciones de los treinta años del golpe de 1976. Progresivamente el Programa se fue estructurando en torno a tres ejes: "Memorias de la dictadura: terrorismo de Estado en Argentina; Malvinas: memoria, soberanía y democracia; Holocausto y genocidios del siglo XX". En este marco se creó formalmente la Red Nacional de Educación y Memoria, en el marco de la cual se realizaron encuentros nacionales, provinciales y regionales y se trabajó en la construcción de estrategias federales conjuntas para la enseñanza y transmisión del pasado reciente en el aula. Vease Adamoli, Farías y Flaschland, 2015 y Cueto Rúa, 2017.

particularmente del poder judicial desde el desarrollo del “Juicio a las Juntas” en 1985. Eran estas “verdades históricas” judicialmente comprobadas (primariamente, la existencia de un plan sistemático de desaparición de personas) lo que, según Cueto Rúa, les permitía a los trabajadores y trabajadoras encuadrar la emergencia de ciertas memorias locales disonantes, por ejemplo, aquellas que reivindicaban el terrorismo de Estado o que se afincaban en la denominada “teoría de los dos demonios”. De este modo, quienes trabajaban en el Programa podían reponer una “voz estatal”, es decir, un determinado esquema de interpretación de la violencia que se había producido en sede judicial y que se reactualizaba con la reapertura de los juicios por crímenes de lesa humanidad desde 2005 en adelante.

Lo que nos interesa destacar (además de la pregnancia del dispositivo judicial, según lo hemos indicado también en relación con la “apertura” de los archivos de las Fuerzas Armadas) es que la definición de esa “voz estatal” no era, para los propios trabajadores, algo dado de suyo sino que debía ser construido y renegociado en distintas instancias del Programa. Esto es congruente con lo que hemos sostenido acerca de la pluralidad de aquello que llamamos “Estado” y la imposibilidad de asignarle una voz unívoca, mucho más si se considera la variabilidad que —incluso a nivel nacional— ha signado la intervención de las agencias estatales en la temática desde la transición democrática hasta la actualidad.

Ahora bien: aun constatando el carácter plural y desagregado de eso que llamamos “Estado”, dicha constatación no impide que, como lo hemos intentado hacer a lo largo del capítulo, atendamos a la función diferencial que los propios actores continúan atribuyendo al “Estado” como agente de memoria. Dicho de otro modo, aun cuando los propios actores experimenten su carácter fragmentario e incluso contradictorio, ello no implica de manera automática que renuncien a considerar su dimensión desparticularizada, es decir, a la posibilidad de acceder a la perspectiva estatal como aquella que se sitúa a distancia de otras posiciones sociales y se pone más allá de todo punto de vista. La pregunta que signa el texto de Cueto Rúa es iluminadora en este sentido: ¿hemos logrado, se pregunta el autor, “construir un piso de verdad en torno a nuestra historia reciente?” Y continúa:

> […] La pregunta que latía y que hoy más que nunca sigue latiendo es si estábamos reponiendo la voz estatal, tal como argumentábamos a la hora de definir el objetivo de nuestros materiales y nuestras capacitaciones, o si estábamos simplemente reponiendo una voz gubernamental que se pretendía estatal. (Cueto Rúa, 2017: 7).

La diferencia entre una "voz gubernamental" y una "voz estatal" emerge de otra constatación vinculada a la progresiva desarticulación de las "políticas de memoria" y especialmente del Programa Educación y Memoria, tras la asunción de Mauricio Macri como Presidente de la Nación en diciembre de 2015. Según señala el autor, a pesar de que la normativa no se ha modificado, el Programa se ha ido achicando en sus dimensiones y alcances, al mismo tiempo que se han recortado la cantidad de trabajadores y recursos. Ese panorama detona la pregunta citada arriba: ¿era el Programa el lugar de enunciación de una voz efectivamente "estatal" o constituía más bien el producto específicamente situado de una correlación de fuerzas en el gobierno? Dicho de modo más general: ¿eran las "políticas de memoria" desarrolladas durante el kirchnerismo una línea de acción vinculada a una determinada identidad política o incluso a un modo específico de habitar las agencias estatales, o por el contrario, trascendían dicha identificación para constituirse como "políticas de Estado"?

Esta pregunta nos interesa en la medida en que, como veremos en el capítulo que sigue, el argumento según el cual el kirchnerismo se habría "apropiado" de una memoria cuya reproducción debería ser una "política de Estado" (y no de gobierno) constituyó una de las principales críticas que se formularon a las "políticas de memoria" aquí analizadas desde la oposición partidaria, los medios de comunicación y algunos organismos de derechos humanos.

Si aceptáramos de manera provisoria la existencia de una distinción clara entre políticas gubernamentales y "políticas de Estado" algunos elementos que hemos ido desarrollando a lo largo de la investigación parecerían abonar la primera de esas opciones. Efectivamente, tal como lo hemos mostrado en los capítulos dos y tres la reparación de legajos laborales como práctica de memoria se enmarcaba en un conjunto de núcleos de sentido asociados al kirchnerismo como identidad política. Incluso, como hemos

indicado, la memoria de los trabajadores estatales desaparecidos se constituía como una “cita” del pasado que permitía resignificar el trabajo en el Estado en el presente y lo mismo ocurría con las modalidades de tratamiento y difusión de las “Actas Secretas de la Dictadura” entendidas como modos de fortalecimiento de “proyecto político kirchnerista” frente a sus adversarios.

Sin embargo, la distinción entre una voz estatal y una gubernamental no resulta necesariamente productiva para las agencias que hemos analizado porque lo que hemos encontrado es justamente una imbricación o un anudamiento entre un modo de habitar las agencias estatales (signado por el activismo), una causa —la demanda de “memoria, verdad y justicia” tal como fue forjada históricamente por el movimiento de derechos humanos— y una comunidad de recuerdo, anclada en el kirchnerismo, sobre la base de la cual se modulan los dos primeros elementos. En ese sentido, antes que identificar el carácter “estatal” o “gubernamental” de las políticas como conceptos puros, nos interesa mostrar el modo en que las agencias estatales incorporaron las demandas por “memoria, verdad y justicia” que le eran preexistentes, pero no lo hicieron dejándolas intactas (o desde una pretendida neutralidad) sino que las metabolizaron, las transformaron y las hicieron funcionar en una nueva lógica de poder que apuntaba a la conservación y reproducción de las propias capacidades políticas. Esto coincide mejor con una perspectiva que asume la pluralidad del Estado y que por eso no traza distinciones tajantes entre quiénes “hacen” el Estado en un determinado momento y quienes ocupan, en ese mismo momento, los resortes del gobierno.

A su vez, esta perspectiva entiende que, como señala Thwaites Rey, el Estado no es sólo “una condensación de las relaciones sociales de fuerza, sino también una institución-actor, una maquinaria que no sólo asimila o incorpora las presiones sociales sino que las metaboliza, las procesa, las transforma y las devuelve bajo una nueva lógica de poder que apunta a la conservación y reproducción de tal poder conquistado.” (2018: 81) Por esa razón, lo que hemos intentado señalar a lo largo de los capítulos precedentes son los efectos y sentidos que la intervención del Estado ha generado tanto en los modos de habitar las agencias estatales como en los marcos de narración del pasado y las identidades políticas que lo sostienen, o en nuestros términos, en la

conformación de una “comunidad de recuerdo”, indicando el modo en que los tres elementos se vinculan entre sí.

Ahora bien, como veremos en el capítulo que sigue, ello no implica que esta imbricación entre “Estado”, “identidad política” y “causa de la memoria” haya estado exenta de tensiones. Según lo hemos adelantado en el capítulo tres, parte de esas tensiones se expresaban en los actos conmemorativos, allí donde la construcción de un “nosotros” que recuerda suponía una suerte de contradicción entre el sostenimiento de un conjunto de reivindicaciones y sentidos particulares (asociados al kirchnerismo como identidad política) desde un escenario propiamente “estatal”, esto es, desde una invención organizativa que, para decirlo con Bourdieu (2014), adquiere su potencia nominativa bajo la escenografía de lo oficial o universal. Como se explica a continuación, es precisamente la modulación del relato del pasado en los términos requeridos para la constitución de una identidad política lo que resultaba inadmisible para quienes entendían que la “memoria” debía ser objeto de un enunciador universal y por lo tanto desprovisto de un color partidario; y quienes argumentaban, en consecuencia, que ese enunciador debía ser el “Estado” concebido con esas características.

Sin embargo, el punto es que como lo hemos sostenido a lo largo de la tesis (y lo reforzaremos a continuación) esa imagen del “Estado” como posible enunciador universal es deudora de una mirada normativa (y tal vez excesivamente abstracta) que poco se ajusta a los procesos de formulación de políticas públicas efectivamente existentes. Más aún, como hemos dicho siguiendo a Mitchell: la universalidad, homogeneidad, credibilidad y autonomía que detenta el “Estado” como invención organizativa (atributos que no son en absoluto despreciables cuando se trata de definir las batallas por la memoria) deben ser entendidas como “efectos-Estado” y por ende, como resultado de procesos de negociación, trazado y re-trazado de fronteras antes que como puntos de partida. En efecto, en los tres casos aquí analizados lo que hemos visto es la progresiva constitución de las “políticas de memoria” indicando su carácter poroso, inestable, imprevisible y sujeto a disputas intra y extra estatales. Así, lo que puede parecer una política cristalizada (por ejemplo, la “reparación” de un legajo laboral, la difusión de las “Actas Secretas de la Dictadura” o la instalación de determinadas señales con inscripciones

homogéneas en los sitios de memoria) en realidad es el resultado de procesos complejos cuyo desenvolvimiento, sentido y desarrollo deben ser desentrañados.

Para continuar en esa línea, veremos cómo se expresaron las tensiones asociadas a esta imbricación entre identidad política, marcos narrativos y trabajo en el Estado en ocasión del traspaso de los sitios de memoria de la Ciudad de Buenos Aires a la órbita del gobierno nacional en el capítulo que sigue.

Capítulo 7: ¿Quién tiene derecho a recordar? La oposición partidaria frente a las "políticas de memoria" del kirchnerismo

7.1. Introducción

En este capítulo nos detendremos en una coyuntura particular que signó el diseño de la política de Sitios y Espacios de Memoria a nivel nacional hacia el final del período kirchnerista. Nos referimos al "traspaso" de los sitios de memoria de la ciudad de Buenos Aires a la órbita nacional y la posterior realización de un museo en la ex-ESMA. Como veremos, ambos procesos estuvieron interconectados y fueron objeto de arduas disputas en el Congreso Nacional. Detenernos en esta coyuntura nos permitirá abordar una cuestión clave a la que nos hemos referido escasamente hasta el momento: la índole de las críticas que desde la oposición partidaria y sectores del movimiento de derechos humanos se realizaron a la intervención del gobierno nacional en materia de memoria. El análisis de estas críticas así como las respuestas formuladas desde el oficialismo nos permitirán comprender, desde una perspectiva teórica, las características de la memoria propuesta por el kirchnerismo o, en términos de Rabotnikof, su "oferta de sentido temporal", según la terminaremos de esquematizar hacia el final de la tesis.

La coyuntura a la que nos referimos requiere de algunas precisiones. La discusión giró en torno a la ratificación de un convenio firmado por el entonces Jefe de Gabinete de Ministros, Jorge Capitanich, y la Vicejefa del Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, por medio del cual el gobierno local cedía al Poder Ejecutivo Nacional el usufructo y la gestión de seis de los edificios ubicados en el predio de la ex–ESMA que se encontraban bajo su guarda. Entre ellos, el "Casino de Oficiales", que había sido el núcleo operativo del centro clandestino y donde funciona hoy el Museo–Sitio de Memoria ESMA, así como los cuatro ex centros clandestinos de detención que funcionaban en la ciudad como Espacios de Memoria ("Automotores Orletti", "Club Atlético", "Olimpo" y "Virrey Ceballos"). A su vez, el convenio establecía el "compromiso" del PEN en la concreción de un museo en la ex–ESMA, un proyecto cuya realización venía siendo largamente debatida entre los organismos de

derechos humanos por lo menos desde el año 2000.[177] Particularmente, en su cláusula sexta, el PEN se adjudicaba la realización de otra puesta, el "Museo del Terrorismo de Estado" en el edificio "Pabellón Central" de la ex–ESMA (más conocido como "Cuatro columnas") así como la "Propuesta Museográfica para el Sitio de Memoria" en el edificio "ex Casino de Oficiales", la cual, a diferencia del primero, efectivamente se inauguró en el año 2015.[178] El problema es que hasta entonces tanto los edificios que se ubicaban en la ex–ESMA como los Espacios de Memoria de la Ciudad que iban a ser transferidos se encontraban bajo la órbita del Instituto Espacio para la Memoria (IEM),[179] un ente autónomo y autárquico que había sido creado por la Legislatura del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (en adelante GCBA) en el año 2002 por medio de la Ley n° 961. De acuerdo con la ley, el directorio del IEM estaba compuesto por diez representantes de organismos de derechos humanos, cinco representantes del Poder Ejecutivo de la Ciudad, cinco legisladores de distintos bloques de la Legislatura de la Ciudad y seis personalidades notables con intensa actividad en materia de derechos humanos, que serían designados por los otros veinte miembros.[180] Esta composición, cuyos representantes concretos se fueron modificando a través de los años, había sido el producto de una compleja articulación de los organismos de derechos humanos con el gobierno local en el marco de la cual representantes de los organismos se fueron incorporando de maneras diversas a la estructura burocrática administrativa del Estado (Guglielmucci, 2013). De manera más o menos

[177] Año en el que se realizaron las primeras Jornadas "El museo que queremos" en el marco de Memoria Abierta, una acción coordinada de Organismos de Derechos Humanos.

[178] Para más detalles en torno a esta puesta museográfica, véase Larralde Armas, 2017, capítulo dos.

[179] En relación con el predio de la ex ESMA véase el convenio celebrado entre ambos gobiernos el 20 de noviembre de 2007 y aprobado por la Ley Nacional 26415 y 2599 de la Ciudad de Buenos Aires, por las cuales se creó el Ente Público Espacio para la Memoria, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos en el predio de la ex ESMA, establece que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires delega su representación en el Instituto Espacio para la Memoria.

[180] Inicialmente los organismos de derechos humanos con representación en el directorio del IEM eran: Madres de Plaza de Mayo – Línea fundadora, la Asociación de ex Detenidos Desaparecidos, la Liga Argentina por los Derechos Humanos, el Servicio Paz y Justicia, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, el Centro de Estudios Legales y Sociales, Hijos por la Identidad y contra el Olvido y el Silencio, Abuelas de Plaza de Mayo y la Asociación Madres de Plaza de Mayo. Hasta donde pudimos recabar, al menos los últimos cuatro organismos habían abandonado de hecho su participación en el IEM para el momento del "traspaso", principalmente por diferencias que se expresaron al interior del directorio en torno al posicionamiento frente al gobierno nacional.

directa, el convenio de “traspaso” que se firmó en el 2014 implicaba la disolución del IEM, lo que, como veremos, explicaba parte de la oposición al proyecto. En efecto, aun cuando el convenio firmado entre el PEN y el GCBA preveía la localización del Instituto en el edificio “Cuatro Columnas” de la ex ESMA, lo cierto es que, paralelamente, el Gobierno de la Ciudad elevó su ratificación con un proyecto de ley que proponía su disolución. Ambos proyectos fueron aprobados por la Legislatura en sesiones diferentes con una mayoría compuesta por el PRO y el Frente para la Victoria y el convenio también fue ratificado en el Congreso Nacional el 14 de mayo de 2014 por Ley 26.935, con 142 votos a favor en la Cámara de Diputados y 81 en contra y 37 contra 14 en Senadores.

En lo que sigue nos interesa detenernos en la lectura que hicieron del convenio de “traspaso” y de lo que estaba en juego tanto sus detractores como sus defensores. Ello nos permitirá puntualizar de qué modo se expresaron políticamente las diferencias no sólo en torno a la política de lugarización de la memoria, sino de modo más general, en torno a los modos de intervención del pasado reciente que venían siendo articulados por el gobierno nacional a lo largo de todo el período kirchnerista. Con ese objetivo, en el apartado que sigue sintetizaremos los principales argumentos esgrimidos en la sesión del día 9 de abril de la Cámara de Senadores, 14 de mayo en la Cámara de Diputados y 8 de mayo en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. También recuperaremos los debates en comisiones en el Congreso Nacional (especialmente el debate en comisiones en el Senado el 25 de marzo de 2014), ya que allí se expresaron algunos representantes de organismos de derechos humanos.

7.2. La discusión sobre el “traspaso” de los sitios a la órbita del gobierno nacional: el problema de la “apropiación” de la memoria

En primer lugar, conviene atender a los argumentos de índole jurídica o procedimental que, si bien no refieren al debate de fondo, sí nos sirven para dar algunas indicaciones en torno a cómo se configuró el espacio dialógico en

el marco del cual tuvo lugar la discusión.[181] Los argumentos de este tipo fueron especialmente esgrimidos por la Senadora Norma Morandini y la Diputada Victoria Donda, quienes fueron a su vez los miembros informantes de los dictámenes de minoría que aconsejaron el rechazo del Convenio luego de los respectivos debates en comisiones. El eje de estos argumentos consistía en cuestionar la potestad del PEN para elaborar una propuesta museográfica para el "Casino de Oficiales" de manera previa a la concreción del traspaso, es decir, cuando el edificio todavía estaba bajo guarda del IEM. En efecto, de acuerdo con el convenio anterior suscripto entre el Estado nacional y el GCBA el 20 de noviembre de 2007 (por medio del cual se creó el ente público denominado "Espacio para la Memoria y para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos" en la Ex ESMA) se le adjudicaba al IEM la tenencia del edificio, indicando que "por su carácter histórico será conservado en el estado que se encuentra, sin modificaciones o realización de actividades que desnaturalicen su sentido como Memorial"[182]. Como dijimos, esa indicación era el producto de un debate que se había desarrollado al interior de los organismos de derechos humanos en torno a dónde y bajo qué condiciones debía localizarse el "Museo de la Memoria" que se proyectaba en la ex-ESMA y era la razón por la cual hasta entonces la propuesta de museo del IEM se proyectaba en el "Cuatro Columnas", un edificio también emblemático pero que, a diferencia del "Casino de Oficiales", no había albergado detenidos.[183]

A pesar de ello, en abril de 2013 la Secretaría General de la Presidencia de la Nación, la Secretaría de Derechos Humanos y la Universidad Nacional San Martín (UNSAM) firmaron un Convenio de Cooperación y Colaboración con el objeto de desarrollar "un proyecto museográfico integral del Centro

[181] Para comprender el uso de la noción de "espacio dialógico" dentro del campo de las memorias remitimos a Bull y Hansen (2016) quienes a su vez la reelaboran de Mijaíl Bajtín (y en oposición a Jurgen Habermas). Los autores señalan: "Memory should be reflexive in ways which not only expose its socially constructed nature and/or include the suffering of the 'Others', but also through a dialogic approach which relies on a multiplicity of perspectives (Bakhtin, 1981, 1984). This type of dialogue is open-ended and does not aim at any specific conclusion, and in this sense it differs from that envisaged by Habermas (1984: 17), for whom communication should be 'oriented to achieving, sustaining and reviewing consensus'".

[182] Convenio de Creación del Ente Público Espacio para la Memoria, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos en el predio de la ex ESMA.

[183] Para una síntesis de las propuestas presentadas por distintos organismos para el futuro Espacio Memoria y Derechos Humanos, en el marco de la convocatoria dispuesta por la Secretaría de Humanos de la Nación y la Subsecretaría de Derechos Humanos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, entre los años 2004 y 2005, véase Larralde Armas, 2017, Anexo III.

Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio de la ex Esma (casino de oficiales) y su ejecución". De acuerdo con las legisladoras, tal convenio no era de conocimiento público y mostraba el modo en que el PEN había intervenido de manera unilateral y, a su criterio ilegítima, sin atender a los procedimientos correspondientes y nueve meses antes de firmar el convenio de traspaso. Sumado a ello, Morandini afirmaba que el proyecto museográfico contenía una "cláusula secreta" sobre la cual la Secretaría de Derechos Humanos había respondido negativamente a sus pedidos de información. Del mismo modo, la discusión se refería a la legalidad de los procedimientos seguidos en el marco de la Comisión Nacional de Museos y Monumentos y Lugares Históricos (CNMMyLH), que debía pronunciarse sobre la intangibilidad del proyecto museográfico teniendo en cuenta que el ex "Casino de Oficiales" había sido declarado Monumento Histórico Nacional en agosto de 2008. De acuerdo con Morandini, la CNMMyLH no había discutido debidamente el proyecto en audiencias públicas, mientras que según la senadora Fellner, del Frente Para la Victoria, se habían sostenido en ese ámbito más de cincuenta reuniones con organismos de derechos humanos, técnicos y especialistas.

Este contrapunto, así como las discrepancias en torno a la legalidad del Convenio, resultan ilustrativas del modo en que a través de los aspectos técnico-jurídicos, lo que se encontraba en tela de juicio era de qué modo se había configurado el espacio de la discusión en torno a qué hacer en la ex-ESMA, quiénes habían tenido acceso a ese espacio y cuál era el estatuto del consenso con el que se formulaban (o no) las "políticas de memoria" desde el gobierno nacional.

Ambas cuestiones reaparecen en un segundo tipo de argumentos que los propios enunciadores concebían ya no como de índole "jurídica" sino "política". Estos argumentos giraban en torno de lo que entendían era la pretensión del gobierno nacional de "apropiarse" o "adueñarse" de la "memoria" y de los "derechos humanos". De acuerdo con esta perspectiva, las "políticas de memoria" impulsadas desde el kirchnerismo se caracterizaban por una selección sesgada del pasado que ignoraba las intervenciones de gobiernos anteriores en la temática (especialmente del alfonsinismo, lo cual era motivo de

reclamo por parte de la bancada radical),[184] pero sobre todo excluían a todo aquél que no se identificara con ese signo político. En esta línea, una de las principales críticas consistía en afirmar que el kirchnerismo se había "apropiado" de la memoria para "fines políticos" y había hecho un "uso espurio" de eventos que trascendían (o debían trascender) la identificación político partidaria. Este tipo de argumento nos resulta especialmente relevante ya que si bien encontró su expresión institucional en las respectivas legislaturas, su proyección se extendía a la esfera pública y también a la esfera académica. La crítica se intensificaba particularmente en el caso del IEM, ya que como hemos señalado, para entonces el Consejo Directivo del Instituto estaba dominado por representantes de organismos de derechos humanos que —a diferencia de otros, como Abuelas de Plaza de Mayo o la Asociación Madres de Plaza de Mayo— no habían prestado su apoyo o incluso se oponían al gobierno nacional.[185] En ese sentido diversos legisladores que rechazaron la ratificación del convenio argumentaban que la iniciativa del PEN era un modo de eliminar la disidencia o incluso la "pluralidad de voces" que entendían caracterizaba al funcionamiento del IEM, con el objetivo último de avanzar con el proyecto museográfico de modo unilateral. Así, el diputado Adrián Pérez (Coalición Cívica) señalaba: "La sensación es que hay un nuevo intento de apropiarse de un espacio de derechos humanos que no pudo ser controlado hasta ahora por el gobierno nacional".[186] Asimismo el diputado Roy Cortina (Partido Socialista) mencionaba: "Sin lugar a dudas, esa independencia y esa multiplicidad de voces van a ser reemplazadas por la visión sesgada del gobierno nacional en

[184] Véase por ejemplo la intervención del diputado Ricardo Alfonsín (UCR) en versión taquigráfica, Cámara de Diputados de la Nación, Reunión 4ta, 14 de mayo de 2014: 95.
[185] Entre ellos, el Servicio Paz y Justicia (SERPAJ), la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos y Herman@s de Desaparecidos por la Verdad y la Justicia. Asimismo, se oponían a la iniciativa la Asociación ex Detenidos Desaparecidos (representada en el debate en comisiones por Carlos Lordkipanidse), un sector de Madres de Plaza de Mayo – Línea Fundadora (representado en el debate por Nora Cortiñas) y la Liga Argentina por los Derechos del Hombre (representada por Marcelo Bagnati). También se pronunció allí Víctor Basterra, sobreviviente de la ESMA y entonces miembro del consejo directivo del IEM y Adolfo Pérez Esquivel (presidente del SERPAJ) hizo llegar una carta a los legisladores que fue leída en las sesiones de las tres cámaras. La carta se encuentra disponible en http://www.adolfoperezesquivel.org/?p=3498 Fecha de consulta 8 de enero de 2019.
[186] Versión taquigráfica, Cámara de Diputados de la Nación, Reunión 4ta, 14 de mayo de 2014: 98.

materia de política de derechos humanos. Se trata de otra maniobra de arrebato destinada a acaparar sectariamente las barreras de la memoria".[187]

De un modo aún más contundente, la diputada Victoria Donda (Frente Amplio Progresista) —quien había recuperado su identidad como hija de desaparecidos en el año 2003 y había sido autora de la ley nacional de sitios de memoria referida en el capítulo anterior— señalaba:

> Sé que es una palabra muy cara y la digo precisamente porque es cara: lo quieren hacer "desaparecer" [al IEM], y queda claro que es porque no pueden comprar los votos de quienes están en el directorio, porque quienes lo integran votan con conciencia y no están de acuerdo con este proyecto que se quiere llevar adelante. (Aplausos.) ¿Por qué sólo la ESMA y no La Perla? ¿Acaso por Córdoba no pasaron otros argentinos y argentinas? ¿Por qué no otros centros clandestinos de detención en todo el país? Ésos son lugares que fueron identificados, pero no por una ley de la que soy autora sino por la lucha de este movimiento de derechos humanos y partidos políticos que desde 1977 hasta ahora venimos peleando por la memoria, la verdad y la justicia. ¿Por qué sólo la ESMA? Porque es la ESMA la que no pueden controlar. (Versión taquigráfica, Cámara de Diputados de la Nación, Reunión 4ta, 14 de mayo de 2014: 88).

De un modo similar a lo que señalaban otros legisladores, de acuerdo con Donda la intención del gobierno nacional era eludir la potestad del IEM sobre el proyecto de museo en la ex ESMA, precisamente porque quienes formaban parte del Consejo Directivo se oponían a la realización del museo en el "Casino de Oficiales" y sobre todo "no podían ser controlados" por el gobierno nacional. Este argumento retrotraía de lleno la discusión a otra más amplia, referida a los vínculos que los distintos sectores del movimiento de derechos humanos habían tenido con el gobierno nacional desde la llegada de Néstor Kirchner. En efecto, la posición que cada uno de los organismos fue asumiendo frente al nuevo gobierno resultó un parte aguas al interior del movimiento e incluso, según algunos analistas, había debilitado su integración simbólica (Alonso, 2013). Más precisamente, podemos decir que la idea de que en el Consejo Directivo del IEM se encontraban los representantes que no podían ser "controlados" por el gobierno, remitía a la hipótesis según la cual los

[187] Versión taquigráfica, Cámara de Diputados de la Nación, Reunión 4ta, 14 de mayo de 2014: 100.

organismos que se acercaron al gobierno nacional habían sido "cooptados" por este último, es decir, que habían cedido la legitimidad que portaban en la sociedad argentina a cambio de recibir incentivos materiales y simbólicos.[188] Esta hipótesis es el corazón de algunas investigaciones periodísticas de resonancia centradas en la denuncia por desvío de fondos destinados a la Fundación Madres de Plaza de Mayo (Braslavsky, 2009; Gasulla 2012), pero también de algunas intervenciones académicas como las de Solís Delgadillo (2012) y Romero (2011). En esa línea, Alcira Argumedo (Proyecto Sur) quien también había formado parte del Consejo Directivo del IEM señalaba:

> El gran pecado del Instituto Espacio para la Memoria fue defender con todas sus fuerzas la idea de que la política sobre derechos humanos debía ser autónoma y autárquica, con fuerte participación de la sociedad civil para que fuera pluralista y no sectaria. Siendo el objetivo la búsqueda de consenso, no podía quedar en manos de un solo partido político. (Versión taquigráfica, Cámara de Diputados de la Nación, Reunión 4ta, 14 de mayo de 2014: 103).

Dicho de otro modo, el argumento según el cual el Poder Ejecutivo intentaba disolver la injerencia del IEM por su carácter opositor era de alguna manera una réplica de la disputa que se había generado al interior del movimiento de derechos humanos y en la sociedad en general en torno a cuál era el lugar que debían ocupar los organismos respecto del sistema político y asociado a ello, cómo debían definirse las políticas de derechos humanos. En ese marco, lo interesante es que la cuestión de la autonomía del IEM aparecía no solamente como un atributo derivado de su diseño institucional, sino como un valor que se asociaba de manera automática a la "pluralidad de perspectivas" y al "consenso". Ello, a su vez, se oponía al "sectarismo" y a la unilateralidad que, según varios legisladores, caracterizaba el accionar del gobierno nacional. Sin embargo, como veremos, el "consenso" también era un valor reivindicado por la bancada kirchnerista. Citaremos aquí *in extenso* la defensa que hizo del convenio el diputado oficialista Pietragalla Corti (quien

[188] Cabe destacar que la hipótesis de la cooptación fue sugerida por diversos analistas no sólo en el caso del movimiento de derechos humanos sino de otros movimientos sociales en su relación con el kirchnerismo. Para una síntesis crítica de esta perspectiva véase Pérez y Natalucci (2012).

también había recuperado su identidad como hijo de desaparecidos en 2003) ya que nos permitirá recuperar varios aspectos de los aquí enunciados:

> En primer lugar, quiero decir que yo no me considero ningún payaso, así como tampoco se consideran de esa manera mis amigos y mis compañeros de HIJOS, las compañeras de Abuelas de Plaza de Mayo o los nietos que recuperaron su identidad.
> Nosotros tomamos los espacios de memoria, como la ESMA, para transformarlos en espacios con alegría y con mucha militancia. Nos conmueve mucho ver a centros de estudiantes secundarios discutir sobre política en esos espacios; nos conmueve desde el alma. En esos lugares hubo terror, y nosotros los estamos trasformando en otra cosa.
> Es cierto que comimos asado y sabemos las críticas que eso generó, pero para aquéllos que no están informados quiero decir que la ESMA no es de nadie en particular, sino de todos los argentinos… *(Aplausos)* Y tiene representatividad de todos los organismos de derechos humanos, tan respetados como Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora, Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas, HIJOS, Ex Detenidos. Esos organismos son parte...
> *Manifestaciones en las galerías.*
> Sr. Pietragalla Corti. – ¿¡Cómo mentira!? ¡Esos organismos son parte de las decisiones que se toman en la ESMA! ¡Lo que sucede es que algunos organismos de derechos humanos que forman parte de ese predio no respetan la pluralidad y la democracia! ¡Allí se consensúa!
> *Manifestaciones en las galerías.*
> Sr. Pietragalla Corti. – ¡Yo no miento! ¡Vos sabés, nos conocemos! Hablan de politizar los derechos humanos y lo primero que hizo el IEM con las decisiones que tomó fue...
> *Manifestaciones en las galerías.*
> Sr. Pietragalla Corti. – ¡Ya sé, te conozco, los conozco!
> Sr. Presidente (Domínguez). – ¡Les pedimos que por favor respeten el uso de la palabra del señor diputado!
> Sr. Pietragalla Corti. – Tanto en la ESMA como en los distintos centros clandestinos de detención participan todos los organismos de derechos humanos. Pero cuando se toman decisiones que la mayoría de esas organizaciones aprueba, pero una o dos no lo hacen, dicen que queremos manejar políticamente esto. ¡Por favor!
> ¡Que no nos vengan a decir que nosotros queremos captar la política de derechos humanos! porque ya sabemos lo que se hizo en el gobierno a partir de la llegada de Néstor.
> *Manifestaciones en las galerías.*
> Sr. Pietragalla Corti. – Si no hay injerencia política en los organismos, que me digan por qué la iglesia Santa Cruz se negó cuando le pedimos hacer allí la misa por la muerte de Néstor Kirchner. Se negó porque fue “rosqueada” por el IEM para que allí no se hiciera la misa en memoria de Néstor Kirchner. Eso a mí nadie me lo viene a contar porque lo sé en carne propia. Sabemos cómo el IEM expulsó a Abuelas, a Familiares y al CELS.
> *Manifestaciones en las galerías.*

> Sr. Pietragalla Corti. – ¡Cómo que no es verdad![189]
> (Versión taquigráfica, Cámara de Diputados de la Nación, Reunión 4ta, 14 de mayo de 2014: 93).

Aun cuando de la versión taquigráfica no podemos conocer el contenido de las manifestaciones que se realizaban desde la galería, es evidente que la intervención del diputado se transformó en una discusión directa con los representantes de organismos de derechos humanos que se encontraban allí. En ese sentido, y si bien la asimetría de posiciones entre ambos es insoslayable, el propio Pietragalla parecía situarse no tanto como un legislador del oficialismo sino como un miembro de los organismos de derechos humanos afines al gobierno, en relación con los cuales se constituía un "nosotros" con legitimidad para recordar. Las acusaciones cruzadas, las expresiones "yo no miento" o "yo los conozco", daban cuenta de un campo de disputas de larga data que excedía el espacio de la Cámara pero que al mismo tiempo la incorporaba. En ese sentido, más allá de juzgar la conveniencia o no del lugar que ocupaban los organismos de derechos humanos en relación con los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, la discusión deja en evidencia un primer punto: esto es, el modo en que los dispositivos institucionales del sistema político se habían convertido de hecho en canales de expresión de las disputas del movimiento de derechos humanos. Y ello no sólo por la incorporación directa de algunos de sus representantes al sistema político, sino por la nueva permeabilidad que este sistema había manifestado hacia sus demandas desde 2003 en adelante.[190] A su vez, en términos teóricos, ello significa que no es posible situar a los organismos (tanto los opositores como los afines) en un terreno de neutralidad o externalidad respecto del sistema político. Ambos atributos, que suelen proyectarse de manera prescriptiva desde una raigambre liberal, no dan cuenta de la variedad de modos de interacción entre aquello que llamamos "Estado" y "sociedad

[189] El 27 de diciembre de 2012 el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, encabezado por Julio Alak, organizó una comida de fin de año en los espacios abiertos del predio de la Ex ESMA para los integrantes del ministerio. Aunque no era la primera vez que se realizaban eventos de este tipo, el hecho fue repudiado públicamente por la Asociación "Herman@s de Desaparecidos por Verdad y Justicia'', la Asociación Ex Detenidos Desaparecidos y la Agrupación H.I.J.O.S - La Plata, generando una polémica a través de los medios de comunicación. Para un análisis de estos episodios y su puesta en contexto véase Sosa, 2016; Feld, 2017; Larralde Armas, 2017.

[190] Tomamos la noción de "incorporación" de Cefaï, 2011.

civil", y, en última instancia, impiden visualizar adecuadamente "sus zonas de interfase, sus espacios de interpenetración, sus lugares de mediación y sus puntos de fricción" (Cefaï, 2011: 146).

En ese sentido lo que el debate aquí analizado pone en evidencia es la existencia y progresiva institucionalización de una *arena internamente diferenciada* dentro de la cual distintos actores ("sociales" y "estatales") pugnaron para establecer su influencia sobre la producción del discurso de los derechos humanos y la memoria. Siguiendo ese razonamiento, consideramos poco fructíferas las oposiciones binarias que identificarían aquí una disputa "Estado" y "sociedad" o entre "gobierno" y "organismos", en una lógica según la cual el Estado actuaría "capturando" la memoria social. Más bien, como hemos visto a lo largo de la tesis, lo que caracteriza al período bajo análisis es la intensidad y variedad de los modos en que los diferentes actores se imbricaron e interpenetraron según modos de hacer que se fueron progresivamente institucionalizando. Lo que estaba precisamente en juego (y se discutía en las legislaturas) eran las condiciones de esa institucionalización y los discursos bajo las cuales se estaba llevando a cabo.

Para atender a esa dimensión, resulta interesante destacar que, como lo hemos adelantado, también la intervención de Pietragalla destacaba el "consenso" como un valor que otorgaba legitimidad a las decisiones que se tomaban en los sitios de memoria. En ese sentido, el diputado alegaba que las decisiones en torno a la Ex ESMA se definían por mayoría en el marco del Ente Público Espacio para la Memoria, cuyo directorio estaba integrado formalmente por quince organismos de derechos humanos, incluido el IEM.[191] El problema, por supuesto, era que allí la correlación de fuerzas era favorable al gobierno

[191] El Ente contaba a su vez con un Órgano Ejecutivo integrado por un representante del Poder Ejecutivo Nacional (cuya representación fue delegada en la Coordinadora del ANM, Judith Said), un representante del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad (cuya representación fue inicialmente delegada a la secretaria ejecutiva del Instituto Espacio para la Memoria) y un representante del Directorio. En relación con ello vale destacar que, como señala Larralde Armas: "Aunque a simple vista este organismo pareciera tener una equitativa distribución entre los organismos y los poderes estatales, lo cierto es que durante el período estudiado los tres representantes fueron militantes en derechos humanos que solían tener una superposición de funciones porque también cumplían tareas como empleados estatales. En general se trató de personas que militaban en la Agrupación H.I.J.O.S, el CELS y en Memoria Abierta quienes cumplieron roles dentro del Ente por lo que en la práctica las mismas entidades (a menudo las mismas personas) integraron el [órgano ejecutivo del] Ente tripartito, y en todo el período estudiado la Agrupación H.I.J.O.S siempre estuvo como representante del Directorio de Organismos o de los otros poderes" (2017: 91). Además de esta doble pertenencia, debe destacarse la militancia dentro del kirchnerismo, especialmente en la agrupación H.I.J.O.S.

nacional, razón por la cual los consensos alcanzados terminaban por excluir a los organismos que se ubicaban en la oposición. En relación con ello, es indudable que la intervención del gobierno en la materia ofició como parte aguas: ¿era posible, en esas condiciones, alcanzar consensos por unanimidad?[192]

Lo que ocurría al interior del IEM era ilustrativo de esta misma dificultad, en la medida en que como vimos, el Instituto también se caracterizaba por un diseño institucional según el cual el Consejo Directivo estaba compuesto por representantes de organismos de derechos humanos. Sin embargo, lo cierto es que para el momento del traspaso, los organismos afines al gobierno como Abuelas de Plaza de Mayo, el CELS y Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas ya se habían retirado del Consejo y las gestiones se veían constantemente dilatadas por las diferencias internas. Asimismo, constituían un problema las sistemáticas demoras del GCBA en la liberación de las partidas presupuestarias. En ese sentido, tanto la autarquía financiera como la "pluralidad de voces" no necesariamente se verificaban en la gestión cotidiana.

En relación con ello, cabe destacar un segundo punto vinculado al papel otorgado al "consenso" a la hora de definir las "políticas de memoria". El hecho de que tanto quienes se oponían como quienes defendían el traspaso apelaran a éste como instrumento de legitimación, puede entenderse en el marco de las ficciones dominantes que dan sustento a las llamadas democracias deliberativas con eje en el parlamento. En efecto, son las nociones de consenso y de pluralismo aquellas que tradicionalmente han permitido a los regímenes democráticos trazar su propia frontera respecto de los "totalitarismos". Sin embargo, lo cierto es que como hemos visto rara vez las políticas públicas y particularmente las "políticas de memoria" son decididas por medio de un debate racional del cual emergerían como "verdades universales"

[192] Beinusz Szmukler (quien formaba parte del Consejo Directivo del IEM y era desde 2011 su representante en el Ente Público Espacio para la Memoria) señalaba en el debate en comisiones en el Senado de la Nación: "Nosotros siempre hemos tratado de compatibilizar esos criterios en el marco del IEM. Tanto es así que son extrañas las reuniones donde tenemos que votar o hacer imposiciones por mayoría. Eso no nos parece conveniente en órganos de esta naturaleza, porque uno puede imponer una mayoría una vez, dos veces, tres, cuatro; pero a la quinta vez el otro se va. Entonces, siempre se ha manejado así." Versión taquigráfica, Reunión Sala de las Comisiones, 19 de marzo de 2014. Disponible en: http://www.normamorandini.com.ar/?p=7818 Fecha de consulta 3 de febrero de 2019.

los cursos de acción a seguir. Más bien, como sucede en este caso, lo que vemos es la expresión de una diversidad de identidades políticas, correlaciones de fuerza y modos de narrar y conmemorar el pasado reciente que se encuentran en conflicto.

En ese sentido, desde una perspectiva que entiende el antagonismo como una dimensión constitutiva de las sociedades humanas —es decir, la imposibilidad de constituir una forma de objetividad social que no se funde en una exclusión originaria— (Mouffe, 2007) es evidente que la definición acerca de cómo lidiar con las huellas del pasado no constituye un asunto técnico destinado a ser resuelto por expertos (o en nuestro caso, por voces más o menos autorizadas), sino que siempre requiere optar por alternativas en conflicto que no pueden ser reconciliadas en un todo armónico. A diferencia de lo que un sentido común de raigambre liberal parecería indicar, los cursos de acción públicos no emergen de un espacio neutral o descontextualizado, sino –como decíamos– de arenas internamente diferenciadas y jerarquizadas, en las cuales se juegan los intereses y circunstancias más diversas. En ese contexto, una posición de externalidad respecto del sistema político (como aquella que reivindicaban los organismos opositores al gobierno nacional en términos de "independencia") no debe entenderse como natural o automática sino, en todo caso, como un artificio producido por actores interesados en presentar sus intereses como externos a las disputas político partidarias.

En efecto, el lenguaje de los derechos humanos es especialmente permeable a esta operación en la medida en que éstos son concebidos como derivados de la existencia del sujeto humano individual y por eso mismo, como criterio de validación externo a los Estados nacionales y a la política en general. Sin embargo, lo cierto es que son las instituciones del Estado las únicas capaces de definir, en cada caso, el sentido concreto de los mismos. Más aún, como muestra Nicolás Guilhot (2011), a menudo los "derechos humanos" proporcionan un lenguaje común a partir del cual se pueden formular proyectos diversos e incluso antagónicos, razón por la cual la apelación abstracta a ellos no garantiza *per se* el contenido concreto de una política pública.

Ahora bien, ¿era el diseño institucional del IEM (es decir, su carácter autónomo y autárquico) una garantía frente a esta maleabilidad de los

“derechos humanos”? Tal era, en efecto, el argumento de algunos legisladores que entendían que la decisión del PEN de hacerse cargo de los sitios de memoria de la ciudad ponía en peligro no ya el contenido de la disputa (es decir, que se privilegiara una puesta museográfica por sobre otra), sino su misma continuidad a lo largo de los gobiernos. Así, tanto legisladores como representantes de organismos de derechos humanos señalaban que el diseño institucional del IEM garantizaba (aun si ello se daba imperfectamente en la práctica) la continuidad de las líneas de acción en materia de memoria. En ese sentido, Beinusz Szmukler quien formaba parte del Consejo Directivo del IEM señalaba:

> Me parece que el tema central es la naturaleza del Instituto Espacio para la Memoria, que es un ente autárquico y autónomo de la Ciudad de Buenos Aires; es decir, nosotros no representamos al Poder Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires. La composición de su órgano de dirección garantiza una pluralidad de opiniones y la continuidad de una línea en cuanto a una política de Estado en la materia… Así que hay una composición que garantiza que esto no va a ser un objeto que cada gobierno que venga va a cambiar (…) Por lo tanto, a mí me parece que lo más grave de esto es que al sacarle al IEM la gestión sobre los sitios de memoria de la Ciudad, lo deja a merced del gobierno de hoy, de mañana o de pasado, el que venga. Esta es la afectación sustantiva, a mi modo de ver. (Versión taquigráfica, Reunión Sala de las Comisiones, 19 de marzo de 2014: 17).

La intervención de Szmukler, como también otras[193], ponía sobre la mesa la posibilidad de que al otorgarle al Poder Ejecutivo la potestad sobre los sitios de memoria, éstos quedarían sujetos a la voluntad del gobierno que en cada caso lo ocupara. Así la diputada Victoria Donda señalaba en relación con el oficialismo: “No poseen la capacidad de tener una política consensuada con quienes son los garantes de la memoria en el país. ¿Creen de verdad que son eternos en el gobierno? ¿Quién va a venir en un año y medio?”.

En efecto, el cambio de gobierno y la correspondiente afectación sobre las “políticas de memoria” se convirtió en realidad meses más tarde cuando la alianza Cambiemos asumió el gobierno nacional. Sin entrar en ese análisis, lo cierto es que la mayoría de los actores reconocía entonces que más allá de las

[193] Véanse las intervenciones de los diputados Nicolás del Caño, Pablo López, Alcira Argumedo y Victor De Gennaro.

disputas al interior de los organismos existían otros actores que, en nuestros términos, no formaban parte de esa arena internamente diferenciada y constituían un peligro para la continuidad de las "políticas de memoria" en los sitios. Dicho de otro modo, lo que peligraba era la posibilidad misma de expresión y enfrentamiento de las diferencias en un espacio que las diferentes posiciones reconocieran como común. Así al explicar la posición de su partido y del GCBA, Gabriela Michetti (PRO) señalaba:

> A nosotros se nos había ocurrido otra cosa que tenía que ver con escuelas integradoras, con polideportivos donde pudieran integrarse todos los chicos discapacitados y los que no lo son. Habíamos pensado hacer otro tipo de propuesta, pero me parece que hay muchas posibilidades e ideas para llevar adelante esto a través de una iniciativa concreta. (Versión taquigráfica, Cámara de Senadores de la Nación, 9 de abril de 2014: 54).

Michetti reconocía de este modo que el proyecto de su espacio político no contemplaba la realización de un "museo de la memoria" de ningún tipo, y en ese sentido, se apartaba de los consensos precarios que sí habían alcanzado los organismos de derechos humanos a través de los años en torno a qué hacer con los sitios de memoria. Pero al mismo tiempo, es notable que tanto ella como Pablo Tonelli, diputado por el PRO, estaban lejos de oponerse al discurso dominante en torno a la "importancia" de los "derechos humanos" e intentaban mostrar la actividad del GCBA en la materia, poniendo como ejemplo la finalización de la obra del Parque de la Memoria y la creación de un Consejo Asesor en Políticas Públicas de Memoria que reemplazaría al IEM. De hecho, al ser preguntada por el Senador Morales si el GCBA se proponía disolver el IEM (y con ello ahorrarse las partidas presupuestarias) la entonces Senadora Michetti decía no tener esa información, aun cuando, como se supo más tarde en la misma sesión, el Poder Ejecutivo ya había elevado a la Legislatura el proyecto de ley para su disolución.

7.3. “Bailar sobre los muertos”: el problema de la “banalización” de la memoria

Antes de repasar cuál era la defensa que los legisladores del oficialismo hicieron del Convenio, es necesario distinguir analíticamente dos últimos tipos de argumentos que se referían a los “derechos humanos en el presente” y la cuestión de la “banalización de la memoria”. En relación con lo primero, el eje de los cuestionamientos giraba en torno a la legitimidad del gobierno nacional para reivindicar las banderas de los derechos humanos, teniendo en cuenta lo que diversos legisladores entendían como violaciones a los derechos humanos que estaban ocurriendo en el presente. Así, la denominada “ley antiterrorista”, el “Proyecto X” y especialmente la designación del Gral. César Milani como jefe del Estado Mayor General del Ejército, constituían los principales ejes de la polémica.[194] De acuerdo con el diputado Nicolás Del Caño (Frente de Izquierda): “la ESMA ha sido y quiere seguir siendo utilizada para tapar la verdadera política de este gobierno en materia de derechos humanos”, la cual se caracterizaba (según el diputado) por la persecución a trabajadores y el encarcelamiento de presos políticos, entre otras cosas. Independientemente de la evaluación de cada una de estas circunstancias, lo que se reitera en este tipo de argumentación es la pregunta acerca de quién tiene legitimidad para recordar: lo que se pone en tela de juicio es la “propiedad” de la memoria de los desaparecidos —como si esta fuese uniforme o unívoca— y el sentido que cada uno de los actores le otorga al proceso dictatorial y a sus víctimas en el presente. Así, por ejemplo, la propuesta del diputado Del Caño era que los sitios de memoria debían ser administrados por “los sobrevivientes, por los organismos de derechos humanos independientes y por las organizaciones de la clase trabajadora, el principal blanco de la dictadura”. Esto muestra que, lejos de ser una cuestión burocrática o gubernamental, la administración de los sitios constituía una instancia de disputa por el sentido del pasado que se proyectaba políticamente en el presente.

Así, de un modo análogo a lo que ocurrió con la Ley 26.596, que analizamos en el capítulo dos, la discusión en ambas cámaras se

[194] Nos referimos a la discusión por el ascenso en 2010 y posterior designación en 2013 del General César Milani como Jefe del Ejército, actualmente procesado por crímenes de lesa humanidad.

empantanaba: ¿quién tenía legitimidad para decidir respecto de los modos de recordar el pasado? ¿Era el gobierno nacional un actor legítimo? ¿Lo eran las demás fuerzas políticas? ¿Eran, tal vez, los sobrevivientes de Centros Clandestinos de Detención? ¿O los organismos de derechos humanos? ¿Y entre estos, cuáles? ¿Aquellos que se identificaban como "independientes" o también los que se habían alineado con el kirchnerismo? ¿Eran las Madres, los Hijos, los familiares, o los compañeros?

Si bien ninguna de estas alternativas era necesariamente excluyente, lo cierto es que una de las cosas que el debate puso en evidencia fue la insuficiencia del Ente Público tripartito —y con ello, la precariedad de la ficción de "consenso" que lo rodeaba— como dispositivo institucional capaz de canalizar y resolver las disputas por la legitimidad. En ese sentido, como hemos dicho, el debate en el parlamento reeditó profundas diferencias que no eran novedosas sino que, además de remitirse al posicionamiento de los organismos en relación con el gobierno nacional, daban cuenta de distintas maneras de concebir las prácticas de memoria.

Así, como señala Larralde Armas en su análisis sobre el proceso de recalificación de la ex ESMA, los posicionamientos respondían a "dos posturas o matrices diferenciadas en cuanto a las "políticas de memoria" a desarrollar en el espacio, en consonancia con lo que [los diferentes organismos de derechos humanos] habían propuesto en el año 2004 y también con sus históricas formas de protesta y rendición de homenaje a los desaparecidos" (2017: 182). De acuerdo con la autora, estas dos matrices conmemorativas pueden identificarse como "solemne", por un lado y "carnavalesca" por otro: la primera toma como centro la ausencia de los desaparecidos y su homenaje y se caracteriza por las simbologías y los tiempos de la ceremonia fúnebre. La segunda enfatiza la "vida" asociándola a la "alegría, la juventud y las artes" y adopta tonalidades festivas (2018: 183). Esta oposición, que se expresaba en las actividades que los diferentes organismos llevaban adelante en el predio, se traducía también entre aquellos que concebían la ex-ESMA como un "lugar de muerte" que debía ser preservado en tanto tal y aquellos que entendían que "allí donde hubo muerte", se debía "llenar de vida". El primer polo estaba representado especialmente por las Asociación de Familiares de

Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas y la Asociación Ex Detenidos Desaparecidos, mientras que en el segundo se encontraban la Asociación Madres de Plaza de Mayo y la Agrupación HIJOS, especialmente en su filial de Capital Federal. La difícil convivencia entre ambos registros atravesó la construcción del Espacio a lo largo de los años y traspasó las fronteras del predio en coyunturas clave como el referido episodio de los "asados" y la manifestación en su repudio, así como los actos en ocasión del 24 de marzo convocados por el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia (en especial del año 2014).[195]

La matriz "solemne" de conmemoración también se expresó en el parlamento, tomando como eje la denominada "banalización de la memoria". Así, señalaba Carlos Lordkipanidse, sobreviviente de la ESMA y representante de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos:

> De lo que estoy seguro es que nunca vimos ahí adentro [en el CCD ESMA] asados, murgas, recitales, payasos, ni menos a[l ministro de seguridad] Sergio Berni. No voy a poner en duda la existencia de si estuvo o no Dios, pero todas estas cosas que están ocurriendo ahí, en ese momento, no había sino dolor y muerte, lo que ocurre en el [ex CCDyTE Club] Atlético donde se hace una murga y un carnaval con lo que costó recuperar ese lugar después de tantos años sacar a la Policía Federal de ahí adentro. Lo que ocurrió ayer en [ex-CCD] Arana, La Plata, que es uno de los centros clandestinos de detención donde se pudo comprobar que en toda su extensión hay restos humanos óseos diseminados en el piso, se festejó un recital con una multitud de gente, bailando y saltando sobre los huesos de nuestros compañeros. Hoy tuve la oportunidad de leer un mensaje de Facebook de una persona que fue de buena voluntad ayer a la ESMA, pensando vaya a saber qué iba a ocurrir ahí, se encontró con una multitud de jóvenes que entraban por primera vez al lugar a

[195] El "Encuentro memoria, verdad y justicia" (EMVJ) es una coalición de organismos de derechos humanos, estudiantiles, sociales, sindicales y políticos conformada en el año 1996, cuyo objetivo es organizar las marchas del aniversario del golpe, el 24 de marzo, y realizar otras acciones y protestas. Entre los años 2006 y 2007 algunos organismos aliados al kirchnerismo abandonaron su participación en este espacio entre ellos H.I.J.O.S- Capital, Madres de Plaza de Mayo y Abuelas, debido a la disputa de lo que desde EMVJ interpretaron como "cooptación" de las banderas de los derechos humanos por parte del kirchnerismo. Por esa razón, desde el año 2007, el 24 de marzo (aniversario del golpe de Estado) se realizan dos marchas, una convocada por el EMVJ cuya consigna es "contra la impunidad de ayer y de hoy" llevada por organismos y partidos políticos de izquierda; y la otra organizada por las Asociaciones H.I.J.O.S- Capital, Madres de Plaza de Mayo y Abuelas de Plaza de Mayo de marcado apoyo a las políticas kirchneristas. Dentro del EMVJ han participado la AEDD, HIJOS-La Plata, la Multisectorial La Plata, Berisso y Ensenada, la Asociación Anahí, APDH-La Plata, el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH), la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI), la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas CECIM - La Plata, el Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST), el Partido Socialista, el Polo Obrero, entre más de trecientas entidades.

> orinar, emborracharse y fumar porro. *(Se emociona)* Asimismo, podría seguir con los centros clandestinos de lo que ocurre a lo largo y ancho del país, porque son innumerables la cantidad de atropellos que hay, pero esto tiene un nombre: "banalización". (Versión taquigráfica, Reunión Sala de las Comisiones, 19 de marzo de 2014: 19).

En esa misma línea argumentaba la senadora Norma Morandini, luego de hacer referencia a sus hermanos desaparecidos, Néstor y Cristina:

> Permítame, señor presidente, para ahorrarles la emoción. Yo ya no puedo argumentar sobre lo que es obvio. Me cuesta horrores pedir respeto. Hay cosas sobre las que no se puede argumentar. Como hace rato que escribo sobre esto, pido autorización para leer lo que, cuando por primera vez, horrorizada por los asados, escribí "Los que bailan sobre nuestros muertos": profanaron, pisotearon lo que es sagrado, la dignidad de lo humano. Por eso el problema no es de los que hemos honrado a nuestros desaparecidos sin hacer de sus sacrificios un oportunismo político, sino de los que pueden bailar sobre nuestros muertos. (Versión taquigráfica, Cámara de Senadores de la Nación, 9 de abril de 2014: 44).

En una línea similar señalaba en su intervención la diputada Alcira Argumedo, posicionándose como "compañera" de los desaparecidos:

> La base del conflicto fue la decisión del señor Parrilli de hacer un museo electrónico en el Casino de Oficiales. Esta fue la negativa que tuvo el IEM, porque el tema que se está debatiendo no es que hay que poner vida o alegría donde hubo muerte, ya que ahí no solamente hubo muerte, sino también una degradación de la condición humana hasta límites inadmisibles. Eso es otra cosa. Es algo que remite más a Auschwitz. Cuando nos hablan de hacer asados en la ESMA es como decirle al pueblo judío que es "amargo", como lo son los del IEM, que no quieren modificar el Casino de Oficiales. Son tan "amargos" que no sé por qué los judíos no van a festejar con unas buenas salchichas y chucrut a los barracones de Auschwitz. Esta es la clave de la situación. (Versión taquigráfica, Cámara de Diputados de la Nación, Reunión 4ta, 14 de mayo de 2014: 104)

Las tres intervenciones, que ponemos aquí como ejemplos ubicaban al Espacio ex – ESMA en el dominio de lo sagrado (y en el caso de Lordkipanidse, también a los otros predios que funcionaron como CCD y fueron reconvertidos en Espacios de Memoria) y entendían que el kirchnerismo —representado específicamente por Oscar Parrilli (entonces Secretario General de la Presidencia) y Sergio Berni (Ministro de Seguridad) pero también por los

jóvenes “alegres” (en oposición a los “amargos”)— profanaban la sacralidad del lugar “bailando sobre los muertos”, comiendo asados, participando de recitales y emborrachándose.[196]

En términos analíticos, podemos decir que esta posición expresa un polo preciso de una tensión constitutiva de los “sitios auténticos” (Robin, 2014), esto es, aquellos lugares donde tuvieron lugar acontecimientos de violencia extrema, en oposición a los “lugares de memoria” construidos artificialmente para provocar la rememoración. En estos sitios, donde la memoria se despliega a menudo sin rastros, por medio de huellas más o menos legibles (Robin, 2014: 125) resulta difícil establecer los límites acerca de qué es legítimo hacer, cómo se debe narrar, qué se debe recordar y en definitiva qué memorias, prácticas y sujetos quedan por fuera del dominio de lo admisible. Más aun, como señala Feld, estos sitios tensionan “la idea de memoria como un acontecimiento excepcional, que excluye las acciones de la vida cotidiana y se produce en espacios escindidos de la cotidianeidad para expresar el duelo y el dolor, y la idea de memoria como acción integrada a la vida presente de las personas” (2017: 124). Las intervenciones arriba citadas ponderaban la excepcionalidad del sitio (especialmente del “Casino de Oficiales”) frente a aquellas prácticas vinculadas a la cotidianeidad. Así, actividades como bailar, comer u orinar eran concebidas como profanaciones, que constituían afrentas a la dignidad humana y a la memoria de las víctimas.

El punto es que, como hemos venido señalando, no hay aquí posibilidad de arribar a un “consenso” entendido como una solución superadora que contemple ambas posiciones porque como señala Feld “es la tensión y la convivencia de estos dos registros lo que está estructuralmente instalado en un sitio de memoria” (Feld, 2017: 125). Para que un sitio auténtico sea a la vez un espacio de transmisión del pasado debe ubicarse necesariamente *entre* la

[196] En efecto, de acuerdo con Larralde Armas, “Aunque estas dos posturas continúan existiendo, dentro del Ente se fue construyendo un consenso en el que primó la idea de transformar a la ex ESMA en otra cosa, en un lugar de alegría, de denuncia, un lugar de trabajo cultural y de reivindicación de derechos. Como trabajamos en el capítulo 2, el Directorio del Ente fue mayoritariamente representado por miembros de la Agrupación H.I.J.O.S. por lo que su visión logró imponerse, mientras que la visión más conservadora desde el principio del proyecto, la de la Asociación de ex Detenidos Desaparecidos quedó desestimada” (2017: 184). Asimismo, la autora ubica la profundización de este “vuelco a la vida” en la asunción de Martín Fresneda (militante de H.I.J.O.S-Córdoba) como Secretario de Derechos Humanos de la Nación y la vincula con la apelación del kirchnerismo a la juventud como principio de adhesión política. Para ese tema véase Vázquez, 2015, entre otros.

sacralización y la profanación, o lo que es lo mismo, *entre* lo excepcional –que permite que el sitio funcione como testimonio de lo acontecido– y lo cotidiano, que permite habitarlo.

Ahora bien, ello no significa que tal tensión no necesite ser tramitada —tales son, entre otros, los trabajos de la memoria— o que no puedan establecerse consensos mínimos por inestables y precarios que sean. Pero sí implica considerar como inherente a esa tarea el conflicto antes que el acuerdo o la existencia de respuestas absolutas. A su vez, ello implica aceptar la existencia de correlaciones de fuerza que se pronuncian en un sentido o en otro. Suponer que la construcción de los sitios (y de las "políticas de memoria" en general) pueda darse de otro modo implica, de manera más o menos solapada, creer en la existencia de un modo privilegiado o universalmente válido de conmemorar que se pone a sí mismo por fuera de toda disputa. En la vereda opuesta, un pluralismo democrático (o agonista, para usar la terminología de Chantal Mouffe, cuyo planteo general hemos seguido en varios aspectos) verdaderamente consecuente no aspiraría a la resolución definitiva de los conflictos –lo cual terminaría por eliminar el pluralismo en tanto tal– sino a "«domesticar» la hostilidad y tratar de neutralizar el antagonismo potencial que acompaña toda construcción de identidades colectivas" (Mouffe, 1999: 14) como aquellas que se expresan en las disputas por la memoria.

Para entender este punto podemos remitirnos a lo que sería una posición de externalidad contraria al pluralismo agonista —entendido como reconocimiento del carácter inerradicable de lo político— tal como era expresada por la senadora Morandini en los fragmentos que citaremos a continuación. Esta posición es relevante en la medida en que el discurso enunciado por la senadora era compartido y replicado (con matices) por un conjunto de actores sociales que se oponían a las "políticas de memoria" impulsadas por los gobiernos kirchneristas y se articulaba con los argumentos precedentes ("apropiación", "ilegitimidad" y "banalización"). Así, señalaba Morandini en el dictamen de minoría:

> El próximo 24 de marzo se cumplirán diez años desde que la ESMA fue desalojada. El imponente edificio de la Avenida del Libertador se vació de las lecciones de muerte para llenarlo de Memoria. No para "incomodar a los cómodos" o "sacudir a los indiferentes", como propone el proyecto de museo, sino para aprender a vivir en paz. La

> resignificación de un lugar de muerte es que enseñe a vivir en democracia, con respeto y tolerancia. Los museos deben servir para aprender del pasado. No para reeditar los enfrentamientos que llenaron de muertos nuestro país. La historia como aprendizaje, no como venganza. Lidiar con el pasado no es sencillo para ninguna sociedad. Sin embargo, la catastrófica historia de Europa en el siglo XX legó al mundo la universalidad de los derechos humanos como el antídoto a aplicar. (Dictamen de minoría, Sala de Comisiones Cámara de Senadores de la Nación, 19 de marzo de 2014)

"Aprender a vivir en paz", con "respeto" y "tolerancia" aparecen como aquellos valores universales que la sociedad argentina debería aprender de su pasado y que la propia historia de Europa (específicamente el Holocausto, al que Morandini se refiere en varias oportunidades) nos habría legado como "antídoto". De acuerdo con la senadora, tal sería el verdadero cometido de los museos: no "incomodar" ni "sacudir" –es decir, no concitar el recuerdo de los conflictos– sino exponer una comunidad política reconciliada, "curada" de los "enfrentamientos" que signaron su pasado. Tal aprendizaje sería lo contrario a la "venganza", otro tópico cuya resonancia se extendía a otros actores sociales. En ese sentido, señalaba Morandini:

> ¿Qué vamos a hacer con el pasado o el pasado va a ser una utilización partidaria política de un gobierno? ¿Qué vamos a hacer con el pasado? ¿Vamos a hacer un aprendizaje o una venganza? Esta es la gran pregunta que tenemos que hacer. (Versión taquigráfica, Cámara de Senadores de la Nación, 9 de abril de 2014: 42).

La idea de que las "políticas de memoria" del kirchnerismo, y especialmente los procesos judiciales por crímenes de lesa humanidad que se estaban llevando a cabo constituían una forma de "venganza", era enunciada no sólo por las asociaciones de familiares que defendían ex represores, sino por otros sectores de la sociedad argentina que, anclados en una narrativa asociada a la "teoría de los dos demonios" entendían como "injusto" que se juzgara a los culpables "de un lado" (los represores) y no del "otro" (los miembros de agrupaciones guerrilleras a los cuales, por otra parte, se los identificaba acríticamente con el kirchnerismo). Tal era, por ejemplo, la tónica de un editorial del diario *La Nación* que se publicó un día después del triunfo de

Mauricio Macri como presidente en noviembre de 2015.[197] El editorial comenzaba justamente haciendo referencia a una nota anterior de la senadora Morandini y se titulaba "No más venganza". En términos concretos, abogaba por la prisión domiciliaria de los condenados y el cese de lo que entendía como una "persecución" a magistrados por su posible participación en delitos de lesa humanidad. Pero sobre todo pretendía reinstalar, en ocasión de la llegada de un nuevo gobierno, viejas coordenadas narrativas para comprender la década del setenta en función de la idea de "verdad completa" y una revisión de todo lo actuado durante los gobiernos kirchneristas. El editorial fue ampliamente repudiado por diversos sectores e incluso por los/las trabajadores/as de prensa del diario. Aquí lo citamos sólo como una muestra del modo en que el tópico de la "venganza" constituyó una poderosa clave de lectura para distintos actores que, además de aborrecer al kirchnerismo como identidad política, se ubicaban en la vereda de enfrente en lo que se refería a los modos de narrar y comprender el pasado. Sin embargo, en relación con Morandini, cabe notar que a pesar de que el diario la incluía en su nota como cita de autoridad, la senadora se distanció inmediatamente de las posiciones vertidas en el editorial, alegando que "se me pone ahí, cuando precisamente combato la idea de los dos demonios porque hay un solo demonio, el de la violencia política".[198] ¿Cómo entender entonces la posición de Morandini?

Como dijimos arriba, nos interesa reconstruir el sentido de sus intervenciones no en razón de la resonancia o el peso político de su figura (ambas escasas), sino porque algunos elementos de su discurso encuentran notable circulación en el sentido común a la hora de pensar las disputas por la memoria. En efecto, incluso entre aquellos que utilizan la noción de "terrorismo

[197] https://www.lanacion.com.ar/1847930-no-mas-venganza. Véase también "La Nación. "La justicia prevaleció sobre la venganza", 12 de mayo de 2014. https://www.lanacion.com.ar/1689759-la-justicia-prevalecio-sobre-la-venganza. Este editorial había sido publicado dos días antes del debate que aquí analizamos y fue repudiado, entre otros, por el diputado Remo Carlotto. Para una perspectiva crítica del desarrollo de los juicios que se distancia a su vez de la "venganza" como clave narrativa véase Carnovale, 2015-2016. Otros autores como Claudia Hilb y Luis Alberto Romero también se han expresado críticamente en relación con los juicios en medios de prensa. Véase, entre otros, Hilb, Claudia (2013). ¿Qué hacer con los setenta? Entrevista en Revista Ñ. 16 de agosto.http://www.revistaenie.clarin.com/ideas/Claudia-Hilb-entrevista-setenta_0_971902819.html; Romero, Luis Alberto (2015). "El teatro de los juicios". Los andes. 29 de septiembre. Disponible enwww.losandes.com.ar/article/el-teatro-de-los-juicios. Para una revisión aguda de estas posiciones véase Oberti y Pittaluga, 2016.

[198] Norma Morandini, https://www.rionegro.com.ar/argentina/morandini-contra-editorial-de-la-nacion-es-horrible-es-una-burla-BARN_8010288

de Estado" como clave de lectura de la represión dictatorial, es extendida la idea de que los asuntos ligados a los "derechos humanos" y la memoria deben ser considerados desde una perspectiva universalista, que abogue por valores no pertenecientes a ningún partido o incluso no políticos y por ende considerados "neutrales". Según este razonamiento cualquier tipo de intervención política sobre la memoria (una vez más, entendiendo por "política" aquella que recupera el antagonismo como un elemento constitutivo de lo social) constituye un "abuso" y en última instancia una "venganza", ya que inevitablemente se expresa desde un "nosotros" específico que no se dirige a una comunidad armónica, sino que se define –como cualquier identidad– a partir de sus propias exclusiones.

Este tipo de discurso (que, repetimos, no es aquél que se expresaba en *La Nación*, pero sí encontraba allí cierta confluencia) puede ser mejor caracterizado a partir de lo que Bull y Hansen (2016) han denominado una "memoria cosmopolita" y que, en algunos aspectos, se conecta con la narrativa humanitaria tal como la referimos en el capítulo tres. De acuerdo con los autores, este discurso es el producto de dos fenómenos interconectados: por un lado, la emergencia de una memoria trasnacional del Holocausto que se extendió a lo largo de la década del ochenta (Levy y Sznaider, 2002) y por el otro, una tendencia a revisar los pasados violentos que signaron los regímenes autoritarios del siglo XX en el marco de la generalización de un discurso de los derechos humanos. Muy probablemente, como señala Huyssen, este tipo de discurso de orden global contribuyó (como efectivamente sucedió en Argentina) a potenciar la construcción de memorias locales nacionales fusionándolas e hibridándolas con un discurso trasnacional de la memoria. Según los autores, es esta doble influencia de la memoria del Holocausto y lo que aquí se llamó una "cultura de los derechos humanos" lo que le dio a la "memoria cosmopolita" uno de sus rasgos definitorios, esto es, el desplazamiento de la figura del héroe (que caracterizaba a las "memoria antagonistas" del siglo XIX) en pos de una "actitud hacia las víctimas" (2011: 398).

Teniendo en cuenta esto, Bull y Hansen esquematizan las siguientes características de la "memoria cosmopolita" que nos interesa destacar: en primer lugar, un carácter simplista o binario que decodifica los acontecimientos del pasado bajo las categorías de "bien" y "mal" y que hace equivaler la

“democracia” con la primera y el “totalitarismo” con la segunda. En segundo lugar, la primacía del par víctima-perpetrador o inocente-culpable, entendidas como categorías mutuamente excluyentes, absolutas y omni explicativas. Por medio de ellas la “memoria cosmopolita” se expresa bajo un carácter abstracto que mientras se pronuncia “irrestrictamente” a favor de las “víctimas”, borra, oblitera o no logra incorporar el contexto histórico de cada caso y reponer los diferentes actores sociales en disputa. Es precisamente gracias a esa descontextualización que este tipo de discurso trasciende las particularidades locales y promueve una forma de universalidad basada en la empatía con el sufrimiento humano en general. De ese modo, los acontecimientos del pasado son reducidos (como ha sucedido en gran medida en el caso del Holocausto) a una fábula moral de la cual los individuos y las sociedades deben extraer “aprendizajes”.

Todos estos elementos están presentes en las intervenciones de Morandini modulados en su especificidad local. La idea de que existió “un solo demonio” (el de la “violencia política”) es profundamente ilustrativa de cómo se abandona la contextualización histórica e incluso la agencia de las “víctimas” a las que se propone reivindicar, para cargar las responsabilidades sobre un ente abstracto. En el marco de discursos como éste, el período dictatorial en su conjunto aparece como un “demonio” que debe ser combatido con prescripciones universales: en ese sentido, no es potestad de las memorias locales lidiar con las causas, consecuencias y herencias del pasado, sino sólo conjurarlo con una buena dosis de “tolerancia” y “respeto”. Por eso resultan inadmisibles otras prácticas de memoria que no se expresan desde la neutralidad ni desde una cultura dominante consagrada en Occidente en relación con los muertos. Desde esta perspectiva, dichas prácticas “banalizan” y menoscaban aquello que es concebido como un “legado universal” y que como tal debe expresarse de manera abstracta (por lo tanto, no particularizarse).

Ahora bien, si esto es así ¿cuál era el discurso que enarbolaban los legisladores oficialistas para justificar el traspaso? Y más importante aún ¿qué tipo de memoria ponían en juego?

En primer lugar, los legisladores señalaban que, frente a las deficiencias por parte del IEM en la ejecución de las partidas presupuestarias, era

obligación del Estado nacional garantizar la preservación de sitios como la Ex ESMA según lo establecía la Ley Nacional de Sitios de Memoria promulgada en 2011. Asimismo algunos legisladores intentaban otorgar mayor legitimidad a la iniciativa señalando que la realización de una puesta museográfica en el "Casino de Oficiales", no había sido voluntad unilateral del Poder Ejecutivo sino que había sido solicitada por algunos organismos que formaban parte del Ente Público tripartito en una nota dirigida al Secretario de Derechos Humanos de la Nación.[199]

Pero lo interesante es que la defensa del oficialismo no apelaba a la "universalidad" de los derechos humanos (si bien tampoco la rechazaba) sino que se sustentaba una vez más en la constitución de un "nosotros" con legitimidad para recordar. Así, los diputados y senadores señalaban insistentemente a la oposición que habían sido las "políticas de memoria" impulsadas por el gobierno de Néstor Kirchner las que constituían la base de su legitimidad y, a su vez, las que habían instalado los "derechos humanos" como "política de Estado". Por medio de sus intervenciones, los legisladores trazaban una comunidad de recuerdo que se sustentaba en un conjunto de identificaciones como las que siguen:

> Diputada González: Néstor y Cristina fueron los que dijeron las cosas por su nombre: a los desaparecidos y a todos los que resistimos el embate del terror nos llamaron "militantes", devolviéndonos e orgullo de serlo. Los represores son delincuentes de delitos de lesa humanidad y muchos de ellos están presos en cárceles comunes. Porque sé de dónde vengo y quién soy, gracias a la lucha incansable por amor a mi familia y a este proyecto nacional, que me dio la esperanza y la fuerza para no bajar los brazos, adelanto mi acompañamiento total a esta iniciativa. (Versión taquigráfica, Cámara de Diputados de la Nación, Reunión 4ta, 14 de mayo de 2014: 91).

Y también:

> Diputada Soto: Hace unos días tuve la suerte de que un grupo de compañeros vinieran con sus hijos, chicos que van a la escuela primaria y vecinos, para conocer el lugar donde se torturaba y se hizo desaparecer a miles de argentinos por pensar igual que nosotros, en una patria justa, libre y soberana. Hoy podemos debatir la distribución de la riqueza y luchar para que cada uno de nuestros hijos y los de nuestros compañeros y vecinos puedan acceder

[199] Véase por ejemplo la intervención de la senadora Liliana Fellner (FPV) en Versión taquigráfica, Cámara de Senadores de la Nación, 9 de abril de 2014.

> libremente a la educación y a la salud. Ése era el sueño de esos miles y miles de compañeros. Versión taquigráfica, Cámara de Diputados de la Nación, Reunión 4ta, 14 de mayo de 2014: 90).

En primer lugar, y como ya hemos visto la identificación de los agentes estatales (legisladores, funcionarios y trabajadores de la APN) como "compañeros" de las víctimas. Esto significa que ambos aparecen enlazados en un concepto de "militancia" que —lejos de remitir a una posible heterogeneidad— se encuentra asociado directamente al peronismo. En segundo lugar, la identificación de las luchas encaradas por la generación de los setenta con las políticas socio económicas implementadas durante los gobiernos kirchneristas. Como hemos señalado se trata de un tópico en cierta medida bifronte: por un lado, puede ser interpretado como parte de una re-politización de las víctimas en el marco de la cual éstas son re-nombradas como "luchadores populares" y "militantes", y por el otro, resulta evidencia de la obliteración de un horizonte revolucionario que no solo resultaba incompatible con una enunciación estatal sino que era difícilmente trasladable a las condiciones de inteligibilidad de la política pos Guerra Fría.[200]

En tercer lugar, como veremos, aparece el trazado de una frontera respecto de aquellos a quienes se considera por fuera de esa comunidad de recuerdo. Así, señalaba el diputado Remo Carlotto (hijo de la dirigente histórica de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto):

> Nosotros desentrañamos quiénes fueron los responsables y los beneficiarios económicos, tal como se sustancia respecto de las causas contra Blaquier, presidente del Grupo Ledesma, en Jujuy, y como también sucede con las empresas Mercedes Benz, Ford, La Veloz del Norte –que han sido beneficiadas– y otras que han participado de la dictadura cívico-militar en los cargos más importantes para determinar las políticas económicas. Se necesitaba perseguir a aquellos que iban a resistir no sólo la implementación de la dictadura como tal en el orden represivo, sino también la

[200] Dicho de otro modo, si la identificación de las luchas del pasado con las del presente re-politiza en cierta medida la memoria de los desaparecidos, al mismo tiempo marca los límites de esa re-politización en una clave social-demócrata exenta de toda radicalidad. Véase capítulo tres.

> implementación de su plan económico. Ésta es la memoria. Éste es el punto donde estamos hoy.[201]
>
> […] Me parece vergonzoso que se quiera banalizar lo que ha sido una política pública reconocida en el mundo. Es una vergüenza que se hable en esos términos. Creo que flaco favor hacen aquellos que dicen representar los intereses de la lucha por los derechos humanos, porque están casi en sintonía con el discurso que están planteando algunos genocidas en los estrados judiciales. Hay que tener mucho cuidado con esto. (Versión taquigráfica, Cámara de Diputados de la Nación, Reunión 4ta, 14 de mayo de 2014: 91-2).

Por un lado, la frontera se traza respecto de aquellos actores que representan, tanto hoy como ayer, "el plan económico" de la dictadura, o dicho de otro modo, aquellos que son identificados como sus responsables o beneficiarios civiles. Como hemos visto, se trata de otro tópico reiterado en el discurso kirchnerista: "el punto donde estamos hoy", es decir, este "nosotros" que recuerda se presenta como antítesis de un "pasado denostado" caracterizado por la continuidad entre "dictadura" y "neoliberalismo" (Montero, 2012: 85). En esa línea, se repone una interpretación de carácter instrumental o economicista del proyecto represivo de la dictadura instaurada en 1976, según la cual la desaparición forzada de personas constituía una "herramienta" para instaurar un modelo económico.

Por otra parte, como podemos ver en la segunda cita, el trazado de una frontera que delimita el "nosotros" termina por volver equivalentes todas las oposiciones. En ese sentido es que, según el diputado Carlotto, aquellos que "dicen representar los intereses de los derechos humanos" quedan en sintonía con "los genocidas"; según esta lógica, las posiciones que se ubican por fuera de la comunidad de recuerdo y sus respectivas identificaciones, se vuelven inmediatamente antagonistas. Ese es, en parte, el motivo por el cual la disidencia de la diputada Victoria Donda (quien, como hemos dicho, era hija de desaparecidos y además, había llegado a su banca como parte de las alianzas del Frente para la Victoria) resultaba inadmisible para los diputados oficialistas. Así Pietragalla Corti señalaba al final de su intervención: "en la representatividad de este Congreso, podemos ver la cantidad de hijos que hay

[201] Carlotto se refiere aquí a procesos judiciales que se encontraban en curso. Salvo en el caso contra la Ford Motors Argentina, con sentencia dictada el 11 de diciembre de 2018, en el resto de los casos los acusados no fueron condenados.

y paradójicamente, a la única hija que está en la oposición la puso Néstor Kirchner acá adentro".[202] Desde la perspectiva del oficialismo la diputada Donda traicionaba el linaje que el kirchnerismo construía con las víctimas, en una ecuación según la cual: víctimas = "compañeros" = "militantes peronistas" = "herederos" = "Néstor y Cristina [Kirchner]".[203] Por ese motivo, luego de la intervención citada y en un acto patético (en el sentido de *pathos*) de reafirmación de la propia identidad, "varios señores diputados y parte del público asistente" se pusieron a cantar la marcha partidaria *Los muchachos peronistas,* según lo consigna la versión taquigráfica.[204]

Volviendo a la pregunta por el tipo de memoria que se producía en las intervenciones del oficialismo, podemos decir entonces que a diferencia de lo que sucedía en la oposición, los legisladores apostaban a saldar la pregunta por la legitimidad apelando no a una supuesta universalidad de los derechos humanos en el marco de una "memoria cosmopolita" sino a su propia identidad política: era esa cadena de equivalencias la que —imaginaria pero efectivamente— fundaba la legitimidad de las "políticas de memoria" y la potestad del gobierno kirchnerista para intervenir en torno a la narración del pasado.

Para cerrar el argumento retomemos aquí, por un instante, el planteo de Bull y Hansen. A la par que los autores definen lo que entienden por "memoria cosmopolita", identifican también una "memoria antagonista" y una última, por la que abogan, que definen como "agonista", retomando la conceptualización de Chantal Mouffe. De acuerdo con su planteo, el discurso de la "memoria antagonista" floreció en Europa en la primera modernidad a la luz de la formación de los Estados nacionales y fue fuertemente reactualizado por el

[202] Versión taquigráfica, Cámara de Diputados de la Nación, Reunión 4ta, 14 de mayo de 2014: 94. La diputada Soto, por su parte, fue aplaudida luego de señalar: "Por eso reitero que me duele que una legisladora hija de compañeros desaparecidos piense de ese modo y especule, porque es una diputada nacional" (90).

[203] Por si hiciera falta aclararlo no queremos decir con ello que tal identificación fuera absolutamente caprichosa; en efecto, parte de lo que intentamos desentrañar aquí es el modo en que la memoria contribuye con sus operaciones de selección, olvido, re-significación, etc., a forjar identificaciones políticas en el presente. La pregunta por la "verdad" de esa construcción o la adecuación con supuestos contenidos históricos carece, por eso mismo, de sentido.

[204] Notemos solamente a modo de hipótesis que esa comunidad de recuerdo era también una comunidad viril (integrada por "muchachos peronistas") que en ese mismo acto de entonación excluía a la "hija", más precisamente, a "la única hija" que había entonces dentro del parlamento, y que, según la perspectiva del diputado, "había sido puesta" allí por Néstor Kirchner.

surgimiento de lo que denominan movimientos neo-nacionanalistas, populistas o de extrema derecha. La característica principal de estos discursos es el trazado de una frontera rígida entre “ellos” y “nosotros” que se concibe de manera esencialista y en franca oposición con los discursos cosmopolitas. Más aun, según los autores, este tipo de memoria se caracteriza por (y necesita de) la construcción de mitos fundacionales en el marco de los cuales manipula los eventos históricos y apela a emociones como el sentido de pertenencia, el miedo al extranjero, la solidaridad nacional, etc.

Por el contrario, una “memoria agonista”, sería aquella que permite canalizar la emergencia de un modo antagonista de rememoración, sin esencializar la frontera entre “ellos y nosotros” (en términos de Mouffe sin considerar al adversario político como un enemigo), al tiempo que incorpora la crítica de la autora al cosmopolitismo en el sentido de su falta de reconocimiento del carácter inerradicable del conflicto. Así, una “memoria agonista” sería aquella capaz de reponer los diferentes contextos históricos y politizar el recuerdo sin recurrir a categorías binarias. A diferencia de lo que ocurre con las “memorias cosmopolitas”, las “memorias agonistas” promoverían un tipo de diálogo sobre el pasado que no se concibe de manera consensual (es decir, en términos de “aprendizajes universales” que es necesario extraer), sino en función de la multiplicidad de perspectivas e intereses que pueblan lo social.

Como los propios autores lo señalan, estas categorías no son puras sino que constituyen tipos ideales con alguna utilidad para ordenar ciertos aspectos de la discusión. Pensado de ese modo, parte del debate que aquí analizamos puede ser entendido como una disputa entre modos cosmopolitas y modos antagonistas de rememoración, entendiendo por esto último aquellas memorias que se anclan fuertemente en la construcción de un “nosotros” aunque, huelga aclararlo, en este caso no están vinculadas a posiciones de extrema derecha sino a otras tradiciones políticas. La diferencia principal estriba en que aun si concebimos la memoria puesta en escena por el kirchnerismo como una “memoria antagonista”, lo cierto es que ésta no se expresa contra el cosmopolitismo o el discurso de los derechos humanos, sino que los retoma o los resignifica en función de las claves de la propia identidad. En esa línea es que puede entenderse la defensa de los legisladores kirchneristas de las

“políticas de memoria” como “políticas de Estado”, es decir, como cursos de acción legitimados en una comunidad de recuerdo que se proyecta sobre el resto de la sociedad, con los límites que hemos señalado.

Como hemos visto en el capítulo uno, otras autoras como Barros y Morales (2017) han trabajado esta resignificación del discurso de los derechos humanos en clave kirchnerista en términos de lo que denominan la “articulación” entre el “proyecto político kirchnerista” y la “lucha histórica del movimiento de derechos humanos”. Según las autoras, dicha articulación implicó reconfiguraciones identitarias en ambas partes: en el caso de los organismos –especialmente HIJOS y la Asociación Madres de Plaza de Mayo– implicó una inscripción del “peronismo histórico” en sus luchas e identidades (el cual había estado hasta entonces mayormente ausente); mientras que por contrapartida la “lucha por los derechos humanos” se habría convertido en una “dimensión constitutiva” del kirchnerismo. A la hora de explicar las razones de esta articulación las autoras señalan: la conversión del presidente electo en un nuevo “garante de la lucha contra la impunidad”, lo cual se tradujo en medidas concretas; la ocupación, por parte de los organismos de derechos humanos de un lugar protagónico en el “campo democrático” y por último, su “inédita participación” en las instancias de decisión e implementación de “políticas de memoria” (Barros y Morales, 2017: 124).

Efectivamente, como hemos señalado, el debate que hemos analizado hasta aquí da cuenta de estos últimos puntos, es decir, de la nueva permeabilidad que el sistema político manifestó hacia el movimiento de derechos humanos y el lugar de visibilidad que los organismos volvieron a ocupar en la esfera pública. Sin embargo, aun cuando como lo hemos hecho a lo largo del capítulo, coincidimos con Barros y Morales en entender este proceso desde el punto de vista de la articulación de las identidades políticas, lo cierto es que el panorama debe ser complejizado. En primer lugar, porque como lo muestra la discusión sobre el “traspaso” el movimiento de derechos humanos no constituía un “todo homogéneo” y las diferentes organizaciones no sólo no coincidían en las modalidades institucionales que debían adoptar las “políticas de memoria” sino que además proponían diferentes nociones de memoria en disputa. En segundo lugar porque aun si el kirchnerismo resignifica e incorpora algunos tópicos de la narrativa humanitaria, la articulación entre

ésta – en su matriz cosmopolita– y una identidad política precisa no está exenta de conflictos. Tales conflictos eran precisamente los que emergían toda vez que la oposición acusaba al gobierno nacional de "partidizar", "faccionalizar" o "apropiarse" del discurso de los derechos humanos, lo cual como hemos dicho constituyó la crítica de mayor resonancia hacia las "políticas de memoria" a lo largo de todo el período analizado. Ello es comprensible en la medida en que como hemos visto, las "memorias cosmopolitas" se caracterizan por enunciarse desde un sujeto concebido como universal y por eso mismo, reivindican una suerte de "neutralidad" política que se pone por fuera de todo contexto.

Teniendo en cuenta todo esto tal vez la principal innovación de los gobiernos kirchneristas tal como se expresó en este debate fue reponer en alguna medida el carácter antagónico que surcaba los conflictos del pasado (re-politizando a las víctimas y trazando un bloque temporal de continuidad entre dictadura y neoliberalismo) sobre la base de un discurso de los derechos humanos que había sido forjado por los organismos a lo largo de décadas de lucha. En esa articulación, tanto el kirchnerismo como identidad política como el discurso de los derechos humanos en sí mismo se vieron mutuamente transformados. La estabilidad de esa articulación y su devenir configuran un enigma para la Argentina contemporánea.

7.4. El "traspaso" efectivamente existente y la inauguración del Museo Sitio de Memoria ESMA

Para completar el panorama acerca del devenir de la política de lugarización de la memoria es necesario referirse a cómo se implementó efectivamente el "traspaso" en el marco del área de sitios de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. En ese sentido es necesario incorporar otras variables de análisis que no estaban en el centro del debate que se dio en el parlamento y que tuvieron efecto directo sobre el desarrollo de la política. Nos referimos al pasaje de los trabajadores que se desempeñaban en la órbita del IEM a la administración pública nacional y los efectos que esto tuvo en el diseño institucional del área. En relación con lo primero, es necesario considerar que mientras en el área de sitios se desempeñaban alrededor de

diez personas, en el IEM lo hacían ciento veintisiete (127) trabajadores/as: cuarenta y ocho (48) de planta permanente y setenta y nueve (79) contratados bajo la modalidad de locación de servicios.[205] Según lo establecía el Convenio, todos ellos debían quedar incorporados a la Administración Pública Nacional con "identidad o equivalencia en la función, jerarquía y situación de revista en que se encontrare a la fecha de la transferencia". Ello implicaba que como producto del traspaso el área de sitios pasaba a tener casi doce veces el tamaño de personal que había tenido hasta el momento y además comenzaba a tener dentro de sus funciones la gestión cotidiana de los cuatro Espacios de Memoria de la Ciudad, algo que, como vimos en el capítulo precedente, estaba por fuera de su ámbito de actuación. Por esa razón, tanto los trabajadores del IEM como quienes ya se desempañaban en el área, recuerdan la situación como "traumática" o incluso como un "terremoto".[206] Para los primeros, el carácter traumático del proceso se debía especialmente a la incertidumbre acerca de la estabilidad laboral y las nuevas condiciones de trabajo y a su vez, a un desgaste que se había producido al interior de la institución en torno a las posiciones que cada cual adoptaba frente a la inminente disolución del Instituto. En efecto, la fragmentación que quedó en evidencia en el debate en el parlamento se replicó entre los trabajadores, instalando disputas entre aquellos que decidieron apoyar activamente a las autoridades del IEM (por ejemplo, en un reclamo conjunto a la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires el día en que se discutió el Convenio de traspaso), aquellos que prefirieron no tomar una posición específica y aquellos que, por sus propias afinidades políticas, expectativas en torno a las mejoras en la situación presupuestaria o bien diferencias con la dirección del IEM, se pronunciaron a favor del traspaso al gobierno nacional. En relación con ello, es necesario tener en cuenta que si bien éste no era el caso de todos/as los trabajadores/as, había quienes tenían una militancia previa en organismos de derechos humanos o habían inscripto sus propias tareas en el marco de esa militancia a lo largo de su trayectoria

[205] De acuerdo al proyecto de ley presentado en la legislatura por el diputado Bodart (Exp. 896-D-14)

[206] Entrevistas a Soledad, ex trabajadora del IEM, 10 de julio de 2018 y a Juan, ex trabajador del IEM, 5 de julio de 2018. Ambos fueron "traspasados" a la Dirección Nacional de Sitios de Memoria como consecuencia de la ratificación del convenio.

laboral como “militantes de la gestión” (Vázquez, 2015).[207] Por esa razón las diferencias al interior del movimiento de derechos humanos (y el modo en que el involucramiento del gobierno había funcionado como parteaguas), no eran ajenas a la posición que cada cual desempeñaba en los espacios institucionales en juego. Vinculado a ello, resulta significativo destacar que más allá de la progresiva organización gremial de los trabajadores de la memoria (un proceso que ha sido referido por Guglielmucci, 2013) por lo general sus voces eran subsumidas como equivalentes a la de los organismos de derechos humanos e ignoradas en su especificidad. Así señalaba Esteban (quien, como referimos en el capítulo anterior tenía un papel destacado en el área de sitios):

> Pasa que los compañeros de los Espacios se vuelven magos en la gestión de recursos…aprenden a gestionar con nada. Estamos acostumbrados a laburar así. Pero hay veces que te supera…o te exige tanto esfuerzo que te quema la cabeza… o compañeros que se terminan yendo porque no dan más. Ni hablar si encima ganan poco. Ni hablar si los traspasan a un lugar donde nadie los consultó y en el medio no se sabe cuál va a ser su situación laboral y cuando eso se resuelve no se sabe si van a tener los recursos presupuestarios que tenían cuando estaban en el IEM. Y son meses de reuniones que te desgastan, entre compañeros. Porque además la mayor parte de los compañeros que integraban esos equipos estaban contentos de pasar a nación, muchos de ellos. Pero rápidamente vieron que era bastante difícil garantizar cierta cuestión del funcionamiento presupuestario de los sitios. Y después encima se pierde, se pierden las elecciones cuando se estaba empezando a acomodar y es otra vez empezar de nuevo. (Entrevista con Esteban, trabajador de la Dirección Nacional de Sitios, 28 de junio de 2018)

Es decir que, además de las diferencias políticas que analizamos en los apartados precedentes, una decisión como el “traspaso” tuvo efectos subjetivos que no fueron considerados sobre quienes eran los encargados de llevar adelante las políticas que se discutían. La falta de presupuesto, la inestabilidad laboral y las dificultades de la gestión se sumaban a lo que constituía de por sí una tarea especialmente sensible. Sumado a ello, una vez concretado el “traspaso”, fue necesario moderar las expectativas en relación con cuál era el apoyo esperable del gobierno nacional, incluso para quienes se habían pronunciado a favor como era el caso de los/as trabajadores/as de la mayor

[207] En relación con la incorporación de militantes de derechos humanos y “afectados directos” a la gestión de las “políticas de memoria”, debe destacarse que ello sucedía también en el IEM y no era en absoluto una característica propia del gobierno nacional.

parte de los Espacios. En efecto, si bien hasta donde pudimos recabar en las entrevistas las autoridades de la Secretaría de Derechos Humanos se acercaron a los diferentes Espacios de Memoria e incluso se comenzaron a realizar algunas obras que estaban largamente postergadas, lo cierto es que, como señala Esteban, la entrada en la órbita nacional no significó automáticamente una mejora en términos de las posibilidades de gestión. Más aún, la proximidad de las elecciones y finalmente la derrota electoral del kirchnerismo en diciembre de 2015 sumió a los trabajadores nuevamente en la incertidumbre. Este panorama contrastó fuertemente con la magnitud de la puesta museográfica en el "Casino de Oficiales", que fue planificada e implementada por fuera del área de sitios e inaugurada en marzo de 2015 por la Presidenta de la Nación, con proyección internacional.

En relación con el diseño institucional, la modificación de la estructura del área de sitios se formalizó a partir de la demorada salida de la reglamentación de la Ley Nacional de Sitios de Memoria. Por medio de esta, el área adquirió jerarquía de Dirección Nacional y pasó a depender directamente del Secretario de Derechos Humanos de la Nación y ya no del Archivo Nacional de la Memoria. Por otra parte, si bien la reglamentación venía siendo elaborada desde tiempo antes (ya que se encargaba de definir algunas cuestiones que la ley había dejado en suspenso, como por ejemplo qué se entendía por "sitio de memoria", qué tareas incluía la "preservación", qué mecanismos se preveían cuando los sitios estaban en manos privadas, etc.), luego de concretarse el traspaso la misma fue modificada para incluir dentro de las funciones de la ahora Dirección la gestión de los Espacios de memoria de la Ciudad. Para ello se creó una coordinación específica –la coordinación de sitios CABA– que pasó a estar a cargo de Delia Bisutti, una ex diputada, militante de derechos humanos y ex detenida desaparecida. Esta decisión iba en el mismo sentido que señalamos arriba de ignorar la especificidad de los/as "trabajadores/as de la memoria" y sus trayectorias en el área, ya que si bien Bisutti tenía cierta afinidad con la temática no había tenido hasta entonces un rol específico en el área.

El análisis de ambas variables nos muestran el modo en que, a diferencia de la tendencia que hemos analizado en el capítulo anterior, la política de sitios en la ciudad de Buenos Aires y la intervención en la misma por

parte del gobierno nacional no estuvo signada por una pretensión de desparticularizar (y mucho menos federalizar la política), sino que se encontró subordinada a la realización de la puesta museográfica en el edificio del "Casino de Oficiales" y, con ello, a la cristalización de una memoria emblemática en la Ciudad de Buenos Aires. En ese sentido, una trabajadora del Espacio para la Memoria ex Olimpo señalaba:

> Fue necesario que todos los sitios CABA y el IEM, dejaran de estar en la égida de ciudad, y el último directamente dejara de existir, para que se pudiera realizar el proyecto museístico del Casino de Oficiales, en el que estaba involucrada nada más ni nada menos que la presidenta de la nación. Esa es una intuición mía que cada vez se fue fortaleciendo más. Porque el Secretario de Derechos Humanos cada vez que nos veía nos decía "yo no quería tenerlos", éramos un problema, tuvieron que inventar un área para nosotros que era coordinación de sitios CABA en ese momento. (Entrevista con Mariela, trabajadora del "Espacio para la Memoria y la Promoción de los Derechos Humanos ex Olimpo", 28 de mayo de 2018)

En efecto, la Dirección Nacional de Sitios quedó organizada de modo tal que una coordinación estaba a cargo de los Espacios de Memoria de la Ciudad de manera separada de la gestión de otros Espacios de Memoria que luego se recuperaron a nivel nacional, como "La Escuelita de Famaillá", el D2 de Mendoza y El Faro de Mar del Plata (cuya coordinación se nominó "Red Federal"). En esa misma línea, Agustín Cetrángolo (ex militante de HIJOS, y para entonces jefe de gabinete de Martín Fresneda en la SDH) reconocía que la gestión de los Espacios de Memoria de CABA había sido un efecto "no buscado" del interés por "entrar" al Casino de Oficiales y que, de hecho, la incorporación de todo el personal del IEM iba a contramano de los objetivos que la Secretaría se había planteado para su propia gestión.[208] En ese mismo sentido, señalaba Judith Said:

> No digo que estuvo mal. Lo que digo es que no sé si hoy lo haría así… ¿estamos? Porque no era ese el camino por el que tenía que andar. El gobierno de la ciudad tenía que hacerse cargo de sus sitios de memoria por lo que sucedió en la ciudad de Buenos Aires, esté quien esté en el gobierno. Cuando se hace esta negociación como una decisión, incluso era una decisión de presidencia, a efectos de consolidar el ente y la creación del museo, del sitio. Pero bueno, son

[208] Entrevista con Agustín Cetrángolo, 25 de julio de 2018.

> cosas que suceden en la gestión, con tensiones, con cosas… que son muy fácil de decir ahora, pero en ese momento había que ver cómo se resolvían esas tensiones. (Entrevista con Judith Said, 7 de agosto de 2018)

En definitiva todos los entrevistados coinciden en que, por vía del discutido "traspaso" la política de lugarización se subordinó a la realización del Museo Sitio de la Memoria – ESMA, entendido por el gobierno como un momento de cristalización de su intervención en la temática. En ese sentido, el discurso que la entonces Presidenta Cristina Fernández pronunció en la inauguración del sitio es ilustrativo ya que uno de sus tópicos principales constituyó precisamente el recuerdo del acto del 24 de marzo de 2004. En dicho acto, Néstor Kirchner había firmado el Convenio de creación del "Espacio para la Memoria y para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos" en la ex –ESMA (es decir, formalizó la decisión de desalojar a la Marina) y explicitado cuál era la nueva posición del gobierno en relación con el pasado. Lo llamativo es que, como hemos visto, para que el Museo pudiera realizarse en 2015 el Convenio firmado en 2004 tuvo que ser en alguna medida anulado, de modo que los edificios del predio volvieran a estar bajo potestad del PEN y no del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Aunque ese movimiento no necesariamente grafica la trayectoria de todas las "políticas de memoria", resulta evidente que el involucramiento del Estado nacional en la temática trajo aparejado —con sus diversas consecuencias— la sujeción de algunas iniciativas a un esquema de decisión centralizado. Así, si en el capítulo anterior hemos destacado el potencial uniformizador del accionar estatal como aquel que permite construir una versión "desparticularizada" del pasado, aquí subrayamos que dicho potencial también puede expresarse en la cristalización de ciertas memorias emblemáticas en detrimento de otras. Del mismo modo, el accionar de las agencias estatales expresa la estabilización de posiciones hegemónicas como las sostenidas por el gobierno nacional sobre la base de un conflicto por naturaleza irresoluble.[209]

[209] En efecto la oposición de algunos organismos de derechos humanos a la puesta museográfica fue furibunda. Como ejemplo véase la declaración de HIJOS-La Plata, titulada "La Disneylandia de Fresneda y Parrilli" disponible en http://archivo.argentina.indymedia.org/mail.php?id=854372 Fecha de consulta 2 de febrero de 2019.

7.5. Conclusiones

A lo largo de los dos capítulos precedentes hemos intentado describir y analizar en detalle una de las "políticas de memoria" más visibles que se llevaron adelante desde el gobierno nacional durante los años kirchneristas. Así, en el capítulo seis hemos prestado especial atención a la génesis del área de sitios de memoria indicando que una de las razones que explican su creciente proceso de especialización funcional fue la multiplicación de la demanda sostenida por diferentes actores para señalizar lugares a lo largo del territorio nacional. Este proceso refiere al modo en que, a lo largo del período analizado, la "memoria" se fue constituyendo progresivamente como un problema social que cristalizó en el desarrollo de una política pública. Ello supuso, a su vez, la institucionalización de una serie de procedimientos y lógicas de acción que se gestaron al interior del área según modos de hacer que se fueron afianzando con el paso del tiempo.

Específicamente, como hemos visto, la extensión de la política de señalización a todo el país contribuyó a involucrar a las autoridades locales, activando procesos de cogestión y generando un relativo piso de consenso a la hora de referirse a lugares que condensaban sentidos en torno al pasado reciente. En ese sentido, mientras en ocasiones la uniformización de las marcas es considerada como un efecto homogeneizante (con connotación negativa) del accionar estatal, a lo largo del capítulo nos hemos esforzado por inscribir dicha homogeneización en el marco de un proceso de desparticularización que diferencia el accionar de las agencias estatales del resto de las prácticas sociales. Así, que la "política de señalización" haya sido calificada por los trabajadores y distintos actores sociales como una "política reparatoria" es comprensible en la medida en que por efecto de este involucramiento, las narraciones locales lograron inscribirse —al menos temporalmente— en un relato que se pone "más allá de todo punto de vista". Ello explica asimismo porqué distintas organizaciones de la sociedad civil apelaron al Estado de manera sostenida como actor decisivo en la producción de memorias, sin que ello significara —para los propios actores— renunciar al potencial político o evocativo que atribuían a sus recuerdos del pasado.

Este punto es importante ya que a menudo la intervención de las agencias estatales en la temática es menospreciada como una “apropiación” o incluso “manipulación” de las memorias colectivas. De acuerdo con nuestra perspectiva, la hipótesis según la cual las agencias estatales se “apropian” de las memorias sociales no se ajusta al proceso analizado, en la medida en que ello supone la existencia de una frontera tajante entre “Estado” y “sociedad”, que las imagina como entidades autónomas preconstituidas. Contra esta idea, hemos señalado de qué modo el proceso de desparticularización que caracterizó a la conformación del área de sitios, se sostuvo a su vez sobre la mediación que la política de señalización pudo articular en cada caso en el territorio. En efecto, era precisamente el intercambio con los actores locales aquello que permitía que la señalización superara su carácter administrativo para constituirse como acontecimiento político y socialmente significativo.

A su vez, ello implicaba que el papel del Estado en dicho proceso no podía considerarse como algo dado. De hecho, como hemos visto en el capítulo siete, esta cuestión en torno al rol que debían desempeñar las agencias estatales constituyó también un objeto de disputa entre el gobierno y la oposición partidaria.

Especialmente, a lo largo de este capítulo hemos reconstruido los argumentos que los distintos partidos y los organismos de derechos humanos “independientes” esgrimieron a la hora de cuestionar el accionar del gobierno nacional en los sitios. En primer lugar, hemos visto cómo diferentes legisladores abonaban a la tesis de la “apropiación” de la memoria, sosteniendo que el kirchnerismo se habría adjudicado unilateralmente la potestad de narrar y conmemorar el pasado, razón por la cual aspiraba a disolver el Instituto Espacio para la Memoria, es decir, a imponer su propio punto de vista por fuera de un diseño institucional que privilegiaba el “consenso”. En segundo lugar, hemos analizado el argumento en torno a la ilegitimidad del gobierno nacional para intervenir en cuestiones asociadas a los derechos humanos considerando las violaciones a los derechos humanos que se producían en el presente (especialmente la designación de un general sospechado de delitos de lesa humanidad como Jefe del Ejército); y en tercera instancia, la tesis de la “banalización” de la memoria, según la cual la matriz conmemorativa que

impulsaba el kirchnerismo como identidad política “profanaba” el recuerdo de las víctimas.

Para analizar estos argumentos nos hemos remitido a un esquema interpretativo que se apoya en la noción de pluralismo agonista elaborada por Chantal Mouffe y que fue revisitada por Bull y Hansen para comprender los conflictos de memoria. Con esos elementos, hemos señalado cómo los principales aspectos de los argumentos citados pueden asociarse a una “memoria cosmopolita”, caracterizada por rememorar los hechos del pasado desde una perspectiva abstracta que privilegia valores universales. Hemos indicado el modo en que desde esta perspectiva las disputas por la memoria son concebidas como “malentendidos” que pueden eliminarse a partir del desarrollo de un diálogo racional bajo un horizonte de consenso. En relación con ello hemos destacado no sólo que la tensión entre sentidos opuestos (como “sacralización” y “profanación”) se encuentra estructuralmente instalada en los sitios de memoria, sino también que una comprensión verdaderamente pluralista de las diferencias no aspira a la resolución definitiva de los conflictos sino a canalizarlos en el marco de la construcción de las identidades colectivas y del carácter inerradicable de lo político.

Es también desde ese esquema de interpretación que hemos analizado las prácticas de memoria propuestas por el kirchnerismo, entendiendo que si bien se retoman y resignifican algunos elementos de la memoria cosmopolita (como la universalidad de los derechos humanos), su principal fuente de legitimidad se encuentra en el trazado de una “comunidad de recuerdo” que instituye un conjunto de identificaciones y exclusiones. Particularmente la identificación de los agentes estatales como “compañeros” de las víctimas y la equivalencia de las luchas encaradas por la generación de los setenta con las políticas socio económicas implementadas durante los gobiernos kirchneristas, según la hemos visto también en el capítulo tres. Era esa cadena de equivalencias y la exclusión inminente de todo aquél que no se incorporara a ese linaje la que —imaginaria pero efectivamente— fundaba para los legisladores oficialistas la potestad del gobierno kirchnerista para intervenir en torno a la narración del pasado.

Por último, en cuanto al “traspaso” efectivamente existente hemos indicado cómo, en un movimiento inverso al que vimos en el capítulo anterior,

la política de lugarización terminó por subordinarse a la cristalización de una memoria emblemática en la ex ESMA. En esa trayectoria tanto los trabajadores y trabajadoras como los Espacios de Memoria de la Ciudad de Buenos Aires fueron supeditados a la decisión centralizada del Poder Ejecutivo Nacional. En ese sentido, la primacía de esta centralidad por sobre otros mecanismos institucionales se agrega a las limitaciones con las que se encontró la política de lugarización, especialmente en lo que se refiere a la conservación material de los sitios y la ausencia de dispositivos gubernamentales para garantizarla. Ambas funciones, que dependen específicamente de capacidades estatales, evidencian los vaivenes de la política y el modo en que el devenir de los sitios de memoria continúa siendo incierto y en disputa.

Conclusiones: Hacia algunas interpretaciones generales. Actores, modalidades y narrativas de las "políticas de memoria" durante los gobiernos kirchneristas

8.1. Introducción

A lo largo de la tesis nos propusimos analizar cuáles fueron las modalidades institucionales, los actores sociales y los marcos de interpretación del pasado que signaron la génesis e implementación de un conjunto representativo de "políticas de memoria" a lo largo del período 2003-2015. Desde esa perspectiva, hemos analizado los procesos de creación e institucionalización de tres agencias que tomaron a la memoria y las huellas del pasado como objeto de su accionar, así como los modos en que desde cada una de ellas se puso en marcha una "oferta de sentido temporal" para recordar y narrar el pasado reciente. Nos proponemos ahora sintetizar algunos aspectos referidos a ambas cuestiones: por un lado, las condiciones político-institucionales que caracterizaron la tarea de las agencias estudiadas y sus actores, y por el otro, los marcos de memoria o narrativas que se pusieron en juego en su desarrollo. Esta distinción responde a fines puramente expositivos, ya que como hemos ido mostrando a lo largo de la tesis, ambas cuestiones se encuentran fuertemente entrelazadas. En efecto, comprender cómo se dan empíricamente los vínculos entre política y memoria implica, al mismo tiempo, dar cuenta del modo en que los marcos de interpretación del pasado se orientan y se tensionan en función de lógicas de poder que responden a identificaciones políticas. En ese sentido ambos apartados sintetizan el modo en que se han anudado un modo de habitar las agencias estatales (signado por el activismo), una causa (la demanda de "memoria, verdad y justicia" tal como fue forjada históricamente por el movimiento de derechos humanos) y una comunidad de recuerdo, anclada en el kirchnerismo, a la hora de formular "políticas de memoria".

8.2. Condiciones político institucionales de la producción de "políticas de memoria" (2003-2015)

En un nivel general podemos decir que la investigación ha tomado como punto de partida la idea de que los gobiernos kirchneristas incorporaron (en el sentido de Cefaï, 2011) las demandas por "memoria, verdad y justicia" que le eran preexistentes. El panorama que hemos reconstruido en el capítulo uno así como algunos casos concretos analizados a lo largo de la tesis dan cuenta de que este proceso se inscribe en "una secuencia temporal mayor" (Alonso, 2011) que si bien encuentra sus antecedentes en gestos y acciones de gobiernos anteriores, al mismo tiempo, supuso fuertes novedades.[210]

Entre ellas, hemos indicado a lo largo de la tesis la manera en que diferentes dispositivos institucionales del sistema político se fueron convirtiendo progresivamente en canales de expresión de las demandas y disputas del movimiento de derechos humanos. Y ello no sólo por la incorporación directa de algunos de sus representantes al sistema político en calidad de legisladores y funcionarios, sino por la nueva permeabilidad que este sistema manifestó hacia el movimiento desde 2003 en adelante. Desde esa perspectiva, hemos trabajado con las nociones de "porosidad" e "hibridación" entre las agencias estatales y los organismos de derechos humanos, indicando que si bien los intercambios entre ambas entidades no estuvieron ausentes en gobiernos anteriores, se materializaron con creciente dinamismo durante los gobiernos kirchneristas. Por esa razón, en el último capítulo nos hemos referido a la existencia de una arena internamente diferenciada dentro de la cual distintos actores (tanto aquellos tradicionalmente concebidos como "sociales" y "estatales") pugnaron para establecer su influencia sobre los modos de encuadramiento del pasado. Así podemos decir que uno de los elementos que caracterizaron al período bajo análisis es la intensidad y variedad de los modos en que los diferentes actores se imbricaron e interpenetraron en torno a prácticas que se fueron progresivamente institucionalizando.

[210] Esto queda en evidencia si consideramos, por ejemplo, la inserción de la ley 26.564 (de "presos políticos") y el Decreto n° 1199 (de reparación de legajos laborales) en el andamiaje de las leyes reparatorias que habían sido sancionadas en la década del noventa —según lo hemos analizado en el capítulo dos— así como la conformación de distintos dispositivos de gestión mixta de Espacios de Memoria en la estela de otras iniciativas provinciales y municipales que habían sido creadas a principios de la década del 2000, según lo mencionamos en el capítulo seis.

Específicamente hemos visto cómo algunas **modalidades de rememoración** tradicionalmente desarrolladas por organismos de derechos humanos fueron retomadas por las agencias estatales. En el caso de la Comisión de Trabajo por la Reconstrucción de Nuestra Identidad, hemos indicado de qué modo el ritual de los actos conmemorativos incorporó elementos que formaban parte del repertorio de los organismos de derechos humanos, como la exposición de fotos de las personas desaparecidas, el testimonio de compañeros/as o familiares e incluso algunas consignas, además de algunos marcos generales de memoria a los que nos referiremos en el apartado siguiente. Algo análogo sucede con la incorporación oficial de una "política de señalización", no sólo porque la iniciativa de marcar los ex centros clandestinos de detención en el espacio urbano fue una práctica inaugurada por organismos y otras organizaciones sociales, sino porque como hemos visto, fue la demanda sostenida por estos actores la principal causa de la creación y extensión de la Red Federal de Sitios de Memoria. Además, la "porosidad" a la que nos hemos referido se verificaba en el **intercambio de saberes** ya establecidos (por ejemplo, en las estrategias seguidas para la identificación de personas desaparecidas al interior de la APN) así como en la **conformación de nuevos saberes**, que como hemos visto en el caso de los archivos de las Fuerzas Armadas, fueron decisivos para el modo en que la Dirección Nacional de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa se hizo cargo de la demanda social por su "apertura".

De manera particularmente significativa, el carácter "poroso" de la frontera entre organismos y agencias estatales remite, además, al **intercambio en las modalidades de acción y al refuerzo mutuo de las respectivas legitimidades** a la hora de intervenir públicamente en los relatos sobre el pasado. Desde ese punto de vista, hemos analizado el proceso de institucionalización de la Comisión de Trabajo por la Reconstrucción de Nuestra Identidad como un proceso "híbrido" que respondía a una serie de atributos tradicionales de la política pública (dotación de normativa y personal específico, establecimiento de circuitos intra-gubernamentales de aplicación, etc.), pero también a una práctica sostenida por individuos particulares movilizados por un "deber de memoria". En el mismo sentido, hemos indicado de qué modo la Comisión apeló a un conjunto de identificaciones no necesariamente

correlativas a su lugar institucional (esto es, su pertenencia orgánica a la Secretaría de Obras Públicas de la Nación) sino vinculadas a la legitimidad pública que portan las víctimas y los "afectados directos" en el ámbito de los derechos humanos. Así hemos indicado cómo la Comisión pasó a identificarse no sólo con los trabajadores actuales y pasados de la administración pública sino con "hijos e hijas" de desaparecidos y sobrevivientes de la represión que incluso pasaron a conformarla.

Un proceso análogo hemos encontrado al analizar el devenir institucional del área de sitios de memoria. Si bien como sucedió en el caso de la Comisión la promulgación de normativa específica (esto es, la Ley de Sitios de Memoria y su posterior reglamentación) supuso un salto cualitativo en el proceso de institucionalización y afianzamiento del área, fue la demanda sostenida por distintos actores movilizados a lo largo del territorio nacional lo que explica la extensión de la política, que estaba originalmente centrada en la ex ESMA. Según nuestro análisis, fue precisamente este intercambio con los actores locales lo que constituyó el eje central y la potencialidad "reparatoria" de la política, en la medida en que habilitaba la inscripción de relatos particulares en un régimen de generalidad. Por ello, como hemos visto, aun cuando cierta internalización de los procedimientos resultó indispensable para su afianzamiento, las señalizaciones no se desarrollaban solamente como trámites burocrático administrativos, sino que constituían el producto de un consenso (más o menos profundo en cada caso) entre los diferentes actores involucrados. Esta característica que, siguiendo a Perelmiter (2010) mencionamos como una "frontera inestable" entre Estado y sociedad constituía a la vez un índice de la precariedad institucional del área (y su dificultad para afianzarse en el territorio) y a la vez su principal activo a la hora de constituirse como agente de memoria.

En el caso de la "política de apertura" de los archivos militares el proceso de institucionalización tuvo algunos puntos en común y algunas diferencias con los otros dos casos. Por un lado, la histórica demanda sostenida por los organismos de derechos humanos fue clave en las estrategias desarrolladas por la Dirección Nacional de Derechos Humanos para garantizar el acceso judicial a los archivos, pero, por el otro, y hasta donde pudimos relevar, los organismos no tuvieron un papel específico en el efectivo desarrollo de la

política.[211] De manera mucho más decisiva, en este caso resultó clave el establecimiento de un marco legal necesario para ordenar la acción de los agentes militares, funcionarios y empleados de los archivos, de modo que la "apertura" contara con el aval de toda la cadena de mando hasta el Presidente de la Nación. Asimismo, en este caso, la "porosidad" que resulta especialmente significativa no es tanto aquella que se da entre "Estado" y "sociedad" sino entre los distintos poderes del Estado, particularmente entre el Poder Ejecutivo y el Judicial. Como hemos visto, fue la concepción del documento como "prueba jurídica" y la necesidad de traspasar la información que contenían a las causas por crímenes de lesa humanidad lo que signó las tareas del Equipo de Relevamiento y Análisis y con ello, gran parte de la lógica de re-configuración de los archivos militares en el período.

Un elemento compartido en los tres casos se vincula con la centralidad de la **"militancia por la memoria".** Como hemos ido señalando a lo largo de la tesis, diferentes autores han mostrado de qué modo durante los gobiernos kirchneristas el Estado fue concebido como un espacio donde se tramitaban compromisos militantes, no sólo en el campo de los derechos humanos sino en relación con otras causas y otras organizaciones sociales (Perelmiter, 2010; Pérez y Natalucci, 2012). De manera correlativa, ello fue transformando el quehacer de las agencias estatales en función de determinadas lógicas asociadas al activismo y, por el otro, fue anudando la causa de la "memoria" con una determinada identidad política. En el marco de este anudamiento, el kirchnerismo se constituyó a sí mismo como la encarnación de un legado y un mandato heredados del pasado, que a su vez, "enraíza su práctica política en valores, ideas, convicciones, modos de hacer y de decir la política que lo preceden y lo constituyen" (Montero, 2012: 296). Dicho de otro modo, el trabajo en el Estado fue progresivamente concebido como una forma de activismo anclada a una "militancia por la memoria" en el sentido en que lo entiende Pollak (2006) y una militancia ligada a un proyecto político partidario, según una narrativa que ubicaba ambas causas en una relación de continuidad.

[211] Los organismos de derechos humanos sí cumplieron un rol significativo a la hora de defender la permanencia de los Equipos de Relevamiento luego del cambio de gobierno en 2015.

En lo que sigue, sistematizaremos esta figura del “militante por la memoria” en dos grandes perfiles, que si bien no se ajustan punto por punto a la diversidad de los casos recogidos, pueden ser útiles para clarificar algunas características que hemos indicado a lo largo de los capítulos de manera fragmentaria. Siguiendo una vez más a Vázquez (2018) nos referiremos por un lado, a la incorporación de militantes de derechos humanos al Estado o “militantes *en* la gestión” y por el otro a la incorporación de trabajadores que no contaban con trayectorias previas en derechos humanos al Estado o lo que la autora denomina “militantes *de* la gestión”.

La incorporación de militantes de derechos humanos al Estado:

En el marco de esta investigación, esta modalidad refiere a la ocupación de cargos ejecutivos por parte de activistas que contaban con trayectorias previas en organismos de derechos humanos y cuyos ingresos se produjeron a través de redes de contacto basadas en dichas trayectorias militantes. La importancia de estos ingresos se verifica no tanto en un sentido cuantitativo sino cualitativo, es decir, a partir de la posición de algunos militantes en cargos jerárquicos, especialmente directores o secretarios. En efecto, con una sola excepción, tanto la Dirección de Derechos Humanos de los Ministerios de Defensa y Seguridad respectivamente como la Dirección Nacional de Sitios de Memoria, como también la Secretaría y presidencia del Archivo Nacional de la Memoria y la propia Secretaría de Derechos Humanos (además de los programas “Educación y memoria”, “Verdad y Justicia”, que aquí sólo fueron mencionados) fueron ocupados por activistas con trayectorias previas en el campo de los derechos humanos en todo el período analizado.

Una mirada más fina permitiría identificar en este tipo de incorporación al menos dos trayectorias generacionales: por un lado, la de aquellos que iniciaron su militancia en la década del setenta y habían sobrevivido a la represión dictatorial (ya sea aquí o en el exilio) y, por otro, la aquellos militantes más jóvenes (en algunos casos hijos e hijas de desaparecidos) que se iniciaron en el activismo a mediados de la década del noventa en pleno desarrollo del ciclo neoliberal.

Para comprender ambas trayectorias es necesario tener en cuenta al menos dos de los rasgos específicos que adquirió en el país el activismo por los derechos humanos: por un lado, la cuestión del familismo, es decir la relación de parentesco con personas desaparecidas o asesinadas como principal forma de ingreso al activismo en derechos humanos, al punto tal que como señala Vecchioli, buena parte de la militancia del movimiento se identifica públicamente a partir de la afirmación de un vínculo de sangre con las víctimas (2005: 244). En relación con ello, como hemos dicho, la condición de "afectado directo" se ha ido constituyendo como una posición que otorga un "paradójico privilegio" tanto al interior de las organizaciones como para el resto de la sociedad. Como señala Jelin, este "privilegio" está basado en "el derecho individual de reclamar frente al Estado por un daño particular y, simultáneamente representar la voluntad de justicia del pueblo" (1995: 122), pero a la vez, en la medida en que "ser portador del dolor y de la memoria por haber sido víctima o testigo directo otorga un poder y una autoridad simbólica basados en el 'monopolio' de los significados y contenidos de la verdad y la memoria" (143).

Por otro lado, y sin ser una condición excluyente de lo anterior, hay que considerar que se trata un tipo de activismo que ha estado atravesado desde sus orígenes por un creciente proceso de profesionalización en clave jurídica (Vecchioli, 2009). En ese sentido, lo que encontramos es un activismo que articula a la vez un proyecto militante – la defensa de los derechos humanos – y un tipo específico de competencia experta – el derecho internacional de los derechos humanos – (43), lo cual es válido tanto para la primera como la segunda generación, en su mayoría formada por jóvenes profesionales con trayectorias en organismos como HIJOS o el CELS.[212]

En el caso de la primera generación (es decir quienes ingresaron al activismo como abogados defensores de presos políticos) esta articulación se combina además con la posesión, en diferente intensidad, de capitales políticos

[212] De acuerdo con Vecchioli este tipo de activistas ocupan un lugar privilegiado dentro del campo de los derechos humanos por su posibilidad de jugar en un triple registro "(a) del prestigio moral, fundado en el coraje demostrado al enfrentar a la dictadura, cuando la propia vida estaba en riesgo, (b) de la autoridad jurídica, resultado de la formación y actuación a lo largo de tres décadas dentro de un campo profesional dotado de una de las cualidades más importantes de prestigio como es la esfera transnacional y (c) de la competencia social, asociada a un capital de relaciones constituidas desde la época de su ingreso a la Facultad de Derecho y a la militancia política" (Vecchioli, 2009: 45).

provenientes de la militancia política en la década del setenta.[213] En ese sentido, al igual que ocurre con el "paradójico privilegio" de los afectados directos, la apelación del kirchnerismo a la memoria de esta militancia resulta una de las claves ineludibles para comprender el proceso de incorporación de estos activistas al Estado y los sentidos que dieron a sus tareas. En efecto, como hemos señalado, ya desde la asunción de Néstor Kirchner el gobierno colaboró fuertemente en la instalación de una reivindicación de la militancia política de los años setenta (con sus respectivos desplazamientos y silencios), configurando una apelación que tuvo importantes consecuencias para la construcción de una "comunidad de recuerdo"; es decir, un "nosotros" con legitimidad para recordar que con sus respectivos marcos narrativos, convocó a trabajadores, funcionarios y activistas.

Esta doble articulación tuvo consecuencias concretas sobre las modalidades de trabajo al interior de las agencias estatales abordadas. En ese sentido, hemos visto de qué modo la causa de la memoria ofició como un espacio en el marco del cual políticos y funcionarios podían performativizar su adscripción al "proyecto político kirchnerista" (por ejemplo en los actos conmemorativos analizados en el capítulo tres, o en la co-gestión de señalizaciones según se aborda en el capítulo seis) y dar un sentido histórico a su propia ocupación del Estado. De este modo, en muchos casos el trabajo en las respectivas agencias estatales quedó asociado a una "ética del compromiso" según la cual el desempeño laboral se definía como una forma de "entrega personal" a la causa en su doble sentido de memoria asociada a una identidad política. Desde esta perspectiva, la tarea cotidiana era entendida por varios de estos funcionarios-militantes no como un mero trabajo sino como una "oportunidad histórica". En ese sentido señalaba Judith Said, Directora Nacional de Sitios de Memoria, familiar de desaparecidos y ex presa política:

> Y mi mirada era: chicos, esta es la que nos toca hacer. Aprovechemos porque además es un momento importante para nosotros, y cuando veíamos la satisfacción que esto les daba a los familiares, a las víctimas directas, cuando veíamos los resultados de eso, era altamente satisfactorio. Yo no digo que hay que trabajar

[213] Por ejemplo Eduardo Luis Duhalde o Rodolfo Mattarolo, quienes tuvieron altos cargos en la Secretaría de Derechos Humanos desde los inicios del gobierno kirchnerista hasta el 2012, o Ramón Torres Molina y Carlos Lafforgue, Presidente y Secretario del Archivo Nacional de la Memoria, respectivamente.

> gratis ni que hay que hacer demás… lo que digo es que nos sintamos complacidos de hacer un trabajo que nos gusta y gratifica, y eso no ocurre siempre […]. Con esto no quiero decir que estaba bien que se mataran laburando, no. Pero me parecía que había que darle esa mirada. A ver, yo estaba acá almorzando un domingo al mediodía con los chicos y me llaman de parte de Néstor para saber si tal cosa… tuve que dejar todo, irme… Ahora: a mí no me molestaba, la verdad. Porque me parecía que era EL momento. Que tenía que aprovechar ese momento que me estaba dando la historia de poder hacer determinadas cosas que ni soñaba que se podían hacer (Entrevista de la autora con Judith Said, 7 de agosto de 2018)

Paralelamente, como se desprende del testimonio citado, este modo de concebir la tarea a partir de un "compromiso personal" suponía una suerte de tensión respecto de la caracterización de la tarea como un "trabajo" y las respectivas condiciones laborales (salario, disponibilidad horaria, etc.), así como un *ethos contraburocrático* (Perelmiter, 2010) que tomaba como indicador del éxito de un programa o curso de acción un conjunto de criterios políticos por sobre el ajuste a determinadas normas y requisitos formales y que podía eventualmente entrar en tensión con la percepción de los trabajadores y trabajadoras que no ocupaban cargos jerárquicos.

Un último señalamiento en relación con este tipo de incorporación refiere a la cuestión de la idoneidad de quienes fueron "afectados directos" de la represión para la formulación de políticas públicas. Este cuestionamiento es especialmente relevante para nuestro tema en la medida en que, como hemos dicho, la "militancia por los derechos humanos" ha estado tradicionalmente (aunque no solamente) ligada a las experiencias personales o familiares de quienes fueron víctimas de la represión. Como señalamos, este cuestionamiento ha sido ampliamente desarrollado por Vezzetti (2009) y supone, de manera sintética, que los criterios de este subconjunto de actores a la hora de intervenir públicamente sobre el pasado estarían signados por una "memoria literal" (Todorov, 2000) de carácter repetitivo y traumático que resulta incapaz de extraer "lecciones universales".

En relación con ello, nos interesa destacar una vez más que de la trayectoria previa o, en este caso, de la identificación de determinados funcionarios o trabajadores como "afectados directos" o "sobrevivientes" no es posible desprender un tipo de intervención unívoca. En efecto, las formas en

que los directores o secretarios conceptualizaron o entendieron su nuevo rol fueron variadas y estuvieron fuertemente influenciadas por sus trayectorias posteriores a la dictadura (por ejemplo, su conversión en “expertos” en el área de derechos humanos a nivel trasnacional). En este sentido, la hipótesis contraria se basa, en realidad, en una posición esencialista respecto de las identidades que pretende derivar de un determinado emplazamiento una lógica de acción excluyente; tanto el trabajo de campo como la bibliografía especializada en el análisis procesual del compromiso individual muestran de qué modo diferentes identificaciones conviven en distintas posiciones de sujeto dando como resultado diferentes lógicas, justificaciones, motivos y modalidades de acción a lo largo del tiempo (Fillieule, 2015).

Incorporación de trabajadores que no contaban con trayectorias previas en derechos humanos al Estado:

La modalidad arriba señalada según la cual militantes o activistas de derechos humanos se incorporaron a la estructura burocrática administrativa del Estado es tal vez la modalidad de incorporación que más resonancia ha tenido en la esfera pública. Sin embargo, como señala Vázquez, la cuestión de la militancia en el Estado durante los gobiernos kirchneristas implica considerar no sólo aquellos “militantes *en* la gestión” sino también aquellos “militantes *de* la gestión”, es decir, trabajadores que sin poseer trayectorias previas en el campo de los derechos humanos se convirtieron en “militantes” en el contexto de su trabajo en el Estado. En estos casos, el carácter militante no está asociado a una organización sino a un modo de trabajar: es una militancia desde, por y para el Estado (Vázquez, 2014, 2015, 2018) que se fue construyendo progresivamente en el desarrollo de la propia tarea. Este es el caso de algunos de los trabajadores y trabajadoras jóvenes que ingresaron los Equipos de Relevamiento y Análisis de los Archivos de las Fuerzas Armadas y al Programa de Modernización de Archivos dependientes del Ministerio de Defensa como del personal de la Dirección Nacional de Sitios de Memoria y también remite a parte de quienes conformaron la Comisión de Trabajo por la Reconstrucción de Nuestra Identidad. En los tres casos, los trabajadores

relatan tener alguna afinidad previa con la causa de los derechos humanos pero no haber militado de manera orgánica en organismos. En su mayoría, los ingresos se produjeron gracias a redes de contacto personales o universitarias y en algunos casos hubo trabajadores que se desempeñaban en otras áreas de la administración pública y comenzaron a trabajar en "políticas de memoria" como producto de "pedidos de pases".

De un modo análogo a lo documentado por Vázquez (2018) en estos casos la importancia del Estado como objeto y parte integrante de esta nueva militancia es asociada a una experiencia generacional. Al igual que en el caso de los funcionarios-activistas de "segunda generación" estos trabajadores destacan haber experimentado una vinculación con el Estado en su faceta "neoliberal" o "represiva", durante los años noventa que los llevó no sólo a revalorizarlo durante el kirchnerismo, sino además a reivindicar políticamente ser parte de aquél. En el mismo sentido, estos trabajadores destacaban el "carácter reparatorio" de las "políticas de memoria, verdad y justicia" llevadas adelante durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, al tiempo que reconocían la legitimidad moral de los organismos de derechos humanos como "baluartes" de ese proceso. En este sentido, también para estos actores la "militancia en el Estado" durante los gobiernos kirchneristas se imbrica con la militancia por la memoria, según una narrativa que ubica ambas causas en una relación de continuidad. A modo de síntesis de esta posición, señalaba el coordinador de la Comisión de Trabajo por la Reconstrucción de Nuestra Identidad:

> Nosotros somos una generación que ha luchado contra el neoliberalismo en la década de los '90, cortando calles, rutas… hemos ingresado a la administración pública con la gestión de Néstor Kirchner y hemos continuado y profundizado con la compañera Cristina Fernández de Kirchner. Y el trabajo de recuperar los legajos de los compañeros, de recuperar su identidad, de recuperar su historia no fue una acción inocente, digamos, ¿no?, fue una acción con un profundo sentido de reivindicar a los compañeros que para nosotros fueron los compañeros que lucharon por un proyecto de liberación nacional que nosotros estamos convencidos que estamos defendiendo ahora, que defendimos durante el gobierno de Cristina, reconstruyendo el Estado para todos los argentinos (Coordinador de la Comisión de Trabajo por la Reconstrucción de Nuestra Identidad, en Acto en conmemoración de los trabajadores desaparecidos de Encotel, Centro Cultural Kirchner, 14 de noviembre de 2015).

Por otra parte, dentro de este subconjunto se repite lo señalado arriba en relación con el predominio de una "ética del compromiso" según la cual la tarea excedía su carácter específicamente laboral para re-significarse como una forma de entrega personal a la causa. Ello no significa, al mismo tiempo, que los saberes expertos o "técnicos" no hayan sido considerados valiosos: al contrario; como hemos visto, en su mayoría estos trabajadores poseían un perfil profesional (son graduados universitarios en carreras sociales o humanidades) para los cuales el trabajo en el Estado emergió no sólo como un espacio de activismo sino además como un destino profesional y laboral posible.

En este sentido, es necesario introducir otra variable que se vincula con la progresiva incorporación de saberes específicos o expertos a la formulación de "políticas de memoria". Si bien tradicionalmente el conocimiento técnico no ha sido considerado suficiente para fundar una posición legítima en el campo de los derechos humanos —según señala Guglielmucci (2013), para alcanzar ese *status* es necesaria la integración a una misma "comunidad moral" cuyos integrantes se reconocen mutuamente como "compañeros comprometidos"—, en los casos analizados se observa de qué modo la acreditación y posesión de ciertos saberes fue una condición para el ingreso o bien de qué modo quienes ya habían ingresado optaron por profesionalizar sus tareas fueron adquiriendo competencias y saberes específicos. Esto ocurrió en el ámbito de la conservación y preservación de los sitios de memoria, el armado de contenidos educativos y la investigación con fines históricos o judiciales, entre otras. Más aún, como hemos visto en el capítulo cuatro, esta combinación de activismo con producción de saberes expertos explica en gran medida la productividad que alcanzaron los archivos militares en el período analizado así como la posibilidad de ser "traspasados" a la esfera judicial. De hecho, si bien estos "trabajadores de la memoria" no ocuparon cargos jerárquicos y sus condiciones de contratación fueron más bien precarias (con renovaciones de contratos anuales o semestrales), sin duda constituyeron un actor imprescindible para comprender las modalidades de intervención de las agencias estatales analizadas en el período y su permanencia en el tiempo.

8.3. El “efecto Estado” en la construcción de “políticas de memoria”

Una última cuestión que nos interesa abordar en relación con las condiciones político-institucionales de desarrollo de las “políticas de memoria” refiere a la especificidad que supone la intervención de las agencias estatales a la hora de lidiar con las huellas del pasado. Ello implica considerar los efectos de verdad y generalidad que se siguen de la intervención de estas agencias o, mejor dicho, del accionar del “Estado” concebido no como una red de arreglos institucionales concretos sino como entidad “metafísica” (Mitchell, 1991). En efecto, como nos hemos esforzado por mostrar a lo largo de la tesis, el hecho de que las diferentes iniciativas no hayan sido el producto de una acción burocrática o una voluntad uniforme no implica que éstas no hayan tenido un papel diferencial respecto de otros actores sociales. En ese sentido, aun si metodológicamente compartimos el principio de desagregar el “Estado” para ver efectivamente qué sucede “adentro” (y, como hemos visto, “adentro” conviven una variedad de lógicas –no solamente asociables a lo “estatal”) las tres iniciativas que hemos analizado indican que, tanto quienes las producen como quienes las demandan, atribuyen a estas políticas un efecto de “verdad” e incluso de “reparación” que es distintivo de otras iniciativas sociales. Para resumirlo una vez más aquí, entendemos que esa distinción se asocia a la capacidad que portan las agencias estatales de producir una enunciación que parece situarse “más allá” de todo punto de vista, o dicho de otro modo, de manera “separada” de otras enunciaciones. Esta capacidad se vincula como hemos visto, a la institución de nuevas clasificaciones sociales por medio de la sanción de normativa (capítulo dos), el despliegue de una “escenografía de lo oficial” que permite inscribir los discursos en un régimen de generalidad (capítulo tres) y la producción de “verdad” en sitios de memoria y “prueba jurídica” en los documentos (capítulos cuatro y seis).

Así, desde una perspectiva general, este tipo de intervenciones configuraron un avance inédito en relación con el tratamiento estatal a las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la última dictadura militar. Este tipo de políticas permitieron (junto con otras) fortalecer el consenso condenatorio respecto del terrorismo de Estado, entendido como un plan sistemático de desaparición de personas. Del mismo modo, el involucramiento

del Poder Ejecutivo Nacional fortaleció la política de juzgamiento penal de los crímenes cometidos al mismo tiempo que construyó una discursividad que apuntaba al reconocimiento de diferentes responsabilidades en torno a lo sucedido y la puesta en práctica de "políticas reparatorias" como las que aquí hemos analizado. En este marco, las memorias que hasta el momento habían sido sostenidas solo por una parte de la sociedad argentina alcanzaron un estatuto más general que, como producto de un "efecto Estado" las dotó de un sentido de verdad y permanencia más fuerte. Ello contribuyó a cimentar un sentido común en torno del pasado reciente cuya puesta en tela de juicio de manera abierta constituyó, a lo largo de los años estudiados, un ejercicio marginal. A su vez, como saldo positivo de ese proceso, la intervención de las agencias estatales aportó recursos materiales y organizativos que permitieron a los diferentes actores involucrados sostener y acrecentar el archivo común que guarda la memoria de los crímenes, de un modo que resulta decisivo frente a los intentos —cada vez más frecuentes— de relativizar y revisar el pasado.

Ahora bien, una comprensión profunda de este proceso implica destacar que este "efecto Estado" no es automático, sino que es el producto de un proceso de construcción en el marco del cual el sentido de esa perspectiva estatal debe ser continuamente renegociada. En términos teóricos, la necesidad de no asumir *a priori* un "efecto de estatalidad" se justifica en el reconocimiento de que aquello que llamamos "Estado", no es la entidad estable y homogénea que aparenta ser, sino una "red de arreglos institucionales y prácticas políticas difusas que adquieren la apariencia de una forma abstracta coherente que traza fronteras permeables, inestables pero no ilusorias (…) por medio de las cuales se mantiene el orden social y político" (Mitchell, 2015: 162). Dicho de otro modo, más allá de la "ilusión cohesionadora" (fundamental para comprender el "efecto Estado") las agencias estatales se constituyen empíricamente como un entramado de prácticas sociales concretas que pueden ser desafiadas por otros actores sociales.

De hecho, esta dualidad constitutiva entre el "Estado" como ilusión cohesionadora y sus prácticas concretas se expresó a lo largo de la tesis de modos diversos: por un lado, en el vínculo "poroso" ya referido entre las agencias estatales con los organismos de derechos humanos y otras organizaciones, así como en la disputa por el control civil de los archivos de las

Fuerzas Armadas, según una lógica que suponía un conflicto intra-estatal por la "soberanía" de los documentos. Asimismo, la dualidad referida se hizo visible en el modo en que la existencia de un proceso de desparticularización (es decir la progresiva enunciación por parte de las agencias estatales de una memoria "oficial" que se pone "más allá de todo punto de vista") se vio tensionada por las modalidades específicas que asumió el desarrollo de las políticas; en particular, lo que hemos indicado arriba en torno al anudamiento entre la "militancia por la memoria" y la adscripción al "proyecto político kirchnerista". Como hemos mostrado en el análisis de los actos conmemorativos de "reparación" de legajos laborales, asistimos en ellos a una suerte de refuerzo entre dos lógicas que se tensionan entre sí: por un lado, aquella legitimidad que proviene de la adscripción a la "causa de la memoria" desde una perspectiva "militante" y por otro, la autoridad inherente a la posición del funcionario como "delegado" en el marco de una "escenografía de lo oficial" en el sentido de Bourdieu (2014). La superposición entre ambas (o en otros términos, este modo "militante" de habitar el Estado según el cual los/as funcionarios/as son también activistas de la causa) constituyó uno de los ejes que signó la producción de "políticas de memoria" durante los gobiernos kirchneristas y por contrapartida, operó como uno de los principales blancos de críticas de la oposición.

Dicha superposición expresa un conflicto tal vez irresoluble entre aquellos efectos atribuidos al Estado como "invención organizativa" ("verdad", enunciación "desparticularizada" u "oficial" etc.) y sus prácticas concretas, es decir, las modalidades específicas que adquieren los procesos de implementación de "políticas de memoria" según los actores que las llevan adelante y sus inscripciones socio-políticas. Como lo hemos analizado en el capítulo siete, fue precisamente este conflicto lo que se puso en escena en la discusión sobre el "traspaso" de los sitios de memoria: decir que el kirchnerismo se había "apropiado" de los derechos humanos (como señalaban los principales partidos de la oposición) equivalía a exigir por parte del "Estado" un lugar de enunciación "neutral" que no debía solaparse con las características concretas de quienes lo ocupaban.

El problema es que, como lo hemos intentado mostrar, aquello que llamamos "políticas de memoria" no constituye la aplicación de principios

universales abstractos. Por el contrario, la capacidad de enunciar un sentido que se pone “más allá de todo punto de vista” (es decir, la potencialidad de desparticularizar las versiones del pasado) debe ser continuamente construida y renegociada por los agentes involucrados. En ese sentido compartimos con Feld la idea de que las “políticas de memoria” involucran “tensiones, conflictos, proyectos truncos, avances y retrocesos en diferentes direcciones” y que, por lo tanto, lo que llamamos de ese modo no es sino “la resolución, muchas veces parcial, provisoria e inestable, de tales conflictos en alguna dirección concreta” (2017: 109). Esa dirección resulta inescindible de las coyunturas e identidades políticas de quienes las llevan adelante así como del establecimiento de una narrativa dominante respecto de otras posibles.

Al mismo tiempo y para terminar, es pertinente señalar que este proceso de incorporación tal como lo hemos descripto supuso algunos límites precisos. Desde el punto de vista de los movimientos sociales, por un lado, algunos autores como Alonso (2011, 2013) han hecho hincapié en el modo en que la metabolización de las demandas del movimiento de derechos humanos por parte de las agencias estatales desactivó su potencial contestatario, al tiempo que efectivamente supuso rupturas de carácter interno. En esa línea pueden ser leídas la disolución del Instituto Espacio para la Memoria de la Ciudad de Buenos Aires y las disputas entre los organismos “independientes” *versus* aquellos organismos que manifestaban su adhesión al gobierno nacional, según lo hemos visto en el capítulo siete.

Por otro lado, lo cierto es que la capacidad de las agencias estatales de articular una memoria del pasado reciente (y por ende las claves narrativas que resultan de esa articulación) se encuentran limitadas por la naturaleza específica del Estado como modo de organización política. En efecto, hay memorias que, por la amenaza que representan al poder constituido, no pueden ser metabolizadas. Ejemplos de ello son las “memorias subterráneas” a las que nos hemos referido en el capítulo tres, así como las memorias de la “militancia setentista” en su relación con la lucha armada y particularmente en lo que ésta tenía de anti-liberal y anti-capitalista. Del mismo modo, queda por fuera de la memoria dominante el trazado de las continuidades entre la maquinaria represiva que operó durante la dictadura militar y las funciones represivas del Estado presente, lo cual se expresó en casos como la

desaparición de Jorge Julio López y la designación del Gral. Milani como Jefe del Ejército. Tales límites deben comprenderse como parte de la narrativa instituida por el kirchnerismo como identidad política (según la sintetizaremos en el próximo apartado), pero sobre todo en relación con la naturaleza de las agencias estatales como agentes de memoria.

8.4. Marcos de la memoria durante el kirchnerismo: límites, continuidades y transformaciones

En el apartado anterior hemos retomado el modo en que la causa de la memoria se anudó simultáneamente con un modo de habitar las agencias estatales signado por el activismo y una identidad política anclada en el proceso político kirchnerista.

Este anudamiento resultó clave, según hemos visto, para la conformación de una "comunidad de recuerdo" en el marco de la cual los agentes estatales (legisladores/as, funcionarios/as y trabajadores/as de la administración pública) se identificaban como "compañeros" de las víctimas del terrorismo de Estado. Ello implicó, al mismo tiempo, la puesta en funcionamiento de una serie de marcos de interpretación del pasado con sus continuidades y rupturas respecto de regímenes de memoria previos, así como el trazado de ciertos límites que definían —en palabras de Jelin (2002)— quiénes recuerdan, qué recuerdan y para qué.

En términos de las continuidades, a la hora de analizar la práctica de memoria propuesta por la Comisión de Trabajo por la Reconstrucción de Nuestra Identidad, hemos visto de qué modo la reivindicación de los trabajadores estatales se mantuvo en los límites de una narrativa humanitaria sancionada por la CONADEP, según la cual los desaparecidos eran representados como víctimas según una clasificación socioprofesional que soslayaba las pertenencias a las diferentes organizaciones políticas o político militares. Asimismo hemos señalado cómo (aun en el marco de una narrativa que se propuso reparar las violencias perpetradas por el Estado en el ámbito laboral) lo que se reconoció primariamente como crimen —y por ende quienes fueron reconocidos como víctimas— fue la desaparición o el asesinato, de un modo que soslayaba las violencias ejercidas por las diferentes agencias

estatales en utilización de sus funciones legales o burocráticas durante la dictadura.

En esa línea, al analizar la política de "lugarización" de la memoria hemos visto que las iniciativas desarrolladas por los gobiernos kirchneristas se montaron sobre una modalidad de marcación urbana de los ex centros clandestinos de detención que venía siendo desarrollada por organismos de derechos humanos desde mediados de la década del noventa. La continuidad y progresiva transformación de esta política por parte del Estado nacional (así como la visibilidad que fue adquiriendo a lo largo de los años) refiere al modo en que el centro clandestino de detención continuó siendo y, de hecho, se fortaleció como lugar nodal a partir del cual se encuadró la memoria pública del terrorismo de Estado. En ese sentido, la rememoración del crimen y la modalidad represiva (centrada en la tríada secuestro, tortura y desaparición) constituyeron un elemento dominante en los marcos de interpretación del pasado.

Esta centralidad persistente de la figura de la "víctima" se anuda a la pregnancia que tuvo en el país el paradigma judicial como modo de procesamiento del pasado desde la transición a la democracia hasta la actualidad (Vezzetti, 2002). La continuidad de esa pregnancia se advierte especialmente en el caso de la política de "apertura" de los archivos de las Fuerzas Armadas, en la medida en que, como hemos visto, la re-configuración de estos archivos estuvo centrada en la necesidad de traspasarlos a la esfera judicial. Más aún, como nos hemos esforzado por mostrar, las diversas estrategias adoptadas por los Equipos de Relevamiento y Análisis estuvieron destinadas a dar respuesta a la demanda por "apertura" de los archivos, entendida no sólo como un estado de la normativa de acceso a los documentos sino, sobre todo, como la producción de "prueba" y la obtención de "verdad" en torno a los crímenes cometidos.

Ahora bien, en términos de ruptura con esta narrativa hemos destacado diversos elementos. Por un lado, las disputas que se dieron en torno a la periodización de la "ley de presos políticos" y la instalación del período "1955-1983" como eje narrativo refieren a la transformación de la categoría de "víctima del terrorismo de Estado" según una lógica que identificaba al peronismo como principal blanco represivo del Estado. Esta ampliación da

cuenta de un proceso activo de encuadramiento de las memorias encarado por el bloque oficialista (y en relación con el Decreto n°1199, por el Poder Ejecutivo) cuya relectura consistía en interpretar en clave de "terrorismo de Estado" con sus respectivas "víctimas" la sucesión de órdenes institucionales (y sus interrupciones) que se dieron en la Argentina desde mediados de siglo XX. Así, la Ley 26.564 dio existencia jurídica y reconocimiento moral a la categoría de "víctima del plan CONINTES" o "víctima del golpe militar de 1955" y el Decreto n° 1199 que sancionó lo actuado por la Comisión de Trabajo por la Reconstrucción de Nuestra Identidad, instituyó la figura del "trabajador estatal víctima del terrorismo de Estado" en el marco de una relectura del pasado reciente donde "1955 – 1983" representaban un bloque temporal unificado.

Por otro lado, como hemos visto en relación con los actos conmemorativos en el capítulo tres, esta narrativa tomó gran parte de su fuerza en una reactualización de la memoria de la llamada "militancia setentista" que apuntó a reescribir los sentidos de aquella década asignando un nuevo lugar para el peronismo otrora "satanizado e impronunciable" (Casullo, 2005 en Lesgart, 2006: 183). En línea con las "memorias militantes" construidas desde mediados de la década del noventa, esta narrativa abandonó la centralidad que había adquirido durante los ochenta la representación de los desaparecidos como "víctimas inocentes" para reivindicar el carácter políticamente comprometido de aquella generación. Particularmente, ello implicó una suerte de identificación de las luchas de la "militancia setentista" con el "proyecto político kirchnerista" y con ello, la decodificación de esas "luchas" en clave de "derechos humanos". De este modo, el kirchnerismo se construyó como "heredero" de esa militancia obliterando aquellos aspectos que suponían un obstáculo para su reapropiación en el presente y acentuando su carácter "fraternal, afectivo, heroico y voluntarista" (Montero, 2012).

Ello se expresó también en la emergencia de la categoría del "trabajador estatal víctima del terrorismo de Estado". El análisis de dicha categoría y su inscripción en la práctica de memoria propuesta por la Comisión de Trabajo por la Reconstrucción de Nuestra Identidad nos permitió indicar la existencia de una suerte de transferencia simbólica según la cual la noción cristalizada del compromiso con ciertos valores que se atribuían a la militancia de los desaparecidos resultó proyectada sobre su trabajo en el Estado. Dicho de otro

modo, la reivindicación de la figura del "trabajador estatal desaparecido" permitió derivar del trabajo en las agencias estatales un compromiso político que se identificaba en el presente con el "proyecto kirchnerista"; anudando, como hemos dicho, la causa de la memoria con una identidad política concreta. Lo interesante es que esta narrativa funcionó hacia dentro y hacia fuera de las agencias estatales: "hacia adentro" porque constituyó un recurso simbólico que permitió dotar de sentido a un conjunto de prácticas "grises" o "burocráticas" cuyo desprestigio había corrido de manera paralela al desprestigio del Estado durante la década del noventa; y "hacia afuera" en la medida en que permitió consolidar las fronteras del kirchnerismo como identidad política.

A su vez, esta relectura estuvo acompañada de una renovada identificación entre "dictadura" y "neoliberalismo" en una lógica según la cual el proyecto represivo de la primera constituía una "herramienta" para instaurar un nuevo régimen social (el "neoliberalismo"), respecto del cual el kirchnerismo y su concepción del "Estado" se situaba como antítesis. Ello implicó la construcción de otra temporalidad que, como señala Montero, representa las últimas tres décadas como un "bloque temporal unificado" que va de 1976 con el comienzo de la dictadura militar al año 2001, identificado como momento de eclosión del régimen neoliberal. Dicho bloque conforma un "pasado denostado" (Montero, 2012: 85) que los tres gobiernos kirchneristas vendrían a clausurar. Así, hemos visto que una de las coordenadas emergentes a la hora de difundir las denominadas "Actas Secretas de la Dictadura", fue la categoría de "dictadura cívico-militar" como eje explicativo de lo sucedido. Si bien no se trata de una categoría novedosa, la misma fue retomada y difundida por el gobierno de Cristina Fernández en el marco de las disputas que el gobierno sostenía con un conjunto de actores políticos y empresariales. Por medio de esta noción de "dictadura cívico militar" el gobierno subrayaba el apoyo prestado por las clases dominantes (de "ayer" y de "hoy") a la Junta Militar, en un esquema según el cual las Fuerzas Armadas habían sido el "brazo ejecutor" de una política diseñada para beneficiarlas.

Según lo hemos analizado, la difusión de las "Actas Secretas" estuvo signada por una lógica según la cual el gobierno se proponía presentar las "pruebas" que sostenían esta narrativa, que tuvo su expresión institucional en la creación de una Comisión Bicameral que tenía como función identificar "las

complicidades económicas y financieras durante la última dictadura cívico militar" y otras iniciativas.

Ahora bien: el trazado de una "comunidad de recuerdo" como la descripta implica no sólo un proceso de identificación interna sino también de diferenciación externa, en el marco del cual determinados elementos actores o narrativas resultan excluidos o denegados. Uno de estos elementos es la existencia de "memorias subterráneas" que guardan el recuerdo de responsabilidades micropolíticas en el desarrollo de los procesos represivos, tal como fue referida en el marco de la práctica de memoria propuesta por la Comisión de Trabajo por la Reconstrucción de Nuestra Identidad. Como hemos visto, estas memorias resultaban disonantes respecto del discurso dominante sostenido en los actos conmemorativos analizado en el capítulo tres. En efecto, a pesar de la pregnancia alcanzada por el término "dictadura cívico–militar" como clave interpretativa, la persistencia subterránea de estas memorias indica que el análisis de las responsabilidades compartidas entre civiles y militares continúa eludido, o mejor dicho, se restringe a determinados grupos de poder cuya identificación en el presente depende de las coyunturas políticas.

Esta tensión también se hizo evidente a la hora de analizar los procesos de trabajo en los archivos de las Fuerzas Armadas como "territorios de memoria". En este caso, las disputas por el control civil de los documentos (tanto en un plano institucional como en el cotidiano de la tarea de los Equipos de Relevamiento) muestran hasta qué punto lo "civil" y lo "militar" continúan siendo polos de una disputa atravesada por los traumas del pasado que permanece irresuelta en el presente, en un sentido que abona lo sostenido por Frederic (2013).

Por otra parte, las fronteras de la "comunidad de recuerdo" se trazan, como hemos visto, respecto de aquellos actores que representan, desde el punto de vista de un "nosotros", "el plan económico de la dictadura". Por medio de esa diferenciación, este "nosotros" que recuerda se presenta como antítesis de un "pasado denostado" que va desde la dictadura militar a los gobiernos neoliberales, y que se constituye al mismo tiempo como "un pasado que no pasa". Con ello nos referimos a una cualidad *perenne* del pasado que permite a quienes integran la comunidad de recuerdo reactualizar su lectura de la conflictividad política, social o económica del presente en función de una

determinada selección interpretativa. Dicho de otra manera, la memoria construida de este modo permite identificar un conjunto de antagonismos y "luchas" que se suspenden en el tiempo y cuya genealogía fundamenta adhesiones políticas en el presente.

Una segunda frontera se traza respecto del carácter parcial que asume la reivindicación del compromiso político atribuido a la militancia de los años setenta. Esta parcialidad resulta inseparable de cualquier ejercicio de memoria en la medida en que, como sabemos, todo proceso de rememoración se sitúa en un espacio asediado por múltiples temporalidades. En este sentido, si por un lado es cierto que dicha reivindicación implicó cierta repolitización de las víctimas del terrorismo de Estado, también es necesario considerar la exclusión de otras memorias asociadas al horizonte revolucionario que signó las décadas del sesenta y setenta. Esta frontera apunta a la continuidad de la narrativa humanitaria como condición de interpretación de la violencia política (desde la transición democrática a nivel local y desde la posguerra fría a nivel global) y por el otro, los límites que suponen los marcos de memoria cuando éstos se articulan desde las agencias estatales en el sentido en que lo hemos indicado en el apartado anterior.

Teniendo en cuenta lo dicho, podemos decir que la "oferta de sentido temporal" que se articuló desde las agencias estatales analizadas puede sintetizarse en la continuidad de una narrativa humanitaria tensionada por formas específicas de re-politización del pasado. Esta continuidad no es exclusiva de la Argentina en los años aquí analizados, sino que se inscribe en un proceso global de producción de memorias centradas en las víctimas, así como en la noción de "derechos humanos" entendidos como un conjunto de principios abstractos y universales. A la inversa, la repolitización de esa narrativa respondió a un conjunto de modulaciones locales que apuntaron a restituir algunas dimensiones de la conflictividad social y política del pasado, releídas desde las coordenadas del presente. Especialmente, nos referimos a un conjunto de elementos ya mencionados: la reposición de una tradición binaria donde el peronismo era identificado como principal blanco represivo del Estado, el trazado de una continuidad entre dictadura militar y neoliberalismo (respecto de la cual el kirchnerismo se presentaba como antítesis), la reivindicación del "compromiso político" de la "militancia setentista" como un

modo de habitar el Estado y la decodificación de sus luchas en clave de “derechos humanos”.

Desde ese punto de vista, los marcos narrativos desplegados en las “políticas de memoria” aquí analizadas contribuyeron a dotar de un sentido histórico a una identidad política, en la medida en que permitieron inscribirla en una determinada selección del pasado (esto es, a una memoria) y con ello a una promesa de futuro.

Ahora bien, la constitución de esta narrativa desde las agencias estatales con las características que hemos analizado deja abiertos algunos interrogantes que nos gustaría consignar para terminar. Si por un lado la investigación nos ha permitido caracterizar de manera más o menos integral el desarrollo de las “políticas de memoria” durante el período propuesto (y al mismo tiempo identificar los marcos de memoria que resultaron predominantes) una de las cuestiones que se abren se vincula con los efectos concretos o, podríamos decir la “recepción”, de las “políticas de memoria” aquí analizadas. Ello supone no sólo un desafío metodológico (¿cómo medir la eficacia de una “política de memoria”?) sino también algunos problemas teóricos. Así, una de las preguntas relevantes a plantear en el futuro se vincula con dar cuenta de cuáles fueron los límites que la narrativa enunciada desde las agencias estatales en el período alcanzó a la hora de interpelar a los distintos sectores de la sociedad. Más específicamente: ¿era la “comunidad de recuerdo” a la que nos hemos referido a lo largo de la tesis compatible con la formulación de una “memoria nacional” (como sea que la entendamos), o por el contrario, se encontraba restringida a la adhesión a una determinada identidad política? Y a la inversa: ¿constituye la “Nación” un marco de memoria necesario o indispensable para traducir políticamente las memorias del terrorismo de Estado? ¿O por el contrario, son las identidades políticas los vehículos más indicados para hacerlo? Por último: ¿era la ocupación del Estado por parte de los gobiernos kirchneristas una condición de la existencia de esta “comunidad de recuerdo” que hemos descripto? ¿Dónde o cómo ubicar esa “comunidad” en la actualidad?

El carácter necesariamente histórico, contingente y disputable de las memorias no nos permite dar a estas preguntas una respuesta definitiva, aunque la presente tesis nos ha permitido precisar la índole de los problemas.

En este punto la investigación permanece —al igual que los sentidos del pasado— relativamente abierta.

Bibliografía

Abad, S. y Cantarelli, M. (2010). *Habitar el Estado*. *Pensamiento estatal en tiempos a-estatales*. Buenos Aires:Hydra

Aboy Carlés, G. (2005). Populismo y democracia en la Argentina contemporánea. Entre el hegemonismo y la refundación. *Estudios Sociales. Revista Universitaria Semestral. Santa Fe, Universidad Nacional del Litoral, XV*

Adamoli, M., Farías, M., y Flaschland, C. (2015). Educación y memoria. La historia de una política pública. *Historia de la Educación. Anuario SAHE, 6*(2), 225-241.

Agostini, V., Alves, E., y Pignatello, V. (2015). Archivos y Derechos Humanos: consideraciones sobre el acceso a la información en la Argentina actual. *Actas del VIII Seminario Internacional Políticas de la Memoria*, Buenos Aires: Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti.

Agostini, V. y Lettieri, L. (2016). Cuando la burocracia atenta contra lo clandestino. Una mirada sobre los documentos de la Armada Argentina. *Actas del IX Seminario Internacional Políticas de la Memoria*, Buenos Aires: Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti.

Águila, G. (2015). Violencia política, represión y actitudes sociales en la historia argentina reciente. Pensar con la Historia desde el siglo XXI. *XII Congreso de la Asociación de Historia Contemporánea* (págs. 5569-5588). Madrid: Universidad Autónoma de Madrid.

Alonso, L. (2011). Vaivenes y tensiones en la institucionalización de las memorias sobre el terror de Estado. El caso de Santa Fe, Argentina, entre 1983 y la actualidad. *Cuadernos de Historia. Serie Ec. y Soc.*(12), 35-70.

Alonso, L. (2013). Las luchas pro derechos humanos en Argentina: de la resistencia antidictatorial a la dispersión del movimiento social. *Observatorio latinoamericano*(12), 104-120.

Alonso, L. (2013). Monumentalidad, acción contenciosa y normalización en el movimiento argentino por los derechos humanos. Tendencias generales y casos locales. En J. A. Bresciano, *La memoria histórica y sus configuraciones temáticas. Una aproximación interdisciplinaria* (págs. 409-442). Montevideo: Cruz del Sur.

Alonso, L. (2014). El estudio de las luchas pro derechos humanos en Argentina: problemas de enfoque en torno a la categoría de movimiento social. En P. Flier, *Dilemas, apuestas y reflexiones teórico-metodológicas para los abordajes en historia reciente.* La Plata: Universidad Nacional de La Plata.

Alves, E. (2017). Impacto de las políticas de Justicia Transicional en el rol social del archivero: El caso de los Archivos Generales e Históricos de las Fuerzas Armadas y la profesionalización de su personal. Logros, límites y potencialidades (2012-2016). XII Congreso de Archivología del Mercosur "Archivos y archiveros en la sociedad del conocimiento": Universidad Nacional de Córdoba, Argentina.

Balé, C. (2016). La Comisión de Trabajo por la Reconstrucción de Nuestra Identidad y los procesos de encuadramiento estatal de las memorias sobre la represión. *Tesis de Maestría*. Buenos Aires, Argentina: Instituto de Altos Estudios Sociales. Universidad Nacional de San Martín.

Balé, C. (2018). La construcción de una 'comunidad de recuerdo': los actos conmemorativos de 'reparación' de legajos laborales de empleados estatales desaparecidos y las transformaciones en la narrativa en torno al pasado reciente argentino. *Sociohistórica* (41), e044.

Balé, C. (2018a). *Memoria e identidad durante el kirchnerismo: la "reparación" de legajos laborales de empleados estatales desaparecidos.* La Plata; Posadas; Los Polvorines: Universidad Nacional de La Plata; Universidad Nacional de Misiones; Universidad de General Sarmiento. Obtenido de https://www.libros.fahce.unlp.edu.ar/index.php/libros/catalog/book/117

Balé, C. (2018b) Los procesos de construcción de una "comunidad de recuerdo": un análisis en torno al "acto homenaje" a las trabajadoras desaparecidas en el Instituto de Ayuda Financiera para el Pago de Retiros y Pensiones Militares (En línea). *Aletheia*, 8(16).

Balé, C. (2018c). Usos del archivo y políticas de la memoria: un análisis del proceso de "apertura" de los archivos militares en Argentina (2003-2015), *Nuevo Mundo Mundos Nuevos [En línea]*, Cuestiones del tiempo presente. URL: http://journals.openedition.org/nuevomundo/73860

Balé, C. (2018d). El terrorismo de Estado como gran Otro de la democracia. Algunas reflexiones sobre la lógica de los derechos humanos en Argentina en Gabriel Vommaro (comp.) *Estado, democracia y derechos en Argentina: controversias en torno a los años kirchneristas*. Los Polvorines: Ediciones UNGS, 207 - 224.

Barros, M., y Morales, V. (2017). La lucha por los derechos humanos en la Argentina: redefiniciones, avances y desafíos en el nuevo milenio. *A contracorriente, 14*(3), 110-136.

Barros, M. y Dain, A. (2012). El kirchnerismo y la desmesura de lo político. En A. Dain, M. Barros, y M. V. Morales, *Escritos K.* Buenos Aires: Eduvim

Barros, M. (2009) Democracia y derechos humanos: dos formas de articulación política Argentina, en *E-l@atina. Revista electrónica de estudios latinoamericanos* Nº 29, Buenos Aires.

Besse, J. (2012). Entre dos muertes. Escansiones y silencios en las primeras narraciones historiográficas acerca del 16 de junio de 1955. *Revista Memória em Rede, 2*(7).

Besse, J., y Varela, C. (2013). Ciudad de Buenos Aires, el 16 de junio de 1955 en dos placas: lugares, silencios e inscripciones. *GEOUSP- espaço e tempo*(33), 254-270.

Besse, J., Crenzel, E., Messina, L., y Wlosko, M. (2013). *Memoria y trabajadores. Cuaderno de trabajo n°2.* Remedios de Escalada: De la UNLa.

Bettanin, C. y Schenquer, L. (2015). "Baldosas por la Memoria": marcas territoriales en las calles de Buenos Aires. *Conversaciones del Cono Sur*, 1(2)

Bohoslavsky, E., y Soprano, G. (2010). *Un Estado con rostro humano. Funcionarios e instituciones estatales en Argentina (de 1880 a la actualidad).* Buenos Aires: Prometeo.

Bourdieu, P. (2014). *Sobre el Estado. Cursos en el Collège de France (1989-1992).* Barcelona: Anagrama.

Bourdieu, P. (1997). Espíritu de Estado. Génesis y estructura del campo burocrático. En P. Bourdieu, *Razones prácticas. Sobre la teoría de la acción.* Barcelona: Anagrama.

Bull, A. C., y Hansen, H. L. (2016). On Agonistic Memory. *Memory Studies, 9*(4), 390-404.

Camou, A., y Pagani, L. (2017). *Debates teóricos y metodológicos actuales sobre las políticas públicas.* La Plata: Universidad Nacional de La Plata.

Carnovale, V. (2015-2016). Instantáneas: los juicios al Mal. Verdad, Justicia y Derechos Humanos en Argentina. *Políticas de la memoria. Anuario de Investigación del CEDINCI*(16).

Carnovale, V. (2006). Memorias, espacio público y Estado: la construcción del museo de la memoria. *Estudios AHILA de Historia Latinoamericana*(2). Obtenido de http://riehr.com.ar/archivos/Investigacion/Carnovale%20-%20Museo%20de%20la%20ESMA.pdf

Casullo, N. (2006). Memoria y revolución. *Lucha Armada en la Argentina* (6).

Catela, L. D. (2002). El mundo de los archivos. En L. D. Catela, y E. Jelin, *Los archivos de la represión: documentos, memoria y verdad* (págs. 195-219). Madrid: Siglo XXI.

Catela, L. D. (2007). Etnografía de los archivos de la represión en Argentina. En M. Franco, y F. Levín, *Historia reciente. Perpsectivas y desafíos para un campo en construcción* (págs. 183-220). Buenos Aires: Paidós.

Catela, L. D. (2011). Pasados en conflicto. De memorias dominantes, subterráneas y denegadas. En E. Bohoslavsky, M. Franco, M. Iglesias, D. Lvovich, (comps.), *Problemas de historia reciente del Cono Sur* (Vol. 2). Buenos Aires: Prometeo.

Catela, L. D. (2014). “Lo que merece ser recordado…” Conflictos y tensiones en torno a los proyectos públicos sobre los usos del pasado en los sitios de memoria. *Clepsidra. Revista Interdisciplinaria de Estudios sobre Memoria*(2), 28-47.

Cefaï, D. (2011). Diez propuestas para el estudio de las movilizaciones colectivas. De la experiencia al compromiso. *Revista de Sociología*(26), 137-166.

Cesareo, M. (2013). "Una estructura jerárquica conservadora se aggiorna: el Proyecto de Modernización de los Archivos del Area de la Defensa del Ministerio de Defensa". XIV Jornadas Interescuelas/Departamentos de Historia: Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza.

Chama, M., y Sorgentini, H. (2011). Momentos, tendencias e interrogantes de la producción académica sobre la memoria del pasado reciente argentino. *Nuevo Mundo Mundos Nuevos*. Recuperado el 30 de Octubre de 2018, de http://nuevomundo.revues.org/62176

Cipoletta, E. y Pak Linares, A. (2012). La valoración documental: situación en la administración pública nacional de Argentina. Disponible en: http://blogs.ffyh.unc.edu.ar/evaluaciondedocumentos/files/2012/06/Elisabet-Cipolletta-Andres-Pak-Linares.pdf. Fecha de consulta: 02 de mayo de 2016.

Crenzel, E. (2008). *La historia política del Nunca Más.* Buenos Aires: Siglo XXI.

Crenzel, E. (2010). La víctima inocente: de la lucha antidictatorial al relato del Nunca Más. En Crenzel, E. (ed.), *Los desaparecidos en Argentina. Memorias, representaciones e ideas (1983 -2008)*. Buenos Aires: Biblos.

Crenzel, E. (2013). Representaciones sobre los obreros desaparecidos: la lectura del Nunca Más. En J. Besse, E. Crenzel, L. Messina, y M. Wlosko, *Memoria y trabajadores. Cuaderno de trabajo n°2* (págs. 21-42). Remedios de Escalada: De la UNLa.

Crenzel, E. (2015). Ideas y estrategias de justicia ante la violencia política y las violaciones a los derechos humanos en la transición política en Argentina (1982-1983). En Feld, C. y Franco, M. (Dirs.) *Democracia, hora cero. Actores, políticas y debates en los inicios de la posdictadura* (pp.81-114). Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.

Croccia, M., Guglielmucci, A., y Mendizábal, M. E. (2008). Patrimonio Hostil: Reflexiones sobre los proyectos de recuperación de ex centros clandestinos de detención en la Ciudad de Buenos Aires. *IX Congreso Argentino de Antropología Social.* Posadas: Facultad de Humanidades y

Ciencias Sociales - Universidad Nacional de Misiones. Recuperado el 24 de septiembre de 2018, de https://www.aacademica.org/000-080/263

Cueto Rúa, S. (2017). Políticas de memoria y pisos de verdad. Una reflexión en primera persona sobre el Programa Educación y Memoria del Ministerio de Educación. *Aletheia, 7*(14). Obtenido de http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/art_revistas/pr.7893/pr.7893.pdf

Cueto Rúa, S. (2018). *Ampliar el círculo de los que recuerdan: La inscripción de la Comisión Provincial por la Memoria en el campo de los derechos humanos y la memoria (1999-2009).* La Plata: Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación ; Los Polvorines : Universidad Nacional de General Sarmiento ; Posadas : Universidad Nacional de Misiones. Obtenido de http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/libros/pm.677/pm.677.pdf

Cueto Rúa, S. (2008). *Nacimos en su lucha, viven en la nuestra. Identidad, justicia y memoria en la agrupación HIJOS-La Plata. Trabajo final de grado*. Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Disponible en: http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/tesis/te.426/te.426.pdf

D'Ottavio, A. (2016). Apuntes sobre conservación material de sitios de memoria emplazados en CCDTyE de la Ciudad de Buenos Aires: desafíos y tensiones. *Cuadernos del IDES*(32), 57-76.

Escolar, C., y Fabri, S. (2015). Políticas y lugares de la memoria. La reconstrucción del pasado en el presente. El caso del Espacio Mansión Seré en Buenos Aires, Argentina. *Mémoria em rede, 7*(13), 29-40.

Ezcurra, V. (2017). ¿Uso o Convicción? Las políticas públicas de la memoria (2003-2007). *Tesis de maestría*. Buenos Aires: Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Escuela de estudios de posgrado.

Fabri, S. (2010). Reflexionar sobre los lugares de memoria: los emplazamientos de memoria como marcas territoriales. *Geograficando, 6*(6), 101-118.

Federman, N. (2015). La política de Archivos de las FF.AA. en el proceso de memoria, verdad y justicia. *Voces en el Fénix*(48), 96-105. Obtenido de www.vocesenelfenix.com

Feierstein, D. (2007). *El genocidio como práctica social. Entre el nazismo y la experiencia argentina*. Buenos Aires: FCE.

Feierstein, D. (2012). *Memorias y representaciones: sobre la elaboración del genocidio*. Buenos Aires: FCE.

Feld, C. (2016). Trayectorias y desafíos de los estudios sobre memoria en Argentina. *Cuadernos del IDES*(32), 4-21.

Feld, C. (2017). Preservar, recuperar, ocupar. Controversias memoriales en torno a la ex-ESMA (1998-2013). *Revista Colombiana de Sociología, 40*(1), 101-131.

Fillieule, O. (2015). Propuestas para un análisis procesual del compromiso individual. *Intersticios. Revista Sociológica de Pensamiento Crítico, 9*(2), 197-212.

Franco, M. (2018). *El final del silencio. Dictadura, sociedad y derechos humanos en la transición (Argentina, 1979-1983).* Buenos Aires: FCE.

Franco, M. (2015). La "teoría de los dos demonios" en la primera etapa de la posdictadura. En M. Franco y C. Feld, (dirs.), *Democracia, hora cero. Actores, políticas y debates en los inicios de la posdictadura.* Buenos Aires: FCE.

Frederic, S. (2013). *Las trampas del pasado: las Fuerzas Armadas y su integración al Estado democrático en Argentina.* Buenos Aires: FCE.

Garbero, V. (2019). Las políticas de la memoria en un ex centro clandestino de detención, tortura y exterminio: el caso del Espacio para la Memoria, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos Campo de la Ribera (Córdoba, Argentina). *Nuevo Mundo Mundos Nuevos* [En línea], Cuestiones del tiempo presente, URL: http:// journals.openedition.org/nuevomundo/75319

Garbero, V. (2017). El terrorismo de Estado en Argentina a escala local. Tensiones entre la memoria dominante y las memorias locales. *Revista Península* (1) XII, Mérida, Yucatán, p. 31 - 53.

Gárgano, C. (2011). La reorganización de las agendas de investigación y extensión del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) durante la última dictadura militar argentina 1976-1983. *Realidad Económica*(258), 120-149.

Garretón Kreft, F., Gónzalez Le Saux, M., y Lauzán, S. (2011). *Políticas públicas de verdad y memoria en siete países de América Latina.* Santiago de Chile: Centro de Derechos Humanos. Facultad de Derecho. Universidad de Chile.

Gené, M., y Vommaro, G. (2011). Por una sociología de lo político. En M. Offerlé, *Perímetros de lo político: contribuciones a una socio-historia de la política* (págs. 7-23). Buenos Aires: Antropofagia.

Gensburger, S. (2016). *National policy, global memory. The commemoration of the "Righteous" from Jerusalem to Paris, 1942-2007.* New York: Berghahn.

Gensburger, S., y Lefranc, S. (2017). *À quoi servent les politiques de mémoire?* Paris: Presses de Sciences Po.

González Bombal, I. (2004). La figura de la desaparición en la refundación del estado de derecho. En M. Novaro y V. Palermo (comps.), *La historia reciente. Argentina en democracia* (págs. 115-131). Buenos Aires: Edhasa.

Greiff, P. d. (2008). Justicia y reparaciones. En C. D. (ed.), *Reparaciones para las víctimas de la violencia política.* Bogotá: Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ).

Guber, R. (2011). La observación participante como sistema de contextualización de los métodos etnográficos: La investigación de campo de Esther Hermitte en los Altos de Chiapas, 1960-1961. *Revista Latinoamericana de Metodología de las Ciencias Sociales*, 1 (2), 60-90. En Memoria Académica. Disponible en: http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/art_revistas/pr.5188/pr.5188.pdf

Guembe, M. J. (2008). La experiencia argentina de reparación económica de graves violaciones a los derechos humanos. En C. D. (ed.), *Reparaciones para las víctimas de violencia política. Estudios de caso y análisis comparado*. Bogotá: Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ).

Guglielmucci, A. (2013). *La consagración de la memoria: una etnografía acerca de la institucionalización del recuerdo sobre los crímenes del terrorismo de Estado en la Argentina.* Buenos Aires: Antropofagia.

Guglielmucci, A. y Messina, L. (2009). Prácticas y discursos en los procesos políticos de marcación de lugares de memoria: la ESMA y el Olimpo desde una perspectiva comparada. *XII Jornadas Interescuelas/Departamentos de Historia*. Departamento de Historia, Facultad de Humanidades y Centro Regional Universitario Bariloche. Universidad Nacional del Comahue, San Carlos de Bariloche.

Guilhot, N. (2011). ¿Limitando la soberanía o produciendo gubernamentalidad? Dos modelos de Derechos Humanos en el discurso político de Estados Unidos. *Revista Política, 49*(1), 219-241.

Guilis, G. (2005). *El concepto de reparación simbólica.* Recuperado el 08 de Agosto de 2015, de CELS: http://cels.org.ar/common/documentos/concepto_reparacion_simbolica.doc

Halbwachs, M. (1992). *On collective memory.* Chicago: The University of Chicago Press.

Hilb, C. (2003). La responsabilidad como legado. En C. Tcach (comp.), *La política en consignas*. Rosario: Homo Sapiens.

Hilb, C. (2013). *Usos del pasado. Qué hacemos hoy con los setenta*. Buenos Aires: Siglo XXI

Huyssen, A. (2004). Resistencia a la memoria: los usos y abusos del olvido público. *XXVII Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação.* Porto Alegre: INTERCOM - Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação.

Huyssen, A. (2001). Pretéritos presentes: medios, política y amnesia. En *En busca del futuro perdido. Cultura y memoria en tiempos de globalización.* México: FCE.

Iramain, L. (2013). Política económica en la dictadura. La orientación y calidad de la intervención económica del Estado en el sector vial. La actuación de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) (Argentina, 1976-1981). *Documentos de Investigación Social*(24).

Iramain, L. D. (2015). La política laboral durante la última dictadura cívico militar argentina en el ámbito de las empresas públicas. Los casos de Entel, Gas del Estado y Ferrocarriles Argentinos (1976-1983). *Anuario IEHS*, 29 y30, 71-96.

Jelin, E. (1995). La política de la memoria: el movimiento de derechos humanos y la construcción democrática en la Argentina. En C. Acuña, C. Smulovitz, et. Al, *Juicios, castigos y memoria. Derechos humanos y justicia en la política argentina.* Buenos Aires: Nueva Visión.

Jelin, E. (2002). *Los trabajos de la memoria.* Madrid: Siglo XXI.

Jelin, E. (2005). Los derechos humanos entre el Estado y la sociedad. En J. Suriano (Dir.), *Nueva Historia Argentina, T.X, Dictadura y Democracia (1976-1999).* Buenos Aires: Sudamericana.

Jelin, E. (2010). ¿Víctimas, familiares o ciudadano/as? Las lcuhas por la legitimidad de la palabra. En E. Crenzel (ed.) *Los desaparecidos en Argentina: memorias, representaciones e ideas (1983-2008).* Buenos Aires: Biblos.

Jelin, E., y Langland, V. (2003). *Monumentos, memoriales y marcas territoriales.* Madrid: Siglo XXI.

Karababikian, G. (2007). Archivos y Derechos Humanos en Argentina. *Boletín del Archivo General de la Nación*. Año LXIX, vol. XXXII, nº 119.

Kwiatkowski, N. (2018). La vida de los muertos está en la memoria de los vivos. *Pasées Futurs*(2). Obtenido de https://www.politika.io/fr/notice/vida-los-muertos-esta-memoria-los-vivos

Larralde Armas, F. (2017). Arte y política: el lugar de la imagen fotográfica en las luchas por la memoria en la Argentina, durante la institucionalización de la memoria (2004-2014). *Tesis de doctorado*. Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación.

Lavabre, M.-C. (2007). Maurice Halbwachs y la sociología de la memoria. En A. P.-D. (dir.), *Historizar el pasado vivo en América Latina*. Obtenido de http://etica.uahurtado.cl/historizarelpasadovivo/es_contenido.php

Lavintman, J., Pankonin, L. y López, H., "Conocimiento histórico y justicia: el trabajo en el Archivo del Ejército Argentino", *Aletheia*, 2017, vol. 7, núm. 14, p. 8 -18.

Leegstra, C. G. (2009). La memoria de la lucha: ¿un nuevo régimen de memoria? *Question/Cuestión,* 1(24).

Lesgart, C. (2006). Luchas por los sentidos del pasado y el presente. Notas sobre la reconsideración actual de los años '70 y '80. En C. Tcach y H. Quiroga, (comps.), *Argentina 1976-2006. Entre la sombra de la dictadura y el futuro de la democracia.* Rosario: Homo Sapiens.

Levy, D., y Sznajder, N. (2002). Memory unbound. The Holocaust and the formation of Cosmopolitan Memory. *European Journal of Social Theory, 5*(1), 87-106.

Lifschitz, J. (2012). La memoria social y la memoria política, *Aletheia*(5)

Lorenz, F. (2003). ¿De quién es el 24 de marzo? Las luchas por la memoria del golpe de 1976 en Jelin, E. *Las conmemoraciones: las disputas en las fechas "in-felices"*. Madrid: Siglo XXI: 53-100.

Luzzi, M. (2015). Pagar para reparar. Debates públicos y dilemas privados ante las políticas de reparación económica a las víctimas del terrorismo de Estado, en Gayol, S. y Kesser, G., *Muerte, política y sociedad en la Argentina*, Buenos Aires: Edhasa.

Lvovich, D., y Bisquert, J. (2008). *La cambiante memoria de la dictadura militar desde 1984: Discursos públicos, movimientos sociales y legitimidad democrática.* Buenos Aires: UNGS/Biblioteca Nacional.

Markarian, V. (2016). "Los documentos del pasado reciente como materiales de archivo. Reflexiones desde el caso uruguayo", *Contemporánea. Historia y problemas del siglo XX* (7): 178-191.

Mendizábal, M. et al. (2012). El afuera de un centro clandestino de detención: las memorias de los vecinos del "Olimpo". En: Huffschmid, A. y Durán, V. (eds.). *Topografías conflictivas. Memorias, espacios y ciudades en disputa*. Buenos Aires: Nueva Trilce

Messina, L. (2010). La construcción de un lugar de memoria: el caso del ex Centro Clandestino de Detención "Olimpo". *Cuadernos del Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano*(22), 135-144.

Messina, L. (2013). Políticas y lugares de la memoria: actores,debates y controversias en el programa de memoria del ex Olimpo. *VII Jornadas Santiago Wallace de Investigación en Antropología Social.* Buenos Aires:

Sección de Antropología Social. Instituto de Ciencias Antropológicas, Facultad de Filosofía y Letras, UBA. Obtenido de http://www.aacademica.org/000-063/309

Messina, L. (2016). Reflexiones sobre la articulación estado-sociedad civil en las políticas de memoria en Argentina. *Revista Memória em Rede, 8*(15), 109-136.

Mitchell, T. (1991). The Limits of the State: Beyond Statist Approaches and Their Critics. *The American Political Science Review, 85*(1), 77-96.

Mitchell, T. (1992). The effect of the State. En T. Mitchell, *Egypt in American Discourse.* Damasco: Dar `Iybal. Recuperado el 24 de septiembre de 2018, de http://blogs.cuit.columbia.edu/tm2421/files/2018/01/Mitchell-Effect-of-the-State-1989-1.pdf

Mitchell, T. (2015). Sociedad, economía y el efecto del Estado. En P. Abrams, A. Gupta, y T. Mitchell, *Antropología del Estado* (págs. 145-187). México: FCE.

Montero, A. S. (2012). *¡Y al final un día volvimos! Los usos de la memoria en el discurso kirchnerista (2003-2007).* Buenos Aires: Prometeo.

Mouffe, C. (1999). *El retorno de lo político. Comunidad, ciudadanía, pluralismo, democracia radical.* Barcelona: Paidós.

Mouffe, C. (2007). *En torno a lo político.* Buenos Aires: FCE.

Muzzopappa, E. (2015). "El archivo y el 'punto de vista del nativo'. Propuestas incipientes", en *Actas XI Reunión de Antropología del Mercosur*, Montevideo.

Natalucci, A. (2014). La cultura política en el kirchnerismo: dos hipótesis sobre la politización. *Sudamérica:Revista de Ciencias Sociales*(3), 155-172.

Nazar, M. (2017). Archivos y Derechos Humanos: entre la historia, la memoria y la justicia" en Vasallo, J. y Brunero, S. (coord.) *El acceso a los archivos en la sociedad del conocimiento. Apreciaciones desde la Argentina del siglo XXI*, Córdoba: Editorial de la Red de Archiveros Graduados de Córdoba

Nazar, M. (2007). Dictadura, archivos y accesibilidad documental. A modo de agenda" en Centro de Estudios Legales y Sociales, *Derechos Humanos en Argentina. Informe 2007*, Buenos Aires: EUDEBA, 413-424.

Novaro, M. (2008). Derechos humanos y política democrática. Las tareas de la historia y de la Justicia entre populismo y liberalismo. En P. Eiroa, y J. Otero, *Memoria y derecho penal* (págs. 25-43). Buenos Aires: Fabían Di Placido Editor.

Novarini, C. (2017). "El desafío de lograr el acceso a archivos sin descripción: los documentos de la última dictadura cívico militar hallados en el edificio Cóndor", en Actas *XII Congreso de Archivología del Mercosur*

"Archivos y archiveros en la sociedad del conocimiento", Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, [en línea], URL:http://www.xiicam.congresos.unc.edu.ar/ponencias/.

Oberti, A., y Pittaluga, R. (2016). Apuntes para una discusión sobre la memoria y la política de los años 60/70 a partir de algunas intervenciones recientes. *Sociohistórica*(38), e015.

Oberti, A., y Pittaluga, R.. (2001). *¿Qué memorias para qué políticas?* Obtenido de Memoria Abierta:
http://www.memoriaabierta.org.ar/materiales/materiales_lectura.html

O'Donell, G. (1993). Estado, democratización y ciudadanía. *Nueva Sociedad*(128), 62-87.

Offerlé, M. (2011). *Perímetros de lo político: contribuciones a una socio-historia de la política.* Buenos Aires: Antropofagia.

Oszlak, O. (1980). Políticas públicas y regímenes políticos: reflexiones a partir de algunas experiencias latinoamericanas. *Estudios CEDES, 3*(2).

Pagani, M. L., y Eray Arce, M. L. (2017). El análisis de las organizaciones estatales. Un recorrido por distintos enfoques teóricos y metodológicos. En A. Camou y M. L. Pagani, *Debates teóricos y metodológicos actuales sobre las políticas públicas* (págs. 53-92). La Plata: Universidad Nacional de La Plata.

Perelmiter, L. (2010). "Militar el Estado". La incorporación de movimientos sociales de desocupados en la gestión de políticas sociales. Argentina (2003-2008). En A. Massetti, E. Villanueva, y M. Gómez, *Movilizaciones, protestas e identidades políticas en la Argentina del Bicentenario* (págs. 137-156). Buenos Aires: Nueva Trilce.

Perelmiter, L. (2012). Fronteras inestables y eficaces. El ingreso de organizaciones de desocupados a la burocracia asistencial del Estado. Argentina (2003-2008). *Estudios Sociológicos, 30*(89), 431-458.

Perelmiter, L. (2016). *Burocracia plebeya. La trastienda de la asistencia social en el Estado Argentino.* Buenos Aires: UNSAM EDITA.

Pereyra, S. (2005). ¿Cuál es el legado del movimiento de derechos humanos? El problema de la impunidad y los reclamos de justicia en los noventa. En F. Schuster (comp.), *Tomar la palabra. Estudios sobre protesta social y acción colectiva en la Argentina contemporánea.* Buenos Aires: Prometeo.

Pérez, G., y Natalucci, A. (2012). *"Vamos las bandas". Organizaciones y militancia kirchnerista.* Buenos Aires: Nueva Trilce.

Persino, M. S. (2008). Memoriales, museos, monumentos:la articulación de una memoria pública en la Argentina posdictatorial. *Revista Iberoamericana, LXXIV*(222).

Pittaluga, R. “Democratización del archivo y escritura de la historia”, *I Encuentro Archivos y Derechos Humanos: actualidad y perspectivas,* 2007, Memoria Abierta, Buenos Aires [en línea]. URL: http://memoriaabierta.org.ar/materiales/pdf/roberto_pittaluga.pdf Consultado el 15 de mayo de 2019.

Pollak, M. (1993). *Une identité blessée.* Paris: Métailié.

Pollak, M. (2006). *Memoria, olvido y silencio.* La Plata: Al Margen.

Portelli, A. (2003). Memoria e identidad. Una reflexión desde la Italia posfascista. En E. Jelin y V. Langland (comps.), *Monumentos, memoriales y marcas territoriales.* Madrid, Bs. As: Siglo Veintuno.

Portelli, A. (2005) El uso de la entrevista en Historia Oral, *Anuario (20) “Historia, Memoria y pasado reciente”*, Escuela de Historia, Facultad de Humanidades y Artes, UNR.

Quaretti, L. (2017). ¿Quiénes merecen ser castigados? La configuración de un régimen de responsabilidad por la violencia del pasado reciente (Argentina 2003-2007), *Tesis de Maestría*, Buenos Aires:Instituto de Altos Estudios Sociales, Universidad Nacional San Martín.

Rabotnikof, N. (2003). Política, memoria y melancolía. *Revista Fractal, VII*(29). Recuperado el 15 de mayo de 2016, de http://www.mxfractal.org/sumario29.html

Rabotnikof, N. (2007). Memoria y política a treinta años del golpe. En C. Lida, H. Crespo, y P. Yankelevich, *Argentina, 1976. Estudios en torno al golpe de Estado.* México: El Colegio de México.

Rabotnikof, N. (2009). Mito político y memorias de la política. En M. I. Mudrovcic, *Pasados en conflicto. Representación, mito y memoria* (págs. 105-124). Buenos Aires: Prometeo.

Raggio, S. (2006). En torno a "La noche de los lápices". La batalla de los relatos. *Puentes de la memoria* (18).

Ricoeur, P. (2004). *La memoria, la historia, el olvido.* Buenos Aires: FCE.

Rigney, A. (2018). Remembrance as remaking: memories of the nations revisited. *Nations and Nationalism, 24*(2), 240-257.

Robin, R. (2014). Sitios de memoria e intercambios de lugares. *Clepsidra*(2), 122-145.

Romanin, E. A. (2014). ¿Cooptación, oportunidades políticas o sentimientos? La Asociación Madres de Plaza de Mayo de Argentina frente al gobierno de Néstor Kirchner. *Polis. Revista de la Universidad Bolivariana, 13*(39), 1-13.

Romanin, Enrique. A. (2013). Decir la verdad, hacer justicia. Los Juicios por la Verdad en Argentina. *Revista Europea de Estudios Latinoamericanos y del Caribe*, 94 (4), 5-22.

Romanin, E. A. (2012). De la resistencia a la integración. Las transformaciones de la Asociación Madres de Plaza de Mayo en la “era Kirchner”. *Estudios Político*s. Universidad de Antioquia, Colombia, 41, 35-54.

Rousso, H. (2000). El duelo es imposible y necesario. Entrevista con Claudia Feld. *Puentes*(2).

Salvi, V. (2012). *De vencedores a víctimas. Memorias militares sobre el pasado reciente en Argentina.* Buenos Aires: Biblos.

Salvi, V. (2012a). Memoria, Verdad y Justicia en el discurso de las agrupaciones de Memoria Completa. *Lucha Armada en la Argentina*, 118-128.

Sarlo, B. (2011). *La audacia y el cálculo. Kirchner 2003-2010.* Buenos Aires: Sudamericana.

Schindel, E. (2009). Inscribir el pasado en el presente: memoria y espacio urbano. *Política y cultura* (31), 65- 87.

Schuttenberg, M., y Lozano, J. I. (2017). Estado y movimientos sociales. Una propuesta para pensar la relación en torno a cuatro dimensiones de análisis. En A. Camou, y L. Pagani, *Debates teóricos y metodológicos actuales sobre las políticas públicas* (págs. 93-118). La Plata: Universidad Nacional de La Plata.

Sivak, Martín, *Clarín, el gran diario argentino*. *Una historia*, Buenos Aires, Planeta, 2013.

Slipak, D. (2015). *Las revistas montoneras: cómo la organización construyó su identidad a través de sus publicaciones*. Buenos Aires: Siglo XXI

Solís Delgadillo, J. M. (2012). El peso político del pasado: factores que inciden en la formulación de las políticas de la memoria en Argentina y Chile. *América Latina Hoy, 61*, 163-206.

Sonderéguer, M. (2001). Los relatos sobre el pasado reciente en Argentina: una política de la memoria. *Iberoamericana*(1).

Spivak, A., y Gárgano, C. (2014). Las trayectorias de CNEA e INTA durante la última dictadura cívico-militar argentina: una revisión de sus memorias en disputa. En P. Kreimer, H. Vessuri, L. Velho, y A. Arellano, *Perspectivas latinoamericanas en el estudio social de la ciencia, la tecnología y la sociedad* (págs. 101-112). México: Siglo XXI.

Sosa, C. (2016). Food, conviviality and the work of mourning. The asado scandal at Argentina's ex-ESMA. *Journal of Latin American Cultural Studies*.

Starcenbaum, M. (2013). Qué hacemos hoy con los setenta: una respuesta a Claudia Hilb. *Sociohistórica*(31), en línea.

Surraco, L. (2013). Políticas públicas reparatorias dirigidas al universo de víctimas de graves violaciones a los derechos humanos y efectos de los prácticas sociales genocidas. En AA.VV, *Tesis de maestría sobre memoria, verdad y justicia*. Buenos Aires: Universidad Nacional San Martín, Unión Europea, Access Group Editores.

Tabernero, L. T. (2014). “Nosotros, las víctimas”: violencia, justicia transicional y subjetividades políticas en el contexto peruano de recuperación posconflicto. *Papeles del CEIC*(106).

Todorov, T. (2000). *Los abusos de la memoria.* Barcelona: Paidós.

Torre, J. C. (2004), *La operación política de la transversalidad. El presidente Kirchner y el Partido Justicialista*. Texto revisado de la intervención en la Conferencia “Argentina en Perspectiva” organizada por el Centro de Estudiantes de la Universidad T. Di Tella, Buenos Aires, noviembre 2004.

Thwaites Rey, M., y Orovitz Sanmartino, J. (2018). Compromiso neodesarrollista y autonomía estatal. En G. Vommaro, (comp.), *Estado, democracia y derechos en Argentina. Controversias en torno a los años kirchneristas* (págs. 55-84). Ediciones UNGS.

Torras, V. (2015). Los derechos humanos en las disputas de la historia. En Centro de Estudios Legales y Sociales, *Derechos humanos en la Argentina. Informe 2015* (págs. 169-202). Buenos Aires: Siglo XXI.

Valdez, P. (2003), El parque de la memoria en Buenos Aires, en Jelin., E. y Langland, V., (comps.) *Monumentos, memoriales y marcas territoriales*, Madrid: Siglo XXI

Valdez, P. (2004). Iniciativas de memoria: formas de representación y conmemoraciones en Argentina. En R. Belay., J. Bracamonte, C. I. Degregori, et.Al., *Memorias en conflicto. Aspectos de la violencia política contemporánea*. Institut français d’études andines.

Vázquez, M. (2014). 'Militar la gestión': una aproximación a las relaciones entre activismo y trabajo en el Estado a partir de las gestiones del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. *Apuntes, XLI*(74), 71-102.

Vázquez, M. (2015). Del 'que se vayan todos' a militar 'por, para' y 'desde' el Estado. Desplazamientos y reconfiguraciones del activismo juvenil y las causas militantes luego de la crisis del 2001 en Argentina. En J. M. Valenzuela Arce, *El sistema es antinosotros. Culturas, movimientos y resistencias juveniles* (págs. 383-428). México: Gedisa.

Vázquez, M. (2015). *Juventudes, políticas públicas y participación. Un estudio de las producciones socioestatales de juventud en la Argentina reciente.* Buenos Aires: Grupo Editor Universitario.

Vázquez, M. (2018). ¿Trabajadores y/o militantes? Un estudio microsociológico de los trabajadores estatales del área nacional de juventud durante el kirchnerismo. En G. Vommaro (comp.), *Estado, democracia y derechos en Argentina. Controversias en torno a los años kirchneristas* (págs. 139-175). Los Polvorines: Universidad Nacional de General Sarmiento.

Vázquez, M., y Liguori, M. (2018). La gestión estatal de juventudes durante la vuelta a la democracia en Argentina: agendas, escenarios y actores (1982-1987). *Encrucijadas. Revista crítica de ciencias sociales, 15*.

Vecchioli, V. (2001). Políticas de la memoria y formas de clasificación social. ¿Quiénes son las víctimas del terrorismo de Estado en Argentina? En B. Groppo, y P. Flier, *La imposibilidad del Olvido. Recorridos de la memoria en Argentina, Chile y Uruguay.* La Plata : Al Margen.

Vecchioli, V. (2005). La nación como familia. Metáforas políticas en el movimiento argentino por los derechos humanos. En S. Frederic, y G. Soprano, *Cultura y política en etnografías sobre la Argentina* (págs. 241-270). Bernal: Universidad Nacional de Quilmes.

Vecchioli, V. (2009). Expertise jurídica y capital militante: reconversiones de recursos escolares, morales y políticos entre los abogados de derechos humanos en la Argentina. *Pro-Posições, 20*(2), 41-57.

Vecchioli, V. (2013). Las víctimas del terrorismo de Estado y la gestión del pasado reciente en Argentina. *Papeles del CEIC*(90).

Vega, N. (2009) La entrevista como fuente de información: orientaciones para su utilización, en Alonso, L. y Falchini, A. (eds.), *Memoria e Historia del Pasado Reciente. Problemas didácticos y disciplinares*, Santa Fe: UNL

Vezzetti, H. (2002). *Pasado y presente. Guerra, dictadura y sociedad en la Argentina.* Buenos Aires: Suglo XXI.

Vezzetti, H. (2006). Memoria histórica y memoria política: las propuestas para la ESMA. *Punto de Vista*(86), 37-42.

Vezzetti, H. (2009). *Sobre la violencia revolucionaria. Memorias y olvidos.* Buenos Aires: Siglo XXI.

Vezzetti, H. (2009a). Dos cuestiones en las políticas actuales de la memoria. En M. I. Mudrovic, *Pasados en conflicto. Representación, mito y memoria* (págs. 157-171). Buenos Aires: Prometeo.

Vinyes, R. (2009). *El Estado y la memoria. Gobiernos y ciudadanos frente a los traumas de la historia*. Barcelona: RBA Libros.

Fuentes citadas

Leyes:

Ley 15.930
Ley 23.511
Ley 24.043
Ley 24.321
Ley 24.411
Ley 25.779
Ley 26.415
Ley 26.564
Ley 26.691

Decretos:

Decreto 27/2003, 27 de mayo de 2003 (*BO*, 28 de mayo de 2003).
Decreto 1142/2003, 26 de noviembre de 2003 (*BO*, 28 de noviembre de 2003).
Decreto 44/2007, 29 de enero de 2007 (*BO*, 2 de febrero de 2007).
Decreto 606/2007, 22 de mayo de 2007 (*BO*, 24 de mayo de 2007).
Decreto 200/2012, 7 de febrero de 2012 (*BO*, 9 de febrero de 2012).
Decreto 1199/2012, 19 de julio de 2012 (*BO*, 20 de julio 2012).
Decreto 1986/2014, 29 de octubre de 2014 (*BO*, 30 de octubre 2014).
Decreto 503/2015, 1 de abril de 2015 (*BO*, 6 de abril de 2015).

Resoluciones:

Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, Acuerdo de Colaboración. Anexo en la Resolución n°1486, 18 de diciembre de 2008.
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, Resolución n°1486, 18 de diciembre de 2008.
Ministerio de Economía de la Provincia de Buenos Aires, Resolución 56/13, junio de 2013.
Ministerio de Defensa, Resolución n°173, 20 de febrero de 2006
Ministerio de Defensa, Resolución n°1711, 2 de noviembre de 2007
Ministerio de Defensa, Resolución n°420, 7 de mayo de 2009.
Ministerio de Defensa, Resolución n° 1137 del 27 de agosto de 2009.
Ministerio de Defensa, Resolución n°4, 5 de enero de 2010
Ministerio de Defensa, Resolución n°308, 26 de marzo de 2010.
Ministerio de Defensa, Resolución n°1419, 22 de octubre de 2010
Ministerio de Defensa, Resolución n°47 de 6 de febrero de 2012
Ministerio de Defensa, Resolución nº 445, 4 de noviembre de 2013.
Ministerio de Seguridad de la Nación, Resolución n°180, 27 de abril de 2011.
Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, Resolución n° 14, marzo de 2007.
Secretaría de comercio interior, Resolución nº 126/2010, 31 de marzo de 2010
Secretaría de Gabinete y Coordinación Administrativa (SGCA), Resolución n° 493, 4 de diciembre de 2012.

Actividad legislativa:

HCDN, Proyecto de ley: “reparación de los legajos de los trabajadores de empresas privadas que fueron víctimas del terrorismo de Estado”. N° de expediente 1736-D-2015.

HCDN, 35a. Reunión, 2°. Sesión ordinaria de prórroga 3 de diciembre de 2008. Versión taquigráfica.

HCDN, Orden del día nº 1934, sesiones extraordinarias 2006. Comisiones de Previsión y Seguridad, Social, de Derechos Humanos y Garantías y de Presupuesto y Hacienda.

HCDN, 4° Reunión. Sesión ordinaria, 14 de mayo de 2014, versión taquigráfica.

HCDN, Reunión Sala de las Comisiones, 19 de marzo de 2014. Versión taquigráfica Disponible en: http://www.normamorandini.com.ar/?p=7818 Fecha de consulta 3 de febrero de 2019.

HCSN, 18°Reunión, 14° Sesión ordinaria, 25 de noviembre de 2009. Versión taquigráfica.

HCSN, Declaración de Adhesión del Senado de la Nación, 1 de noviembre de 2011 (Exp. S n°2615/11).

HCSN, Sala de Comisiones Cámara de Senadores de la Nación, Dictamen de minoría, 19 de marzo de 2014

Otras publicaciones oficiales:

Ministerio de Defensa, Dirección Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. (2010). *Instructivo para la consulta de los acervos documentales de las Fuerzas Armadas.*

Ministerio de Defensa, Dirección Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. (2013). *Modalidad de trabajo*. Disponible en: www. archivosabiertos.org.ar

Ministerio de Defensa. (2015). *Guía de archivos históricos y generales de las Fuerzas Armadas Argentinas: experiencias del programa de modernización de archivos del Ministerio de Defensa*. CABA: Ministerio de Defensa.

Ministerio de Defensa. (2015). *Relevamiento y análisis documental de los archivos de las Fuerzas Armadas 1976-1983*. CABA: Ministerio de Defensa.

Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios. (s/f). *Revista del Bicentenario*.

Red Federal de Sitios de Memoria. (2009). *Cuaderno I. Sitios de Memoria: experiencias y desafíos*. Ciudad de Buenos Aires: Archivo Nacional de la Memoria

Red Federal de Sitios de Memoria (2011) *Cuaderno II. Sitios de Memoria: experiencias y desafíos*. Ciudad de Buenos Aires: Archivo Nacional de la Memoria.

Red Federal de Sitios de Memoria (2012). *Señalización externa de ex CCD y otros espacios vinculados con el accionar del terrorismo de Estado. Objetivos, requerimientos y especificaciones para la gestión*. Buenos Aires: Archivo Nacional de la Memoria.

Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. (2015) *Memoria de gestión Secretaría de Derechos Humanos de la Nación*, 2012-2015

Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Dirección Nacional de Sitios de Memoria (2015). *Espacios de Memoria en la Argentina.*

Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. (2016). Registro Unificado de Víctimas del Terrorismo de Estado, Disponible en: https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/6._anexo_v_listado_de_ccd-investigacion_ruvte-ilid.pdf

Secretaría de la Gestión Pública, Jefatura de gabinete de Ministros, Archivo Nacional de la Memoria y Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Planificación Federal, Inversión pública y Servicios. (s/f). *Revista Construyendo Memoria. Comisión de Trabajo por la Reconstrucción de Nuestra Identidad*.

Prensa gráfica

Arcomano, R. (24 de diciembre de 2011) Los legajos de la buena memoria. *Miradas al Sur*. Pp. 13-14

Bassi, P. y Leonoff, D. (11 de mayo de 2015). El Estado memorioso. *El trabajador del Estado*. Recuperado de http://www.eltrabajadordelestado.org/nota.asp?titulo=el_estado_memoriosoyid=5724

Bullentini, A., (9 de julio de 2012).Romper con el pacto de silencio. *Página 12*. Recuperado de http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-198252-2012-07-09.html

Bullentini, A., (13 de diciembre de 2013). Legajos que ahora cuentan la verdad. *Página 12*. Recuperado de http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-198252-2012-07-09.html

Bullentini, A., (31 de julio de 2014). “Podemos empezar a cerrar la historia”. *Página 12*. Recuperado de http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-251892-2014-07-31.html

Corso, P. (12 de abril de 2012). En busca de testigos del horror. *Revista El Guardián*, pp.22-23

Dandan, A. (28 de abril de 2013). El pillaje. *Página 12*. Recuperado de: https://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-218929-2013-04-28.html

Fuertes, G., (21 de julio de2012) Inscribirán como desaparecidos a los estatales víctimas de la dictadura. Tiempo Argentino. Recuperado de: http://tiempo.infonews.com/nota/56081/inscribiran-como-desaparecidos-a-los-estatales-victimas-de-la-dictadura

Fuertes, G. (5 de noviembre de 2011). Nueva campaña por la memoria y la verdad. *Tiempo Argentino.* Recuperado de: http://tiempo.infonews.com/nota/18569

Guembe, M. L. y Federman, N. (30 de septiembre de 2016). Una condena producto del trabajo en el Estado. *Página 12.* Recuperado de: https://www.pagina12.com.ar/11566-una-condena-producto-del-trabajo-del-estado

Gullo, E., (28 de julio de 2012), Reivindican a empleados estatales desaparecidos. *Crónica*. P. 18.

Romero, L. A. (29 de septiembre 2015). El teatro de los juicios. *Los Andes*. Recuperado de www.losandes.com.ar/article/el-teatro-de-los-juicios

Sarlo, B. (28 de marzo de 2004) "Nunca más el discurso único", *Página 12*, Recuperado de: http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-33360-2004-03-28.html

Veiga. G. (16 de mayo de 2011). Desaparecidos de un Estado desaparecido. *Página 12*, Recuperado de http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-168229-2011-05-16.html-

Veiga, G. (22 de agosto de 2011). La memoria en los legajos del Estado. *Página 12*, Recuperado de http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-175032-2011-08-22.html

El gobierno ordenó abrir los archivos militares de la dictadura (23 de marzo 2006). *Clarín. https://www.clarin.com/ediciones-anteriores/gobierno-ordeno-abrir-archivos-militares-dictadura_0_B10ei5SJAYl.html*

Ordenan abrir archivos militares de la dictadura (23 de marzo 2006). *La Nación*. https://www.lanacion.com.ar/politica/ordenan-abrir-archivos-militares-de-la-dictadura-nid791078

Ordenan la apertura de los archivos militares. (23 de marzo de 2006). *Página 12*. https://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/subnotas/1-21308-2006-03-23.html

La verdad, para la reconstrucción de la memoria. (04 de junio de 2012). Página 12. Recuperado de http://www.pagina12.com.ar/diario/ultimas/20-195611-2012-06-04.html

La memoria abre expedientes que el derecho cree olvidados. (1 de octubre de 2014) *Infojus Noticias. Agencia Nacional de Noticias Jurídicas*. Recuperado de: http://www.infojusnoticias.gov.ar/nacionales/entregan-a-la-justicia-122-legajos-de-trabajadores-estatales-desaparecidos-5891.html

Carta pública por los trabajadores de economía desaparecidos en dictadura (07 de junio de 2013). Andar Agencia. Recuperado de

http://www.andaragencia.org/carta-publica-por-los-trabajadores-de-economia-desaparecidos-en-dictadura/

Murió Laborda. El represor que quería un ascenso por sus crímenes. (24 de julio de 2013). *Infojus Noticias*.

Entrevista a Claudia Hilb (16 de Agosto de 2013). ¿Qué hacer con los setenta? *Revista Ñ*. http://www.revistaenie.clarin.com/ideas/Claudia-Hilb-entrevista-setenta_0_971902819.htm

Los nombres prohibidos de la dictadura (7 de noviembre de 2013). *Página 12*. https://www.pagina12.com.ar/diario/ultimas/20-233081-2013-11-07.html

Reparación histórica para 13 desaparecidos de Economía (6 de diciembre de 2013). *Diagonales. De La Plata a la provincia*. Recuperado de: http://www.diagonales.com/sociedad/205765-nota-205765-reparacion-historica-para-13-desaparecidos-de-economia.html Fecha de consulta 15 de junio de 2016.

La justicia prevaleció sobre la venganza. (12 de mayo de 2014). *La Nación* https://www.lanacion.com.ar/1689759-la-justicia-prevalecio-sobre-la-venganza.

Construyendo la memoria de los trabajadores estatales (04 de mayo de 2015). *ANDUMA. Escuela Superior de Gobierno*. Recuperado de http://andumarevista.com/2015/05/04/construyendo-la-memoria-de-los-trabajadores-estatales/

No más venganza (23 de noviembre de 2015). *La Nación* https://www.lanacion.com.ar/1847930-no-mas-venganza.

Entrevista a Luz Palmás Zaldúa (7 de agosto de 2017). La logística de los vuelos de la muerte. Página 12. https://www.pagina12.com.ar/54960-la-logistica-de-los-vuelos-de-la-muerte

Entrevistas

Andrés, hijo de trabajador de la APN desaparecido, 30 de octubre de 2015

Gerardo, hijo de trabajador de la APN asesinado por el terrorismo de Estado, 14 de octubre de 2015

Jorge, hijo de trabajador de la APN desaparecido, 12 de agosto de 2015

Leila, hija de trabajador de la APN desaparecido, 4 de agosto de 2015

Enrique, integrante de la Comisión de Trabajo por la Reconstrucción de Nuestra Identidad, 5 de agosto de 2015

Pablo, integrante de la Comisión de Trabajo por la Reconstrucción de Nuestra Identidad, 14 de agosto de 2015

Oscar, ex empleado público detenido desaparecido, integrante de la Comisión de Trabajo por la Reconstrucción de Nuestra Identidad, 3 de julio de 2015 y 4 de noviembre de 2015.

Joaquín, Coordinador de la Comisión de Trabajo por la Reconstrucción de Nuestra Identidad, 3 de julio de 2015 y 10 de julio de 2015

Mabel, integrante de la Comisión de Trabajo por la Reconstrucción de Nuestra Identidad, 7 de septiembre de 2015 y 29 de septiembre de 2015.

Carolina, hija de trabajador de la APN desaparecido, integrante de la Comisión de Trabajo por la Reconstrucción de Nuestra Identidad, 3 de julio de 2015

Mariana, integrante de la Comisión de Trabajo por la Reconstrucción de Nuestra Identidad, 2 de septiembre de 2015.

Trabajador del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, 21 de agosto de 2015

Ex trabajador de la administración pública y ex detenido desaparecido, 28 de agosto de 2015

Equipo del Sistema de Archivos del Área de la Defensa (ex Programa de Modernización de Archivos), 2 de agosto de 2017. Entrevista colectiva con seis integrantes.

Equipo de Relevamiento de los Archivos de la Armada, 12 de junio de 2017. Entrevista con sus dos integrantes.

Equipo de Relevamiento de los Archivos del Ejército, 12 de mayo de 2017. Entrevista colectiva con cinco integrantes.

Equipo de Relevamiento de los Archivos de la Fuerza Aérea, 14 de julio de 2017. Entrevista con dos integrantes.

Ex coordinadora del Equipo de Relevamiento de los Archivos de la Fuerza Aérea, 23 de marzo de 2018

Ex coordinadora del Equipo de Relevamiento de los Archivos del Ejército, 26 de mayo de 2017

Ex coordinadora del Programa de Modernización de Archivos, 28 de noviembre de 2017

Investigador del Archivo Nacional de la Memoria, 28 de noviembre de 2017

Esteban, coordinador del área de Sitios de Memoria, 28 de junio de 2018

María, trabajadora de la Dirección Nacional de Sitios de Memoria, 6 de junio de 2018

Vanesa y Laura, trabajadoras de la Dirección Nacional de Sitios de Memoria, 4 de julio de 2018

Mariela, trabajadora del “Espacio para la Memoria y la Promoción de los Derechos Humanos Ex CCDyTE Olimpo”, 28 de mayo de 2018. Entrevista conjunta con otro trabajador del Espacio.

Juan, Trabajador del “Espacio para la Memoria y la Promoción de los Derechos Humanos Ex CCDyTE Automotores Orletti” y ex trabajador del Instituto Espacio para la Memoria, 5 de julio de 2018

Soledad, Trabajadora del “Espacio para la Memoria y la Promoción de los Derechos Humanos Ex CCDyTE Club Atlético” y ex trabajadora del Instituto Espacio para la Memoria, 10 de julio de 2018.

Funcionarios:

Guido “Kibo” Carlotto, Secretario de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires, 2 de julio de 2015

Carlos Lafforgue, Secretario Ejecutivo del Archivo Nacional de la Memoria, 4 de noviembre de 2015

Natalia Federman, ex Directora de Programas de la Dirección Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario del Ministerio de Defensa, 9 de octubre de 2017

Stella Segado, ex Directora Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario del Ministerio de Defensa, 19 de septiembre de 2017

Agustín Cetrángolo, militante de HIJOS-Capital, funcionario de la Secretaría de Derechos Humanos y ex asesor de la diputada nacional Victoria Donda, 25 de julio de 2018.

Judith Said, Directora Nacional de Sitios de Memoria, 7 de agosto de 2018